



Juan Carlos Monedero
Rafael Escudero Alday
Fermín Paz Lamigueiro
Xavier Domènech Sampere
Víctor Sampedro Blanco
Justa Montero Corominas
Santiago Alba Rico
Antonio Elizalde Hevia
Amador Fernández-Savater

ENSAYO

Las democracias y
los indignados

Félix Ovejero Lucas

Director - Santiago Álvarez Cantalapiedra

Jefa de redacción - Olga Abasolo Pozas

Consejo de redacción

Tanja Bastia (Universidad de Manchester)
Óscar Carpintero (Universidad de Valladolid)
Francisco Fernández Buey (Universidad Pompeu Fabra)
Javier Gutiérrez Hurtado (Universidad de Valladolid)
Yayo Herrero (Centro Complutense de Estudios e
Información Medioambiental)
Carlos Montes (Universidad Autónoma de Madrid)
José Manuel Naredo (Cuerpo Superior de Estadísticos
del Estado)
Gaby Oré (Centro por los Derechos Económicos y
Sociales)
Helena Villarejo (Universidad de Valladolid)
Nieves Zúñiga (Universidad de Essex)

Comité asesor

Daniele Archibugi (Universidad de Londres)
Pedro Ibarra (Universidad del País Vasco)
Isabell Kempf (Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos)
Bichara Khader (Universidad de Lovaina)
Michael T. Klare (Hampshire College)
Saul Landau (California State University)
Maxine Molyneux (Universidad de Londres)

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global es una revista trimestral publicada desde 1985 por el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Con una mirada multidisciplinar, la revista aborda temas relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y la democracia, con la paz como eje transversal de análisis.

La revista está recogida sistemáticamente por las bases de datos: LATINDEX, DIALNET, DICE, ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, RESH, ARCE

© FUHEM. Todos los derechos reservados
CIP- Ecosocial
Duque de Sesto 40, 28009 Madrid
Teléf.: (+34) 91 576 32 99 – Fax: (+34) 91 577 47 26
cip@fuhem.es
www.revistapapeles.fuhem.es

I.S.S.N. - 1888-0576
Depósito legal - M-30281-1993

© de las ilustraciones: Javier Muñoz

Foto de portada: We are the 99%, © Spaceheater | Dreamstime.com

Para solicitar autorización para la reproducción de los artículos escribir a CIP-Ecosocial.
Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente
las de CIP-Ecosocial y son responsabilidad de los autores.

Esta revista ha recibido una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España,

Impreso en papel ecológico como parte de la política de buenas
prácticas en materia de sostenibilidad de FUHEM.

INTRODUCCIÓN 5

ENSAYO

Las democracias y los indignados 13

Félix Ovejero Lucas

ESPECIAL

LÍMITES DE NUESTRA DEMOCRACIA, formas de contestación

Los límites del modelo democrático español 27

Juan Carlos Monedero

Democracia, *ma non troppo*: los mecanismos de participación ciudadana en la Constitución española 43

Rafael Escudero Alday

La democracia delegada: una reflexión desde el mundo del trabajo 55

Fermín Paz Lamigueiro

Crisis de hegemonía y movimientos de resistencia 63

Xavier Domènech Sampere

Hackear el periodismo, resetear la democracia. O de cómo Assange quería establecerse en Islandia y acampó en Sol 75

Víctor Sampedro Blanco

Crisis del sistema democrático. Hacia una redefinición de nuestra vida en común 87

Justa Montero Corominas

La crisis capitalista y el deseo de democracia 97

Santiago Alba Rico

SUMARIO

¿Qué está pasando en Chile?: la gran estafa	107
<i>Antonio Elizalde Hevia</i>	
15 M: una revolución de personas	125
<i>Amador Fernández-Savater</i>	

PANORAMA

¿Tiene sentido una educación de excelencia en los niveles previos a la universidad?	133
<i>Rafael Feito</i>	
Rompiendo muros, abriendo ventanas	145
<i>María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez</i>	

PERISCOPIO

La agenda pública en el Reino de España: desafección política, paro y problemas económicos	161
<i>Fermín Bouza</i>	

LIBROS

La transición en Cuadernos de Ruedo Ibérico	
<i>Xavier Díez (ed.)</i>	171
<i>Jaime Pastor Verdú</i>	
Comer animales de Jonathan Safran Foer	173
<i>Barbara Scandroglio</i>	
Crisis y revolución en Europa: people of Europe rise up!	
de Observatorio Metropolitano	175
<i>José Luis F. Casadevante</i>	
La mentira del amianto. Fortunas y delitos	
de Maria Roselli	177
<i>Paco Puche</i>	

Subversión de la democracia, indignación en la ciudadanía

«Los súbditos del mercado que de tanto en tanto aspiramos a ser ciudadanos esperamos una explicación democrática de por qué somos o seremos precipitados al abismo»

Rafael Argullol

Durante mucho tiempo, demasiado, ha prevalecido la pasividad y el sometimiento voluntario. En las elecciones presidenciales de los EE UU de noviembre del año 2000, hubo numerosas denuncias de irregularidades en el proceso electoral del estado de Florida. No fueron acusaciones menores: fraude, racismo, intimidación a los votantes y, como resultado, la inclinación del fiel de la balanza a favor de quien gobernaría la nación durante ocho años. En una sociedad que presume de tener la democracia más antigua y experimentada del planeta, aclamada por el *establishment* como la democracia por excelencia, nadie organizó una marcha masiva a Washington para denunciar las irregularidades. Sin embargo, 11 años después, en ese mismo país, una parte de la población –al grito de «we are the 99%»– considera usurpada su soberanía, y en Rusia, con un sistema político menos modélico, la ciudadanía sale a la calle para manifestar su disconformidad por la falta de garantías y transparencia en el proceso electoral a la Duma estatal. Desde la Plaza Tahrir hasta Wall Street, pasando por la Puerta del Sol, algo parece que está cambiando. ¿Acaso estaremos viviendo un punto de inflexión?

Hasta no hace mucho la democracia liberal gozaba de buena acogida y, aún cuando se reconocieran sus límites, era aceptada como una buena forma de gobierno. Tres factores contribuyeron a ello. En primer lugar, un consenso pasivo garantizado por unos medios de comunica-

INTRODUCCIÓN

ción de masas cada vez más concentrados y capaces de generar tales asentimientos. Un segundo elemento que favoreció la adhesión desapasionada a una democracia limitada, fue la existencia de un capitalismo regulado con un Estado providencia que garantizaba ventajas cuantitativas siempre que se renunciara a cambios de orden cualitativo. Décadas después, cuando el capitalismo regulado dio paso al actual capitalismo desatado, la deriva consumista basada en la economía del crédito cumpliría la misma función. En tercer lugar, tras la caída del telón de acero el mundo queda aparentemente huérfano de alternativas y, en ausencia de estas, hasta lo que funciona mal termina por resultar aceptable. Estas circunstancias hicieron que la democracia se convirtiera en una vaca sagrada en el discurso político de Occidente a pesar de que –como señala oportunamente Hobsbawm– la realidad se ha encargado de mostrarnos que da menos leche de la esperada.

La situación actual manifiesta rasgos nuevos. El monopolio que ejercen sobre la opinión pública los *mass media* se ha resquebrajado por la irrupción de nuevas tecnologías de comunicación e información. Internet ha ocupado el hueco que habían dejado los grandes medios oficiales con su silencio. Aun cuando no se conocen bien los vínculos entre la nueva realidad mediática y la acción directa, no cabe duda que la proliferación de páginas web, foros, blogs y redes sociales facilitan la expresión de la disconformidad y desempeñan, al menos en una fase inicial, un papel relevante a la hora de informar, sensibilizar, movilizar y organizar un nuevo activismo ciudadano. El espacio público, cada vez más restringido y normalizado por la mercantilización y la privatización, ha encontrado una prolongación y un complemento en el auge de lo virtual. Por otro lado, la economía política de la desposesión ha alcanzado en los últimos años un nivel que no resiste comparación con la época del capitalismo keynesiano regulado, provocando la anulación –o cuando menos la interrupción– de los mecanismos de movilidad social. Según los estudios de la distribución de la renta y la riqueza, en EE UU el que el 1% de la población posee el 40% de toda la riqueza hace menos tolerable la desigualdad para el 99% restante. Es posible que la apatía y la desmovilización social, con las que tan bien se habían manejado hasta el momento las democracias representativas en el Atlántico Norte, empiecen a disiparse a medida que ya no se puedan alimentar con gratificaciones simbólicas y promesas de prosperidad material. De asociarse al incremento de la movilización social el ensayo de nuevas experiencias y prácticas alternativas, no sólo surgirán nuevos horizontes de utopías concretas sino también un mayor grado de exigencia para la democracia actual.

Los límites del discurso sobre la democracia

En el discurso político de nuestros días la palabra «democracia» alude a un modelo estándar formado por un Estado constitucional que reconoce derechos y libertades considerados fundamentales, la garantía del imperio de la ley, así como asambleas representativas

elegidas mediante sufragio universal por la mayoría del conjunto de los ciudadanos en elecciones libres celebradas periódicamente y en las que existe una competencia entre partidos. Estos aspectos son los componentes que caracterizan a una democracia liberal representativa, de manera que este modelo de democracia no es exclusivamente ninguno de ellos, sino todos en conjunto. Es importante señalarlo, pues suele ser bastante habitual en nuestros días tomar una parte (por ejemplo, la existencia de elecciones libres) por el todo.

Pero el discurso político actual no sólo define la democracia en términos de democracia liberal, sino que además es habitual que sustraiga del debate cuestiones como la participación ciudadana, la representatividad del sistema electoral, la transparencia de las instituciones, la responsabilidad de los políticos y los mecanismos de control de los cargos electos por parte de la ciudadanía. Así las cosas, los momentos de mayor pasión democrática suelen quedar reducidos a los periodos en que se activan los mecanismos electorales para el recambio de los gobernantes. Y entre periodos electorales, la democracia es presentada como una mera técnica de administración de los asuntos comunes.

Para el liberalismo la democracia más allá de ciertos límites siempre es sospechosa. El protagonismo del pueblo es contemplado con temor: «Siento por las instituciones democráticas una inclinación intelectual, pero soy instintivamente aristocrático, lo que significa que desprecio y temo a las masas. Me gusta profundamente la libertad, el respeto de los derechos, pero no la democracia». ¹ Es posible que esta inclinación en Tocqueville estuviera marcada por los sucesos que le tocó vivir a su familia durante la época del Terror revolucionario de la Revolución francesa, pero la misma línea de desconfianza reaparece con fuerza en el discurso político del neoliberalismo contemporáneo. Baste recordar las teorizaciones referidas a la ingobernabilidad de las democracias y a la encrucijada a las que se ven abocadas por la sobrecarga de demandas políticas y sociales que reciben de la ciudadanía. No late ahí únicamente el clásico temor conservador por el excesivo intervencionismo que resulte del crecimiento desmesurado del “Leviatán” estatal, sino también la aprensión a que el sistema se vuelva incontrolable como consecuencia de la expansión de la democracia más allá del ámbito en que queda confinada por el discurso liberal.

Los límites de la práctica democrática en nuestros días

Los límites a la democracia no sólo provienen de la forma en que es definida por el pensamiento liberal. También determinados procesos están socavando en la actualidad las condiciones e instituciones sobre las que descansa la práctica liberal-democrática. En primer

¹ Alexis de Tocqueville, *New York Daily Tribune*, 25 de julio de 1853.

lugar, estamos asistiendo a un vaciamiento de la soberanía estatal² como consecuencia de los procesos de globalización económica. La superación de la unidad territorial donde la democracia enmarcaba tradicionalmente su ejercicio —el ámbito del Estado-nación— está erosionando su práctica en el interior de los países.³ Pero no sólo eso, la inexistencia de instituciones democráticas en el plano global que permite al capital transnacional desenvolverse con tanta facilidad, revela una vez más hasta qué punto resulta ficticio establecer algún vínculo de necesidad entre democracia y capitalismo.

En segundo lugar, bajo el neoliberalismo, poder económico y político se han asociado y confundido hasta quedar fuera del control de la ciudadanía. Esta fusión entre el poder de los grandes grupos empresariales y el poder del Estado ahorma al régimen político característico de la época del capitalismo desatado: por un lado, inclina el Estado hacia la acumulación de capital privado (rescatando el sistema financiero, transfiriendo rentas a favor del capital, reorientando la regulación en términos mercantiles, etc.) en detrimento de la redistribución y la protección social de trabajadores y sectores populares; por otro, facilita que los ejecutivos de las empresas y los representantes políticos puedan intercambiar sus papeles y que, sin aparente solución de continuidad, los interpreten en el escenario que en cada momento consideren más conveniente. La presencia de antiguos directivos de Lehman Brothers y Goldman Sachs en el Gobierno español y en las instituciones europeas, así como de ex presidentes de Gobierno en los consejos de importantes compañías transnacionales, resultan elocuentes a este respecto.⁴

En tercer lugar, en la sociedad de consumo la contienda electoral se ha convertido en un espectáculo en el que el consumidor ocupa el lugar que le corresponde al ciudadano. Expertos en técnicas de mercado y relaciones públicas constituyen el cuerpo de asesores que rodean a un candidato, convirtiendo el desarrollo de una campaña en algo asimilable a la venta de una mercancía. Esto no es sino el corolario de un proceso que, combinando la crítica radical al papel del Estado con la alabanza a los servicios privados o privatizados, ha llevado a los gobiernos a reorientar sus planes de actuación con criterios mercantiles centrados en la rentabilidad y la eficiencia en sustitución de los principios democráticos. Pero cuando la racionalidad económica suplanta los principios democráticos y el gobierno priva-

² Por supuesto, «soberanía estatal» y «soberanía popular» no son la misma cosa, pero en democracia se pretende hacerlas coincidir.

³ Se está viendo con meridiana claridad con la crisis de la deuda soberana en Europa: intervenciones sobre los Estados hasta reducirlos prácticamente a la condición de protectorados (Grecia, Portugal e Irlanda), singulares enmiendas constitucionales al dictado de los poderes económicos transnacionales sin refrendo popular (España), modificación encubierta de los Tratados de la UE para sortear ratificaciones parlamentarias, etc.

⁴ Esta fusión de poderes es caracterizada por Sheldon S. Wolin como «totalitarismo invertido», un tipo de régimen en «el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico, confinado principalmente al terreno interno de la “empresa privada”, y evoluciona hasta transformarse en una coparticipación globalizadora con el Estado: una transmutación doble, de corporación y Estado. La primera se vuelve más política, el segundo, más orientado al mercado» (S. Wolin, *Democracia S.A.*, Katz, Buenos Aires/ Madrid, 2008, p. 334).

do de las empresas reemplaza a un gobierno público que debería estar al servicio de la ciudadanía, ese modo de reorganizar «el Estado deja de ser la encarnación del gobierno popular y pasa a convertirse en un sistema de gestión de negocios».⁵ Se llega así a la subversión de la democracia a través de la negación de su sustancia política. No hay democracia donde se niega la necesidad de tomar decisiones colectivas en relación con el interés común.

De ahí que el modo de encaminar los pasos hacia una democracia que aún tenga algo que ver con el autogobierno del pueblo sea precisamente recuperando la capacidad para ejercer como seres políticos. Las movilizaciones ciudadanas de los últimos meses han representado un aldabonazo en ese sentido, porque lo que está en juego es la elección entre los modelos que se derivan de diferentes maneras de hacer política: una “democracia S.A.” dirigida por un poder político indistinguible del económico que precisa de la pasividad de una ciudadanía reducida a la condición de consumidor, o una democracia que surge desde una ciudadanía activa y consciente de que no hay mejor forma de satisfacer las necesidades que interviniendo colectivamente sobre las condiciones sociales que afectan nuestras vidas. «¿Quién habla de sueños? ¡Hablamos de despertar!», sentenció El Roto.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

⁵ W. Brown, «Ahora todos somos demócratas», en *Democracia en suspenso*, Ediciones Casus Belli, Madrid, 2010, p. 64.

PAPELES: Revista de relaciones ecosociales y cambio global
www.revistapapeles.fuhem.es

CIP-Ecosocial: análisis y debates para
una sociedad justa en un mundo habitable
www.cip-ecosocial.fuhem.es

Las democracias y los indignados
Félix Ovejero Lucas

13

Ensayo



Las democracias y los indignados

Este texto recorre algunas de las principales características, y por tanto, diferencias de las tradiciones democráticas liberal y republicana. Para el liberalismo la coerción empieza cuando las decisiones de "otros" recaen sobre uno y, por eso mismo, el grado de libertad aumenta cuantos más ámbitos de la vida queden excluidos: la privacidad es el reino de la libertad, frente a la opresión de "lo público", de la política. El ideal democrático hubo de ajustarse a este criterio. ¿Cabe otra idea de democracia en la que los "intereses" de los votantes no nos alejen de las mejores decisiones ni la voluntad de los más se vea como una amenaza para la libertad? No hay ley justa sin deliberación y ponderación de opiniones a la luz de razones imparciales, basadas en la virtud ciudadana. Algo de ello hemos visto asomar en las plazas de España.

El 15M fue una cosa rara. Y por eso inquietante. Nadie esperaba un movimiento que mostraba voluntad de participar en las decisiones colectivas, con propuestas razonablemente perfiladas y una explícita preocupación por los intereses generales. Nada que ver con la política a la que estamos acostumbrados, cada vez más alejada de la ciudadanía. Lo hemos visto del derecho y del revés: desinterés de los ciudadanos por los asuntos políticos, confirmado por los altos niveles de abstención y por encuestas que muestran que los votantes apenas recuerdan el nombre de un par de ministros; llamadas a "la responsabilidad" que, en lo esencial, consistía en excluir del debate político los asuntos importantes (terrorismo, pensiones, seguridad social, etc.); partidos políticos que no ven otra estrategia para acceder al poder que desdibujar las aristas de sus programas hasta el punto de que, al final, más allá del criterio electoral, cuesta distinguir entre ellos; reformas de la Constitución ajenas a la voluntad popular, gestadas a la sombra y facturadas sin el menor debate político; grupos nacionalistas que instigan los intereses más mezquinos de "sus" ciudadanos, defienden límites a la solidaridad, reclaman derechos históricos y extienden términos en la frontera misma del racismo (gandules, anal-fabetos, parásitos) para referirse a los ciudadanos "españoles" que, según ellos, "viven" de sus votantes.

Félix Ovejero Lucas es profesor en la Universidad de Barcelona

Por lo general, ante cosas como estas, las élites políticas cabecean con gesto grave y desaprobatorio. Como si les pareciera mal. Pero no nos engañemos. No hacen más que componer el gesto. No les sorprenden ni, en el fondo, les desagradan. Algo que se ha visto confirmado por el disgusto con el que han recibido el 15 M. Incluso algunos, los de ERC, por boca de uno de sus padres fundadores, no han dudado en despreciar al movimiento por su «internacionalismo progre, que va de apátrida, de cosmopolita», recomendando a sus protagonistas que «se vayan a mear a España». No quieren que les alboroten el gallinero unos ciudadanos dispuestos a participar y a decir lo que piensan. La democracia que a ellos les gusta no se lleva bien con la participación ciudadana. Es otra cosa, en la que las patologías descritas no son la excepción sino la norma; la prueba del funcionamiento de las instituciones.

La democracia liberal

Porque nuestras democracias se han forjado desconfiando de la participación ciudadana. Están inspiradas por el liberalismo y para el liberalismo evitar que los ciudadanos se interesen por la política es el mejor modo de proteger la libertad. Una peculiar idea de libertad, eso sí. Me explico. Para el liberalismo una sociedad es máximamente libre cuando son mínimas las intromisiones en la vida de los ciudadanos. En ese sentido, el liberalismo aparece exclusivamente comprometido con el principio de la libertad negativa: una persona es libre de hacer X (opinar, viajar, comer en un restaurante) si nadie le impide –o le coarta para– hacer X. Si yo acepto voluntariamente una restricción, es muy diferente. Es lo que sucede, por ejemplo, en una relación de intercambio: yo me comprometo a hacer A (realizar un trabajo, entregar un bien, pagar un dinero) a cambio de tu compromiso de hacer B (retribuir un salario, pagar un dinero, entregar un bien). Estas son, se dice, relaciones (libres) que tan solo obligan a sus protagonistas. La caridad es otro ejemplo de manifestación de esa libertad: yo doy mi dinero porque quiero. Los impuestos ya son otra cosa, un ejemplo de coerción. La coerción empieza cuando las decisiones de “otros” recaen sobre mí y, por eso mismo, mi libertad aumenta a la vez que aumentan los ámbitos de mi vida que están excluidos de esas decisiones: la privacidad es el reino de la libertad, frente a la opresión de “lo público”, de la política.

Desde esa perspectiva la democracia, entendida como autogobierno del pueblo, constituye un problema para el liberalismo. Parece exigir la participación de todos en decisiones que afectan a todos. Los roces con la libertad negativa resultan inmediatos. Por una parte, las decisiones de la mayoría rigen la vida de todos, incluso de aquellos que no están de acuerdo con lo decidido. Por otra, la democracia reclama a los ciudadanos virtud, participación en la gestión de la vida colectiva, lo que no dejar de ser una forma de moralismo, una intromisión moralista en los proyectos de vida. Al liberal no le importa –incluso puede mos-

trar su contento con— que la gente, si ese es su deseo, participe en la política o ayude a los pobres, pero, en todo caso, juzga condenable que se exija o aliente esa participación o que se obligue a pagar impuestos. Serían intromisiones en la libertad, “imposiciones” sin lugar a un consentimiento libremente asumido.

Había, pues, que ajustar el ideal democrático para hacerlo compatible con el liberalismo. Esa es la inspiración última de la democracia de representantes: una suerte de aristocracia elegida que libera a las gentes de las fatigas y problemas de la participación política. La igualdad de poder se limita al acto de votación (“un hombre, un voto”), pero, eso sí, queda protegida la libertad negativa, la ausencia de intromisiones. De diversos modos. En primer lugar, mediante la profesionalización de la actividad política, las tareas de gestión se delegan en unos políticos que libremente se ofrecen a realizar un trabajo (grato o no, como cualquier otro) por el que son retribuidos; políticos que son seleccionados mediante elecciones (y no, por ejemplo, mediante oposiciones, un departamento de personal o una lotería). En segundo lugar, el Estado es neutral, no alienta las disposiciones participativas, no favorece ciertos modos de vida (acordes con las virtudes cívicas) y desalienta otros. A los ciudadanos no cabe reclamarles ninguna preocupación por la vida de todos: la política se deja en manos de quienes les interesa la política. En tercer lugar, un amplio catálogo de derechos recogidos constitucionalmente oficia como garantía de la libertad (negativa), una garantía externa a —y no susceptible de ser alterada por— la voluntad popular: la protección de los derechos es anterior a la comunidad política, no depende ni en su fundamento, ni en su contenido ni en su preservación de su reconocimiento como justos por parte del *demos*, no requiere del compromiso ciudadano. Finalmente, decisiones políticas importantes —entre ellas la interpretación de los derechos, esto es, en la práctica, su significado— quedan en manos de diversas instituciones contramayoritarias, carentes de legitimidad democrática y sobre las que los controles democráticos son remotos o inexistentes: tribunales constitucionales que imponen su voluntad sobre los parlamentos elegidos y, de facto, con capacidad legislativa; bancos centrales que deciden la política económica. Tales instituciones asumen la gestión de importantes tareas públicas o, en otro sentido, “liberan” a los ciudadanos de responsabilidades sobre aspectos importantes de la vida colectiva.

Por ese camino, la democracia liberal conciliaría tres objetivos con problemas de compatibilidad: su función como institución política (resolver los asuntos públicos), su fundamentación liberal (preservar la libertad negativa) y su principio de legitimidad democrática (la voluntad expresada en votos). La democracia (la voluntad ciudadana, la elección) no se ejerce sobre las decisiones políticas, sino sobre quienes —ello sí— toman las decisiones políticas, los representantes: los votos han de seleccionar (identificar) a los que (mejor) gestionan las tareas públicas. De acuerdo con su inspiración liberal, el mecanismo está diseñado para funcionar sin virtud cívica o con el mínimo de virtud. En ese sentido, guarda parecidos no irrelevantes con el mercado, paradigma de institución liberal, en donde multitud de rela-

ciones de intercambio, contractuales y por tanto libres (en sentido liberal), aseguran la resolución de tareas colectivas sin que nadie se encargue de ello (algo bastante discutible en sus detalles, pero este es otro asunto). El productor no está interesado en satisfacer las necesidades de los consumidores, pero sabe que se ha de esforzar por hacerlo del mejor modo si no quiere quedarse sin clientes. Por su parte, el consumidor, cuando un producto no le gusta, cambia a otro y, así, penaliza al productor ineficiente, o dicho de otro modo, selecciona a aquel que hace mejor las cosas. Ignora cómo se elaboran las mercancías que adquiere, pero, con sus elecciones –privadas– de consumo, asegura que la gestión de las actividades económicas queda en manos de los mejores. Le basta con saber lo que quiere.

En el mercado político, los políticos se comportan como empresarios que ofrecen ciertos productos (programas) y compiten por obtener el mayor número de clientes (votos). Por su parte, los votantes, como los consumidores, se orientan hacia el producto que juzgan más atractivo. No se discuten y deciden las propuestas entre todos los ciudadanos y luego se busca quien las lleve a cabo, sino que, primero, se eligen unos representantes y luego estos deciden qué hay que hacer. Para acceder al poder los políticos tienen que obtener el mayor número de votos. Los partidos políticos compiten entre sí, presentan unas ofertas electorales, unos programas, y los ciudadanos eligen entre esas ofertas según sus preferencias. Sus preferencias no se forman en el proceso político sino que son prepolíticas. Ni se discuten ni se tienen que justificar, como los gustos del consumidor. La selección, en principio, recae sobre propuestas, pero lo que se selecciona son individuos, representantes. Se penaliza a aquellos que no atienden las demandas ciudadanas. En el Parlamento los representantes gozan de plena autonomía respecto a los votantes, que no pueden revocarlos, exigirles cuentas u obligarles a seguir sus instrucciones. A través de procesos de negociación, que reflejan la fuerza de cada cual, los votos que les respaldan, los parlamentarios toman decisiones que recaen sobre el conjunto de la ciudadanía. Con sus simples votos, los ciudadanos, ajenos a la política, seleccionarían a los mejores. Los “no virtuosos” serían incapaces de seleccionar la virtud, la excelencia.

Pero, ¿es realmente así? ¿Pueden los ciudadanos, que no saben y que solo se ocupan de lo suyo, elegir a los que sí saben y procuran por los intereses de todos, a los virtuosos? Suena un poco raro, sin duda. Estamos acostumbrados a sistemas de selección en las que el evaluador conoce la materia, como sucede con un tribunal de oposiciones compuesto por profesores de X que sopesa la competencia de los candidatos sobre X. Pero este escenario está descartado por definición en el caso de los sistemas de representación que precisamente justifican la división del trabajo entre representantes y representados porque estos últimos ni saben ni tienen interés en saber acerca de la cosa pública. Si todos pueden y quieren hacerlo, no se entiende para qué se necesitan las elecciones de representantes. Todos serían igualmente virtuosos y estarían en condiciones de gobernar. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, un sistema rotatorio o de loterías para los cargos políticos que, después

de todo, es menos perverso (no se requiere el poder económico o el conspiratorio, siempre necesarios en el mercado electoral) y menos desintegrador (no es necesario competir agresivamente con los demás)?

Pero también es cierto que conocemos la existencia de sistemas de selección (ciegos) capaces de identificar a los mejores, sin que nadie en particular se encargue de evaluar. Es lo que sucedería en el mercado tal y como se ha descrito, en una interpretación idealizada, y, también en la evolución, en donde hay un buen resultado, una adaptación, sin que ninguna inteligencia se encargue de ello, con un simple algoritmo, una mecánica, la selección natural: variación o mutación/filtro/herencia. Por tanto, la calidad de la democracia liberal dependerá de si está en condiciones de actuar como un selector (ciego) de virtud, de si el mercado político, que funciona sin virtud, permite detectar la virtud, de si, con sus votos, los ciudadanos que no saben (ignorantes) o no quieren saber (egoístas), están en condiciones de escoger a los mejores.

La garantía de que no hay intromisiones arbitrarias
sólo se puede obtener concediendo la voz a la ciudadanía;
a la sociedad autogobernada que sólo se somete a la ley que
ella misma se da, a la participación

Desafortunadamente, el mercado político no se muestra especialmente hábil en esa tarea. De hecho, no sólo se muestra insensible a la virtud, sino que los mismos mecanismos de representación política, que se justifican por su capacidad para identificar la virtud, son los responsables de la penalización de la virtud. Y lo peor es que el problema no tiene remedio, que es consustancial al mecanismo democrático. Recordemos cómo opera. Dadas las condiciones de funcionamiento de la democracia liberal, el votante no necesita estar interesado en la cosa pública: ignora la gestión y por lo mismo no puede decidir las políticas. El votante lo único que sabe es que no sabe: por eso escoge a un político y por eso le retribuye. Por su parte, los representantes, que no son mandatarios, han de estar en condiciones de corregir sus juicios a la luz de problemas que, por futuros, no cabe especificar *ex ante*. Esa situación les otorga una enorme discrecionalidad en la elección de los objetivos y en su realización. Es de ahí, de esa desigual información, de donde surgen las complicaciones. La idea central es que la relación entre representantes y representados, en la que los primeros son elegidos por los segundos, desata una serie de dinámicas, derivadas de que unos disponen de más información que otros, que hacen imposible la selección de los más excelentes. Hay al menos dos tipos de problemas relacionados con la información asimétrica: de *agente-principal*, el imposible control –de la actividad– del representante cuando sus intereses no coinciden con los del representado (y hay muchas razones para pensar

que no coinciden, como nos recordó Michels, hace un siglo); de *selección adversa*, de identificación del buen representante, ante la imposibilidad de verificar lo que el representante cuenta y, por ende, utilizar esa información como criterio.

Los escenarios políticos son siempre futuros e inciertos y, por ello, se complica especificar los “contratos”. Sencillamente, el consumidor/votante no tiene modo de saber qué es lo que se adquiere. Y eso otorga a los políticos amplios márgenes de discrecionalidad. No son mandatarios que siguen instrucciones sino que, una vez elegidos, toman sus propias decisiones acerca de cuáles son los problemas a resolver y cómo hacerlo. En esta situación no se parecen al fabricante de un refresco sino a un mecánico, un abogado o un médico, a un individuo que me vende un servicio genérico: yo ignoro cuál es el problema, por eso lo contrato, y él sabe que yo no tengo modo de evaluar su gestión. Al igual que el político, no recibe instrucciones para la realización de tareas precisas: él mismo decide la naturaleza del producto. Por supuesto, al final, el problema se resuelve (o no), pero eso no quiere decir que la reparación sea la mejor o la más barata, que no esté inflada, en realidad, ni siquiera quiere decir que haya hecho algo. El individuo que compra los servicios no tiene ningún modo de controlar sin costes, sin conocimiento –de otro modo, ¿para qué compraría sus servicios profesionales?– la actividad de aquel que, en principio, tiene a su servicio. Y este, por su parte, no tiene interés ninguno en realizar una tarea que supone mayores costes y menores beneficios si se realiza con mayor pulcritud, a sabiendas de que su comprador es incompetente –por eso le contrata a él– para determinar si cumple o no. En esas situaciones, cuando el vendedor sabe lo que vende, pero el comprador no, la competencia produce importantes patologías, como ha demostrado la teoría económica de los mercados de información asimétrica.

Con desigualdad informativa, el ciudadano/consumidor no está en condiciones de distinguir entre el político/productor sincero y el embaucador, el que tergiversa sus quehaceres y méritos para asegurarse el poder. El político siempre podrá exagerar las dificultades, escoger como “objetivos” resultados que sabe que se darán por el simple curso de los acontecimientos, describir la altura de las metas de tal modo que siempre las sobrepase, ofrecer metas de fácil realización, exagerar la descripción de su esfuerzo, inventar unos problemas y escamotear otros. El ciudadano no tiene modo de distinguir entre el político que se esfuerza honestamente por conseguir un resultado difícil y el que presenta como una complicada conquista lo que tiene por seguro; entre el que, cuando reclama su esfuerzo, exagera problemas falsos y el que señala dificultades reales; entre el que argumenta con datos fiables y el que manipula los presupuestos y las contabilidades. Por supuesto, por lo mismo, de nada le sirven lo que digan los otros políticos: sin información, no tiene modo de deslindar las críticas veraces de las mendaces, entre los sinceros y los deshonestos. El ciudadano sabe eso y sabe que no puede discriminar entre unos y otros. En esas condiciones, el político honesto que emplea su tiempo en estudiar los problemas e intentar resolverlos, se

encuentra en peores condiciones que el que dedica su tiempo a asegurar –con favores, presencia en los medios de comunicación, acciones populistas– su reelección. Sistemáticamente, el mercado político presenta un sesgo en contra del comportamiento virtuoso: no es capaz de identificar a “los buenos representantes”.

Los derechos de los ciudadanos no son murallas que se levantan alrededor de individuos autónomos sino, para decirlo con Marx, «derechos políticos que son únicamente ejercidos en comunidad con otros hombres»

El problema, debe insistirse, tiene que ver con el propio diseño de la institución, concebida, y aquí la historia se une con la ingeniería política, para frenar las “pasiones irracionales” de los de abajo: prácticamente todos los clásicos del liberalismo participaban del temor de que los más –que eran los más pobres– impusieran su voluntad y, sobre ese temor, levantaron sus propuestas a la hora de dar forma institucional a la democracia, comenzando por impedir el sufragio universal (voto censitario, por ejemplo). No hay aquí “maldad” de unos políticos encastillados en la defensa de privilegios. Por supuesto estos se dan, pero tampoco faltan los que están seriamente interesados por el bien común. Lo que sucede es que no tienen las de ganar, al menos si actúan debidamente, con virtud. Un político que se anticipe a los retos (epidemias, terrorismo, etc.), que aborte los problemas antes de que surjan, no podrá rentabilizar unas políticas “que no se ven”, antes al contrario, será acusado de alarmista, de crear problemas (cuando se limita a denunciar su existencia, como sucede con quienes critican unas políticas lingüísticas nacionalistas que penalizan a los trabajadores del resto de España y a buena parte de los que viven en las comunidades provistas “de identidad nacional”). Una acusación, la de alarmista, que es carta ganadora que pocos pueden resistir, entre otras razones porque saben que otros pueden anticiparse a ellos al utilizarla. Y porque siempre funciona con unos ciudadanos educados en la irresponsabilidad, que, por las propias reglas del juego, ni saben ni miran más allá de sus propios intereses y a los que, entre otras cosas, no se les recuerdan las consecuencias de sus decisiones. Y esos ciudadanos, en estas condiciones, constituyen un problema adicional. Poco futuro tendría un político que recuerde la existencia de las dificultades, que, por ejemplo, recuerde que nuestros niveles de vida –y los consumos energéticos que suponen– se edifican sobre el bienestar de las generaciones futuras y que, por lo mismo, recomiende, en atención a los intereses generales, una contención del crecimiento: las generaciones futuras no votan, tampoco los ciudadanos de otros países que se beneficiarían de una mejor política ambiental. Precisamente por ello, cuando aparecen los problemas importantes, como los ambientales, los que tienen que ver con las condiciones mismas de supervivencia digna de las comunidades políticas, la democracia apuesta –y hay que decirlo: con frecuencia, en el mejor de los casos– por “sacarlos del debate democrático”, esto es, por limitar las decisiones de los

ciudadanos. Lo valioso y lo importante ha de resolverse fuera, y solo queda dentro el juego, las zancadillas, los gritos y el teatro. El problema, claro, es que cuando las cosas importantes se deciden al margen del debate político, sin transparencia, no es difícil que se decidan del modo que más conviene a los que mayor capacidad de influencia –no democrática– tienen, los poderosos.

Pero, no hay ley justa, ni por ende libertad, sin deliberación,
sin ponderación de las opiniones a la luz de razones imparciales,
y no hay deliberación democrática sin virtud ciudadana.
Algo de eso hemos visto asomar en las plazas de España

Otra democracia

¿Cabe otra idea de democracia en la que los “intereses” de los votantes no nos alejen de las mejores decisiones ni la voluntad de los más se vea como una amenaza para la libertad? Sí, al menos sabemos donde buscarla, en la tradición republicana, que tiene en la idea de libertad como no dominación su núcleo normativo fundamental. Desde esta perspectiva un individuo es libre cuando no está sometido a interferencias arbitrarias, reales o potenciales. En ese sentido, no se puede hablar de menoscabo de la libertad cuando las intromisiones son el resultado de aplicar una ley justa. La ley que impide al gángster amenazarme es una garantía de mi libertad. Cuando la intromisión es resultado de una ley justa –que, por ejemplo, penaliza la violencia doméstica–, no se puede hablar de falta de libertad, antes al contrario, la interferencia asegura la libertad. Para el republicanismo, la ley no es la frontera donde acaba la libertad, sino su condición necesaria, su garantía frente a los poderosos o los violentos, la seguridad de que no estaremos sometidos a la voluntad de los otros. Por eso podemos decir que en el País Vasco, mientras exista ETA, esto es, una organización (terrorista) con capacidad y en (potencial) disposición para matar, no habrá libertad, esté “en tregua” o activa. Por otra parte, no podemos considerar libre al “siervo consentido”, bien porque sus deseos coinciden con los de su señor o porque este, buen tipo, le deja hacer. Sigue careciendo de libertad: si su señor quisiera podría interferir en sus acciones impunemente y a su arbitrio. No cabría, por ejemplo, considerar como libre a la mujer cuyo marido “le permite” hacer lo que hace sin necesitar autorización. Es ahí donde la ley, antes que intromisión es una garantía de libertad, en contra de lo que pensaría el liberal.

El problema, claro es, radica en determinar qué se considera arbitrario; en delimitar el trazo entre las intromisiones arbitrarias y aquellas que no lo son. Pues bien, si se está de

acuerdo en que la especificación de qué sea o no arbitrario ha de hacerse «atendiendo a los intereses de las gentes, según las interpretaciones que las gentes dan de sus intereses» (Philip Pettit), tarde o temprano, resulta obligado volver nuestra mirada hacia la participación. Dicho de otro modo, la garantía de que no hay intromisiones arbitrarias sólo se puede obtener concediendo la voz a los ciudadanos, a la sociedad autogobernada que sólo se somete a la ley que ella misma se da, a la participación.

Pero, cuidado, desde Aristóteles, no ignoramos que la democracia también puede derivar en tiranía; la tiranía de los muchos sobre los pocos, pero tiranía al fin. ¿O no llamaríamos tiranía al acuerdo de muchos para abusar de uno o de pocos? También la ley de la mayoría puede ser opresora, fuente de dominación arbitraria. Si los ciudadanos “van a la suya”, si se limitan a votar, sin ponderar las opiniones, no es imposible que la voluntad de los más ahogue los derechos de los menos. Así las cosas, ¿cómo determinamos la ley justa que es garantía de la libertad? O de otro modo: ¿qué democracia asegura la ley justa y, por ende, la libertad?

Ahí es donde hace su aparición la deliberación democrática, que filtra los intereses según criterios de imparcialidad, atendiendo a la fuerza de los argumentos que los respaldan. La argumentación pública obliga a mostrar que, en algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente aceptables, de interés general. En este caso, las preferencias, las opiniones, se conforman en el mismo proceso de discusión, no son prepolíticas. Por supuesto, por lo común, los individuos acudirán a la deliberación con ciertas ideas, pero, en el diálogo, las modificarán a la luz de las mejores razones, o se tendrán que callar, desprovistos de argumentos. Quizá, en el fondo, sus propuestas respondan a sus intereses, pero, en la deliberación, se ven obligados a justificarlas de acuerdo con criterios imparciales, con razones aceptables para todos. En la medida que la deliberación muestre que, a la luz de tales criterios, las propuestas no están justificadas, y puesto que han acatado tales criterios, deberán abandonar sus propuestas, o, al menos, la tesis de que sus propuestas se corresponden con el interés general.

En ese caso, pierde todo sentido “defenderse” frente a la mayoría de la necesidad de unos derechos que protejan frente a la democracia: los intereses justos estarán recogidos en los intereses de todos. Desde esa perspectiva, los derechos, que impedirían la dominación, encontrarían su garantía última en la participación democrática. La libertad no es una libertad frente a la democracia, sino que es un resultado de la democracia. No se trata tanto de que los ciudadanos no tengan nada que decir acerca de si X puede estudiar o acceder a un sistema sanitario decente, sino que todos han de asegurar a X ese derecho, porque lo consideran justo y, también, los ciudadanos han de estar en condiciones de poder expresar que X no tiene un derecho equivalente a disponer a vivir en un palacio, incluso si, en principio, no se le puede prohibir que satisfaga ese deseo, por su cuenta y después de distri-

buciones justas, de pagar impuestos para empezar. Para esa mirada, los derechos de los ciudadanos no son murallas que se levantan alrededor de individuos autónomos sino, para decirlo con Marx, «derechos políticos que son únicamente ejercidos en comunidad con otros hombres». O, en palabras todavía más clásicas, del *Manifiesto Comunista*: «el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos».

La participación es ahora fundamental. La democracia no es el problema sino –la vía para– la solución: las demandas justas y, por ende, las interferencias arbitrarias se determinan a través de procesos de pública deliberación. Someterse a la voluntad colectiva no es una forma de dominación, y por tanto no cabe pensar en “protegerse” frente a ella cuando esa voluntad está conformada a través de procesos de participación y deliberación en donde ciudadanos comprometidos con el interés general ponderan las propuestas con criterios imparciales y se comprometen en las decisiones que adoptan. Mal que bien, la democracia deliberativa y participativa asegura un razonable vínculo entre las decisiones y la justicia, una la ley que es la garantía última de la libertad republicana: la libertad como ausencia de dominación. Pero no hay ley justa, ni por ende libertad, sin deliberación, sin ponderación de las opiniones a la luz de razones imparciales, y no hay deliberación democrática sin virtud ciudadana. Algo de eso lo hemos visto asomar en las plazas de España.

No ignorar los problemas

Por supuesto, tampoco podemos ignorar los problemas de los procesos participativos y de las movilizaciones, problemas que están en la trastienda de los temores liberales. Muchos de esos temores no están desprovistos de justificación, sobre todo, cuando el paisaje económico sobre el que se levantan las instituciones está lejos de alentar la virtud ciudadana. En su mejor versión, tales temores han cuajado en conquistas que han encontrado su cobijo en un Estado de derecho que, mal que bien, supone una cristalización del imperio de la ley, de la libertad republicana, de un *government of laws and not of men*, para decirlo con la conocida fórmula de la Constitución de Massachussets. Por supuesto, la pregunta inmediata es si las buenas leyes, sin ciudadanos comprometidos, sin virtud, no acaban en agua de borrajas. No faltan razones para coincidir en el pesimismo de Maquiavelo cuando sostenía que, desgraciadamente, así eran las cosas, que sin buenos ciudadanos de poco sirven las mejores leyes. Pero, eso es seguro, todavía resulta peor las peores leyes con los peores ciudadanos. Y, en ese sentido, no está mal tener algunas bridas que al menos frenen las peores tendencias, no estaría mal, por ejemplo, introducir cláusulas constitucionales que nos impidieran tomar decisiones que pongan en peligro las condiciones (dignas) de vida de las futuras generaciones. Aunque sin virtud, sin compromiso ciudadano, no es mucho lo que podríamos esperar, como ya hemos visto a cuenta de tantas buenas palabras de nuestras constituciones, resulta prudente prevenirnos contra nosotros mismos en nuestras peores

disposiciones, esas que, tristemente, alientan con frecuencia el juego de la democracia liberal a través de los mecanismos examinados.

Por lo demás, los problemas que han asomado en el movimiento del 15 M no son nuevos ni, por eso mismo, deben ignorarse. No basta autoproclamarse “asamblea democrática” para creer que estamos ante genuinas decisiones democráticas y, sobre todo, para dar por buenas las decisiones que allí se adopten. Se han de cumplir bastantes requisitos, entre ellos de genuina participación, de igual posibilidad de ser escuchados, de precisión de los temas, de su perímetro y de su alcance, de claridad de agenda –y de su orden–, de límites temporales en las discusiones, de base informativa de las opiniones, etc. Para abordarlos es conveniente evitar el adanismo, el ponernos a pensar como si hasta ahora nadie hubiera señalado los problemas o como si quienes los señalaban obraban de mala fe; en breve, hay que acudir a la teoría social que los ha estudiado con detenimiento y, también, a la experiencia acumulada por las instituciones democráticas representativas. No han faltado en este tiempo testimonios de escasa tolerancia democrática y de desmesura –en los asuntos y en los procedimientos de decisión– por parte de los indignados. Con todo, esas torpezas no eclipsan las muchas buenas cosas mostradas en estos meses: la voluntad de participar en la gestión de la vida compartida, la disposición a informarse y a informar a razonar y escuchar razones, a pedir explicaciones. Sobre esas mimbres han levantado sus argumentos los mejores clásicos de la democracia, incluidos los clásicos de la democracia liberal. Desde luego, sobre lo que nada dijeron –y no por simple falta de anticipación tecnológica– es sobre llamadas que dictan a los gobernantes reformas constitucionales o sobre comidas o cenas de los gobernantes con banqueros o empresarios a los que nadie ha elegido para tomar decisiones. Se podrá dudar de la calidad democrática de muchas actuaciones de los indignados, de la calidad de las llamadas y las cenas no cabe duda alguna: ninguna. Una cosa es segura, en esos casos no hay vocación ni procedimientos democráticos. Se acostumbra a decir que, lo queramos o no, los problemas de los poderosos son nuestros problemas. Es posible, pero lo que es seguro es que sus soluciones no son nuestras soluciones. Aunque solo sea por eso no está de más que se atiendan otras voces. Voces que para ser escuchadas, tienen que hacer bastante más ruido y más esfuerzo que descolgar un teléfono y llamar a Presidencia.



96
diciembre
2011

REVISTA CIDOB

D'AFERS INTERNACIONALS

Veinte años después, ¿Hacia dónde va Rusia?

Carmen Claudín y Nicolás de Pedro (coords.)

Las nutridas manifestaciones ciudadanas de diciembre de 2011 en Moscú y otras ciudades rusas, como protesta contra el triunfo presuntamente fraudulento del partido gubernamental Rusia Unida en las elecciones parlamentarias, pueden ser interpretadas como un primer síntoma claro de que algo se mueve en Rusia. Han pasado veinte años de la desaparición de la Unión Soviética y muchas de las incógnitas que se planteaban entonces siguen vigentes hoy. ¿Cuándo y cómo se establecerá un sistema plenamente democrático? ¿Cuál es o debería ser el modelo de desarrollo económico? ¿Se modernizará la economía rusa? ¿Qué papel desempeñan la sociedad civil y los medios de comunicación? ¿Cómo se articularán las relaciones interétnicas? ¿Qué papel jugarán los movimientos y sentimientos nacionalistas? ¿Cómo se articularán las relaciones centro/periferia en la Federación Rusa? ¿Cuál será el papel de Rusia en el mundo globalizado del siglo XXI? Este número monográfico de la *Revista CIDOB d'afers internacionals* aspira a ofrecer respuestas a estas y otras preguntas, recurriendo a los análisis de reconocidos especialistas en la materia.

EDITA

CIDOB

Elisabets, 12, 08001 Barcelona
www.cidob.org

DISTRIBUYE

Edicions Bellaterra, S.L.

Navas de Tolosa, 289 bis, 08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com

Carmen Claudín

¿Qué Rusia, veinte años después?

Andrey Makarychev

Rusia en un mundo multipolar: el papel de las identidades y los "mapas cognitivos"

Antonio Sánchez Andrés

La economía rusa en la crisis mundial: Una valoración de la etapa Medvédev

Marlène Laruelle

Nacionalismo y construcción estatal en Rusia: Un consenso social debilitado

Samuel A. Greene

La sociedad civil rusa, veinte años después

Miguel Vázquez Liñán

¿Neoliberalismo a la rusa?: Políticas de información y propaganda en la Rusia contemporánea

Francesc Serra Massansalvador

Chechenia como reflejo de las dinámicas políticas de Rusia

LÍMITES DE NUESTRA DEMOCRACIA, formas de contestación

Los límites del modelo democrático español 27
Juan Carlos Monedero

Democracia, *ma non troppo*: los mecanismos de participación ciudadana en la Constitución española 43
Rafael Escudero Alday

La democracia delegada: una reflexión desde el mundo del trabajo 55
Fermín Paz Lamigueiro

Crisis de hegemonía y movimientos de resistencia 63
Xavier Domènech Sampere

Hackear el periodismo, resetear la democracia. O de cómo Assange quería establecerse en Islandia y acampó en Sol 75
Víctor Sampedro Blanco

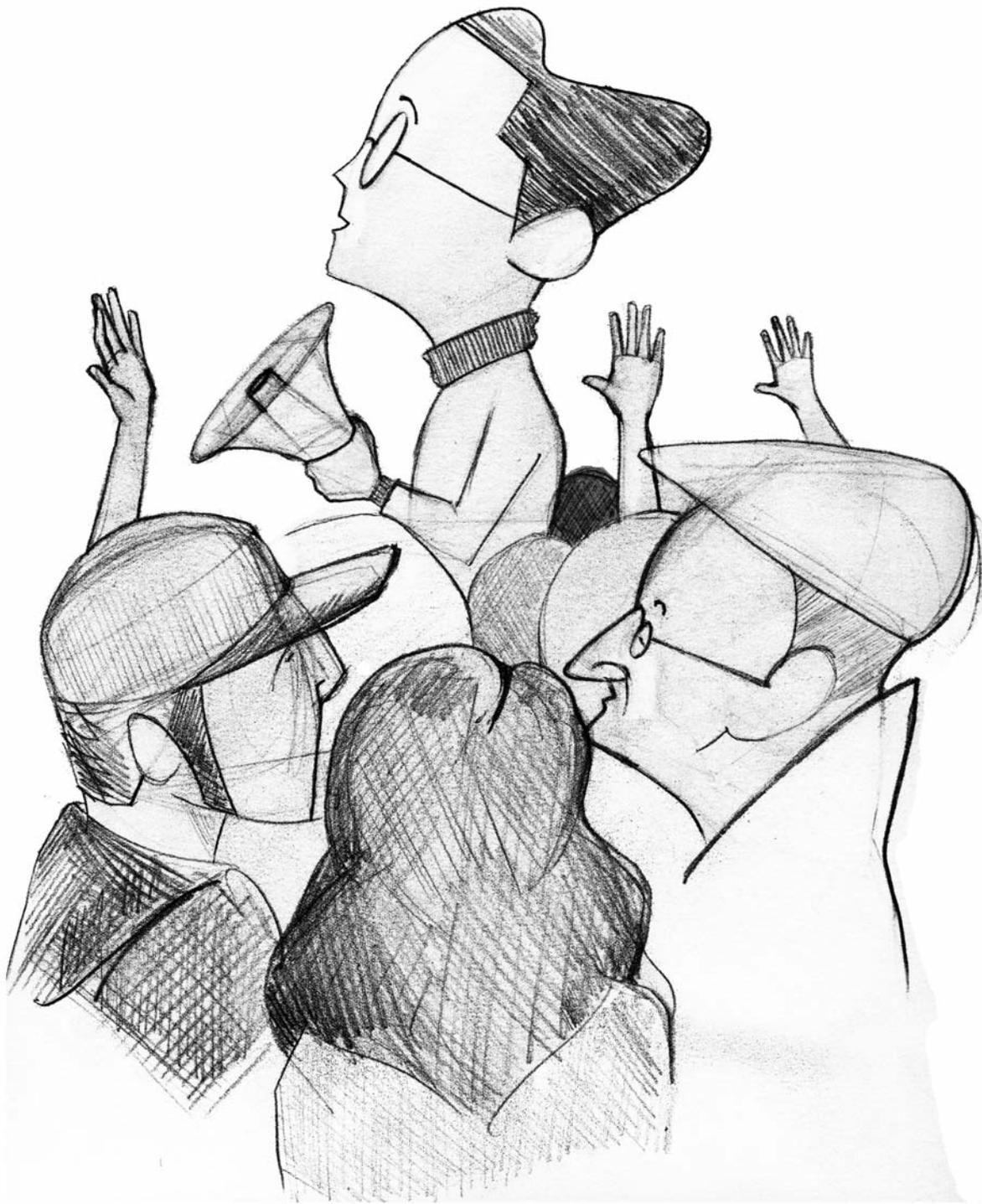
Crisis del sistema democrático. Hacia una redefinición de nuestra vida en común 87
Justa Montero Corominas

La crisis capitalista y el deseo de democracia 97
Santiago Alba Rico

¿Qué está pasando en Chile?: la gran estafa 107
Antonio Elizalde Hevia

15 M: una revolución de personas 125
Amador Fernández-Savater

Especial



Los límites del modelo democrático español¹

Si la "Transición" fue, como todo proceso de cambio, complejo y matizable, el discurso sobre la Transición ha sido simplificador y torticero. Una patraña piadosa, una mentira de familia que ocultaba un pasado poco heroico y ayudaba al país a sentirse mejor de lo que era. Los primeros miércoles de cada mes todas las sirenas de París suenan al unísono. Están construyendo memoria nacional. Recuerdan los bombardeos de la aviación nazi durante la segunda guerra mundial. Con este recordatorio se está celebrando la victoria sobre el fascismo en Francia y el triunfo de la democracia sobre la reacción. Cada primer miércoles de mes, Francia rinde homenaje a aquella parte de su pasado donde hoy ha decidido mirarse: la Resistencia. Los franceses miran a la Revolución francesa o a la Resistencia y ahí se encuentran constantemente como ciudadanos. Cuando miramos hacia atrás ¿a dónde miramos los españoles?

La lectura mítica de la "Transición" sirvió en bandeja de papel al país su propia mentira, que tenía que ser gestionada por actores de doblaje a los que no se les notase ni el acento franquista ni el acento antifranquista. Cuando la disputa dejó de ser entre "franquistas y antifranquistas" para pasar a ser entre "el búnker y los demócratas", entre "inmovilistas y reformistas", el pasado se borró y Fraga, un ministro de Franco que firmó sentencias de muerte, o Suárez, secretario general del partido fascista, pudieron sentarse en la misma mesa que aquellos que pagaron con cárcel, tortura y exilio luchar contra la dictadura. En ese maquillaje del pasado, no haberse significado mucho en ningún lado se convirtió en una ventaja. Políticos que se parecían mucho a su pueblo representaron la comedia –con necesarios momentos de mayor intensidad dramática– y ese principio de gravitación espiritual que significaba la

Juan Carlos Monedero es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración (UCM)

¹ Las ideas principales de este artículo las he desarrollado en J. C. Monedero, *La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

Transición gloriosa pasó a formar parte de las representaciones de una democracia que se acostó franquista y, sin cambiar las sábanas, se levantó demócrata de toda la vida.

Los primeros miércoles de cada mes todas las sirenas de París recuerdan los bombardeos de la aviación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con este recordatorio se está celebrando la victoria sobre el fascismo en Francia y el triunfo de la democracia sobre la reacción. Cada primer miércoles de mes Francia rinde homenaje a aquella parte de su pasado donde hoy ha decidido mirarse: la Resistencia. Había muchos republicanos españoles entre los soldados que liberaron París. Después de combatir el fascismo en España se fueron a combatirlo a Francia. Allí siempre les han dado las gracias. El 15 M tuvo que recurrir a un francés de la Resistencia, Stephan Hessel, para indignarse. Nadie les había contado de los viejitos republicanos de su propia historia.

Sólo en noviembre de 2002 el Parlamento español –no en el pleno, sino en una comisión– condenó el levantamiento fascista del 18 de julio de 1936. El Partido Popular votó aquella condena contando con que bastaba aquel gesto, para ellos doloroso –¡un 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco y José Antonio!–, para que se pasara página. Pero las guerras, si bien pueden empezar en los parlamentos, siempre se terminan en las calles. Aquel pronunciamiento militar fracasó. En ese fracaso estuvo el origen de la terrible guerra. En la memoria, un dato contundente: mientras que en otros lugares de Europa el fascismo se impuso sin resistencia (e, incluso, con apoyo electoral), en España costó una guerra, entendida por el bando franquista como de exterminio, que duró tres largos años y a la que siguió una interminable posguerra en forma de dictadura militar que acabó cuando el dictador se consumió en su cama.

Cuando el 12 de octubre de 2004, invitados por el ministro de Defensa, José Bono, pasaron por la madrileña Castellana, con igual mérito y rango, un miembro de la División Azul junto a un soldado de las Brigadas Internacionales, se repetía el mito de las dos Españas condenadas a enfrentarse, quizá el más profundo responsable de la pelea sempiterna que ha mantenido durante tanto tiempo a España lejos del concierto europeo. Responsabilidad, debe quedar claro, que corresponde al mito, pues ocultaba la existencia de una España mayoritaria que pugnaba por la modernidad, y otra minoritaria que, con mayor éxito, la frenaba. De modo dramático se repetía una vez más la solución que acompañaba a esa fabulación interesada: emparentar a víctimas y verdugos. Utilizar ese día emblemático no dejaba de ser un mensaje a las nuevas generaciones nacidas en democracia: todos, en aquel pasado terrible, en su bondad o en su maldad, eran iguales. No otra cosa quisieron repetir con motivo de la celebración del 30 aniversario del 23-F de 1981, inventando una reconciliación política entre Santiago Carrillo, jefe de la Junta de Defensa de Madrid en 1936, y Manuel Gutiérrez Mellado, igualmente detenido en el Congreso aquella noche, y que fuera responsable durante la guerra de la V Columna en la misma ciudad (responsable de sabo-

tajes, ametrallamientos indiscriminados en las terrazas de Madrid, asesinatos y sabotajes constantes). El libreto de la Transición presentaba a los dos antiguos enemigos compartiendo tabaco, hermanados por alguien que no terminaba de entender que el pasado pasado estaba. Los que en 1936 se hubieran brindado un tiro, ahora se intercambiaban cigarrillos, como si hubieran finalmente entendido que habían llegado al sitio correcto donde los dos pertenecían. Las dos Españas reconciliadas gracias al bálsamo infalible de la Transición.

La izquierda española, porque no ha sido capaz de superar esa mentira, siempre ha tenido dificultades para respetarse a sí misma. Que iniciado el siglo XXI se rindieran honores en la Castellana de Madrid a los que saludaron brazo en alto a Franco, Hitler y Mussolini sólo puede generar falta de autoestima en los que se enfrentaron a esos genocidas patrios. ¿Qué pasó en la segunda República para que hoy gocen del mismo trato los que defendieron la democracia y los que la adversaron? La falta de autoestima de la izquierda, perdida en los laberintos de un pasado al que tiene que fragmentar para escoger unos pasajes y rechazar otros, deja el campo libre para los que buscan en una historia sin complejos que les justifica el presente. Las ideologías críticas han silenciado sus momentos heroicos, fundantes del pacto social, donde podría y debería estar la huella genética de nuestra democracia. Ese lugar llamado en 1939 España –y en el que aún nos reconocemos– bien podía servir de espejo para construir una mejor sociedad. Trenzar el hilo con ese ADN democrático bien podría servir para una mayor resistencia a, pongamos por ejemplo, una reforma constitucional que supedita el magro Estado social al pago de la deuda. La capacidad de resistencia está ahí clara. Mientras que el fascismo se impuso con facilidad en Italia, Alemania o Francia, en España necesitó una guerra de tres años y un posterior genocidio. Basta mirar hacia atrás. Sin forzar la mirada y sin necesidad de encontrar, en este caso en la República, aspectos que no existieron. No es buena tarea ir a buscar al pasado magnificas gestas que nunca se dieron. Embota la inteligencia. Pero tampoco hace falta buscar ni en la ética ni en la filosofía ni en abstractos constructos lo que ha enseñado la historia. Una historia en donde no es verdad que todos hayan sido iguales, ni en sus motivaciones ni en sus comportamientos. Ya alertó el paladín de la Modernidad, el alemán Jürgen Habermas, contra los amigos del “justo medio”, esos hombres honrados que dicen: «la mitad de culpa para Hitler, la otra mitad para los judíos».

Siempre que la democracia en España sabe a decepción y a engaño, sale la Transición a escena. La crisis económica y el escaso entusiasmo que generó la mayoría absoluta del PP en las elecciones del 20 N, configuraron el caldo de cultivo idóneo para volver a utilizar los lugares comunes de la restauración borbónica² que sucedió a la muerte de Franco. Una

² A. Ortí, «Transición posfranquista a la Monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la social-tecnocracia transnacional», *Política y sociedad*, núm. 2, 1989.

historia repetida. La recuperación de ese “sentido común” que hablaba del “consenso” para ocultar cualquier conflicto social, rondó por caminos, pueblos y ciudades con motivo del referéndum de la OTAN, en 1986, cuando los intelectuales que se habían echado en brazos del PSOE (con maneras de película prohibida por la censura eclesial), descubrieron que también ese poder sabía, sin haber viajado por el medio oeste, «hablar con lengua de serpiente». ¿Cómo podía el Partido Socialista, aquél que hizo de la salida de la OTAN y el cierre de las bases norteamericanas uno de los principales argumentos de sus campañas electorales, traicionar con tan poco estilo sus promesas? ¿«OTAN, de entrada No», pero de salida tampoco? Y el PSOE manipuló la RTVE, la televisión española única y poderosa, a niveles que recordaron la dictadura. Esta falta de honorabilidad no podía estar en el socialismo. Ergo debía estar en la Transición.

Reapareció en 1993, cuando la derecha, cansada de estar fuera de lo que considera su lugar natural –el palacio de Gobierno– decidió inventar su castiza *caza de brujas*, camino del todo vale con tal de echar a los socialistas de La Moncloa. José María Aznar, al que le había sabido a poco la primera Transición –quizá porque, junto a Falange Española, su primera casa política, siempre la miró con malos ojos–, propuso una segunda. Al haber recelado siempre la derecha de las luces de la Ilustración, la apuesta de ese segundo transitar era sentimental y regresaba a una España eterna e imperial que hablaba castellano ya desde Atapuerca, iba a misa, se regía con mano dura centralista desde El Pardo y encontraba cierta simetría fractal en el contorno vigoroso del toro de Osborne. De pronto, la intelectualidad que, además de pensar, había mirado las piernas a Ana Belén, movido las caderas con Miguel Ríos, visto con rubor un pecho a Susana Estrada, leído *Los mares del Sur* (tenían aún pendiente, sin embargo, *Escuela de mandarines*) y levantado el puño («¿cuál es, el derecho o el izquierdo?») con Felipe González y Alfonso Guerra, se encontró con que no tenía herramientas intelectuales para defenderse de los demócratas de toda la vida, esos que, de nuevo, querían volver a encarcelar a media España. Habiendo renunciado al marxismo con urgencia de converso, y no pudiendo sustituir el arsenal intelectual de la izquierda por nada que se le aproximara, la alternativa no era fácil: o abrazaba alguna moda proveniente del mundo anglosajón –cosa que haría más tarde con los Giddens, Pettit o Lakoff– o buscaba en la fuente incontaminada de la Transición el referente en donde frenar los embates de los que olvidaban que somos consenso y en consenso nos convertiremos. Concluyeron que el PP, fundado por Manuel Fraga, el mismo al que Felipe González había nombrado «jefe de la oposición», aún tenía modos del antiguo régimen. Le hacía falta más consenso. La campaña del PSOE de 1996 asumió ese clima y sacó un doberman con fondo de Franco que no sirvió ni para que ganaran las elecciones ni para educar acerca de la perversidad de una mala lectura del pasado.

Cuando Aznar gana los comicios de 1996, la necesidad de hablar catalán en claustros al cobijo de cualquier inclemencia sirvió para que la Transición volviera a descansar en un

lugar cómodo, como una tía rica a la que se visita solamente para mostrarle los respetos por la herencia en curso. Pero se había abierto un nuevo frente, tramposo igualmente. Como la Transición era inmaculada, cada cual empezó a reconstruir su propia historia en el lugar donde más amabilidad encontrara para atacar al otro. El nuevo turnismo político desoía aquello que le dijera Alfonso XII en su lecho de muerte a su viuda: «Guarda tu virtud, y de Cánovas a Sagasta y a Sagasta de Cánovas», y representaba una lucha sin cuartel que parecía que en verdad no se necesitaban.³ El PSOE recuperó así retazos de la República y de la guerra civil –pero sólo retazos– para diferenciarse del PP y retirarle la credencial democrática, la misma que le regaló, con tanta frivolidad, antaño.

El PP, por su parte, reprochaba al PSOE sus maneras de gobernar, FILESA y demás casos de corrupción, los GAL, las visitas a la cárcel de Guadalajara, el latrocinio de Roldán o la supuesta connivencia con el terrorismo etarra. Más seguro en su saña, el PP no se detuvo, y contraatacó hasta donde hiciera falta. De nuevo, y ahora voceando los mensajes desde medios de comunicación interminables en número y vehemencia, cargó en la izquierda los orígenes de la guerra civil, señaló a la revolución de Asturias como una deslealtad a la Constitución republicana, volvió a hablar de Paracuellos, del oro de Moscú, de las iglesias quemadas y los curas fusilados, hasta llegar otra vez a la desmembración de España y el clima “guerracivilista”. La intelectualidad afín al PSOE –en especial la vinculada al grupo PRISA– no terminaba de poder atajar los ataques. Les faltaba convicción. Porque la recuperación de aquella época estaba truncada. No había sido real sino táctica. El PSOE que no había querido conmemorar el 50 aniversario de la proclamación de la segunda República, reclamaba al PP la celebración del 60 aniversario. El PSOE que, con mayorías absolutas, había dejado morir a miles de viejos que habían anhelado un mínimo reconocimiento, le reclamaba diez años después al PP la condena de la dictadura franquista. La memoria se convertía en un juego electoral.

Así, poco a poco, la derecha iba construyendo hegemonía. Allí donde apenas unos años antes se habían parado los pies a embaucadores letrados como Ricardo de la Cierva (defensor, entre otras fechorías, de la patraña según la cual el bombardeo de Gernika fue obra de dinamiteros republicanos), emergían ahora embaucadores iletrados construyendo una idea del pasado a mayor gloria del presente reaccionario, representado ya no tanto por políticos sino por sectores mediáticos con capacidad de dictar el norte al Partido Popular. Mientras España supo que Ricardo de la Cierva era un ideólogo franquista, Pío Moa, César Vidal o Jiménez Losantos pasan por formar parte de los sabios de Grecia, exitosos constructores de un nuevo sentido común que puede terminar por hacer hegemónica la idea de

³ Algo bastante falaz. Ni siquiera en los tiempos en los que el grupo PRISA construyó el exitoso mensaje de la “pinza” entre Izquierda Unida y el Partido Popular se registran acuerdos parlamentarios entre estas fuerzas en número e importancia como los acuerdos adoptados entre el PSOE y el PP. Si el PSOE y el PP acuerdan, es un asunto de gobernabilidad. Si cualquier fuerza se entromete en ese apañío, hay problemas de legitimidad.

que fue Azaña y Largo Caballero quienes empezaron la guerra civil. Al final, el juego ideológico entre derecha e izquierda queda subvertido, y todos los elementos que forman parte del arsenal de la izquierda pasan a segundo lugar. Si, como dice⁴ Eley, lo mejor de nuestras sociedades se corresponde con valores de la izquierda (igualdad, educación laica y gratuita, sanidad, sufragio libre, igualdad de género, pacifismo, etc.), en España, ese juego perverso hurta necesariamente el contenido de la emancipación.

Por eso hay que insistir en que hubo una generación en España que no cumplió con su tarea. Fueron aquellos que, pudiendo, se olvidaron de rescatar la memoria de la lucha antifranquista

La gestión del atentado islamista de Atocha en 2004 permitiría sorpresivamente a Rodríguez Zapatero alzarse con el poder. La ciudadanía le habría perdonado a Aznar el meter a España en la guerra e, incluso, el atentado. Pero no le perdonó la mentira. La primera legislatura de Zapatero corrigió deudas del pasado, entre ellas, una ley de memoria histórica que, por su timidez, no contentaba a los familiares de las víctimas y envalentonaba a los que querían pasar página sin leerla. El papel del PP en los dos gobiernos de Zapatero consistió en dejar que el PSOE se desgastara, colocando de vez en cuando algún asunto, principalmente para tranquilizar al sector nacional-católico ultra que anida en su seno. Tendría que venir la crisis económica, iniciada en Estados Unidos en 2007, para que el PSOE perdiera de nuevo las elecciones y permitiera que un PP sin programa ocupara el mayor poder institucional que nadie haya tenido desde el franquismo. Sin embargo, nunca una mayoría absoluta generaría tan poca alegría. La magnitud de la crisis y la convicción de que la economía gobierna a la política dejaban a una España sumida en la desesperanza y con la sospecha de que una agenda oculta solventaba la ausencia de programa que se reprochaba al PP (quien, pese al espectacular resultado en escaños, sacó menos votos que Zapatero en 2008 y apenas subió en 570.000 votos). ¿Tiene fuerza la sociedad civil para oponerse a la dictadura de los mercados que renunciaron a la democracia en Grecia o Italia?

Un pasado bien leído bien podría servir de conjuro contra tanta barbarie. Más aún en una España en donde, durante demasiado tiempo, se hizo cierto que «nadie se acordó de ellas y ellos cuando se hubieron muerto». Y eso que eran, en cuanto a su compromiso social, los mejores, los que se atrevieron, los que sembraron las semillas de la dignidad, los que no nos sumen en la vergüenza de tener que afirmar «nadie hizo nada». Los que dejaron la huella de nuestra democracia. Cuando echó a andar el nuevo régimen, no miramos a la se-

⁴ G. Eley, *Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000*, Crítica, Barcelona, 2003.

gunda república, no miramos a la guerra civil, no miramos al franquismo, y sólo buscamos el reflejo narcisista, espejo frente a espejo, en una Transición enseñoreada de la que sólo se podía aprender resignación y disciplina (es de justicia hacer la salvedad de las mujeres, que muy pronto recordaron los grandes avances de que disfrutaron con el advenimiento de la segunda República y esfuerzos como los de Clara Campoamor).

Sería vano afirmar que la España actual no es diferente de la España del franquismo. En el franquismo, reflexiones como las que aquí se vierten nunca podrían ver la luz. El lugar donde estamos siempre es un punto de salida para las siguientes generaciones. La tarea hoy, pues, consiste en construir una crítica que brinde alternativas y mejore nuestras posibilidades de vida digna. Si cada generación, como reclamaba Ortega, tiene por delante la «tarea de su tiempo», mirar a las generaciones anteriores para darles las gracias o ajustar cuentas es cuestión de buen gusto. Por eso hay que insistir en que hubo una generación en España que no cumplió con su tarea. Fueron aquellos que, pudiendo, se olvidaron de rescatar la memoria de la lucha antifranquista. La generación a la que, por tiempo histórico, le correspondía reclamar esa mirada. Por supuesto que no todos los miembros de esa generación cometieron ese exceso. Fueron los perpetradores del “memoricidio” los que, por sus posiciones de poder, representaban al conjunto, los que prestaron el tono a la época. Ni en la prensa ni en el Gobierno, ni en las escuelas ni en la literatura, ni en las exposiciones ni en los homenajes, ni en el cine ni en la universidad, ni en los sindicatos ni en los partidos, ni en la calle ni en los parlamentos. Los años ochenta y noventa fueron años perdidos para agradecer a mucha gente las tareas prestadas a la democracia. Mientras, el rey era un héroe. (Cuando falleció en 2002 María de las Mercedes, la prensa le agradeció su «enorme contribución a la democracia». ¿En qué podía consistir tamaña contribución? Al parecer, logró que Juan de Borbón y el rey Juan Carlos volvieran a hablarse.) Miles de hombres y mujeres que lucharon por la democracia no merecieron ningún reconocimiento. Se les dejó ir muriendo y nunca nadie, como grita el indignado Miralles de la novela de Cercas, les recordó por haber regalado su tiempo, su bienestar y su vida para intentar que España dejara de ser diferente. Juan Luis Cebrián, quien como director de *El País* construyó el espejo donde se armó la versión oficial de la Transición, lo afirmó con un cuarto de siglo de retraso: «fuimos una generación que tuvo demasiado miedo».

Spain is different, pero por otras razones

Correspondió a los nietos arrancar al Parlamento español la condena del golpe de Estado de 1936. No porque antes no hubiera esfuerzos en esa dirección, sino porque rompieron el relato hegemónico sobre el paso del franquismo a la monarquía parlamentaria. Fue en noviembre de 2002, gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y

su reclamación de los cuerpos de las decenas de miles de asesinados por el franquismo y enterrados en cunetas y fosas comunes. Buena parte de ellos, asesinados cuando ya había terminado la guerra y el ejército republicano había sido derrotado. Aún así, la guerra de exterminio continuó, y entre 150.000 y 200.000 personas fueron asesinadas (114.266 son de los que pudo dar cuenta el sumario del juez Garzón). Los miembros de la Asociación y las decenas de familiares que empezaron a alzar la voz reclamando justicia resucitaron, con los restos de los muertos, la memoria olvidada de nuestra democracia. Era una señal de que el miedo estaba desapareciendo. Ese pavor que tantos españoles y españolas tenían metido en los huesos ha ido despegándose de la piel conforme se podía hablar de aquél genocidio. Cuando el 13 de marzo miles de españolas y españoles se convocaron para pedirle al Partido Popular la verdad sobre los atentados de Atocha que costaron la vida a 192 personas, el miedo ya estaba disipándose. Cuando el día siguiente el PP perdió las elecciones, no por culpa del atentado, sino por mentir sobre su autoría, terminó la Transición española. Porque más allá de lo que digan las modelizaciones de los politólogos, las dictaduras se terminan y comienzan las democracias cuando el miedo desaparece y se puede decir a los gobernantes: «estáis mintiendo». El miedo es el veneno más eficaz contra las democracias. Entra por la boca y por el oído y corrompe todos los órganos. El mejor antídoto, la memoria. Es bueno que lo sepan los padres. Aunque tengan que recordárselo los hijos. El 15 M es una continuación de esa pérdida del miedo de los nietos y bisnietos del franquismo.

Con la perspectiva del tiempo, la discusión generacional debe insistir en este ángulo más terrible vinculado a la “diferencia de España” y su tenaz persistencia histórica. Porque España no es realmente diferente en cuanto a los defectos de las democracias liberales. Basta echar una ojeada a la Italia de Berlusconi y su salida “tecnocrática” para ver que defectos quizá aún más graves se encuentran también en otros países. La diferencia no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos.⁵

La ciudadanía republicana europea está profundamente vinculada al antifascismo (el salto de consciencia y práctica a que obligó el fascismo y la organización política y social para su derrota). De hecho, lo más progresista de las democracias europeas está vinculado a estas posiciones. En la Europa occidental, la derecha se hizo fascista en los años treinta, lo que condujo, en una situación de crisis del capitalismo y de reestructuración política debido a la consolidación de la Unión Soviética, a la guerra. La lucha contra las

⁵ Italia, como el lugar más desestructurado democráticamente de la Europa occidental, posee dos “instituciones” que complican su gestión política y social: el Vaticano y la mafia. Nótese que en España, la Iglesia es igualmente un factor muy poderoso y las estructuras caciquiles tradicionales, sin haber construido un entramado tan denso como la mafia, mantiene en partes del país redes clientelares que tienen la misma lógica que las redes mafiosas del sur de Italia. Pero mientras que en el centro y el norte hay una Italia heredera de la oposición a Mussolini, el antifranquismo en España, salvo en el País Vasco y núcleos de Cataluña –sobre todo Barcelona– no tiene la misma densidad que en Italia. En la pelea entre estos dos ámbitos se juega Italia la calidad de su democracia.

potencias del Eje se articuló como lucha antifascista. Derrotado el fascismo y el nazismo, derivaciones de las democracias liberales de los años treinta, correspondía al antifascismo la reestructuración de la democracia europea. Pero la propia democracia liberal se recompuso urgentemente (ayudada por los acuerdos de Yalta y Potsdam y por el Plan Marshall) y reclamó para sí esa tarea, de manera que la discusión se trasladó interesadamente desde la confrontación “fascismo y antifascismo” al enfrentamiento “antifascismo y democracia liberal”. Si el primero fue el que sentó las bases de una superación dialéctica de los problemas a los que el capitalismo y la democracia liberal habían llevado a Europa, el segundo se encargó de recuperar los valores tradicionales de la democracia parlamentaria y del mercado capitalista. El resultado de esa pugna trajo como resultado la articulación de los Estados sociales, un paréntesis de la historia del capitalismo que situó a la socialdemocracia en lo que se llamó su “edad de oro”, apoyada por los partidos comunistas, sobre todo a través de los sindicatos de clase sobre los que tenían una gran influencia.

Más que un “referente vacío” –donde podría colgarse cualquier aspecto– el antifascismo en España se convirtió en un “referente invisible”. El antifascismo español fue aniquilado, encarcelado o silenciado. Buena parte de lo mejor rindió sus frutos en el extranjero, en Europa y en América Latina. Además, la continuidad generacional de ese referente sufrió los embates del alejamiento del mismo durante la Transición y, después, de la falta de puentes creados para recuperar esa tradición e ir enriqueciéndola. Es la ausencia en España de una ciudadanía crítica, comprometida con los valores cívicos –republicana, en el sentido clásico del término–, movilizada en defensa de sus derechos, usuaria de medios de comunicación críticos y objetivos, culta, lectora, cinéfila. Aspectos todos en donde debe encontrarse la “España diferente” que contrasta con el resto del entorno europeo con el que nos corresponde compararnos.

Esa ausencia de ciudadanía crítica se agravaba con el cierre generacional creado por la izquierda crítica en los últimos treinta años (quizá la única salvedad haya sido el País Vasco, lo que explica la vitalidad del entorno abertzale). El compromiso cívico de la izquierda republicana ha llevado a que las nuevas generaciones nunca hayan tratado a sus mayores como ellos hicieron antaño con los suyos (baste recordar cómo trató el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra al PSOE del exterior dirigido por Llopis, o al PSP de Tierno Galván), de manera que no es extraño ver a personas que mandaban hace treinta años seguir en posiciones de poder en todas las arenas sociales (la reactivación de la vieja guardia planteada en el PSOE tras los intentos de derribo de Zapatero son una señal en esa dirección). La conclusión es que España siempre ha tenido un déficit de ciudadanía crítica y, como agravamiento, es precisamente en ese ámbito donde menos recambio generacional se ha verificado en los últimos veinte años.

La Transición autorizada

El franquismo agonizaba al mismo tiempo que el fordismo, el modelo propio del capitalismo de posguerra, golpeado por la crisis de productividad, el agotamiento del impulso industrial basado en la industria automotriz, la subida de los precios del petróleo y la caída de la rentabilidad empresarial. La muerte de Franco vino a coincidir con los avances de una nueva forma de organizar el mundo. La crisis del capitalismo se presentó de forma aún más grave en países como España –y de manera similar en Portugal y Grecia– que tenía una gran dependencia energética, escasa capacidad de reacción de las autoridades, una elevada inflación acumulada (del 14% a finales de 1973), un alto déficit presupuestario y de la balanza comercial, y problemas estructurales en sectores hasta el momento de gran importancia.

Las transiciones a la democracia en el sur de Europa formaban parte de un nuevo diseño donde el capital tenía que ejercer necesariamente de manera transnacional, donde la flexibilidad iba a ser una característica exigida por el nuevo modelo económico y en el que la población debía colaborar con sacrificios para, en ausencia de un Estado intervencionista como el que actuó en los llamados dragones asiáticos, no quedar descolgados dentro del concierto internacional (esto es, el sistema debía gozar de legitimidad para, manteniendo sus tradicionales bajas productividades, encontrar su espacio en la economía internacionalizada). Ese nuevo diseño transnacional precisaba, en resumidas cuentas, la ampliación y flexibilización pacífica de las bases del mercado mundial.

La relevancia que se le concede a los factores institucionales, imbuidos de una supuesta racionalidad, pierden de vista la consideración de otros elementos más determinantes. Aguilar⁶ atribuye un papel, como si de un actor con voluntad unificada se tratara, a una supuesta *sociedad* que tomaba decisiones y a *un sector importante* de los demócratas, a quien les preocuparía la repetición del desastre republicano,⁷ sin explicar, obviamente, cómo expresaban esa opinión esos actores colectivos. Esto no se corresponde con la realidad. Entender, como afirmábamos al comienzo, la dialéctica *franquismo-antifranquismo* –en vez de la interesada *inmovilismo-reformismo*– ayudaría a no atribuir motivaciones cuasi democráticas –y en cualquier caso bienintencionadas– a determinadas decisiones políticas o constitucionales cuya razón de ser estaba en acuerdos de mera voluntad de poder y de control del proceso, algo meridiano en la formulación monárquica como garante de determinada continuación del régimen; en el bicameralismo, donde el Senado, con la importante presencia de Senadores reales, habría de funcionar como un cámara alta; o en la articulación electoral a la busca de mayorías estables conservadoras.

⁶ P. Aguilar, *Políticas de la memoria y memorias de la política*, Alianza, Madrid, 2008.

⁷ *Ibidem*, p. 232.

Los problemas que han acompañado a buena parte de las transiciones en América Latina han llevado a algunos autores a diferenciar las democracias según la *accountability* (rendición de cuentas), es decir, según la responsabilidad que puede reclamar y reclama activamente la ciudadanía a los gobernantes. Vista la debilidad a la que conducían los modelos cupulares de Transición, las vinculaciones existentes entre la inexistencia de rupturas vitales claras con las dictaduras y la escasa calidad de las democracias resultantes, Guillermo O'Donnell⁸ construyó un modelo que iba más allá de las definiciones formales de la democracia al incorporar unos factores que no quedaban recogidos en formulaciones clásicas. Según las definiciones “mínimas” de democracia,⁹ los requisitos democráticos eran (aunque más tarde incorporaría elementos de redistribución de la renta): la elección de las autoridades en elecciones libres a través del sufragio universal, con libertad de expresión, información y asociación, así como libertad para ser candidato.

O'Donnell, profundizando en otra dirección, añadía otros requisitos: (1) la idea de *universalismo*, es decir, imperio de la ley válido y obligatorio para todos; (2) la rigurosa *separación entre lo público y lo privado*, esto es, la no patrimonialización de lo público que lleva a su apropiación particular; (3) y, más allá de la *responsabilidad vertical* que se ejerce en las elecciones, una *responsabilidad horizontal* que se ejerce cotidianamente y está vinculada a una forma estricta de entender y hacer respetar a los gobernantes las reglas de juego. Estos rasgos permitirían diferenciar entre una *democracia plenamente consolidada*, encarnada de manera típica ideal en los modelos nórdico y anglosajón, y las que llama *democracias delegativas*, donde las características se definen por la negación de los rasgos principales de las anteriores: (1) *particularismo* frente a universalismo, con la consiguiente discrecionalidad del poder e incumplimiento real de las normas; (2) *confusión* de lo público y lo privado, y los correspondientes clientelismos, corrupción y patrimonialización; (3) y frente a la responsabilidad horizontal, *liderazgos caudillistas*, populismo paternalista e impunidad del poder.

A los elementos señalados por O'Donnell, y pensando en la construcción de democracias de “alta densidad”, podemos añadir cuatro requisitos en aras de medir la calidad resultante de la democracia española nacida de la Transición: (1) la existencia de una opinión pública informada e independiente, con acceso a medios de comunicación plurales; (2) el cumplimiento de las reglas de funcionamiento de mercados no oligopólicos (como ocurre, en la dirección inversa, con el sector financiero), la existencia eficaz de una supervisión estatal para evitar los fallos y problemas del mercado, y el apoyo estatal a las formas de economía social y mantenimiento del Estado del bienestar; (3) la primacía de la sociedad civil; (4) la existencia de una cultura cívica –republicana– que refleje un alto nivel de infor-

⁸ G. O'Donnell, «Otra Institucionalización», *La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad*, núm. 2, 1996, pp. 5-28.

⁹ R. Dahl, *La poliarquía: participación y oposición*, Tecnos, Madrid, 1990.

mación, disposición a la participación y censura de los comportamientos corruptos o ineficientes.

En el caso español, ninguno de esos criterios de calidad se cumple, pues a la corrupción y colusión entre lo público y lo privado se une el amplio consentimiento popular con esos comportamientos, relacionado a su vez con el escaso tejido asociativo español (apenas recientemente cuestionado por el 15 M). La alegría por el advenimiento de un régimen que acabó con la opresión de una dictadura no necesita pagar –como en una culpa cristiana– el precio de sacrificar la calidad del ordenamiento democrático. Recuperar los malos acuerdos del pasado se convierte en un requisito para alcanzar la calidad democrática ausente.

No es extraño que todas las luchas que ayudaron a derribar la dictadura (las luchas que obligaron a las élites franquistas a entender que con la muerte del dictador se terminaba su régimen) sigan siendo asignaturas pendientes de la democracia. La lucha por una vivienda digna, que sirvió para reubicar a decenas de miles de familia que vivían en los cinturones de miseria que bordeaban las grandes ciudades, se compadece mal con degeneración de la cultura del ladrillo que corrompió el grueso de la política de partidos y desembocó en la explosión de la burbuja inmobiliaria. La lucha por el empleo, que dibujó escenarios de dura lucha y curtió a la clase obrera en muchas zonas del país (Vitoria, los portuarios en Barcelona, Gijón, Sagunto, Bilbao, ocupaciones de fincas por el SOC en Andalucía), choca con un país con las tasas más altas de desempleo de la Unión Europea-15. La lucha contra la monarquía y la Iglesia, referencias de la República perdida con la derrota en la guerra, rebota contra la defensa a capa y espada de estas dos instituciones por el sector financiero y el sector mediático como referentes del mantenimiento del *statu quo* social, político y económico. La lucha de los penenes en la universidad tiene hoy el escenario pervertido de una universidad pública burocratizada, esclerotizada y con una pérdida constante de presencia social, más allá de ser una reserva de jóvenes sin perspectivas laborales. La lucha por la escuela pública tiene hoy el correlato de las escuelas concertadas donde no tienen cabida ni los sectores más humildes ni la inmigración. La exigencia de una mayor calidad de vida o de acceso a un ocio más inteligente, tuvo el caso de ver convertirse CNN+ en Gran Hermano 24 horas...

La Inmaculada Transición: un problema de relato

El camino escogido durante la Transición no fue el único posible (las variaciones siempre son múltiples) pero fue de los más cómodos. Aun con menos comodidad, tampoco podemos afirmar que todo podría haber sido necesaria y radicalmente distinto y mejor de haberse optado por la opción rupturista. Sólo desde una torpe teoría conspirativa –no desde una astuta teoría que sabe que cualquier poder conspira– puede asumirse que existió una pizarra donde se escribieron las pautas por donde iba a discurrir sin variaciones el finiquito del

franquismo. Tampoco se debe caer en la falacia naturalista de creer que lo que realmente sucede es siempre lo *mejor* que podría haber ocurrido; de la misma forma, tampoco aportan gran claridad contrafácticos (lo que pudiera haber ocurrido de variar alguno de los elementos de la realidad histórica sucedida) que se conviertan en credos morales y olviden que esos ejercicios intelectuales sólo tienen sentido como instrumentos heurísticos que iluminen rasgos del presente (lo que Boaventura de Sousa Santos¹⁰ llama «sociología de las ausencias y sociología de las emergencias»).

El comportamiento autoritario y la debilidad del “yo social” explican en la actualidad la desconfianza hacia lo colectivo, la apatía política y el descrédito hacia los partidos y los políticos

Es importante entender que el proceso abierto a la muerte del dictador Franco se desarrolló como lo hizo básicamente debido a cuatro razones: (1) a la voluntad política de los continuadores del franquismo (la UCD y AP, luego PP) y a la falta de coherencia ideológica del PSOE, que renunció a hacer valer la memoria arrebatada; (2) a las exigencias externas para que España se mantuviera en el bloque occidental de la guerra fría; (3) al exilio de los intelectuales, que, primero, asumieron el “pacto” de la Transición según el cual desaparecían del debate la segunda República, la guerra civil y el franquismo con todos sus atentados a los derechos humanos, y después, se convirtieron en acrílicos acompañantes de la gestión del PSOE de Felipe González; (4) la debilidad de la sociedad española (incluidas las fuerzas de la izquierda, representadas emblemáticamente en el PCE como principal partido que peleó contra el franquismo), con poca capacidad de respuesta después de cuatro décadas de férrea dictadura militar, y siempre sometida a la presión que mantuvieron los militares durante todo el proceso amenazando con una nueva intervención.

No tienen sentido, por tanto, afirmaciones entusiastas sobre la Transición: «un indudable motivo de orgullo colectivo», en palabras de Powell;¹¹ o que invaliden el análisis del presente por la loa del pasado: «a la Transición no se le puede achacar ningún déficit democrático» (Santos Juliá); o sostengan que «no hay un pecado original en nuestra Transición» (Tusell). Más bien al contrario, el proceso muestra: (1) la casi nula independencia de España respecto de los Estados Unidos y Alemania; (2) la escasa densidad de los mimbres democráticos con los que contaba el país después de una guerra civil entendida por los que la iniciaron como *cruzada* contra la anti España y, por tanto, como una guerra de exterminio; (3) la debilidad de la sociedad civil tras cuatro décadas de dura represión de toda disidencia;

¹⁰ B. de Sousa Santos, *El milenio huérfano, ensayos para una nueva cultura política*, Trotta, Madrid, 2005.

¹¹ C. Powell, *El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia*, Planeta, Barcelona, 1991.

(4) el miedo producido por el recuerdo de la guerra civil, agitado constantemente desde los medios de comunicación; (5) la cesión que la débil burguesía antifranquista acordó con la débil burguesía franquista; y (6) el centralismo democrático de las organizaciones obreras y de izquierda que anegaron la participación rupturista apenas empezaba a despuntar.

De ahí que, al igual que resulta imprescindible la comprensión de la Transición política para poder aprehender el sistema político español (algo obvio en lo que se refiere a la elaboración y significado de la Constitución de 1978 o al funcionamiento de nuestro Parlamento), la Transición no puede zanjarse sin dar cuenta de las cuatro décadas de dictadura militar bajo mandato del general victorioso de la guerra civil, el caudillo Francisco Franco. Pues son el comportamiento autoritario y la debilidad del “yo social” los que explican en la actualidad la desconfianza hacia lo colectivo, la apatía política y el descrédito hacia los partidos y los políticos, la revalorización del individualismo y la anomia, la explosión violenta del tribalismo (que está detrás, animado por el componente autoritario, del conflicto en el País Vasco), la animadversión hacia el extranjero o el diferente, el caudillismo, la corrupción de los políticos y de la Administración, la debilidad de la sociedad civil y, en definitiva, el desentendimiento ciudadano por la marcha de los asuntos colectivos, con la consiguiente apropiación individual de los espacios e instituciones públicas, factores que marcan en conjunto aún una divergencia de España respecto de la media europea occidental.

Las deficiencias de la democracia española (donde no es la menor el problema del nacionalismo, sea en su vertiente españolista, en la insolidaria catalana o en la enajenada y violenta de Euskadi) comparten una porción de la crítica a la democracia representativa que es afín al conjunto de los países europeos. Pero aporta su especificidad hasta extremos que no permiten complacencia. Como resumió Jesús Ibáñez,¹² el consenso siguió socializando a los españoles (y a la clase política que ha gobernado la democracia) en la cultura del autoritarismo, la dejación de responsabilidades y el miedo. En definitiva, el consenso significaba, como ocurrió al regresar el emblemático cuadro de Picasso, ponerle un cristal al Gernika, símbolo de la España antifranquista, para evitar que fuera destrozado por los enemigos del pluralismo. Era un símbolo de una «democracia a la que se miraba desde un escaparate», una democracia que nacía atenazada por el horror y que todavía tenía que esperar para poder manifestarse en plenitud

A vueltas con el cansancio

La crisis general que atraviesan las democracias occidentales, contaminadas por la gripe norteamericana a partir de 2007, afecta a todos sus ámbitos. Es crisis económica pero tam-

¹² J. Ibáñez, *A contracorriente*, Fundamentos, Madrid, 1997.

bién ecológica, inmobiliaria, financiera, alimentaria, política... Las promesas de humanizar el capitalismo pronto se vieron desahuciadas (como decenas de miles de familias de sus hogares). Lejos de acabarse con los paraísos fiscales, de moderar los sueldos de los grandes gestores, de controlar el mundo financiero o de establecer ayudas a los inocentes y castigo a los culpables, lo que vio Occidente fue el plan de desmantelamiento del Estado social más completo desde su instauración después de la derrota de los fascismos en la segunda guerra mundial. América Latina, que había tenido cierto éxito desconectándose de los centros financieros tóxicos occidentales, pudo seguir su rumbo intentando, con esfuerzos, encontrar su propio camino gracias a gobiernos de diferente grado y pericia dentro de la izquierda. Como una sorpresa que debiera mandar al paro a miles de torpes o perezosos empleados (todos los servicios de inteligencia, los centros de estudios sobre Oriente Medio y el Magreb, las cátedras especializadas en el mundo árabe, la CIA, el MOSAD, el CESID y demás centros de la llamada "inteligencia"), el mundo árabe, desde el Sahara hasta Irán, pasando por Túnez, Egipto, Yemen, Libia o Argelia, empezaron a abrir en el mundo árabe una democracia para la que, se había dicho hasta la saciedad, el pueblo no estaba preparado. Un pueblo en la calle que no había esperado ni a teóricos ni a políticos y que, para saber a dónde quería ir, empezó a mirar hacia atrás.

Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, también hay en España gente en la calle, si bien desmoralizada por la debilidad de una democracia que ya ni promete ni cumple. Gente que, quizá, pueda empezar a sospechar y mirar también hacia atrás. A diferencia de lo que ocurrió en el franquismo, donde los problemas no podían regatearse eligiendo a otro franquista en elecciones, los sistemas democráticos liberales permiten ese juego que, en cualquier caso, siempre generan al menos en el corto plazo, alguna esperanza de cambio con el recambio en el Palacio de la Moncloa. Pero, como indican invariablemente todas las encuestas, la desafección ciudadana crece. Se mantiene cierta legitimidad difusa (en las instituciones que validan la democracia, como el Parlamento y también la Monarquía) pero cae en picado la legitimidad concreta (la credibilidad de las personas que ocupan cargos institucionales, con la salvedad del rey Juan Carlos, bien cubierto desde hace décadas de cualquier problema). Pero hay inquietud. ¿Y si los recambios en el Gobierno no sirven para generar confianza y obediencia? ¿Y si el recambio en la institución monárquica supusiera un debilitamiento radical de la misma? No es extraño que el Príncipe Felipe pidiera una segunda Transición en 2010. Los momentos de crisis, como venimos diciendo, son siempre un buen momento para sacar de procesión a la *Transición* (así, con mayúsculas).

Si las víctimas del empobrecimiento de nuestra democracia empiezan a sospechar, si transforman el dolor en conocimiento, el conocimiento en voluntad de cambio, la voluntad de cambio en poder para cambiar, y ese poder decide ponerse en marcha, harían falta entonces referentes. Llegaría el momento de construir "una pedagogía democrática" no a

partir de una Transición opaca sino de una Transición transparente.¹³ Releer de manera diferente lo que ocurrió, darle voz a los silencios, quitarle argumentos a las interpretaciones forzadas, ¡No la toques más! ¡Así es la Transición! Como la rosa de Juan Ramón Jiménez, «No removamos el pasado». «¿A quién le interesa el pasado?», «Nada bueno puede traer regresar a las viejas heridas». El ayer...

Pero, si en verdad es pasado y sólo pasado ¿no daría lo mismo removerlo? ¿Por qué tanto revuelo ante la recuperación de la memoria perdida y la reconstrucción de la Transición? Se trata, muy al contrario de lo que plantean los que quieren vencer al pasado con el olvido, de hacer de la historia *magistra vitae* (Koselleck). Encontrar ayer argumentos y fuerza para la rabia retenida de hoy. En un momento en el que el contrato social está siendo desafiado, en el momento histórico en el que el Estado social y democrático de derecho está puesto en cuestión, la presencia social de la memoria antifascista de la Transición serviría para ver aquellas luchas como anticipación de la rabia actual. El ejemplo de aquellas personas que se lo jugaron todo por defender la democracia sería el mejor ejemplo para que la sociedad volviera a jugárselo todo por defender el carácter social de la Constitución. Y el movimiento que ha venido a romper la cómoda tranquilidad de la democracia española, el 15 M, en vez de recurrir a un francés miembro de la Resistencia –siempre mejor que nada–, buscaría en su propia historia ejemplos de rebeldía.

Así, sintiendo en su devenir histórico la huella de sus mayores, podría, con mayor facilidad, explicarse a sí mismo que no está escrito en las estrellas que tenga que aceptar resignadamente ningún fatalismo –venga de Europa, de los mercados o de los burócratas–, que le obligue a renunciar a la defensa de la democracia y a su profundización.

¹³ G. Morán, *El precio de la transición*, Planeta, Barcelona, 1991.

Democracia, *ma non troppo*: los mecanismos de participación ciudadana en la Constitución española

Este artículo analiza los instrumentos de participación ciudadana en la res publica diseñados por la Constitución española. La apuesta del constituyente de 1978 por un modelo de democracia representativa, sumado a un sistema electoral claramente dirigido al bipartidismo, cerró las puertas a la posibilidad de mecanismos de democracia directa o participativa. En este sentido, la regulación constitucional de figuras como el referéndum (consultivo) o la iniciativa legislativa popular trajo como consecuencia la consolidación de una democracia de baja intensidad que ha evitado conformar una ciudadanía comprometida con lo público y que, en consecuencia, se muestra incapaz de atajar la deriva antidemocrática en que se halla sumido el sistema político español.

En el cartel de una de las manifestaciones convocadas por el que se ha venido a denominar “movimiento del 15 M” podía leerse lo siguiente: «art. 135: la soberanía reside en los mercados». Mediante esta referencia al artículo de la Constitución española reformado el pasado mes de agosto, se denunciaba no solamente esa reforma exprés perpetrada por un Parlamento con fecha de caducidad, sino el proceso de deriva antidemocrática en el que nos encontramos sumidos desde hace ya varios años. Un proceso cuya plena comprensión exige remontarse al análisis de la propia Constitución, ya que en ella se tejen los mimbres que han conducido a la actual situación. No es nueva, pues, esta deriva antidemocrática de la que la reciente reforma constitucional exprés es tan solo un paso más; ni tampoco lo es, por cierto, la crítica y oposición a aquella. Hace ya tiempo que desde sectores académicos, sociales y políticos se viene denunciando esta democracia de baja intensidad que diseñaron los constituyentes de 1978. La crisis económica, que ha favorecido tanto recortes sociales como retrocesos democráticos, ha venido a amplificar esas voces críticas que durante demasiado tiempo predicaron en el desierto.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III

La Transición: demócratas de la noche a la mañana

El relato “oficial” sobre la transición a la democracia tras la dictadura franquista y el proceso de elaboración de la Constitución de 1978 nos habla de un consenso generado –ya desde los años cincuenta, es decir, en plena dictadura– entre las élites de la oposición democrática y los sectores más aperturistas del régimen. Ambas partes fueron capaces de apartar sus históricas reivindicaciones y firmar un “pacto de olvido” que permitiera a la sociedad española no repetir su trágico pasado y avanzar hacia un horizonte plenamente democrático. En este pacto, refrendado después por todo el proceso de reforma política que condujo a la aprobación de la Constitución, estaría el origen y fundamento del sistema actual.¹ Un sistema que, según sus apologetas, ha conducido a España a las mayores dosis de desarrollo democrático de su historia. De ahí, por tanto, que cualquier cuestionamiento del mismo sea demonizado y visto como un intento de abrir la caja de los truenos que tanto ha costado cerrar en este país.²

Excede a estas líneas el análisis de esta interpretación del proceso constituyente.³ Se trae a colación únicamente porque sus términos permiten entender mejor el producto final. Como en todo pacto, las pretensiones de sus participantes, sus “líneas rojas” y su posición de fuerza en la negociación determinaron su resultado. Es obvio que de un pacto suscrito por los propios franquistas –por muy aperturistas que dijeran ser– no iba a surgir un texto avanzado en términos democráticos. Máxime cuando, además, ellos mismos seguían conservando buena parte de los resortes del poder, lo que les permitió modelar a su antojo el *tempo* y los resultados del proceso.⁴ Quienes el 20 de noviembre se acostaron franquistas, a la mañana siguiente se levantaron demócratas de toda la vida, dispuestos a trabajar por el cambio en España. Ahora bien, sería ingenuo pensar que el franquismo y sus prácticas iban a pasar a la historia de la noche a la mañana. Más bien al contrario, determinaron el texto constitucional.

¹ Véanse las cláusulas y el desarrollo de este pacto de “echar al olvido” en que consistió la Transición en S. Juliá, *Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX*, RBA, Barcelona, 2010, pp. 306-310.

² Lo que esta interpretación de la Transición ignora y desprecia es que, con sus luces y sus sombras, no se hubiera desembocado en un régimen constitucional de no haber sido por la presión de la calle y la acción de partidos de izquierda, sindicatos y grupos sociales de diversa índole. Una crítica a esta interpretación se encuentra en A. Jerez, «Transición», en R. Escudero (coord.), *Diccionario de memoria histórica. Conceptos contra el olvido*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011, pp. 51-57.

³ Que presenta una visión idílica de la Transición, entendida como un proceso pacífico y sin violencia de reforma “de la ley a la ley”. Lamentablemente, las cifras reales muestran que el ambiente en que se desarrolló no fue tan pacífico como sus defensores pretenden hacer creer. Desde octubre de 1975 hasta diciembre de 1983 fueron 188 las personas muertas como consecuencia de la violencia de motivación política. Si a esta cifra le sumamos las víctimas del terrorismo, tanto de ETA como de los grupos de extrema derecha y parapoliciales conectados con el Estado, el número de personas fallecidas en ese periodo se eleva a 591. Véanse las cifras en M. Sánchez Soler, *La Transición sangrienta. Una historia violenta del período democrático en España (1975-1983)*, Península, Barcelona, 2010, p. 353.

⁴ Suele utilizarse la expresión de «partido militar» para hacer referencia a esa conjunción de intereses políticos, sociales y económicos bajo la que se agruparon estos sectores provenientes del franquismo. Fue acuñada por J. I. Lacasta, *Cultura y gramática del Leviatán portugués*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1988, pp. 143-160.

En lo que hace al objeto de estas páginas, su presión resultó decisiva para que se configurara un modelo de democracia, por un lado, basada en los partidos políticos, a los que constitucionalmente se califica como «instrumento fundamental para la participación política» (art. 6); y por otro, prácticamente ajena a los instrumentos de democracia directa o –dicho en terminología más moderna– participativa. En este sentido, difícilmente puede calificarse de modélica una Transición cuyos resultados distan mucho de ser ejemplares en lo que a profundización democrática se refiere.⁵

El reino del bipartidismo

La Constitución canaliza la participación de la ciudadanía a través de los partidos políticos, los cuales se convierten así en el centro de la vida política. Así se quiso en el pacto de la Transición. Pero, con una particularidad añadida: se configuró un sistema electoral dirigido a consolidar un bipartidismo que favoreciera la estabilidad y la gobernabilidad del sistema, la cual podría verse en peligro si concurrían muchas fuerzas políticas en el Parlamento. Así, mientras que formalmente se introdujo en el texto constitucional el criterio de representación proporcional (art. 68.3), *de facto* se configuraba un sistema mayoritario, que garantizara la alternancia en el poder de dos partidos políticos: uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda. El paso del tiempo ha demostrado que se cumplió con creces tal objetivo.⁶

Varios fueron los instrumentos mediante los que se dio carta de naturaleza al bipartidismo. La Constitución configuró un Congreso de los Diputados pequeño, de entre 300 y 400 miembros (actualmente, son 350), con la provincia como circunscripción electoral, garantizando un mínimo de diputados por cada una, con independencia de su población (art. 68). Ello supone que las provincias menos pobladas, con un voto más rural que urbano y donde tradicionalmente no había mucho voto para la izquierda, quedan sobrerrepresentadas en el Parlamento, al contar con más escaños de los que les correspondería en comparación con las provincias más pobladas.

Esta previsión constitucional se completa con otros dos instrumentos legales que dificultan la entrada en el Parlamento de las fuerzas políticas minoritarias que tengan distribui-

⁵ Así como tampoco resulta muy avanzada en otros aspectos como, por ejemplo, la jefatura del Estado, el modelo territorial o la satisfacción de derechos sociales. Un análisis detallado puede verse en el libro colectivo editado por J. R. Capella, *Las sombras del sistema constitucional español*, Trotta, Madrid, 2003.

⁶ Este pacto tenía, asimismo, un objetivo inmediato: evitar la mayoría en las primeras elecciones democráticas, las de junio de 1977, del Partido Comunista de España, quien había protagonizado la resistencia antifranquista. De esto se enorgullecen públicamente y sin rubor alguno los que crearon las normas que regularon esas elecciones (el Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales): Miguel Herrero de Miñón y Leopoldo Calvo-Sotelo, quien llegó a ser presidente del Gobierno.

dos sus apoyos por todo el Estado. En primer lugar, la regla del 3%, según la cual en la atribución de escaños quedan excluidas aquellas listas electorales que no hayan obtenido ese porcentaje mínimo de los votos emitidos en la circunscripción. En segundo término, la «fórmula d'Hondt», que termina por corregir a la baja y castigar el fraccionamiento de la representación parlamentaria. El resultado es bien conocido: ha conducido a una sobrerrepresentación de los dos grandes partidos y ha favorecido a los partidos de base provincial o autonómica que se presentan tan solo en las circunscripciones donde tienen un apoyo consolidado. Se ha preferido así la formación de mayorías parlamentarias estables (como ha sucedido a lo largo de la reciente historia constitucional) a un sistema en el que se reflejen de una manera más fiel las preferencias del electorado.

La preferencia constitucional por las mayorías absolutas o reforzadas favorece el valor del afamado consenso; concepto bajo el que los dos partidos dominadores de la política nacional consolidan el espacio de centralidad política desde el que acordar "cuestiones de Estado"

El bipartidismo deja sentir sus efectos no sólo en la conformación del Parlamento, sino a lo largo y ancho de toda la escena política. Para empezar, en las propias campañas electorales, donde los partidos mayoritarios no dudan en apelar al "voto útil" como argumento político mediante el que atraer para sí a los hipotéticos votantes de esas opciones minoritarias afectadas por este sistema. Además, la Constitución sujeta la regulación de las materias consideradas más importantes a la figura de la ley orgánica, entre las que se encuentra el régimen electoral general, cuya aprobación requiere la mayoría absoluta del Congreso (art. 81). Ello hace que cuando existe esta mayoría por parte de uno de los dos partidos hegemónicos, la vida parlamentaria languidece de puro aburrimiento; y cuando no es así, ambos partidos no dudan en hacer frente común frente a las voces de los partidos minoritarios que reclaman cambiar este fraudulento sistema electoral.

Por si fuera poco, el nombramiento de cargos institucionales también suele residirse en el Parlamento y exigir una notable mayoría para acceder a los mismos; todo ello, en coherencia con esa filosofía del bipartidismo instalada en la vida política y que se traslada, entonces, a tales instituciones. Por citar tan solo un par de ejemplos, se exige una mayoría de tres quintos del Congreso para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces (art. 122.3), así como para los magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Congreso y el Senado, que son ocho de un total de 12 (art. 159.1). La selección de los miembros de este Tribunal, «supremo intérprete de la Constitución», ha dado lugar –sobre todo, en los últimos tiempos– a un espectáculo de vetos, pactos y consensos entre los dos partidos mayoritarios, quienes pugnan sin disimulo

por sentar en el Tribunal al mayor número posible de magistrados afines. Este lamentable espectáculo en nada ha contribuido ni a la labor ni al prestigio del Tribunal. Es habitual ver cómo los medios de comunicación clasifican a sus magistrados en “conservadores” y “progresistas” en función de cuál sea el partido, PP o PSOE, que les haya propuesto; y cómo suelen acertar a la hora de predecir el voto de cada uno de ellos en las cuestiones sometidas a su consideración. En realidad, es fácil hacerlo: en la mayoría de las ocasiones, su voto suele coincidir con la posición del partido que les propuso para el cargo.

La preferencia constitucional por las mayorías absolutas o reforzadas favorece, por tanto, el valor del afamado consenso; concepto bajo el que los dos partidos dominadores de la política nacional consolidan ese espacio de centralidad política desde el que acordar las decisiones relevantes, que pasan así a denominarse “cuestiones de Estado”. Cuáles sean estas se definen por los propios partidos, que sacan del juego político y parlamentario todo aquello que les interesa blindar. Así ha sucedido en lo relativo a cuestiones de política económica y fiscal, con respecto a la política internacional, o incluso en la última reforma constitucional; aspectos en los que ambos partidos suelen coincidir. La exigencia de consenso puede ser vista como una ruptura de las reglas del juego democrático y un profundo límite al dogma de la soberanía popular. Además de ignorar el sentir y la opinión de aquella parte de la ciudadanía que no comparte la política de los grandes partidos, a la que desplaza a la irrelevancia más absoluta, rompe el principio de equivalencia de las opciones políticas, según el cual todas ellas han de tener la misma oportunidad de realización; algo que sólo se asegura mediante la exigencia de mayoría simple.⁷

La participación ciudadana, limitada y dentro de un orden

El modelo constitucional de democracia representativa asfixia cualquier posibilidad de avanzar hacia mecanismos de democracia directa o participativa. Los escasos indicios que de esta última aparecen en el texto constitucional están contruidos de forma que no puedan en ningún momento “competir” con la actividad de los representantes de la ciudadanía. Se aprecia esta subordinación en los dos instrumentos de democracia directa recogidos en la Constitución: el referéndum y la iniciativa legislativa popular. Analicémoslos por separado.

La Constitución opta por una regulación restrictiva de la figura del referéndum, entendido tradicionalmente como el instrumento que permite al pueblo ejercer directamente la soberanía en aquellos asuntos en los que sea consultado. También es común distinguir entre referéndum obligatorio y consultivo, en función de si los resultados de la consulta son vinculantes o no para los poderes públicos. En el texto constitucional sólo se prevé el refe-

⁷ Véase I. de Otto, *Derecho constitucional. Sistema de fuentes*, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 59-60.

réndum vinculante para la reforma del “núcleo duro” de la Constitución –más adelante se volverá sobre esta cuestión–, la aprobación y reforma de los Estatutos de autonomía de las regiones históricas (Euskadi, Catalunya y Galicia) más Andalucía, así como para una hipotética incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Hasta aquí llega la obligatoriedad de consultar al pueblo.

No se recogió la figura del referéndum derogatorio, presente no sólo en la Constitución republicana de 1931 sino también en las constituciones de nuestro entorno. Mediante este procedimiento la ciudadanía puede solicitar pronunciarse sobre una ley aprobada en el Parlamento. En concreto, el art. 66 del texto de 1931 requería que lo solicitara el 15% del censo electoral y excluía de su ámbito de aplicación la propia Constitución y sus leyes complementarias, así como las leyes tributarias, las que ratificaran tratados internacionales o las que aprobaran estatutos regionales de autonomía. Posteriormente, la Constitución italiana de 1948 recogió este mecanismo que permite a la ciudadanía derogar leyes aprobadas en el Parlamento.

Además de ser un instrumento participativo, el referéndum funciona también como medio de control de la ciudadanía sobre sus representantes, al permitir enmendarles la plana y recordarles que durante su mandato no gozan de un cheque en blanco para decidir a su antojo. No obstante, fue visto con enorme recelo y desconfianza por gran parte de los constituyentes de 1978.⁸ Para ellos, todo lo que se saliera de los estrechos márgenes de la democracia de partidos quedaba bajo sospecha. En el debate parlamentario incluso llegó a compararse el referéndum con los plebiscitos que utilizan las dictaduras cuando buscan formas de legitimación. Respondía esta errónea pero interesada confusión al objetivo logrado de cerrar el paso al referéndum vinculante.

En este contexto, el constituyente tuvo que transigir con una referencia más al referéndum; eso sí, bajo su modalidad consultiva. El art. 92 de la Constitución señala que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Sólo el presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, puede llamar a la ciudadanía mediante este instrumento. Nótese bien las limitaciones que presenta este artículo. En primer lugar, se habla de «decisiones políticas de especial trascendencia», sin definir cuáles sean estas. Corresponde, por tanto, al presidente del Gobierno interpretar el contenido de esta cláusula constitucional, lo cual hará, naturalmente, de acuerdo con sus intereses políticos. En segundo término, se dice que estas decisiones “podrán” ser sometidas a consulta, de manera que vuelve a ser facultad del presidente someterlas o no a la ciudadanía. En este punto, la regulación constitucional

⁸ En particular, por los integrantes de la ponencia constitucional, encargados de redactar el texto que después pasaría a ser discutido en el Parlamento. Véase, por ejemplo, G. Peces-Barba, *La elaboración de la Constitución de 1978*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 187.

destila un tono presidencialista que en nada se corresponde con su proclamado carácter parlamentario.⁹

Desde la aprobación de la Constitución se han celebrado tan solo dos referendos consultivos. Uno, en marzo de 1986, relativo a la permanencia de España en la OTAN, con una participación cercana al 60 % del electorado. Otro, en febrero de 2005, sobre el tratado por el que se establecía una constitución para Europa, cuya participación descendió hasta el 42%. No es difícil explicar las causas de tan escasa participación: si la decisión de la ciudadanía no vincula a los gobernantes más de lo que lo haría una encuesta o un sondeo de opinión, no puede esperarse mayor implicación en este tipo de procesos “participativos”.¹⁰

La Constitución es hija de la filosofía política liberal que entiende la sociedad civil como un espacio de privacidad e intimidad, como un ámbito libre de interferencias ajenas y, por supuesto, del Estado

El segundo instrumento de democracia directa que recoge la Constitución es la iniciativa legislativa popular. Este instrumento se contenía en la Constitución de la segunda república (art. 66), que lo heredó de las constituciones de entreguerras de Weimar y Austria. Al igual que en el caso del referéndum, su virtualidad radica en que combina una dimensión participativa con otra de control a los parlamentarios. Mientras que faculta a la ciudadanía para iniciar directamente el procedimiento de elaboración de leyes, posibilita también llamar la atención sobre la inacción de sus representantes. Permite, en definitiva, que el procedimiento legislativo no quede enteramente en las manos de estos últimos.

No obstante, una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica. La regulación que la Constitución actual hace de esta figura la convierte en un elemento meramente decorativo. No cabe la iniciativa en materias propias de ley orgánica (que son las que regulan las instituciones básicas del Estado), ni respecto a leyes tributarias o de carácter internacional, ni tampoco en lo relativo a la prerrogativa de gracia (es decir, el indulto). Además, el procedimiento sólo comenzará cuando se hayan reunido 500.000 cifras acreditadas (art. 87.3). Una cifra exagerada –sobre todo, si se compara con las 50.000 que se exigen en países como

⁹ El Tribunal Constitucional ha reafirmado esta estrecha interpretación del mecanismo del referéndum, al declarar inconstitucional en el año 2008 la ley del Parlamento vasco por la que se planteaba una consulta a la ciudadanía vasca sobre el llamado “plan Ibarretxe”, es decir, la apertura de un proceso de negociación política una vez ETA dejara las armas. El Tribunal juzgó contraria a la Constitución tal ley, pues contenía una consulta no convocada por el presidente del Gobierno. Con tal decisión el Tribunal cerró la puerta a que se pudieran formular otro tipo de referendos diferentes de los que reconoce la Constitución en su art. 92.

¹⁰ En ambos casos el resultado fue favorable a las tesis sostenidas por el Gobierno de turno. Aunque, en el primero de ellos, a duras penas.

Italia— y que da idea del objetivo real de los constituyentes: disuadir de su uso. Por otro lado, la Constitución no establece cautela alguna sobre el procedimiento a que dará lugar la iniciativa popular una vez haya traspasado las puertas del Congreso. Así, queda a voluntad de los parlamentarios decidir si la toman o no en consideración. Incluso pueden, en caso de ser aceptada, cambiar los términos de la misma, de manera que acabe aprobándose algo bien diferente u opuesto a lo que el proponente de la iniciativa postulaba.

Esta carrera de obstáculos explica el poco éxito de la fórmula. Hasta la fecha no superan la docena las iniciativas que se han presentado y tramitado en el Parlamento, siendo tan solo una la que finalizó con éxito. Fue, precisamente, una reforma de la ley de propiedad horizontal realizada en 1999 a los efectos de agilizar los procesos de desahucio; algo a lo que tan acostumbrados estamos últimamente.¹¹

Como puede observarse, la Constitución de 1978 es reacia a la inclusión de instrumentos participativos que vayan más allá de los estrechos márgenes de la democracia representativa. El texto constitucional es coherente con la filosofía que lo inspiró, tendente a consolidar el bipartidismo y la gobernabilidad. Se prefirió la representación a la participación, los partidos a los movimientos sociales y agrupaciones ciudadanas, la estabilidad al compromiso cívico activo. En definitiva, una democracia incompleta o de baja intensidad.¹²

¿Hay vida más allá del Parlamento?

Por extraño que parezca, en términos de participación política la respuesta es negativa. Además de la recuperación del jurado popular (art. 125), a través del cual los ciudadanos participan en la Administración de Justicia, y de una genérica referencia a la promoción de la participación de los interesados en la Seguridad Social y «en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de la vida o al bienestar general» (art. 129.1), no hay más alusiones en el texto constitucional a la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Tampoco existe en la Constitución ninguna previsión relativa a la configuración de un tejido asociativo fuerte, desde el que articularse e incidir en las cuestiones públicas que afectan a la colectividad. Como en tantos puntos, es hija de la filosofía política liberal que entiende de la sociedad civil como un espacio de privacidad e intimidad, como un ámbito libre de

¹¹ Sin embargo, no conviene desdeñar las ventajas y potencialidades de la iniciativa legislativa popular. A raíz de una de ellas, avalada por 180.000 ciudadanos, el Parlament catalán aprobó la ley autonómica de julio de 2010 por la que se prohíben las corridas de toros en Catalunya.

¹² Tomo la expresión de G. Pisarello, «Constitución y gobernabilidad: razones de una democracia de baja intensidad», en J. R. Capella, *op. cit.*, pp.129-149.

interferencias ajenas y, por supuesto, del Estado. Así se aprecia, por ejemplo, en los artículos que regulan los derechos fundamentales –fuertemente protegidos– destinados a garantizar ese ámbito de libertad y autonomía propio del sujeto. Tal rotundidad a la hora de proteger derechos liberales contrasta –aunque no sorprende– con la ausencia de mecanismos constitucionales que posibiliten participar en la vida pública. Ni tan siquiera a los sindicatos, a los que formalmente se les reconoce estatus constitucional (art. 7), pero sin que después se les dote de instrumentos reales para incidir en la economía, más allá de los mecanismos de huelga y negociación colectiva, hoy en franca retirada. El texto constitucional tan solo dice que los poderes públicos “promoverán” las formas de participación en la empresa (art. 129.2), sin que de ahí pueda derivar ninguna obligación real y concreta al respecto.

Hoy, gran parte de las decisiones políticas se adoptan en los centros de poder mundial: los mercados y sus instancias reguladoras. Parlamentos y gobiernos no hacen sino convalidar sus órdenes

Aun sin cobertura constitucional, algunas experiencias participativas están teniendo lugar. Por ejemplo, los presupuestos participativos implantados en el ámbito local, al calor del ejemplo de ciudades como Porto Alegre. En tales procesos, la participación ciudadana ha sido elevada, lo que serviría para probar la idea de que la ciudadanía participa cuando se siente escuchada, lo que sucede cuando su decisión vincula a los poderes públicos. No obstante, la generalización de tales experiencias –que hasta la fecha son la excepción y no la regla– requiere la paralela construcción de un espacio asociativo fuerte, de una red de entidades que permitan dar voz y voto a los ciudadanos, para que sean ellos mismos quienes diseñen y controlen las políticas que les afectan en su día a día. Lamentablemente, la Constitución de 1978, lastrada por el rechazo que a sus creadores generaban los mecanismos de democracia directa, no ofrece un camino por el que avanzar en esa dirección.

En suma, la opción del constituyente de 1978 por el bipartidismo y la gobernabilidad deja poco espacio para la participación ciudadana directa y vinculante en los asuntos públicos. Es un claro exponente de una democracia circunscrita a los procesos electorales, limitando la actividad política de la ciudadanía al momento de acudir a las urnas y elegir sus representantes. Sin dejar de reconocer la importancia del ejercicio del derecho al sufragio, se trata claramente de un aspecto insuficiente. Dos son las razones en las que basar esta afirmación. En primer lugar, porque desdeña la generación de una ciudadanía participativa y comprometida con la *res publica*. Si no se configuran espacios para que las personas participen en los procesos de toma de decisiones, difícilmente podrá exigírseles después que sean virtuosos ciudadanos comprometidos. En segundo lugar, porque nos deja inermes ante la creciente y expansiva proliferación de espacios de poder incontrolados, donde imperan

los intereses y la voluntad de sujetos individuales y colectivos ajenos a cualquier mecanismo de fiscalización democrática.

Esta última razón se antoja especialmente relevante en los tiempos que corren. Si los ochenta y noventa fueron los años de las privatizaciones y recortes en derechos sociales, el comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por sumar a todo lo anterior la privatización del propio proceso de toma de decisiones públicas. Hoy, gran parte de las decisiones políticas no se adoptan en los parlamentos estatales, sede de la soberanía popular según la teoría clásica, sino en los centros de poder mundial: los mercados y sus instancias reguladoras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Parlamentos y gobiernos no hacen sino convalidar sus órdenes, sean estas recortes en gasto social, reducción de salarios o congelación de pensiones, como está sucediendo en el caso español.

Como colofón, una reforma constitucional exprés

La Constitución de 1978 no ofrece ninguna vía por la que escapar –o, por lo menos, mediante la que mantener la dignidad– ante esta deriva antidemocrática. Buena prueba de ello es la reforma constitucional del art. 135, llevada a cabo de forma exprés en agosto de 2011 por un Parlamento con fecha de caducidad y, tanto, sin legitimidad política para una medida de tal calado.¹³ El procedimiento seguido por los partidos proponentes de la reforma, PSOE y PP, ha vuelto a demostrar la alergia que les produce el referéndum, es decir, la consulta directa a la ciudadanía. Para ello no han dudado en perpetrar un auténtico fraude constitucional, consistente en introducir en la parte del texto cuya reforma no requiere referéndum una materia que es propia del “núcleo duro” de la Constitución y que, por tanto, exigiría tal ratificación ciudadana.¹⁴ Los principios de estabilidad presupuestaria y limitación del gasto público consagrados en la nueva redacción del art. 135 afectan directamente a la realización del Estado social, cuya proclamación figura en el frontispicio de la Constitución; en concreto, en su art. 1.1. Desvincular ambas cuestiones implica bien un grave desconocimiento sobre cómo funcionan los mecanismos redistributivos de los que disponen los poderes públicos, bien un intento de engañar a la ciudadanía, haciéndola creer que las reglas que fijan el techo de gasto o el límite del endeudamiento del Estado no guardan relación con el desarrollo de políticas sociales relativas a la salud, la educación, la sanidad o la dependencia.

¹³ Una crítica de la reforma, tanto por razones formales como materiales, puede encontrarse en R. Escudero, «La reforma constitucional y los juristas del reino», *Cuadernos de la Fundación Primero de Mayo*, nº 25, septiembre, 2011, pp. 10-13.

¹⁴ La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte a su título preliminar, a los derechos fundamentales o a la monarquía requiere la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de las dos cámaras, su inmediata disolución, la ratificación de la reforma por las nuevas cámaras, su aprobación por dos tercios de las dos cámaras y la ratificación de la ciudadanía mediante referéndum (art. 168). Para la reforma del resto del texto constitucional basta con la aprobación por las Cortes. Sólo será sometida a referéndum si lo solicitan el diez por ciento de diputados o de senadores (art. 167). En este caso no fue posible alcanzar ese mínimo exigido constitucionalmente.

Se salvó así tener que acudir al expediente del referéndum, tal y como demandaron partidos minoritarios, sindicatos mayoritarios y diferentes plataformas ciudadanas. El presidente del Gobierno también hizo oídos sordos ante la demanda de convocatoria del referéndum consultivo, solicitado aunque solo fuera para darle al pueblo la posibilidad de expresarse en un asunto tan trascendental como para reformar la Constitución en una semana y por el trámite de urgencia. También esta demanda cayó en saco roto, avanzándose así un paso más en esa sustitución de la soberanía popular por la “soberanía de los mercados” a la que se hacía referencia al comienzo de estas líneas. Por las sombras de este camino transitamos sin que se observe ninguna luz al final del mismo.

Colección

economía & ecologismo crítica & social

En coedición con Los Libros de la Catarata



Desde una vocación transdisciplinar, las obras de la colección **Economía Crítica & Ecologismo Social** abordan los principales problemas económicos, sociales y ecológicos de nuestro tiempo.

Para comprender la crisis actual

El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas

Autor: Frédéric Lordon
ISBN: 978-84-8319-443-0
Páginas: 191
Precio: 18,00 €



Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar

Autor: Andrew Glyn
ISBN: 978-84-8319-493-5
Páginas: 302
Precio: 20,00 €

La gran recesión y el capitalismo del siglo XXI

Autores: José A. Tapia y Rolando Astarita
ISBN: 978-84-8319-611-3
Páginas: 280
Precio: 18,00€



Novedad

**El trabajo de cuidados.
Historia, teoría y políticas.**
Cristina Carrasco, Cristina Borderías
y Teresa Torns (eds.)

Títulos a la venta en:
Librería on-line: www.libreria.fuhem.es

Compra segura y fácil con su tarjeta de crédito
Gastos de envío gratuitos para España

Para más información o hacer su pedido:
Teléfono: 91 431 03 46
Correo electrónico: publicaciones@fuhem.es

La democracia delegada: una reflexión desde el mundo del trabajo

Vivimos una época en la que la democracia –no su calidad que hace tiempo que está en retroceso, sino el mismo concepto– apenas tiene defensores activos en el plano institucional. El deterioro es tan grande que ya estamos instalados en un fenómeno nuevo. La mano invisible de los mercados, que siempre ha manejado los hilos del poder, se constituye ahora en el poder político mismo en la medida en que los decididores¹ sientan a sus representantes genuinos en las poltronas de gobierno. Saben que sus demandas serán atendidas sin rechistar mientras los Estados, las naciones sin tal categoría y los gobernados asistimos perplejos a la ceremonia salvadora de la tecnocracia que primero asfixia, luego ofrece inmolaciones necesarias y, por último, impone una legitimación parlamentaria; y aquí no pasa nada, bueno sí pasa la factura que la pagará, como siempre, el pueblo.

Mantengo la tesis de que este proceso no puede entenderse mirando únicamente al bienio 2007-2008. La crisis es más que financiera, es una crisis larvada en el tiempo. Lo financiero no deja de ser una manifestación sangrante para la mayoría de la población y humillante para los más indefensos. Ahora el sistema quisiera expulsar de su seno a quien antes privó de su dignidad por la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o de la educación, en suma, de los derechos fundamentales. Eso sí, todo ello –decían y siguen diciendo– amparados por leyes de rango constitucional. Lo que ahora vivimos y padecemos no lo dimensionaremos correctamente si no debatimos con todos y entre todos lo que viene pasando desde hace tiempo en muchas latitudes.

Fermín Paz Lamigueiro es secretario general de la Asociación Internacional Derecho a la Energía, SOS Futuro

* Ha sido Secretario Nacional da Federación de Químicas-Energía de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y miembro de su Ejecutiva Confederal. A nivel internacional ha sido secretario general de la Unión Internacional de los Sindicatos del Metal-Energía-Químicas y Petróleo,

¹ Término acuñado por Mario Benedetti.

En el Estado español, poco después de finalizar el proceso electoral, todo indica que el sistema está agotado. No porque el PP vuelva al palacete de La Moncloa, sino por las circunstancias en que se produce. A partir del día 20 ya tienen coartada para que la factura de la situación de asfixia creada la paguemos entre todos, no cada uno según sus posibilidades, sino previsiblemente menos los que más tienen y más el resto. Los causantes campan a sus anchas y siguen riéndose, ahora a carcajadas. ¡Viva la crisis!, gritan en sus despachos, mientras aumentan la presión al ritmo de sus ganancias. Son parte del sistema, son producto del liberalismo y amantes de esta democracia.

Necesitamos nuevas construcciones democráticas participativas, la democracia no es delegación permanente

No voy de analista político pero la tan cacareada Transición ya no da más de sí. Sobre su cimiento se construyó un aparato de Estado que está muy deteriorado, aunque claro está, sus inquilinos que no propietarios, se niegan a aceptar tal cosa. Ahí siguen, hablando de la democracia y sus valores. Pero ¿acaso hicieron mantenimiento preventivo del edificio democrático? ¿Alimentaron la democracia o la usurparon? Esta es la cuestión.

Su disputa no va mas allá de un sistema bipartidista, monárquico, de recambio, para seguir tirando, de mantenimiento del *statu quo* en una arquitectura funcional, acomodaticia y protectora de sus intereses creados donde la democracia pierde su esencia.

El camino de salida de la situación se hace cada día más tortuoso al contemplar el silencio cómplice o el discurso vacío de quienes en otros momentos se sacrificaron por la democracia y sus valores, tanto en el plano personal como colectivo; parece que a pesar de la que está cayendo quisieran seguir viviendo de las rentas, de la lucha de otros tiempos, su *praxis* así lo indica.

Sí, necesitamos nuevas construcciones democráticas participativas. No queremos exclusivamente votar y delegar hasta la siguiente oportunidad de volver a hacerlo. La democracia no es delegación permanente.

¿Y en los centros de trabajo?

En la fábrica, en el centro de trabajo, también ocurre el mismo fenómeno de delegación. No hay que dejar de reconocer la lucha de otros tiempos para que la democracia se asentara también en el ámbito laboral, pero con la misma contundencia hay que decir que el sistema

también en este apartado necesita reconstrucción. Los que pueden votar en las elecciones sindicales que se están celebrando en la actualidad participan mayoritariamente y, aunque el proceso es formalmente democrático, luego los interesados y defensores del sindicalismo institucional lo transforman en delegación pura y dura.

A la votación en el proceso electoral poco se le puede objetar, sobre todo en los centros de trabajo con un cierto número de trabajadores. Pero a partir de ahí entra en juego la superestructura y los marcos de negociación, los acuerdos de distinta naturaleza, la definición de los contenidos, los pactos sociales, etc., ya no volverán a ser tratados ni consultados en la base. Esto sí que es votar y delegar. Votamos en la fábrica y delegamos en las estructuras de las organizaciones sindicales por un periodo de cuatro años y, en el mejor de los casos, hay que oír el «pásate por los locales del sindicato» o el « ¡afíllate! y no discutas el modelo».

El pacto social

Convencido de su importancia, quiero llamar la atención sobre una de las manifestaciones de la delegación en lo que se refiere a las cuestiones laborales: el pacto social. Siempre me pareció interesante la temática, y aún recuerdo algún debate cercano en el tiempo en el que alguien de discurso “crítico”² a tal fenómeno sostenía que la posición a tomar debería ser coyuntural porque –en su argumentación– tenía un peso enorme quien gobernaba y no el contenido mismo del pacto. En la búsqueda de salidas a la encrucijada actual nos encontramos muchos, pero también en demasiados persiste la confusión conceptual, de ahí que quiera incidir en un viejo fenómeno que viene condicionando a la clase obrera desde hace muchos años en esta parte del mundo y que aún está sin clarificar.

La intención de este artículo es, por tanto, profundizar en el análisis de lo que hay detrás de la estrategia de los pactos sociales. Trataré de interpretar si hay un hilo conductor, una inercia en este fenómeno, con la intención de analizar lo que subyace en el fondo de la maraña legislativa de pactos, de reformas de las normas laborales, de contrarreformas. Anuncio que sostengo una posición crítica a este fenómeno, formulada desde la constatación de que la clase trabajadora caminó pero avanzó menos de lo que algunos quieren publicitar en esta parte del mundo (la Europa Comunitaria). Aunque pueda estar condicionado por la revisión de nuestra pequeña historia (los acontecimientos en materia de desregulación laboral que transcurren desde el final de la dictadura fascista en el Estado español

² Entrecomillo la palabra porque quiero señalar a quien mantiene posiciones críticas con las acciones de los contrarios políticos, pero luego justifica las mismas acciones cuando los de su color gobiernan. La independencia sindical queda en entredicho demasiadas veces.

hasta el momento actual), las conclusiones se pueden y deben extender al territorio de la Unión Europea, porque aunque podamos apreciar diferencias no es difícil percibir también las sintonías.

El balance de un largo camino de adaptación y homologación

Cuando se establecieron los primeros pactos en el Estado español (1977) dio comienzo el periodo de la concertación, del pacto social, para enfrentarse a la crisis económica del capitalismo y a la integración en la Europa Comunitaria. La doctrina importada no fue otra que la del neocorporativismo entre Gobierno-empresarios-sindicatos. Doctrina que tenía –y tiene– una única base: prestación por contraprestación.

La existencia de variaciones en la nómina de los firmantes de los diferentes pactos puede encontrar una explicación como la siguiente: la fase de construcción de este procedimiento (o «método de hacer») requirió de un tiempo de transición necesario para que los debates internos en las organizaciones (de crítica o de valoración de rentabilidades que se pudieran derivar del abandono de los principios) se pudieran presentar como meros cambios de táctica o, si acaso, de estrategia forzados por el “realismo”.

La defensa político-sindical se hizo, pues, sobre argumentos tales como el “realismo”, el pragmatismo, la defensa de los derechos democráticos de los trabajadores y la participación en el ámbito sociopolítico y en la actividad económica. Así –se afirmaba– quedaban aseguradas las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora en la época de las luchas contra la dictadura o de la construcción incipiente del Estado de bienestar. Pero, a decir verdad, lo que se garantizó fue la paz social en las empresas y en la calle y la moderación en las reivindicaciones salariales, lo que a su vez hizo posible una política fiscal y económica con unos resultados bien conocidos. De esa manera se inició un periodo de asimetría en el que la clase trabajadora ha alcanzado unas tasas altísimas de desempleo como consecuencia de la reestructuración y adaptación del aparato productivo a las necesidades del capital y a las demandas de homologación europeas. En ese contexto, los capitalistas –al tiempo que lograban recuperar la tasa de beneficio– consolidan su éxito mas deseado, la unión Estado-patronal-sindicatos, alejando definitivamente el peligro de confrontación (o de la lucha de clases) al integrar a los sindicatos firmantes en una estrategia de cooperación que llega hasta la actualidad. Ni que decir tiene que en esta dinámica van a salir mas perjudicados los trabajadores y trabajadoras de los sectores o empresas mas débiles y los desempleados que en pura lógica van a presenciar como este sindicalismo inmerso en tal dinámica va a dedicarse casi en exclusiva a una acción sindical en el que unos pocos (las ejecutivas, el aparato) deciden lo que es mejor y lo que es posible, eso sí, apoyándose formalmente en la democracia consentida.

Una clarificación del neocorporativismo

A los gobiernos les interesa el neocorporativismo para poder laminar aquellas distorsiones que se observan en el funcionamiento de las economías industriales capitalistas más avanzadas. Intentan así asegurar su política económica y social en relación directa con las organizaciones que se mueven en el ámbito de la productividad. Si lo consiguen, están en condiciones de transferir a esas organizaciones parte de sus problemas de legitimación social. Es decir, que tras el deseo de los gobiernos de los Estados de conseguir un sistema de unión con las asociaciones empresariales y los sindicatos se esconde el interés de ganar a las grandes organizaciones de la producción a favor del consenso respecto de los temas esenciales de las políticas gubernativas y de las políticas del capital.

En el Estado español la necesidad de hacer pactos políticos, sindicales o mixtos no nació de los oprimidos sino de los opresores, o dicho de manera más diplomática, del poder

En este proceso –dicen los investigadores de este fenómeno– lo más difícil resulta ser la integración de los representantes de los trabajadores en el sistema de unión porque para prestarse a semejante subordinación tiene que haber contrapartidas satisfactorias, dando por sentado que la gran patronal en un estadio de capitalismo avanzado tiene doble representación, una sola ideología y pequeñas variantes programáticas que siempre serán atendidas en acuerdos de esta naturaleza.

La globalización que ahora está de moda, es un viejo fenómeno

El capitalismo estaba en 1977 en plena crisis estructural. Hoy estamos inmersos en otra cuya característica fundamental es la competencia desenfrenada entre los tres grandes polos industriales (Estados Unidos, la Europa comunitaria y todo lo que emerge en Asia) con la finalidad inconfesable de aniquilar competidores al tiempo que se sacraliza la competencia. Las adquisiciones, fusiones, absorciones y alianzas presiden la economía mundial, y aunque la guerra económica se desenvuelve preferentemente en los países periféricos, el apoderamiento del sector público también se produce en las metrópolis; las armas son ahora inicialmente financieras y políticas y los pueblos reciben un adiestramiento liberalizador elaborado por la escuela técnico-ideológica cuyo principio y becerro de oro es el mercado que es presentado como única terapia que resuelve todos los males. En consecuen-

cia, se publicitará la siguiente tesis: lo bueno para el mercado también lo es para los trabajadores y trabajadoras y los pueblos.

Parece razonable que las estrategias capitalistas no tengan diferencias significativas en cada Estado si los comparamos agrupándolos según sus potencialidades económicas, y así las recetas se van tratando de aplicar sistemáticamente bajo la vigilancia de unos organismos internacionales dependientes e integrados en dichas estrategias. Pero lo fundamental para nosotros los trabajadores/as, y para nuestras organizaciones sindicales nacionales o internacionales, está en nuestros comportamientos de resistencia, en nuestra lucha contra estas necesidades del desenvolvimiento capitalista que es intrínsecamente expansivo y que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus claras expresiones históricas. Desde esa experiencia, sustento la afirmación de que la globalización no es un fenómeno nuevo, es una moda con la que se trata de vestir al viejo capitalismo y a sus necesidades imperialistas mundiales.

En este contexto se puede afirmar que en el Estado español la necesidad de hacer pactos políticos, sindicales o mixtos no nació de los oprimidos sino de los opresores, o dicho de manera más diplomática, del poder. Objetivamente, las reformas interminables en materia laboral han supuesto, con muy pocas excepciones, un continuo retroceso en las relaciones laborales, cuya expresión más importante tuvo lugar en 1994 con la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Con ello se situó a la población trabajadora en una indefensión total³ y a las organizaciones de clase delante de un problema de supervivencia futura, pues esta dinámica, de persistir, termina por atomizar al movimiento obrero y acelerar la individualización de las llamadas relaciones laborales, objetivo máximo del capital y deseo prioritario de los ultraliberalizadores.

La supervivencia garantizada como contrapartida

La situación que trato de descifrar está ligada al intento de comprender cómo actúa el poder y sus colaboradores. El discurso globalista enfatiza la interdependencia de las economías, la desregulación, la flexibilización, la paz social y la soberanía de los mercados; el problema no reside en criticar mas o menos este discurso sino en hacerle frente.

Si revisamos las prácticas de las organizaciones de izquierda (dentro del ámbito del autodenominado “progresismo”) durante el periodo de tiempo que comienza en los Pactos de la Moncloa hasta hoy, podremos evaluar si hubo o no subordinación. También analizan-

³ Que algunos sindicatos hayan pretendido minimizar los impactos firmando convenios colectivos estatales para estas pseudo empresas no impide la ruptura de la universalidad obrera en el mismo puesto de trabajo que conlleva la presencia de las ETT.

do las particularidades de las variaciones legislativas y normativas podremos apreciar las simetrías o asimetrías en el campo de las relaciones económicas, laborales o socio-políticas y luego sacar conclusiones viendo quienes son los beneficiados y los perjudicados. En la Europa comunitaria lo social retrocede, sea en el ámbito de la negociación colectiva, de la seguridad social, de los servicios públicos o de la legislación laboral y, ante ello, sigue sin haber respuesta sindical colectiva.

No es fácilmente explicable la subsistencia en muchos Estados de organizaciones que hacen alarde del principio de independencia económica cuando su afiliación-militancia es por lo general baja. Pero más difícil es en esta coyuntura justificar incrementos de gastos o patrimonio. Por eso resulta razonable pensar que los pactos sociales –el fenómeno corporativista– implican contrapartidas suficientes para que los aparatos tengan garantizada una supervivencia personal subvencionada. Siempre que las organizaciones que representan sigan dando respuesta y acomodo al capitalismo y a sus necesidades. Un capitalismo que también desea y apoya un monopolismo sindical globalizador que tenga estas características tanto a niveles nacionales como internacionales. En este diseño se comprende que, en la práctica, la afiliación, la fortaleza en las fábricas, la atención a los sectores sociales más desfavorecidos, los parados y paradas, la redistribución de la riqueza, la inmigración, la juventud tengan poco espacio en la acción sindical, pues las organizaciones son sustentadas, cada vez mas, en otros pilares.

A pesar de ello, los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo seguimos y seguiremos luchando. La alternativa no es el capitalismo, tampoco lo es este modelo sindical. La indignación tiene que dar paso a la construcción de la alternativa en cada país y a nivel internacional. Ánimo y adelante.

98 años al servicio de la información

Revista bimestral monográfica
con una amplia sección
de actualidad y cultura

CRÍTICA

Últimos números publicados:

- 970 Economía sostenible. Desafíos frente a la crisis
- 971 El poder y sus máscaras
- 972 Por una educación transformadora

- 973 La cárcel del siglo XXI
- 974 Emociones que nos rompen:
depresión y ansiedad
- 975 Una España empobrecida



Suscripciones:
Revista Crítica
c/ Gral. Oraá ,62 -1ª iz.

Tel.: 91 725 92 00
Fax: 91725 92 09

e-mail:
critica@revista-critica.com
www.revista-critica.com

suscripción 1 año		BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN	
España 33 €			
Extranjero 40 €			
Nombre y apellidos		DOMICILIACIÓN BANCARIA	
Dirección		Titular cuenta	
C.P. Ciudad		Nombre de Banco o Caja	
Provincia		Dirección del Banco	
Profesión		N.....C.P.....Población del Banco	
Modo de pago		<i>Mire su talonario o libreta y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad</i>	
<input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Giro		Código cuenta cliente	
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Domic. Bancaria		_____	
Remite y abona esta suscripción		_____	
Dirección		Muy Sr.a. mios: ruego a Uds. se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta arriba indicada, los recibos que les presente Crítica	
Población		Firma	
C.P. Provincia		Fecha:.....de.....de 2011	

Crisis de hegemonía y movimientos de resistencia

En este texto se pretende abordar la relación entre crisis y surgimiento de movimientos de protesta, específicamente el 15 M, partiendo de la crisis de hegemonía de los sistemas políticos que estamos viviendo actualmente y de la deslegitimación tanto de las democracias formales como de las izquierdas gobernantes. Para hacerlo, aborda tanto la naturaleza de la crisis y su conexión con el sistema político, como la genealogía del movimiento 15 M, sus activadores y su evolución, teniendo en cuenta las nuevas formas organizativas de la acción política y la naturaleza cambiante del mismo 15 M.

«El aspecto de la crisis moderna lamentado como “oleada de materialismo” está relacionado con lo que suele llamarse “crisis de autoridad”. Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea ya no es “dirigente”, sino sólo “dominante”, detentora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo [...]

Xavier Domènech Sampere es historiador

El problema es éste: ¿puede “curarse” con el puro ejercicio de la fuerza, que impide el triunfo de nuevas ideologías, una ruptura entre las masas populares y las ideologías dominantes tan grave como lo que ha ocurrido [...]? Por de pronto, la represión física producirá a la larga un difuso escepticismo, y nacerá una nueva “combinación”, en la cual, por ejemplo, el catolicismo se hará todavía más jesuitismo, mezquino, etc. [...] La muerte de las viejas ideologías se verifica como escepticismo respecto a todas las teorías y las fórmulas generales, con aplicación al hecho puramente económico [...] y a la política [...] pero esa reducción significa precisamente la posibilidad y necesidad de formar una nueva cultura.»

Antonio Gramsci (XX, 1929 -1932, pp. 37-38)

Nueve personas se encuentran en una taberna, corre el año 1792, toman pan, queso y cerveza y empiezan a hablar «sobre la dificultad de los tiempos y la carestía de los productos» y en ese hablar deciden que el problema es la democracia: su ausencia. Un acto sencillo, que no revestiría mayor importancia, sino fuera por lo que deciden hacer. Fundan una sociedad de correspon-

dencia, su divisa será: «Que el número de nuestros miembros sea ilimitado». Se enviaban cartas, unos a los otros, creaban signos de identidad, se informaban y actuaban. Tampoco parece que nada de subversivo haya en eso. En seis meses serán dos mil miembros, en dos años multitudes que ocuparan el centro de Londres desafiando el orden existente.¹

Las sociedades de correspondencia constituyeron uno de los momentos centrales de la constitución de la sociedad política, entendida como sociedad democrática, en los orígenes de la modernidad, antes de la existencia de cualquier cosa parecida a un partido político moderno o a las estructuras representativas actuales. No eran en este sentido sólo un espacio de movilización política, sino de creación de la política y en algunos casos, como en el proceso de independencia de EE UU, de creación de la misma nación. El principio era comunicar, comunicarse, y en ese acto reconocerse no como uno, sino como muchos, actuar no como uno, sino como muchos, hacer que «el número de nuestros miembros sea ilimitado». Una realidad que ha vuelto en cada momento en el que la derrota parecía la única realidad posible y que obligaba a repensarlo todo de nuevo desde cenizas que, a pesar de todo, ardían todavía. Así fue en el principio de toda nuestra historia moderna o en medio de las sociedades ocupadas por el fascismo durante la segunda guerra mundial, cuando el primer acto de la resistencia fue comunicarse, fundar diarios clandestinos, más de mil en Francia, más de diez millones de ejemplares en Dinamarca. Así antes como ahora.

Volvemos a los orígenes, transmutados ahora en redes sociales 2.0, para crear un espacio para escuchar y escucharse, un espacio para la polifonía que se comunica, se dota de identidades, se articula y actúa de nuevo. Esta crisis, que empezó con la caída del sistema financiero en 2008, ha devenido en un momento clave de nuestra contemporaneidad. Todas las certezas son puestas en duda, muere lo viejo y en su muerte puede que se lleve todo aquello de bueno que había en nuestras sociedades, sin dejar aún que nazca lo nuevo. Y en este caso lo nuevo parte de una pequeña esperanza que nos trajeron unas gentes que empezaron por un acto sencillo, comunicarse en Facebook o en Twitter, y que acabaron por generar el fenómeno político disruptivo que estamos viviendo. Cuando todo lo demás falló, los principios más profundos que están en nuestros mismos orígenes como sociedad, no lo hicieron.

De la crisis a la crisis de las crisis

Decir ahora que la que empezó como una crisis financiera ha terminado por convertirse en una crisis social, cultural y política es ya una obviedad compartida tanto por la derecha como por la izquierda. No lo es tanto la evidencia del carácter mismo de esta crisis. El análisis económico dominante, a pesar del carácter fallido de todas sus previsiones, sigue estando

¹ E.P. Thompson, *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Crítica, Barcelona, pp. 3-8.

sujeto a una visión del sistema económico centrada en su capacidad de producción de riqueza, bienes y servicios, y no del sistema como sistema. Cuando en 2008 en una visita a la London School of Economics la reina Isabel II de Gran Bretaña preguntó a los miembros de tal ilustre institución cómo no habían previsto la crisis, la respuesta tardó seis meses en llegar. Después de un arduo debate confesaron sin más que ellos no contemplaban en sus análisis el riesgo sistémico. La funcionalidad y perdurabilidad del capitalismo ha sido un axioma aceptado como natural durante demasiadas décadas en las facultades de economía y parece que, a pesar de todas las confesiones, esto no va a cambiar de momento. Aún hoy la crisis es analizada todavía como un problema de desajustes en el sistema financiero en el que sigue siendo central la observación de su comportamiento. Donde antes el problema eran los activos basura, ahora lo es la deuda, pero el problema va mucho más allá de esto y es este marco el que determinará la dinámica política y social de los próximos años.

En primer término la crisis no es el resultado de operaciones financieras irresponsables, es toda la dinámica desarrollada por el sistema económico desde los años setenta hasta ahora la que nos ha llevado a un verdadero callejón sin salida. La solución difícilmente pasa por medidas meramente correctivas de los extremos más evidentes de su mal funcionamiento. Sólo por poner un ejemplo, la centralidad del capital financiero como espacio de generación de beneficios, en detrimento del capital productivo, ha llevado a que, si la proporción entre el valor del conjunto de activos financieros y el conjunto del *stock* de bienes físicos del capital (tierra, centros productivos, maquinaria, etc.) fue de cinco a uno en 1982, en 2006, justo antes del inicio de la crisis, llegaría a ser de dieciséis a uno. En este contexto de crecimiento exponencial del capital virtual por encima del capital real, los mercados de futuros, que son el principal espacio de la especulación en la actualidad, han pasado de un valor marginal a principios de la década de los noventa del siglo pasado, a agrupar 600.000 millones de dólares en 2008, cuando el valor total de la producción global de bienes y servicios es sólo de 56.200 millones de dólares. No existen suficientes planetas Tierra para pagar en este sentido la factura de la especulación financiera. De hecho, si ahora saliésemos de la crisis, cosa que evidentemente no pasará, a partir de un crecimiento del 3% anual, que es la medida que los “expertos” consideran idónea para una economía “sana”, en 2030 llegaríamos a una producción global de bienes y servicios de 100.000 millones. Con eso sólo pagaríamos una quinta parte de la factura especulativa actual de los mercados de futuro. Tampoco cabe preocuparse mucho, si esa salida de la crisis se diera, tampoco la tierra sería suficiente para soportar el crecimiento económico. Lo que está en crisis es todo un modelo de producción de riqueza, no una parte del mismo.²

Por una parte la subordinación de todas las realidades económicas a un capital financiero absolutamente sobredimensionado no se puede solucionar, pagar, en una sola crisis de

² D. Harvey, *L'enigma del capitale*, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 33.

carácter financiero. Se irán superponiendo unas a otras. Primero son los activos basura, después los bonos soberanos, después los rescates, después... Es todo el modelo el que está en juego, nunca ha sido tan verdad como ahora el lema de que «esto no es una crisis: se llama capitalismo». Un capitalismo que se define ya tanto por su capacidad de explotar como por su capacidad de excluir y donde, además, la vieja contradicción entre capital y trabajo es sustituida por la contradicción cada vez más central entre el capital y la vida. El crecimiento económico necesario para sostener la crisis financiera, y para sostener un sistema que si no crece entra en crisis, puede ser ya ahora mismo incompatible con la misma vida. No es baladí traer a colación aquí el análisis realizado por los investigadores del MIT, como actualización del informe de 1972 sobre *Los límites del crecimiento* patrocinado para el nada sospechoso de izquierdismo Club de Roma. Actualización en la que sobre la previsión de los 10 escenarios posibles de desarrollo del capitalismo en el siglo XXI en ocho de ellos se daría un colapso medioambiental. Sólo en dos no sería así. En el primero de ellos no sería así si los cambios necesarios se hubieran realizado en 1982, en el segundo si se hubieran hecho en 2002. El informe se publicó en 2004.³ A su vez, tampoco podemos obviar en el análisis de la crisis el problema energético. La humanidad siempre ha sustituido la base energética de cada uno de sus modelos de producción a partir del encuentro de una energía más eficiente, transportable y barata. Así sucedió con el paso de la biomasa al carbón y del carbón al petróleo y la electricidad. Por primera vez esto no es así. No existe un sustituto claro al petróleo justo en el momento en que este está en vías de agotarse.

Este conjunto de elementos por si solo nos indica la posibilidad más que real de un fuerte riesgo sistémico y no sólo financiero. Ciertamente el capitalismo ha mostrado una enorme capacidad de adaptación y supervivencia a pesar de su naturaleza inestable, pero su implosión no sería algo inusual en la historia de la humanidad. La mayoría de sistemas han acabado así. La diferencia radical es que es el único sistema creado por nuestra especie que ha llegado a ser global y, como tal, su implosión está intrínsecamente relacionada con la misma posibilidad de la perdurabilidad de nuestra especie. Los retos son en este sentido inmensos y la situación, como no puede ser de otra forma, ha llevado a que la crisis deviniera rápidamente en una crisis política. Su primera expresión en nuestro país se ha gestado en este sentido como una crisis de hegemonía de nuestras instituciones en medio de la cual ha surgido un nuevo movimiento de protesta.

Redes que dan libertad: la genealogía de la protesta

Se tiende a situar el origen del 15 M en las revoluciones árabes que lo precedieron y que se intensificaron especialmente en el período que va de 2010 a 2011. Y, ciertamente, su impac-

³ D. Meadows (coord.), *Los límites del crecimiento: 30 años después*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2004.

to mediático en un marco de profunda reacción donde la revolución ha podido mostrar de nuevo su poder para cambiar realidades que pudieran parecer inmutables, la utilización en su consecución en los países árabes de las redes sociales o el simbolismo que ha adquirido en estos procesos la ocupación de plazas, marcó parte del espacio simbólico donde se desarrolló el 15M. A su vez, cuando se buscan antecedentes en suelo propio, las referencias acostumbran a ser el movimiento V de Vivienda, las movilizaciones vividas durante las jornadas electorales de marzo de 2004, bajo la égida del atentado del 11 de marzo en Madrid, o, un tanto más forzosamente, las movilizaciones contra la implantación del plan Bolonia en las universidades. En el sentido de que en este tipo de movilizaciones, específicamente las dos primeras mencionadas, tuvieron su origen o bien en un email viral o bien en el envío masivo de *sms*, y se constituyeron en acciones apartidistas, pero profundamente políticas, algo de cierto hay en señalarlas como precedentes.⁴

La crisis ha devenido rápidamente en una crisis política; una crisis de hegemonía de nuestras instituciones en medio de la cual ha surgido un nuevo movimiento de protesta

Es curioso observar, de todas formas, las poquísimas referencias explícitas, aunque es muy fácil explorar las conexiones directas en la gestión del 15 M, al movimiento portugués conocido bajo el nombre de *Geração a Rasca*. Este movimiento que nació por una iniciativa inicial de un puñado de personas en las redes sociales consiguió finalmente movilizar a unas 300.000 personas el 13 de marzo de 2011 en las calles portuguesas. Si tomamos en cuenta que en Portugal vive una cuarta parte de la población de la que lo hace en España y que la manifestación del 15M sacó a unas 130.000 a la calle, no es menospreciable este precedente. La diferencia entre el desarrollo del 15M y el de la *Geração* estuvo en las plazas, por lo demás sus inicios son tan miméticos que no es difícil ver a uno como el principal precedente del otro. Y lo común entre ambos eran dos cosas: una crisis de hegemonía de la democracia establecida, y no de un sistema dictatorial, y las nuevas formas de movilización política.

La crisis económica, tal como fue presentada, tuvo un primer momento en el cual el discurso dominante presentaba como inevitable, con la sola alternativa del caos, la salvación del sistema financiero a partir de recursos públicos, a pesar de que en el proceso se pudiera generar déficit. Momento que fue seguido posteriormente por una mutación del primer discurso de la crisis de esta salvación hacia la consideración de que la prioridad para supe-

⁴ La literatura sobre el 15M es ya muy extensa actualmente, para el tema de los precedentes yo señalaría especialmente los siguientes títulos: VVAA, *La rebelión de los indignados*, Editorial Popular, Madrid, 2011; R. Viejo (ed.), *Les raons dels indignats*, Portic, Barcelona, 2011; VVAA, *Les veus de les places*, Icaria, Barcelona, 2011.

rarla estaba en recortar el déficit público vía privatizaciones y erosión de los derechos sociales. Es decir, pasamos de un keynesianismo para ricos —era el momento que se hablaba del retorno de Keynes—, a un neoliberalismo para pobres. Pero fuera cual fuera el discurso, lo cierto es que el mismo se impuso a partir de la amenaza en primer término de que estábamos al borde del caos, en segundo término de que o se hacía lo que pedían los “mercados” o ellos nos hundían. En ningún momento la democracia formal tuvo mucho que ver con ello y, finalmente, los mecanismos de la misma han sido violentados hasta extremos que hacen difícil hablar de sistemas democráticos y no, como afirma Gerardo Pisarello, de un sistema de oligarquía isonómica (con libertades reconocidas, pero con un fuerte control de las élites).⁵ El problema social, económico y cultural ha devenido así en un problema de democracia: para violentarla en el caso de las élites, para reclamar su realidad en el caso de las capas populares. De hecho, en el proceso vivido, al mostrarse descarnadamente como servidor de los intereses dominantes, el sistema político se ha asegurado el dominio, pero ha perdido gran parte de su legitimidad.

Paradójicamente si esto ha afectado en mayor o menor medida en cada país, dependiendo de hasta qué punto se haya tenido que subordinar la democracia a los mercados en cada uno, lo cierto es que ha erosionado más a la izquierda institucional gobernante que a la derecha (aunque ella no se ha mantenido tampoco a salvo, como hemos visto en el caso de Italia, la diferencia radica en que en este caso un tipo de derecha ha sido sustituida por otro tipo de derecha). Y tiene sentido. Estaba en el ADN del discurso, otra cosa es que estuviera en las realidades de las izquierdas gobernantes precisamente la promesa de la democracia como la posibilidad de controlar el capitalismo más salvaje, precisamente como la posibilidad de extender los derechos sociales y políticos a la población. Si el fracaso de la democracia como sistema político que garantiza la soberanía de las personas, frente al poder de los intereses privados, es un hecho palmario en estos últimos años, en el caso de las izquierdas gobernantes este fracaso ha sido doble: como gestores del sistema, como alternativa política. Y es en esta doble realidad donde el problema, tanto de contenido como de continente, lo perciben capas cada vez más amplias de población. Y es por eso mismo, a su vez, que a pesar de que se puede esperar un crecimiento electoral de las izquierdas a la izquierda de las gobernantes, en la medida en que su centro de acción sigue siendo el sistema político establecido, proponiendo contenidos alternativos pero no claramente nuevos continentes, tampoco ellas pudieron rearticular una nueva hegemonía política, social y cultural. Fue fuera de ese campo, desde nuevas y viejas laderas, desde donde empezó a surgir la respuesta.

En este contexto, en torno a la huelga general del 29 de septiembre de 2010, se produjo una revitalización de la izquierda radical especialmente, aunque no únicamente, en

⁵ G. Pisarello, *Un largo temidor. Lo ofensivo del constitucionalismo antidemocrático*, Trotta, Madrid, 2011.

Barcelona. Allí, en torno a grupos autónomos y de la experiencia unitaria de la Asamblea de Barcelona, se inició un nuevo ciclo de movilizaciones entre la experiencia de la ocupación del Banco en Plaza Catalunya, que dotaría a la huelga en la capital catalana de tintes insurreccionales en el centro de la ciudad, y el 1 de mayo de 2011, cuando probablemente se vivió el primer mayo alternativo con mayor seguimiento desde el inicio del milenio. Algo parecido acaeció en Madrid –aunque con mimbres diferentes y una mayor conversión discursiva en una ciudad donde la capacidad de articulación de la izquierda radical había sido mucho menor en los últimos tiempos–, a partir de la movilización de Juventud sin Futuro el 7 de abril de 2011. Pero no fue de estos sectores, aunque los mismos jugaron un papel central en la explosión de la protesta posterior al 15 M, de donde irrumpió directamente el nuevo movimiento de protesta. A pesar de su renacida capacidad de movilización, seguían teniendo un problema evidente de conexión con franjas más amplias de la población.

El retorno de palabras "fuertes" –a pesar de todos los intentos de los teóricos de lo líquido–, como "pueblo", "democracia" o "revolución", hace referencia a cómo se han violentado radicalmente los principios básicos de nuestra modernidad política

Si el discurso de Juventud sin Futuro⁶ tenía mucho que ver con la *Generação a Rasca*, los medios para construir la movilización que también habían sido básicos en Portugal, fueron principalmente impulsados desde las redes por una nueva plataforma política conocida como Democracia Real Ya. Si los movimientos sociales ya hacía tiempo que utilizaban las redes como herramienta de movilización, la diferencia es que ahora esta se generaba inicialmente desde esas mismas redes, constituyendo un fenómeno que iba mucho más allá de la convocatoria de una movilización en la fecha del 15 de mayo de 2011.⁷ La experiencia de la crisis, y su gestión, la evidencia de que cada uno de nosotros perdía cada día una poco más de control sobre sus vidas, cada vez, y eran muchas, que en un medio público se nos anunciaba que los “mercados” habían decidido por nosotros, se vivía aisladamente. Ante el ruido atronador de las órdenes de mando repetidas hasta la saciedad, parecían pocos, muy pocos, los que veían lo que uno mismo veía. Pero, en el espacio de las redes esto empezó a no ser así. En ellas, lentamente primero, pero en un aceleración exponencial después, uno se encontraba con otros y estos otros con muchos, en un proceso polifónico que generaba una forma de comunicación alternativa, erosionando y determinando las oficiales, y en el que se construían nuevas identidades colectivas con nuevos símbolos y referentes desde los que surgía el impulso para la movilización. La coordinación se produjo en las

⁶ VVAA, *Juventud sin futuro*, Icaria, Barcelona, 2011.

⁷ Véase para DRY y el impacto de la movilización en las redes: VVAA, *Nosotros los indignados*, Barcelona, Destino, 2011; VVAA, *Las voces del 15-M*, Barcelona, Los panfletos del lince, 2011.

redes, pero, finalmente, el encuentro fue en la calle. El inicio fue una manifestación, pero fue mucho más que eso cuando la decisión de unos pocos –y en esto de nuevo tuvo mucho que ver la participación de componentes de la izquierda radical que ya se habían activado con anterioridad–, llevó al movimiento a las plazas. Allí creció, pasando de lo virtual a lo real, hasta convertirse en el principal movimiento de protesta contra la crisis, con unas particularidades que lo hacen casi único en la historia de los movimientos sociales de este país desde el inicio de la democracia.

Protestando contra la crisis: construyendo democracias

Pocas veces un movimiento de protesta ha tenido las cotas de aceptación social del 15M (cerca del 70-80% de la población se ha mostrado a favor del mismo); sólo el movimiento contra la guerra de Irak se le asemeja en este sentido. Nunca un movimiento que cuestionara el sistema en su globalidad ha sacado tanta gente a la calle. Jamás un movimiento que desafía al Gobierno y a la Junta Electoral Central, que pasaba de la simpatía a la criminalización de una forma tan radical, como sucedió en Catalunya después de las protestas frente al Parlament del 15 de junio, era a su vez capaz de convocar a centenares de miles de personas en las principales calles del país. Tampoco habíamos vivido antes todo lo que estamos viviendo ahora. Es imposible entender la eclosión, evolución y capacidad de permanencia del movimiento en este último medio año, con una capacidad de convocatoria en la calle que lo ha convertido en el principal sujeto de resistencia, sin una crisis de hegemonía que a su vez ha arrastrado a todos los sectores de la izquierda tradicional.⁸ Ya sean partidos o sindicatos.

Ciertamente, se ha acusado a este movimiento –acusación que probablemente se extenderá contra todas las formas amplias de movilización contra la crisis–, de populismo e, incluso últimamente, de ser un movimiento emocional. Su populismo es evidente, pero es que difícilmente puede ser de otra forma como mínimo en dos sentidos. En el primero de ellos, el retorno de palabras “fuertes” –a pesar de todos los intentos de los teóricos de lo líquido, como Bauman, para hacer ver lo contrario–, como “pueblo”, “democracia” o “revolución”, hace referencia precisamente a cómo se han violentado radicalmente los principios básicos de nuestra modernidad política. Puede sorprender ese uso de retóricas debilitadas y denostadas durante decenios, pero no se puede negar que precisamente lo que está en juego en estos momentos es la democracia entendida como poder del pueblo y ante este peligro cabe recordar que en sus constituciones originales se recogía el derecho a la “resistencia” del “pueblo”. El hecho sorprende también a una izquierda radical que actuaba desde

⁸ Para un relato del desarrollo inicial del movimiento tanto en las calles como en las redes especialmente: A. Requena y A. Muñoz, «El movimiento 15-M. Los hechos» en VVAA, *Las voces del 15-M*, Los panfletos del lince, Barcelona, 2011, pp. 11- 43; G. Pin, H. Arbide, «Maig del seixanta-tweet» en VVAA, *Les veus de les places*, Icaria, Barcelona, 2011, pp. 50-60; D. Fernández, «Quadern de bitàcola», VVAA, *Les veus de les places*, Icaria, Barcelona, 2011, pp. 61 - 82 .

parámetros políticos distintos, y poco habituada a luchar de tú a tú en el campo semántico de la hegemonía dominante usando conceptos como democracia o pueblo.⁹

En el segundo sentido, porque en la medida en que esta crisis tiene como uno de sus componentes fundamentales la subordinación de todas las realidades económicas a las lógicas internas del capital financiero, no se presenta netamente como un conflicto de clases entre capital y trabajo. Ciertamente la lucha de clases está presente en esta situación, como lo está en el origen de la misma. Lo decía más claramente imposible Warren Buffet en 2006: «Hay lucha de clases y es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando», pero quien habla de ella es un gran financiero y no un patrón de una fábrica del metal. Es más, pequeños y medianos empresarios y capas de la población no asalariadas están sufriendo esta crisis con una intensidad a veces poco menor, y en algunos casos mayor, que los sectores tradicionalmente identificados con la clase obrera. Es en este sentido que los sindicatos tradicionales, contrariamente a lo que se creyó en los orígenes de la crisis por una parte de la izquierda, no han devenido en el gran polo de resistencia a la misma, más aún cuando su construcción sindical pertenece a un mundo que está en estos momentos feneciendo. Sin duda, el sindicalismo sigue teniendo un enorme sentido, más aún cuando se quiera hacer pagar a las clases populares la factura especulativa, la duda es si lo tiene con los parámetros organizativos y tácticos propios de una situación radicalmente diferente a la que estamos viviendo.

El contenido inicial del 15 M ha mostrado una gran diversidad que sólo ha encontrado su unidad en la denuncia de la falta de representatividad del sistema político

Al igual que sucedió en la Europa de entreguerras se está desplazando rápidamente el espacio de conflicto principal hacia lo político, lugar donde se tejen amplias alianzas de confrontación entre intereses que son diversos en sí mismos. Y las lógicas en ese espacio y por este tipo de confrontación, dado su carácter interclasista, tienden de forma natural al populismo, a situar el “pueblo” —entendido como un ente amplio y representativo—, en el centro del discurso para la acción. Lo cual no quiere decir que esas formas de populismo superen las dialécticas de clase, como tampoco quiere decir que superen los campos ideológicos. En la Europa de entreguerras la respuesta a una crisis similar dio como resultado dos tipos de populismo. El primero de ellos fue el fascismo que, haciendo frente a un sistema financiero desbocado, proponía una alianza profundamente reaccionaria en contra de los intere-

⁹ Véase I. Errejón, «Disputar les places, disputar les paraules» en R. Viejo (ed.), *Les raons dels indignats*, Pòrtic, Barcelona, 2011, pp. 18-24.

ses de las clases populares y a favor de las privilegiadas. El segundo de ellos fue el frente-populismo, que alcanzó importantes victorias electorales en los años treinta y que mutó en la resistencia contra el fascismo y fue, finalmente, la base que tiñó los sistemas democráticos surgidos después de la segunda guerra mundial.

En este marco, el contenido inicial del 15 M ha mostrado una gran diversidad que sólo ha encontrado su unidad en la denuncia de la falta de representatividad del sistema político. Dos lemas son los que han marcado se agenda reivindicativa más evidente: «no somos mercancías en manos de políticos y banqueros» y «no nos representan». Pero esta unidad, que identifica a los adversarios y denuncia el problema de un sistema político que no es capaz de ser lo que dice que es (la representación del pueblo), esconde sus dos almas, tal como las ha caracterizado Carlos Taibo.¹⁰ En la primera de ellas hay un intento de que el espacio institucional quede más ligado al pueblo que a los intereses financieros, mediante cambios fundamentales en las reglas del sistema de representación, que van desde la modificación de la ley electoral hasta la introducción de mecanismos de democracia 2.0. Se pretende así consolidar el sistema en su vertiente democrática, ya que se percibe correctamente que la raíz de la crisis y sus consecuencias tienen que ver mucho precisamente con la falta de democracia. Es, en este sentido, un 15 M sistémico, al menos sistémico en la retórica que ha servido para la legitimación del orden institucional, y en él se encuentran los principios básicos para cualquier intento serio de refundación del proyecto socialdemócrata.¹¹ En la segunda “alma”, contrariamente, se parte de la presunción de que el sistema no puede ser democrático y se pretende explorar alternativas al mismo con nuevas formas de representación que partan de la autoorganización, más que con contenidos explícitos desde la constatación de que las alternativas aún están en construcción y desde un intento de superar viejos paradigmas heredados de la izquierda radical, viendo el movimiento en sí mismo ya no como una protesta para realizar cambios sino como un nuevo espacio de configuración de la realidad política.¹²

Dos almas que basculan según los lugares y los momentos y que están profundamente conectadas entre ellas en una evolución marcada por su misma interrelación con el sistema que se pretende cambiar. Y es que, a pesar de todos lo guiños hechos desde la clase política hacia le movimiento, la realidad ha sido que el sistema institucional cada vez se blindo más contra sus demandas, vía reforma de ley de partidos, que cierra cada vez más la posi-

¹⁰ C. Taibo, *Nada será como antes*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

¹¹ Se puede rastrear este “alma” del 15M, tanto en los programas desarrollados en él como en sus participantes, véase: VVAA, *Las voces del 15-M*, Los panfletos del lince, Barcelona, 2011; S. Bannasar, *La primavera dels indignats*, Meteora, Barcelona, 2011; VVAA, I. Giménez, «Democracia Real Ya entre el Open Government y el ciberactivismo» en VVAA, *La rebelión de los indignados*, Editorial Popular, Madrid, 2011, pp. 59-72.

¹² Véase, por ejemplo, F. Ruggieri e I. Miró, «Ningú no ens representa. La plaça com a metàfora de la nova societat», en VVAA, *Les veus de les places*, Icaria, Barcelona, 2011, pp. 38-49; A. Fernández-Savater, «Apuntes de acampadasol» en *Las voces del 15-M*, Los panfletos del lince, Barcelona, pp. 60-74.

ble participación de nuevas opciones, o la misma reforma de la Constitución en un sentido netamente neoliberal.

De hecho, si inicialmente el alma “reformista” parecía predominar, y era la que conectaba más claramente con los medios de comunicación y las clases medias, en la medida que el 15 M se trasladó de las acampadas a los barrios se conectó más claramente con luchas populares iniciando, por ejemplo, campañas contra los desahucios. A su vez en el proceso devino en un movimiento activo y no sólo reflexivo, utilizando repertorios de protesta que, como las ocupaciones, deben mucho a los movimientos sociales alternativos. En este camino parece que su alma “radical” se está afianzando, aunque a veces se pierda en un retórica que puede acabar por paralizarla como actor político¹³ o que el movimiento en sí pierda su centralidad permanente en el escenario político. Los intentos, en este sentido, de que el 15 M deviniese en parte un *Tea Party* de izquierdas, con la colocación de candidatos próximos en algunas listas electorales, la colonización de parte del discurso de la socialdemocracia gobernante hasta ahora o el impulso de operaciones que intentasen evitar la mayoría absoluta del Partido Popular, no parecen haber fructificado demasiado. Lo cual no quiere decir que este aspecto no tenga aún recorrido en un momento de desconcierto absoluto en estos espacios, en la reconstrucción del campo de la izquierda política institucional. De todas formas, la perspectiva que se abre ahora, con la entrada en el poder de la derecha política, parece apuntar a un endurecimiento cada vez mayor de la relación entre protestas populares y un sistema político que a la vez que es refrendado electoralmente, genera amplia desconfianza en una mayoría de la población. Sólo cabe recordar en este sentido que el nuevo presidente del Gobierno lo es por mayoría absoluta, a la vez que también lo es por el hundimiento sin paliativos de la socialdemocracia gobernante, más que por un aumento absoluto de votos, y que genera desconfianza en un 70% de la población. Una situación donde parece que la crisis de hegemonía del sistema político va a profundizarse más aún y en la que los movimientos de protesta seguirán planteando la problemática de la crisis en términos sistémicos.

Lo que hemos vivido hasta ahora sólo es el principio, habrá sucesivas mutaciones de la protesta en nuevos contextos políticos y en un contexto social caracterizado por la profundización de las desigualdades. En el proceso, la mundialización de la protesta, y en este sentido la convocatoria del 15 de octubre ha sido clave para el salto a EEUU, probablemente será una de las claves para la ampliación de las formas de acción y de la posibilidad de imaginar escenarios futuros que den respuesta a una crisis que es global y sistémica. Los retos van mucho más allá del problema de representación del sistema político, aunque en él esté una de las principales claves de su solución. El conflicto se plantea en términos de democracia o dictadura, en este caso de los mercados, pero también en términos de capital o

¹³ Véase X. Domènech, «Dos lógicas de un movimiento», *SinPermiso*, número 9, julio de 2011.

vida. Y en esa lucha sólo el principio anunciado por las clases populares en el origen de nuestra modernidad política nos puede acompañar para reconstruir y reconstruirnos: «que el número de nuestros miembros sea ilimitado». Es el núcleo básico de lo que irrumpió en nuestras calles hace medio año, de las cenizas de un proyecto que ardía todavía lo suficiente como para recordar y recordarnos qué éramos, cómo éramos y cómo podríamos ser. No es un movimiento fuerte, se gesta entremedio de un largo termidor reaccionario, pero en su suerte, y en la de las protestas que vendrán, probablemente esté en juego nuestro destino como sociedad.

Hackear el periodismo, resetear la democracia

O de cómo Assange quería establecerse en Islandia y acampó en Sol²

Este texto aborda el impacto de Internet en el sistema de representación democrática. A lo largo del siglo XX, el periodismo acabó sometido a los medios de comunicación masivos. Estos se convirtieron en fines en sí mismos, haciendo del lucro empresarial su objetivo único o prioritario; en todo caso, antepuesto a (y, por tanto, a costa de) la información como bien público indispensable para la democracia. Mientras los periodistas profesionales dejaban de (o no podían) ejercer de contrapoder, los partidos evolucionaban en burocracias jerarquizadas. Cada vez más desligados de la participación ciudadana, se centraron en recaudar votos para copar puestos en la Administración. Nada en contra, excepto que desplazaron el objetivo de la transformación social por la gestión de lo existente y, por ende, acabaron subordinados a un Mercado fuera de control.

Internet (y, en concreto, las redes sociales que en la actualidad representan su mayor frente de expansión) son tecnologías disruptivas del juego democrático tal como lo concebíamos. Internet es la *Red Social* por excelencia. Ha removido las estructuras mediáticas y partidarias, materializando una crisis de representación tan grave o más que la económica. Las fisuras abiertas hasta el momento tienen como máximos exponentes las filtraciones de Wikileaks, las cibermultitudes del 15 M y ciertas (r)evoluciones entre las que esbozaré el caso islandés. Son procesos en marcha, abiertos a la mudanza o a la regresión. Pero nos ayudan a repensar el periodismo, la política y los proyectos

Víctor Sampedro Blanco es catedrático de Comunicación Política, Universidad Rey Juan Carlos

¹ Biografía, escritos y contacto en www.victorsampedro.net

² El título avanza el de un panfleto que reunirá algunos de los escritos citados en este ensayo. En dichas referencias se pueden abundar y contrastar con datos los argumentos aquí apenas esbozados. Me debo, en gran medida, a los diálogos mantenidos en <http://propolis-colmena.blogspot.com/>. Las entradas de «redes sociales», «Wikileaks», «cibermultitudes» y «15M» contienen numerosa información que avala lo aquí expuesto. Gracias a todas las abejas de la colmena y larga vida a la Reina Republicana.

nacionales que se habrán de fraguar en el siglo XXI. La alternativa contraria ya la conocemos: el neopopulismo autoritario con un mercado mediático y político subordinados a la economía especulativa. Una democracia, en fin, de audiencias consumidoras, compatible con el recorte de derechos civiles y sociales, mientras las empresas de comunicación y los Gobiernos actúan de terminales informativas y gestoras del poder económico. Comenzaré con una clarificación conceptual y terminológica de las redes sociales, para abordar luego las peripecias de Julian Assange, la Spanish Revolution e Islandia.

Los SRS [Sitios de Redes Sociales] y el ciberactivismo

Los SRS constituyen el circuito mediático de la Internet (la Red Social con mayúsculas) con mayor tasa de crecimiento de usuarios y de creación de contenidos multimedia por parte de los cibernautas. Potencian una comunicación masiva a través de tecnologías personales. Al haber transformado el esquema comunicativo de los blogs, donde aún prima un autor individual o colectivo, en otro masivo: donde muchos se comunican con otros muchos.

Los SRS permiten construir un perfil (semi)público en un listado (más o menos cerrado) de otros usuarios que tejen un entramado interactivo de conexiones. Ese entramado puede ser centralizado y centralizador, como en Facebook; o abierto, como en N-1 (la red del 15 M). En todo caso, los SRS reproducen comunidades presenciales, las expanden o crean como nunca antes había ocurrido en la Red. Son medios “contagiosos”, inherentemente sociales, que promueven y trasladan sus debates a los medios mayoritarios. Frente a estos, ofrecen un impacto cognitivo mayor, basado en las relaciones (inter)personales que movilizan. De ahí su importancia para etiquetar, organizar y movilizar viralmente afinidades sociopolíticas.

Los SRS ofrecen una estructura de interacción a medio camino (o que combina) grupos muy cohesionados fuera de las pantallas y otros que lo están menos y se gestan en la Red. En uno de los polos se encuentran MySpace o YouTube, que se orientan a comunidades virtuales poco unidas con usuarios muy dispersos. En el otro extremo figuran los Sistemas de Redes Sociales Móviles (*Mobile Social Network System*, MSNS) basados en la telefonía digital. Muy extendidas en la población permiten una comunicación continua y personalizada. Facebook, Twitter y, entre los jóvenes españoles, Tuenti, son los iconos nuevos de Internet.

Los dispositivos móviles aumentaron geoméricamente la extensión de las redes sociales. No sólo por cuestión de portabilidad o la conexión permanente, sino también por confianza (y, por ende, impacto). Baste señalar que, como máximo, “abrimos” uno de cada cuatro correos electrónicos no solicitados, mientras que leemos el 95% de los SMS que recibimos. Twitter, una infinidad de micro blogs con caracteres limitados, viene a equiparar una entrada de blog con un mensaje de texto; de ahí, parte de su éxito.

Entre las muchas confusiones inadvertidas y fabricadas que nos invaden, destaca la que identifica redes sociales con medios sociales o comunitarios. Cabe aclarar que los últimos persiguen la autosostenibilidad económica (no el lucro), para mantener una independencia que permita cumplir un fin social: sostener y hacer avanzar una comunidad, su identidad e intereses. Si nos dejamos llevar por el lenguaje promocional, incurriremos en errores no exentos de peligro. Baste señalar dos: idealización y absolutización.

- (a) Los SRS (e Internet en general) son tecnologías tanto de autonomía como de control. Su fin es económico y se cifra en el *data mining* o la extracción de información para formar bases de datos. Puestas a la venta, representan un enorme negocio, como pieza clave de cualquier campaña de marketing comercial o electoral. En manos de los servicios de inteligencia representan un potente instrumento de guerra y represión interna.
- (b) La absolutización considera erróneamente que el impacto político-social del activismo digital no precisa de comunidades reales (redes de carne y hueso, mujeres y hombres) ni de los medios masivos (en concreto, la televisión, el medio aún hegemónico). Sin presencia en la calle o en las teles, la tecnopolítica pierde gran parte de su fuerza. Sin Al Jazeera sería dudoso que se hubiera extendido la primavera árabe. Sin aparecer en los telediarios, el 15 M no sería conocido por la población que no accede a Internet, menos aún a los SRS. Sólo el 12% de los hogares españoles con conexión a internet participa en alguna red social, frente al 35% de los europeos.³

Tendemos a pensar en la tecnología como palanca prodigiosa de progreso o amenaza de apocalipsis. Y nos preocupan sus efectos sobre los individuos. Una imagen extendida es la de los jóvenes aislados en sus pantallas, alienados y autistas al contacto físico. Pero lo cierto es que los nativos digitales (nacidos con Internet) combinan y refuerzan sus relaciones *online* y *offline*, hasta tal grado que resultan indistinguibles. Suelo citar a este respecto que, cuando abrí mi cuenta en Facebook, el único que no lo usaba para citarse o quedar con amigos, para felicitarles el cumpleaños o reír sus gracias, era yo.

Antes de proyectar patologías (en realidad, miedos) de unas tecnologías que ni conocemos, ni usamos bien, ni sabemos cómo evolucionarán, propongo pensar en términos institucionales y sociales. Ahí las disfunciones son evidentes. Pero no para nosotros, sino para las burocracias que han hecho de la comunicación y el debate público su principal tarea. Frente a ellas la Red facilita la comunicación horizontal, colaborativa y gratuita. Estos tres rasgos han quebrado los monopolios profesionales del periodismo y la política. Porque podemos convertir nuestros ordenadores, móviles y tabletas en medios de comunicación y nodos políticos de alcance masivo.

³ Eurobarómetro de noviembre de 2010. <http://www.puromarketing.com/18/8176/indice-penetracion-internet-espainferior-union.html>.

Los tres rasgos señalados resultan radicalmente opuestos a los que acabaron de perfilar la prensa corporativa y los partidos en el siglo XX. La colaboración horizontal entre iguales que permite la Red se opone a la división jerarquizada del trabajo y a los privilegios de quienes ocupan los puestos superiores. Frente a sus conocimientos y capacidades, siempre limitadas, surge la inteligencia colectiva que, bajo ciertas condiciones, asegura resultados muy superiores al más insigne comité de sabios que pueda reunirse.⁴ Incorporada a organizaciones e industrias, está generando nuevas formas de producción y distribución en economías abiertas y colaborativas.⁵

Ligado a lo anterior y opuesto a la mercantilización capitalista, la cultura digital favorece lo gratuito y el procomún. Frente al patrimonialismo, prima el placer de generar bienes y servicios que consumimos y compartimos sin pagar ni cobrar dinero, pero añadiéndoles valor. Por ejemplo, cada vez que compartimos un link de una noticia, redifundimos la publicidad asociada y le conferimos una credibilidad adicional. Las retribuciones no son monetarias: el intercambio frente a la venta, el gustazo de compartir lo que encanta o, ¿por qué no?, la búsqueda de reconocimiento.

Por último, lo digital traspasa fronteras. Borra los límites espaciales con su alcance potencialmente global y casi en tiempo real. De ahí que, en plena crisis de control tecnológico (cuando Internet aún no está controlado por el Estado y el Mercado),⁶ hayan entrado también en crisis los políticos y los periodistas. Si los primeros son considerados el tercer problema más importante de España,⁷ los segundos constituyen uno de los gremios más precarizados, con ERE continuos y empresas incapaces de renovar audiencias.⁸

Carl Schmitt escribía que la representación arrastra el drama de representar la ausencia de los representados. El pueblo invisible sólo se hace presente con los representantes. Y este drama (porque la representación vacía de poder al Pueblo)⁹ se vuelve tragedia cuando la ciudadanía se presenta en las plazas y se representa sin pedir permiso, convocándose y manifestándose con sus propios medios. Crea así un nuevo espacio público, por necesidad antagónico. A nadie le gusta acampar en una plaza acosado por la policía. Si lo hace es porque cree que las noticias son las mentiras del poder; las elecciones, un meca-

⁴ Th.s D. Seeley, *Honeybee Democracy*, Princeton University Press, 2010.

⁵ J. Surowiecki, *The Wisdom of the Crowds*, Abacus, Londres, 2009.

⁶ V. Sampedro, «¿Redes de nudos o vacíos? Nuevas tecnologías y tejido social», *Documentación social. Revista de estudios sociales y sociología aplicada*, núm. 140, Caritas Editores, Madrid [disponible en www.victorsampedro.net], 2006.

⁷ CIS, Estudio núm. 2.914, Barómetro de octubre, Pregunta 7.

⁸ V. Sampedro, «Periodismo ciudadano, precariedad laboral y depauperación de la esfera pública» en P. Pérez Herrero; Rivas Nieto y R. Gelado Marcos (coords.), *Estudios de Periodística XIV - posibilidades y riesgos para el discurso informativo*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca [disponible en www.victorsampedro.net], 2009.

⁹ C. Schmitt, *Teoría de la constitución*, Alianza, Madrid, 1983.

nismo de turnismo pactado; y los planes de desarrollo, urbanizaciones que miran hacia el abismo.

Las nuevas formas de activismo residen en recodificar los programas.¹⁰ Intentan cambiar el código base del periodismo y de la democracia, revirtiendo sus procesos en contra de las estructuras de poder impunes. Es lo que persiguen los *hackers* o *hacktivistas* (no confundir con *crackers*, que son “los malos”). Y es a lo que se dedican los buenos programadores. Hacer, en lugar de hablar. Ofrecer respuestas y soluciones sencillas a problemas complicados (lo mismo que pretenden periodistas y políticos). Pero dándole la vuelta al sistema, poniéndolo a funcionar contra sus arquitectos y gestores. En definitiva, se propone que en lugar de afrontar la crisis con miedo, la aprovechemos como oportunidad para las poblaciones y no sólo las corporaciones. ¿Cómo? Desarrollando desde la autonomía que permite Internet prácticas políticas de control y transparencia. Mientras los SRS nos sirvan, adelante. Cuando dejen de hacerlo, ya inventaremos otra cosa y migraremos a ella.

Los medios sociales o comunitarios persiguen
la autosostenibilidad económica para mantener
una independencia que permita cumplir un fin social:
sostener y hacer avanzar una comunidad,
su identidad e intereses

Wikileaks

Sólo los medios corporativos y las facultades de comunicación lo niegan. Por la cuenta que les trae. Su caída sería aún más dura. Wikileaks ha abierto el camino para recuperar el periodismo como arma de combate contra mentirosos, corruptos e incompetentes. Nadie se ha cobrado más piezas que Assange. Con él el periodismo ha vuelto a ser un arte de caza mayor, un deporte de combate: contrapoder que no quiere poder.

Wikileaks se tejió en las redes de la contracultura y los movimientos alternativos que la revolución conservadora se ha encargado de dinamitar desde los años ochenta del siglo XX. En la biografía de Assange confluyen el neohippismo rural de su madre, la ética *hacker* y *ciberpunk*, la antiglobalización y las ONG... y al final, ya lo veremos, el sueño de un país soberano, de hielo y fuego.¹¹

¹⁰ M. Castells, *Comunicación y poder*, Alianza, Madrid, 2009.

¹¹ V. Sampedro, «Wikileaks. La revolución está siendo televisada», *Revista Razón y Fé*, núm. 1.348, [Disponible en www.victorsampedro.net], 2011.

Si algo ha dejado claro Wikileaks es una enseñanza triple a los cinco medios con los que pactó la gestión de los cables diplomáticos estadounidenses. 1. El alcance de la gratuidad, al brindarles el usufructo de una información de valor incalculable en el mercado del espionaje; 2. Las enormes ventajas de la colaboración; chocando de plano con la periclitada definición de “exclusiva periodística” y acompasando varios diarios y un semanal (*Der Spiegel*); 3. Y cómo los medios pueden formar una red transnacional, garantizando un marco común de (a)legalidad desde el que representar los intereses de la sociedad civil global. En breve: el *New York Times* blindaba, gracias a la Primera Enmienda norteamericana, al resto de los diarios. Actuaron así en el marco (a)legal necesario para combatir a quienes hasta ahora se habían beneficiado de tal estrategia: las transnacionales y los ejércitos mercenarios, los capos del narcotráfico y los especuladores financieros...

Los papeles de Afganistán (en especial, el vídeo *Collateral Murder*) y el Cablegate de la diplomacia estadounidense marcan el inicio del acoso de EE UU y de sus brazos corporativos. La negativa de Mastercard, Visa y Paypal a procesar las donaciones a Wikileaks son la censura capitalista a la liberación de información que antes había despertado la represión china y de las dictaduras asiáticas y africanas cuyas disidencias había apoyado la organización de Assange. Bradley Manning, el supuesto filtrador, permanece preso en un Guantánamo que, instalado en el seno de la democracia estadounidense, aplica a rajatabla los métodos de las purgas estalinistas. Wikileaks ha perdido el 95% de sus donaciones (único modo de financiamiento) y Assange puede ser extraditado, primero a Suecia y luego a EE UU, para convertirse en reo del Gran Jurado de Virginia (habilitado para aplicar la pena capital).

Esta represión, apenas denunciada por los antiguos medios colaboradores, podría convertir (incluso con cobertura mediática) a Assange y Manning en falsos mártires de la libertad de expresión: víctimas y no ejemplos a seguir. Pero los intentos de esos mismos medios por replicar buzones donde recibir filtraciones anónimas o los fichajes de antiguos colaboradores de Wikileaks en sus redacciones muestran a las claras que el nuevo periodismo no podrá hacerse sin la complicidad de la ciudadanía más empoderada en la Red. Igual que la política que pretenden poner en práctica las nuevas generaciones de electores. El voto (como la información) va unido a la participación y a la transparencia o se convierte en cheque en blanco a la opacidad.

El 15 M y la Spanish Revolution

Las movilizaciones del 15 de mayo constituyen la puesta de largo de un movimiento de movimientos e individuos gestado hacía tiempo. Las cibermultitudes se autoconvocaron, como habían hecho en el *Prestige*, el No a la Guerra, el 13 M de 2004, y las sentadas por una

vivienda digna. Fueron grandes movilizaciones, algunas superiores en seguidores y calado a las de la transición o, más recientemente, a las programadas por el PP durante el primer Gobierno de Zapatero. En todos estos años una pregunta, apenas formulada, tiene ahora respuesta: ¿quién socializaría políticamente a todas esas generaciones que saltaron de la Red a las playas de Galiza en noviembre de 2002 y que, desde entonces, han ocupado con intermitencia las calles hasta tomar las plazas?

Con mirada histórica, esta genealogía del 15 M lo presenta unido a las movilizaciones sociales que enfrentaron los consensos de la Transición española, con Internet como lugar de encuentro y socialización

El 15 M es fruto de su confluencia con movilizaciones precedentes. La insumisión al servicio militar (1989/1996),¹² el 0'7% (1994, primera acampada, hasta la sentada ante el Congreso de 2000)¹³ y el altermundismo (la antiglobalización que a partir de 1999 en Seattle sumó ecologismos, feminismos y nacionalismos internacionalistas, anticapitalistas e indigenistas). La primera manifestación mundial, en contra de la invasión de Irak, en febrero de 2003 sería señalada como la puesta de largo de “una opinión pública mundial”. La antiglobalización pareció desvanecerse por represión (el asesinato de C. Giuliani en 2001 en Génova) y éxito. Algunas de sus banderas –el 0.7% del PIB para la cooperación, la Tasa Tobin– han acabado siendo recogidas (y vaciadas de contenido) en programas electorales y de gobierno que ahora prometen sostenibilidad y gobernanza global.

Con mirada histórica esta genealogía del 15M lo presenta unido a las movilizaciones sociales que enfrentaron los consensos de la Transición española, con Internet como lugar de encuentro y socialización.¹⁴ La insumisión representó el rechazo al ejército franquista, supuesto garante del cambio democrático. El movimiento del 0'7% enfrentaba el desarrollismo del “pelotazo” económico avalado por la socialdemocracia. Sus seguidores se reconocieron en el zapatismo tras criticar los fastos “del 92”. Y el altermundismo opuso los cuerpos de los manifestantes a las estructuras del G20, FMI y BM en las contracumbres. Denunciaban la “doctrina del shock” (N. Klein) aplicada ahora en nuestras sociedades.

¹² V. Sampedro, *Movimientos sociales. Debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996)*. Centro de Estudios Constitucionales-BOE, Madrid [disponible en www.victorsampedro.net/], 1997.

¹³ A. Jerez, V. Sampedro y J. López Rey, *Del 0,7 a la desobediencia civil: política e información del movimiento y las ONG de Desarrollo (1994-2000)*, CIS, Madrid, 2008.

¹⁴ V. Sampedro y J. M. Sánchez Duarte, «La Red era la plaza». Epílogo, en *Cibercampaña. Cauces y diques para la participación. Las elecciones generales de 2008 y su proyección tecnopolítica*. UCM, Madrid [disponible en www.ciberdemocracia.es/], 2011.

Todas esas movilizaciones se caracterizaron por la desobediencia civil no violenta: negarse a la mili y la prestación social, practicar la objeción fiscal, acampar en la vía pública y convocar referéndums sin permiso oficial, tomar las calles, bloqueándolas mediante la acción directa no violenta. Repertorios estratégicos, tácticas y discursos que se nutrieron y expandieron en la Red, confluyeron con otros nuevos y alcanzaron escala transnacional.

El siglo XXI se inaugura con las cibermultitudes que exigen que su voto cuente para algo y se traduzca en emancipación y calidad de vida como lo hicieran las venerables abuelas y el movimiento obrero, de modo horizontal y colaborativo, gratis y transnacional

El *Prestige* despertó la automovilización de los jóvenes contra la economía del petróleo y sus guerras.¹⁵ El «No a la Guerra» desbordó de nuevo a la izquierda oficial relegándola con convocatorias autónomas. Los más activos exigieron en la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, después de tres días de confusión y mentiras, «la verdad antes de votar». Denunciaron que el sistema político-informativo no servía siquiera para eso. Reafirmaron el suelo, salvaron la línea de flotación de la democracia.¹⁶ Quien entonces tenía 10 años pudo votar por primera vez en 2011, pero está en paro o es becario o precaria. Apenas dos años después del 13M, el Movimiento por una Vivienda Digna señalaba que el horizonte económico de las nuevas generaciones ni siquiera contemplaba el derecho a techo. Esa muralla al desarrollo personal y familiar se ligó a la burbuja inmobiliaria que acabaría estallando, tras degradar no sólo el medio ambiente, sino también unas instituciones políticas cada vez más corruptas.

En ese caudal de activismo ciudadano, al margen y en contra de los medios y los partidos, convergieron jóvenes y no tan jóvenes que durante dos décadas han defendido la neutralidad de Internet (igualdad entre usuarios sean cuáles sean los datos que transmitan). Han creado la Red como ámbito de autonomía, debate y movilización, y generado una impredecible sinergia entre la política *online* y *offline*. En las Elecciones Generales de 2008 se opusieron al canon digital (que graba todo dispositivo informático por presunción de piratería). Ya en 2011 ayudaron a Wikileaks, replicando sus filtraciones, en especial, las que desvelaban la ley Sinde como fruto del *lobby* de la industria norteamericana. Contemplaban con envidia las primaveras árabes. Y, finalmente, para sorpresa de muchos, se autoconvocaron, tomaron Sol y acabaron con la campaña electoral de mayo de 2011. Esta fue invis-

¹⁵ V. Sampedro, "Nunca Más: la marea, el dique y el bunker en La red en la calle ¿cambios en la cultura de movilización?" en E. Grau, P. Ibarra (coords.), *Anuario de movimientos sociales 2003*, Icaria, Barcelona [disponible en www.victorsampedro.net], 2003.

¹⁶ V. Sampedro, *13M: Multitudes online*, Los Libros de la Catarata, Madrid [disponible en www.victorsampedro.net], 2005.

bilizada por una crítica radical que sin embargo se demostró consensual. La mayoría de las encuestas avalan el rechazo de $\frac{3}{4}$ partes del electorado a un bipartidismo de facto con políticas económicas idénticas, a una ley electoral que las blindo y otra ley de transparencia aún inexistente (anomalía donde las haya en la UE). En definitiva, el nuevo activismo salvó el suelo de nuestra democracia en 2004 y desde entonces ha elevado su horizonte reclamando una economía social de mercado y más calidad democrática.

Si el siglo XX se inauguró con las sufragistas pidiendo que se contasen los votos de las mujeres, el XXI se inaugura con las cibermultitudes que exigen que su voto cuente para algo y se traduzca en emancipación y calidad de vida. Lo hacen como las venerables abuelas de modo horizontal y colaborativo, gratis y transnacional; como, por cierto, antes había hecho el movimiento obrero.

¿Dónde se materializa esta nueva política? Aún es pronto para decirlo. Apenas cuenta con veinte años y para todavía muchos ciudadanos es un territorio ignoto. Necesitamos otras dos décadas para constatar los cambios que, antes o después, adoptarán los partidos, los parlamentos, los sindicatos, el trabajo y los negocios. Pero hay hacia dónde mirar.

Islandia

La (r)evolución del siglo XXI lleva su primera letra entre paréntesis.¹⁷ No consiste en tomar el poder. Sino en atarlo corto: hacerlo participado y transparente. Dar voz al pueblo para enfrentar a los mercados y exigir responsabilidades a los delincuentes financieros, como hizo Islandia convocando dos referéndums y encausando a algunos de sus políticos y banqueros. Con todo, esto podría parecer insuficiente para hablar de revolución.

Y, sin embargo, el sustantivo cobra cuerpo con tres iniciativas de calado. Desplegadas al hilo de la crisis muestran un *pragmatismo radical* que, reconociendo la quiebra del neoliberalismo, remueve las raíces éticas y constitucionales de la nación. En última instancia, se plantea un nuevo modelo económico. Islandia pretende “resetear” su democracia, “reiniciándola” con los principios *hacker*: controlar al poder y castigar su impunidad. Transparencia y participación.

La respuesta islandesa a la crisis económica fue una resistencia pragmática a los mercados. Reconocieron la quiebra de sus bancos y los nacionalizaron, al tiempo que remitían el pago de la deuda extranjera a los tribunales internacionales, tras negarse dos veces a

¹⁷ Los argumentos y datos de este epígrafe están desarrollados en V. Sampedro, «La revolución islandesa. No una, sino tres» en J. Fernández, M. Urbán y C. Sevilla (comps.), *Indignad@s del mundo, uníos* [en prensa], Icaria, Barcelona [disponible en www.victorsampedro.net].

aceptar las condiciones impuestas. Estas medidas han sido obviadas por el resto de países occidentales en crisis, pero no alcanzan el grado de revolucionarias si se consideran los costos sociales de la devaluación de la moneda nacional, el “corralito” existente, la emigración forzosa, la subida del paro y de los impuestos; entre otros ajustes ortodoxos. La recuperación islandesa es, sin embargo, una realidad. Y cobra tintes revolucionarios si, aparte de la dimensión económica, se contemplan otras tres, menos conocidas aún si cabe.

La revolución jurídico-ética

Tras el estallido de la crisis, una Comisión de la Verdad realizó un informe sobre responsabilidades e irregularidades que debieran ser perseguidos por una Fiscalía específica e independiente. Resultados penales aparte, al menos el Estado de Derecho mantuvo los principios de igualdad legal y la obligatoria rendición de responsabilidades. Los responsables máximos de la debacle han sido identificados y denunciados en público, viéndose privados de la posibilidad de gestionar los fondos públicos de rescate. No es de extrañar que el movimiento global de indignados haya recuperado estas banderas como exigencias.

Mucho más importante (y factible de aplicar), la sociedad islandesa está inmersa en un proceso de revisión de los códigos deontológicos que rigen en numerosos gremios implicados en la crisis. Imaginen a las universidades y las empresas, a los Colegios profesionales de abogados, jueces y fiscales, arquitectos, periodistas y académicos... señalando corrupciones e incompatibilidades, intentando reconducir sus profesiones en términos de servicio público. Las medidas jurídicas antes señaladas, sumadas a esta regeneración ética, suponen la revisión del pasado y un intento de ruptura hacia otro futuro.

Rescritura ciudadana del marco político

El futuro arranca con nuevos pilares constitucionales, con la reescritura colectiva de las constituciones del siglo pasado, que pretende reprogramar la democracia, reformulando las instituciones representativas en función de la nueva potencialidad de los representados. Se trata de establecer un nuevo tablero de juego que sustituya al caduco. Recuperar y actualizar los fines de la democracia, implicando a toda la sociedad y, sobre todo, a los jóvenes.

Islandia ha hecho real lo posible; es decir, la participación no profesional y colaborativa de cuerpo electoral como fuerza autoconstituyente. Se logró asumiendo mecanismos de elección abiertos a todos los ciudadanos, que luego, desde plataformas de debate presenciales y digitales, persiguieron consensos incluyentes. Esto explica que en el nuevo texto constitucional figuren los derechos de la naturaleza al mismo nivel que los humanos, la ren-

dición de cuentas y transparencia obligatorias de empresas mediáticas y partidos, las iniciativas legislativas populares, las listas electorales abiertas, etc. Como no podía ser de otra forma, el Parlamento enfrenta con recelos esta propuesta. Pero los nuevos objetivos de lucha e ideales políticos están planteados. El tablero seguirá convulsionado, pero ya no es el mismo. No sostiene más el proyecto de desarrollo nacional que llevó a la debacle.

Islandia ha hecho real lo posible, la participación no profesional y colaborativa del cuerpo electoral como fuerza autoconstituyente; mediante mecanismos de elección abiertos y plataformas de debate presenciales y digitales, persiguieron consensos incluyentes

Nuevo modelo de desarrollo

La Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IIMM) aplica hasta sus últimas consecuencias los principios de una economía sostenible de la transparencia digital. Se trata de convertir la isla-paraiso fiscal que perseguían los neoliberales del “capitalismo vikingo” en su modelo contrario. Islandia construirá la Suiza del byte. Las vías para hacerlo: alojar servidores blindándoles de toda interferencia estatal, proteger a los medios y periodistas perseguidos en todo el mundo, reuniendo en un solo texto las legislaciones más garantistas de la libertad de expresión y de Internet. El buque insignia del proyecto iba a ser el grupo multimedia que Wikileaks tenía en ciernes, tras haber actuado de promotor de esta iniciativa.

Sunshine Press iba a ser el nombre. Por si a alguien se le escapa la coincidencia casual: “Prensa del rayo de sol”. ¿Por qué no Sol, de la Puerta del Sol? Aunque necesite recursos y matices, la IIMM brinda un marco transnacional y colaborativo que amenaza la impunidad de una élite globalizada que salvaguarda su negocio en paraísos fiscales, transfiriendo a las poblaciones los costes de su lucro y desgobierno. La IIMM genera además un juego político abierto y participado más allá de las fronteras nacionales. Su éxito económico –basado en un clima frío propicio a los servidores, la penetración plena de las nuevas tecnologías en la población y el liderazgo nacional en algunos ámbitos de la industria digital– sería un doble éxito democrático, interno e internacional. Habría implantado un nuevo modelo económico sostenible, con la semilla política de la transparencia y alcance global.

Nada impide propuestas semejantes de desarrollo glocal, para invertir los procesos de globalización que llevaron a la crisis a tantas otras comunidades pequeñas, explotando sus ventajas comparativas en un mundo globalizado. El secreto reside en implicar a los ciudadanos como sujetos comunicativos y políticos de pleno derecho. Son capaces actuando en red. Su autonomía y autoorganización pueden servir para resistir con pragmatismo la dicta-

dura de los mercados. Permiten purgar las élites y regenerar éticamente a la sociedad civil. Refundan los marcos políticos (en lugar de constituciones, reescribamos estatutos autonómicos o municipales). Y, en último término, configuran un nuevo modelo económico basado en (y generador de) transparencia y apertura.

Necesitamos representantes que se atrevan a defender la soberanía nacional devolviendo la voz y la iniciativa a las poblaciones. Y si los indignados del mundo desarrollan iniciativas con ese calado, materializando propuestas más allá de la protesta, *hackearán* el periodismo, resetearán la democracia. En lugar de eliminarlos (como amenazan las dictaduras de mercado que se perfilan), los revitalizarán como las herramientas de control e intervención ciudadana que nunca debieron dejar de ser.

Crisis del sistema democrático. Hacia una redefinición de nuestra vida en común

A la profunda crisis económica y ecológica que padecemos le acompaña la crisis del propio sistema democrático, que recientemente acapara cada vez más atención. Es decir, el cuestionamiento del actual sistema de funcionamiento y organización para resolver los conflictos derivados de los distintos intereses de quienes formamos la sociedad y que, obviamente, incluye el sistema de representación política. Este contexto plantea la urgencia de interrogarnos sobre cómo organizar nuestra vida en común, cómo interactuar entre todas y todos y con la naturaleza y, en definitiva, sobre qué valores y qué modelo de organización de la sociedad perfilar un horizonte del buen vivir de todas las personas.

En el actual contexto de crisis no solo económica, ecológica y social, sino también de nuestro sistema democrático, el ejercicio de la ciudadanía se ve menoscabado, aún más, por la exacerbación de las desigualdades y la profundización de los procesos de exclusión de cada vez más personas y grupos, a los que se empuja fuera del sistema.

A menudo se dice que las coyunturas de crisis abren la posibilidad para poner en marcha ideas y proyectos alternativos. Percepción que cabe entenderse como una oportunidad para enfrentar en el día a día los múltiples riesgos del deterioro social y ecológico, y al tiempo experimentar y reflexionar sobre cómo participar en el proceso de definición y decisión de lo que es común, sobre la forma de recomponer una comunidad política, participada por todas y todos, que permita vislumbrar nuevos senderos de democracia real.

Las exclusiones de la ciudadanía

En el actual sistema democrático la ciudadanía es la categoría reguladora de la inclusión y pertenencia al mismo. Su dinámica fija, por tanto, procesos de

Justa Montero es magíster en género y políticas de igualdad y en inmigración refugio y relaciones intercomunitarias

inclusión y de exclusión que diferencian entre quienes son ciudadanos y ciudadanas y quienes no son considerados como tales por su pertenencia a un particular colectivo social. El resultado de esos complejos procesos aparece claro, como por ejemplo en el caso de las mujeres, en la medida en que se las define por su adscripción de género: se incluye a las mujeres en tanto que ciudadanas en las instituciones como símbolo de “normalización democrática”, al tiempo que se las excluye en tanto que inmigrantes del derecho a participar en la elección de dichas instituciones o de disfrutar de derechos sociales básicos. En ningún caso la inclusión o la exclusión se realizan en términos absolutos, de forma que el sistema muestra su capacidad para moldear, según las coyunturas, la parte del grupo que integra y la que excluye y sitúa al margen de la sociedad.

Esta característica de “la ciudadanía” significa que se estructura sobre procesos duales que jerarquizan las diferencias y por tanto generan desigualdades:¹ la dualidad de género que constituye a hombres y mujeres con identidades cerradas; la de origen o etnia que recrea un “nosotras/nosotros” y “ellas/ellos” con connotaciones colonizadoras; y la de las clases sociales.

Se podría dibujar un mapa con las fracturas que originan los procesos de exclusión, explotación, sometimiento patriarcal, heterosexismo, racismo o de depredación de la naturaleza. Sería un mapa multidimensional en la medida en que estas dualidades no operan como instancias estancas, y la interacción entre los sistemas de dominación tiene como resultado distintas vivencias de la discriminación en función de la posición de cada cual en las jerarquías sociales.

Nadie es solo una mujer, ni solo un inmigrante, y habrá que ver cómo la condición de género, clase, etnia, sexualidad singulariza las manifestaciones del machismo o del racismo. Por otro lado, esas dicotomías que la modernidad estableció son contestadas y transgredidas desde prácticas sociales no hegemónicas y enfrentadas a los sistemas.

En todo caso, la acepción dominante de ciudadanía se establece desde el poder, que se arroga la potestad de marcar las normas del funcionamiento social, hasta decidir quién es y quién no es ciudadano o ciudadana y los derechos a que da lugar dicha condición. De esta forma, define quién es sujeto de derechos y sitúa fuera de lo social a quienes no se ajustan a dichas normas: son las y los excluidos del *demos*.

Algunas de esas normas fijan la ciudadanía en relación con el mercado laboral, de forma que se adquieren derechos si las personas tienen la condición asalariada. Es ciudadana o

¹ Intervención de J. Montero en «El Estado de la nación», jornada de debate organizada por el 15 M, Puerta del Sol, Madrid, julio 2011.

ciudadano quien goza de reconocimiento como trabajador asalariado, y como tal obtiene sus prestaciones; de esta forma el trabajo asalariado se constituye como elemento articulador de buena parte de los derechos sociales, para empezar, de todos los que se derivan de la seguridad social.

Esto requiere, como plantea Robert Castel,² una clasificación de las personas en categorías homogéneas en función de su posición respecto al empleo: quienes trabajan, quienes están en paro, y las personas excluidas por definición, expulsadas a terreno de nadie, sin los derechos asociados al trabajo remunerado y estigmatizadas socialmente.³ Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se autodenominan trabajadoras del sexo y reclaman ser consideradas como tales para adquirir derechos, su condición de ciudadanas, y poder vivir sin lo que marca toda su vida: el estigma social.

La interacción entre los sistemas de dominación tiene como resultado distintas vivencias de la discriminación en función de la posición de cada cual en las jerarquías sociales

Cobra aquí todo su sentido la afirmación de «el derecho a tener derechos» que formuló Hannah Arendt en *El origen del totalitarismo*: el derecho a ser reconocida por los demás como persona y los derechos que se derivan de tal reconocimiento. Supone, tal y como desarrolla Benhabid,⁴ tener un reconocimiento y una aceptación social y alcanzar condición jurídica dentro de una comunidad política concreta. Es, tomando otro ejemplo, el derecho de una persona refugiada a obtener una ciudadanía.

Porque, también determinadas normas fijan exclusiones en función de un origen o identidad diferenciada de la dominante en una sociedad. Esta es la función de las leyes y del entramado normativo de extranjería, que se aplica a las y los inmigrantes y que puede llevar a situaciones de negación absoluta de derechos, incluso del derecho a la atención sanitaria, como sucede con quienes viven sometidos al régimen carcelario de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).

Y, sin ánimo de agotar la extensa lista de normas,⁵ también resultan representativos los procesos de exclusión e inclusión que establecen las normas “culturales” y las representaciones simbólicas, siempre sometidas a interpretaciones políticas. Un ejemplo muy signifi-

² R. Castel, *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé*, La republique des idées, Editions du Seuil, París, 2003.

³ Categorías atravesadas también por las diferencias de género.

⁴ S. Benhabid, *Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos*, Gedisa, Barcelona, 2005.

⁵ Se utiliza el término “norma” en su acepción amplia no necesariamente jurídica, sino en el sentido general de norma social.

cativo es el tratamiento al uso del *hiyab*, o pañuelo musulmán, por mujeres de origen magrebí y los debates y medidas que ha suscitado. La polémica entre quienes lo aceptan acríticamente como práctica social, quienes lo consideran icono cultural de una diferencia interiorizada, y posiciones islamofóbicas que criminalizan a las mujeres que lo utilizan, ha dejado en ocasiones indefensas a algunas de estas jóvenes. De ello derivan procesos tan excluyentes como privar del derecho a la enseñanza a chicas que lo llevan en la escuela pública.⁶

Una universalidad que no es neutra

Por paradójico que resulte, el concepto de ciudadanía remite a una idea universalista según la cual las y los individuos son sujetos iguales en derechos. Esta aparente neutralidad, persistentemente señalada desde la teoría feminista por su carácter androcéntrico, tiene una enorme funcionalidad al establecer las normas, a las que he hecho referencia antes, por las que se intenta fijar la pertenencia y exclusión sobre la base de la unidad de necesidades, deseos e identidades de las personas.

Sin embargo, supone, claro está, la exclusión de quienes no responden a esa norma por no ser asalariada, trabajar en precario, ser inmigrante, tener otras referencias culturales, vivir la sexualidad fuera de la heteronormatividad, o estar adscrita a un género. Como señala Eleni Varikas,⁷ la democracia histórica se fundó en la desconfianza de lo múltiple a través de la unificación coercitiva de lo uno, que vuelve irrepresentables a quienes no corresponden a la norma única, e invisibiliza la diversidad de situaciones y las relaciones de poder que atraviesan la vida en sociedad.

De esta forma las desigualdades aparecen desdibujadas, cuando no encubiertas, y adquiere legitimidad un modelo de ciudadanía excluyente. En realidad “ciudadanía” es un concepto permanentemente en disputa. Por un lado, está el sentido que se le da desde los poderes y, por otro lado, la redefinición buscada por los movimientos políticos y sociales para ampliar su significado e incorporar a los derechos civiles, que la modernidad estableció, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que, con limitaciones, se han ido conquistando.

Así, el cuestionamiento y ruptura de esas normas hostiles a las necesidades e intereses de la mayoría ha introducido importantes fisuras a través de la acción colectiva y de prácticas sociales no hegemónicas, que tratan de hacer más inclusiva la ciudadanía para mujeres y hombres, y de la que hay multitud de ejemplos. Puesto que, frente a posibles

⁶ Para profundizar en este tema véase, Á. Ramírez, *La trampa del velo*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

⁷ E. Varikas, «¿Una ciudadanía “como mujer”? Paridad versus igualdad», *Viento Sur*, núm. 52, 2000.

lecturas lineales, no está de más señalar que, con esas limitaciones, la articulación de derechos y la formación de identidades colectivas no han sido cosas otorgadas. Muy al contrario, se han logrado a través de fuertes conflictos sociales y políticos protagonizados por distintos sujetos, cuyo liderazgo ha ido cambiando a lo largo de ese prolongado proceso.

La naturalización de las desigualdades profundiza los estereotipos de género que responsabilizan a las mujeres del trabajo de cuidados y exonera al Estado de los servicios públicos y a los varones de su obligada corresponsabilidad

Cuando el Estado abandona el bien-estar

El Estado del Bienestar como garante de un conjunto de servicios, protecciones y derechos, como son la salud y la educación, es el marco en el que el ejercicio de la ciudadanía adquiere sentido social porque permite cierto nivel de generalización de derechos, al tiempo que funciona como mecanismo de regulación de las sucesivas crisis económicas. Pero la crisis financiera le ha dado la puntilla y ha caído rendido a la avaricia de los mercados.

Cuando se llega a una crisis de la envergadura de la presente, lejos de funcionar como Estado del bienestar, pasa a hacerlo, más que nunca, como instrumento de legitimación de las desigualdades al socializar las pérdidas económico-financieras repercutiéndolas sobre quienes no las han generado. Y eso, como es bien conocido, supone arrebatar derechos e ingresos, privatizar, quitar prestaciones, suprimir ayudas, establecer formas de beneficencia para las situaciones más extremas de exclusión y reformular el propio derecho al trabajo, eje de inclusión (y exclusión) social por excelencia. En realidad se está produciendo un cuestionamiento del propio concepto de derechos sociales.

Estamos viendo cómo el discurso neoliberal trata de convertir los derechos básicos en privilegios (por ejemplo, tener un contrato fijo) que defienden quienes lo tienen –como expresión del egoísmo del individuo–, contra los que tienen que levantarse quienes no gozan de ellos. Una interpretación en abierta confrontación con la lógica que persigue la extensión y universalidad de los derechos.

El pensamiento neoliberal intenta que la comunidad se someta a la dependencia de la lógica del mercado e imponer, al menor coste posible, una resignificación de los valores. Por eso, en vez de hablar de ciudadanía social, se habla de responsabilidad personal, en lugar de derechos, se habla de sentimientos. Todo ello resulta enormemente funcional para legi-

timar y encubrir el empeño por la reprivatización de las necesidades y la disolución de los lazos sociales como paso previo para arrasar con “lo público”.

Tomando nuevamente como ejemplo la situación de las mujeres y de las y los inmigrantes se puede ver cómo opera este mecanismo. La vuelta a la naturalización de las desigualdades supone, por ejemplo, profundizar en los estereotipos de género que consideran atributos propios de las mujeres los que llevan a responsabilizarlas del trabajo de cuidados, exonerando tanto al Estado de los servicios públicos imprescindibles como a los varones de su obligada corresponsabilidad.

Por otra parte, la culturización extrema de las desigualdades sociales lleva al desarrollo de actitudes y expresiones xenófobas y racistas como recientemente se han expresado en el Estado español y a nivel europeo, que encuentran en la inseguridad que genera la crisis un buen caldo de cultivo. Se consolida así un paradigma basado en un atroz individualismo competitivo, que busca deslegitimar los proyectos colectivos y la universalidad real y efectiva de los derechos.

¿Dónde queda “lo público”?

Por contradictorio que parezca con lo expuesto, el abandono de lo público por parte del Estado se acompaña del llamamiento a la participación de la “sociedad civil”, para que pase a ocupar un lugar protagonista en cubrir las necesidades y protección que toda persona necesita.

En un primer momento, se pudo pensar que la “onegeización” de parte de los movimientos sociales podía ocupar ese espacio, mediante la prestación de servicios precarizados y manteniendo una relación contractual con el Estado. Pero parece evidente que esa opción va a estar cada vez más supeditada, en estrecha concordancia con el ideario neoliberal, a la privatización de los recursos y a una modalidad benéfica para quienes estén en situación de máxima exclusión.

Y al final, siempre queda la versátil institución familiar. Resulta llamativo que en 2006, hace algo más de cinco años, se aprobara lo que el Gobierno denominó el cuarto pilar del Estado del bienestar, a partir de la «ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia».⁸ Al no integrar los derechos de las personas que necesitan atención con los derechos de las personas (mujeres) cuidadoras, se acaba consolidando el sistema tradicional basado fundamentalmente en la atención de las mujeres en el ámbito familiar. Los datos son significativos. El 90% de las personas que dejaron

⁸ Ley 39/2006 de 14 diciembre. Más conocida como “ley de dependencia”.

sus empleos para atender a terceros han sido mujeres y del total de recursos asistenciales que contempla la ley, el 51% (de media a nivel estatal) de los que se han puesto en marcha corresponden al pago a familiares (85% mujeres) que atienden en el domicilio, a quienes se les ingresa 400-500 euros que no pueden complementar con otros ingresos.

Esta ha sido la tendencia desde que se puso en marcha la ley, y sin entrar en analizar su implementación y enormes límites, parece claro que va a ser una de las víctimas propiciatorias de los recortes. Su derrumbe supondrá una auténtica tragedia para las personas dependientes que necesitan ser cuidadas y para quienes pasarán nuevamente a ser las cuidadoras principales: las mujeres.

La tendencia a la privatización de la reproducción social en el marco de las familias, supone una involución en el proceso de autonomía de las mujeres. En general es una forma fraudulenta de resolver la crisis de la organización social de los cuidados, de legitimar la inhibición del Estado de su responsabilidad, que se contrapone a la necesidad de recuperar como objetivo el buen vivir como un bien común de todas y todos.

Al tiempo que se viene abajo el carácter social de los Estados que, debilitados por su sometimiento, como nunca, a los intereses de los poderes financieros, necesitan reforzarse como instrumentos privilegiados para legitimar las políticas que necesita el capital. En consecuencia también las propias instituciones “representativas” están sometidas a los dictados de los mercados, como prueban los cambios de Constituciones y de gobiernos al margen y en contra de cualquier proceso de participación democrática que se han producido a finales de 2011.

En este momento el Estado lejos de funcionar como Estado del bienestar pasa a hacerlo más que nunca como legitimador de las desigualdades. En paralelo a su connivencia con la violencia que introducen los mercados y las agresivas repercusiones económicas y sociales del neoliberalismo, todo parece indicar que también se va a reforzar su función coercitiva. Y frente a la idea integradora asociada al Estado del bien-estar, el mal-estar social se va a extender también por la represión de libertades individuales y colectivas. A los Tratados internacionales y normativas, ya existentes –de control de fronteras frente a las migraciones– habrá que sumar, previsiblemente, un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de los conflictos derivados de la exclusión e injusticia social.

“El orden” con el que se amenaza al movimiento 15 M para reapropiarse del espacio público y dificultar así el extraordinario ejercicio de democracia puesto en práctica por ese movimiento, me parece un esclarecedor ejemplo de los choques que se van a producir en el futuro inmediato.

El mencionado abandono progresivo de “lo público” por parte del Estado choca de plano con las movilizaciones que se vienen sucediendo en este último año en defensa de la sanidad, la enseñanza y de otros servicios públicos (como, por ejemplo, los centros de atención a mujeres maltratadas). Es una respuesta diáfana a la tentación de aceptar de alguna forma como inevitable, o incluso dar por buena, la retirada del Estado de lo que, en la experiencia social de varias generaciones, se ha entendido como su obligación “solidaria”. No hay forma de garantizar la universalidad de prestaciones que requiere el derecho a la educación, a la atención a la salud y a la enfermedad, o a la dependencia, si no es mediante algún tipo de vínculo contractual con el Estado.

Como plantea Castel⁹ prescindir totalmente de los sistemas de protección es volver al estado de naturaleza, a un estado de inseguridad total. La puesta en cuestión de las protecciones no puede conducir a su supresión, sino a su reformulación en la nueva coyuntura.

Esta reformulación necesitará de un margen muy amplio para generar procesos y fórmulas de autogestión, como una garantía para que elementos de lo que realmente es común para todas y todos ocupen el centro de la vida, la economía y la política. Pero hoy no supone una alternativa global a las protecciones anteriormente elaboradas.

Tampoco es posible otorgar al Estado del bienestar el papel benefactor, de tutelaje y protección, que ya no puede cumplir ni en su versión anterior, y que usurparía cualquier posibilidad de salidas claras, anticapitalistas y de autogestión a la crisis actual. Y para darle mayor complejidad a la situación habría que incluir el necesario desenmascaramiento del discurso societario del neoliberalismo que, bajo el reclamo de participación de la sociedad, justifica su retirada de la prestación de servicios universales a las personas.

La complejidad de la situación actual, en la que aparecen claras las tendencias principales pero se desconoce su alcance y concreción, deja abiertas muchas puertas y hace más necesaria la escucha de voces plurales (o sujetos sociales). Voces de quienes están expresando abiertamente su rechazo a los efectos de esta crisis sistémica.

La progresiva reducción de la ciudadanía a una función tributaria del Estado del mal-estar, ha chocado con la irrupción de quienes quieren poner en marcha una ciudadanía radical en todos sus sentidos y dimensiones, individuales y colectivos (que puede dar lugar incluso a otro concepto). Me refiero particularmente al movimiento del 15 M, que en el ejercicio de una democracia participativa, horizontal y autogestionada supone un impulso inusitado a la resistencia social y a la voluntad de ver futuro.

⁹ R. Castel, *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé*, La république des idées, Editions du Seuil, París, 2003.

La definición y defensa de “lo común”

El 15 M, los movimientos feministas, ecologistas, anticapitalistas, viejos y nuevos movimientos, han puesto sobre la mesa las urgencias ecológicas, las derivadas de la interculturalidad, de la disputa por la igualdad, autonomía y libertad de las mujeres, del reconocimiento de las identidades múltiples, de la precarización del trabajo asalariado y de una larga serie de urgencias más.

No hay forma de garantizar la universalidad de prestaciones si no es mediante algún tipo de vínculo contractual con el Estado

Atender esos discursos y propuestas tiene una especial relevancia porque lo que plantean afecta al contenido mismo de la vida en común. Realizan un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad y de formulación de nuevos valores, que convierte en problemas sociales y políticos de atención y actuación general, condiciones sociales que habían pasado inadvertidas hasta el momento.

Tomaré dos ejemplos entre los cientos que se podría elegir. El primero, tiene que ver con la propuesta que se formula desde el ecologismo para frenar el cambio climático, que requiere un cambio radical del modelo energético, de los niveles de consumo y de la propia ordenación del territorio en el que vivimos. El segundo, se refiere a las propuestas del feminismo para frenar la violencia machista en todas sus manifestaciones, como requisito previo para hablar de sostenibilidad social, del bienestar de todas y todos. Lo que se podría extender a la propuesta de situar también en el centro de los análisis e iniciativas económicas, políticas y sociales todos los trabajos que permiten dicho bienestar.

La proclama que levantó el feminismo en los años setenta, «lo personal es político», resulta significativa en ese sentido. Supone un cuestionamiento de la forma tradicional de definir lo que es de interés general (que incluye a quiénes lo definen), al plantear en la agenda pública problemas y situaciones pertenecientes al ámbito privado, invisibilizadas hasta el momento y sujetas a relaciones de poder patriarcales.

Rescato fundamentalmente este aspecto, porque bien es verdad que ese lema podría admitir la interpretación del interés por elevar la exigencia de intervención del Estado a todos los ámbitos de la vida privada, con el consiguiente efecto de normativización asfixiante de aspectos que no lo requieren. Es decir, se podría entender que cae en la defensa de la intervención del Estado, las leyes y jueces para la resolución de todo tipo de conflictos sociales.

Hecha la aclaración, resulta relevante el proceso que desde entonces se estableció y que se podría sintetizar como la politización de los problemas y necesidades, en este caso de las mujeres pero obviamente extensible a otros sujetos. Justo lo contrario de lo que ahora pretende el neoliberalismo que es su devolución al ámbito de lo privado, a una reprivatización de las necesidades y de la resolución de los conflictos, sean de la naturaleza que sean.

Lo común no es algo dado y existe una multiplicidad de visiones y propuestas, porque, tal y como señala Eleni Varikas, la manera como se perciben los problemas y las soluciones está mediada por nuestras distintas posiciones en la sociedad, las distintas identidades y pertenencias de grupo, por más que estas y estos sean abiertos y llenos de mixturas, cambiantes y contingentes y en modo alguno homogéneas y esenciales.

Desde el feminismo se ha abordado recurrente y ampliamente los debates entorno al sujeto. Y la pluralidad de expresiones feministas, muchas de ellas consideradas fronteras por encontrarse en el cruce de identidades, han puesto el acento en la importancia de buscar la interacción entre los distintos ejes de subordinación, para comprender y articular una contestación a las complejas y diferentes manifestaciones que adopta el sexismo según contextos sociales, culturales, económicos y simbólicos. Esto ha dado origen a una importante corriente que analiza el género desde la perspectiva de clase, etnia y sexo, y plantea la necesidad de que quienes se articulan en torno a otros ejes analicen la clase, la etnia o la sexualidad desde la perspectiva del género.

Partir de esa multiplicidad de identidades y sujetos supondría poner sobre la mesa las perspectivas específicas (y cambiantes) que pueden tener distintos grupos sociales, y que derivan de unas particulares relaciones de dominación (sea patriarcal, racista, de relación con la naturaleza o de clase). Establecer lo que se considera común, los derechos, su universalidad, cómo se ejercen, en definitiva, la forma de atender y resolver las necesidades individuales y colectivas y los problemas de la vida en común, requiere procesos complejos de argumentación, intercambio, de consenso y negociación que también incluye la confrontación entre esas perspectivas múltiples.

La búsqueda de vías autónomas al paradigma capitalista y neoliberal está abierta, y un incipiente pero potente movimiento de base, tanto de ideas como de acción, está dejando clara su apuesta por una ciudadanía (o como finalmente se acabe denominando) inclusiva y horizontal. En este largo camino, valores como la convivencia, la solidaridad, el apoyo mutuo y la reciprocidad podrían ir dando cuerpo a formas compartidas de entender y situarse en el mundo, que legitimen la acción colectiva de cuestionamiento de las supuestas “verdades” que el sistema persiste en presentar. Una premisa para deslegitimarlo y para pensar en alternativas globales.

La crisis capitalista y el deseo de democracia

La política ha sido secuestrada por la economía, ante la que se inclinan los parlamentos, las instituciones, la cultura, el conocimiento y hasta el amor. El capitalismo ni siquiera en sus períodos de crecimiento puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión y en períodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente incompatible con el capitalismo. El movimiento 15 M, réplica sísmica de la primavera árabe, se inscribe en la misma falla tectónica de la crisis capitalista y revela la globalización de las respuestas frente a la globalidad de la agresión. Retenida lejos de los centros de decisión, despreciada o sobreexplotada en el mercado laboral, moldeada por hábitos homogéneos de consumo, la juventud ha acabado por convertirse (en Europa y en el mundo árabe) en una "clase social" transmediterránea que, por sus propias características materiales, no reconoce límites de edad.

El pasado 1 de noviembre de 2011 los periódicos publicaron dos noticias íntimamente relacionadas. Por un lado, el primer ministro griego Yorgos Papandreu convocaba a sus ciudadanos a un referéndum sobre la deuda pública y las medidas de rescate decididas por la UE. Por otro lado, se anunciaba el vertiginoso aumento de las primas de riesgo en España e Italia y un batacazo general de las bolsas europeas. La relación entre estas dos noticias no se desprendía de un análisis penetrante ni exigía una perspicacia particularmente aguda; todos los periódicos se hacían eco con pasmosa naturalidad de la reacción adversa de los mercados ante este ejercicio de soberanía y democracia en Grecia («el referéndum griego desata el pánico en la bolsa», «la economía europea tiembla ante el referéndum griego», titulaban los diarios). También los políticos mostraban su malestar ante una decisión que consideraban perjudicial para la recuperación económica. Así Rainer Bruederle, asesor de Angela Merkel, no dudaba en condenarla como una falta de res-

Santiago Alba Rico
es ensayista y
escritor

ponsabilidad y seriedad del Gobierno griego: «me irritó», confesó Bruederle a una radio alemana, «es una forma extraña de actuar. El primer ministro Yorgos Papandreu estuvo de acuerdo en que el paquete de rescate era beneficioso para su país. Otros países están realizando sacrificios considerables a causa de décadas de la mala administración y el pobre liderazgo de Grecia». Los presidentes de la Comisión europea y del Consejo de Europa instaron inmediatamente a Papandreu a «honrar sus compromisos»; Finlandia amenazó con cortar todas las ayudas y el ministro español José Blanco señaló que «no era una buena decisión para Europa». La UE, de hecho, congeló inmediatamente el suministro de fondos a Grecia como castigo a su indisciplina y advirtió de las consecuencias de su audacia, mencionando la posibilidad de una expulsión de la organización. Apenas 24 horas después, el primer ministro griego, abandonado por sus propios ministros, claudicó y retiró la propuesta de referéndum.

El análisis de Polanyi adquiere una repentina actualidad en la conciencia y la experiencia de los ciudadanos: es Goldman Sachs, y no las urnas, quien decide el margen de libertad, la calidad de vida, la longevidad y la dignidad de los seres humanos

¿Qué es lo que ha tenido que pasar en Europa para que una consulta popular, instrumento privilegiado de la soberanía democrática, se convierta en un peligro, una amenaza, una irresponsabilidad, una agresión, la sombra de una catástrofe?

Un mes antes, a finales de septiembre, UBS, el mayor banco suizo, publicaba un informe de 21 páginas firmado por los economistas Stephane Deo, Paul Donovan y Larry Hatheway. En él se advertía de que la recesión iba a dejar paso a una depresión y, en tono mitad descriptivo mitad amenazador, insinuaba la necesidad de Gobiernos bien «musculados», menos democráticos y más «autoritarios», para enderezar la situación, so pena de conducir a la UE a una «balcanización» y una «guerra civil». Los previsibles desórdenes sociales que la crisis económica iban a generar, según el modelo de Londres en agosto, podrían exigir cambios de Gobierno, incluso Gobiernos dictatoriales o «militares» capaces de contener y reprimir el malestar. El informe del banco suizo se podía interpretar sin duda como un chantaje encaminado a forzar los rescates bancarios, sin los cuales —se nos dice— sólo cabría esperar un futuro de inestabilidad, agitaciones y autocracias que pondrían fin al «sueño europeo», pero reflejaba también, de manera desnuda, esta creciente intolerancia de los así llamados mercados, poder constituyente supranacional e incontrolable, frente a las instituciones democráticas. Esta necesidad de “represión” de los obstáculos humanos que podrían interponerse en el camino del verdadero “poder soberano”, ha cristalizado ya, de hecho, en la creación de una “policía antimotines” europea, la Eurogendfor, formada por

3.000 hombres y con sede en Italia, una de cuyas patrullas se habría desplazado a Grecia coincidiendo precisamente con la convocatoria del referéndum.

Tras la segunda guerra mundial y hasta 1990, frente a una Unión Soviética que fungía al mismo tiempo de amenaza y de contrapunto, la propaganda occidental logró con éxito –aun si a costa de otros pueblos y otras regiones– fundir en una pieza, como si la naturaleza misma así lo hubiese decretado, un desarrollo material sin precedentes en la historia de la humanidad con un marco jurídico e institucional compatible con las conquistas democráticas populares de los últimos 200 años. Democracia, Estado de Derecho y Mercado parecían fraguados al mismo tiempo y en el mismo molde. No era cierto. Ya en 1944, en un libro clásico cuya lectura es más recomendable que nunca, *La gran transformación*, el húngaro Karl Polanyi había relacionado el fascismo con la autonomía de un mercado abandonado a sus dinámicas autistas al margen de las sociedades y la intervención política. Polanyi había sabido ver muy bien esa contradicción, hoy de nuevo clara, entre la democracia y el derecho por un lado y la “libertad”, concebida precisamente como la expresión sin límites de las pulsiones económicas: «la libertad para explotar a los iguales, la libertad para obtener ganancias desmesuradas sin prestar un servicio conmensurable a la comunidad, la libertad de impedir que las innovaciones tecnológicas sean utilizadas con una finalidad pública, o la libertad para beneficiarse de calamidades públicas tramadas secretamente para obtener una ventaja privada». Ese tipo de libertad, enfrentado radicalmente a la reproducción social en el contexto de la crisis de entreguerras, había llevado inevitablemente a la dictadura y a la guerra.

Dos décadas después de la derrota de la URSS en la guerra fría, la ilusión se derrumba muy deprisa y el análisis de Polanyi adquiere una repentina actualidad en la conciencia y la experiencia de los ciudadanos: es Goldman Sachs, y no las urnas, quien decide el margen de libertad, la calidad de vida, la longevidad y la dignidad de los seres humanos. La política, como alertaba el autor húngaro, ha sido completamente secuestrada por la economía, ante la que se inclinan los parlamentos, las instituciones, la cultura, el conocimiento y hasta el amor. El capitalismo, aparte de un conjunto de relaciones económicas impersonales, implica también un aparato de *gestión*, al que son necesarios por igual, según lugares y circunstancias, los más sanguinarios pistoleros y los más refinados filósofos (como demuestra Frances Stonor Saunders en su exhaustivo estudio sobre «la guerra fría cultural»). Lo que caracteriza a este aparato de gestión es precisamente su *falta de escrúpulos*: durante los últimos sesenta años ha utilizado alternativa o simultáneamente (con arreglo a criterios geoestratégicos en un espacio económico desigual) el colonialismo, el fascismo, las dictaduras, las dictablandas, el Estado del bienestar, las instituciones democráticas, las instituciones financieras y los acuerdos comerciales e incluso el fundamentalismo religioso (como en Afganistán o en los Balcanes). Este aparato de gestión es muy versátil y *no prefiere* el fascismo. Pero tiene en cualquier caso dos límites impuestos por la propia estructura econó-

mica que trata de gestionar. El primero enseña que ni siquiera en sus períodos de crecimiento el capitalismo puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión (limitada en el mejor de los casos a una región insignificante del planeta). El segundo revela que *en el peor de los casos*, en períodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente *incompatible* con el capitalismo. Todo parece indicar que políticos y agentes económicos (el embudo del 1% que se traga la riqueza) han asumido ya que *el peor de los casos* ha llegado y que la reproducción de los mecanismos de acumulación capitalista es incompatible en todas partes, también en Europa, con el Estado del Bienestar y con el Estado de Derecho. Como decía Marx hace 150 años, a veces son «las bayonetas las que tienen que encarrilar la ley natural de la oferta y la demanda».

¿Y los ciudadanos? Salvo en América Latina, donde la democratización de la última década, bajo el impulso de proyectos populares y movimientos sociales, había llevado a un aumento de la conciencia democrática y, frente a ella, a un incremento de las presiones imperialistas, el resto del mundo aparecía o petrificado en su derrota o en franco retroceso. La promulgación y aplicación tras el 11 S de leyes antiterroristas que conculcaban o suspendían derechos civiles y políticos aparentemente bien asentados, junto a la agresiva ofensiva económica contra las garantías sociales y laborales, abrió el camino en Europa a la convicción resignada de que, en efecto, la contrarrevolución capitalista implicaba la apuesta por soluciones neopopulistas o neofascistas, aceptadas o incluso aplaudidas por una población sobornada por las mercancías, amedrentada por la inmigración y formateada por los medios de comunicación.

En este contexto de retrocesos democráticos sin precedentes, a destiempo, con 200 años de retraso, el mundo árabe salió a la calle a reclamar democracia.

Democracia extemporánea y excéntrica

A finales del año 2010 ocurrió, en efecto, algo inesperado y donde menos se lo esperaba. Un incidente trágico pero menor, ya mitológico, en una ciudad del interior de Túnez, Sidi Bouzid, desencadenó el “deshielo” de la única región del mundo que se había mantenido interesadamente fosilizada desde la segunda guerra mundial (quizás, más atrás, desde la disolución del Imperio otomano). Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante humillado por la policía, se prendió fuego delante del gobernadorado de la ciudad y su muerte provocó un levantamiento popular que derrocó al dictador Ben Alí para sacudir inmediatamente toda la región. Teocracias petroleras, monarquías pseudoparlamentarias o falsas repúblicas, desde Mauritania hasta Bahrein todos los árabes sin excepción vivían –o viven aún– bajo severas dictaduras controladas por omnipotentes aparatos policiales al servicio de oligarquías mafiosas muy funcionales y sumisas a los intereses del capitalismo internacional. La situación

general había sido ya expuesta en abril de 2005 en el informe encargado por el PNUD a un grupo de intelectuales árabes: «De acuerdo con los estándares del siglo XXI, los países árabes no han resuelto las aspiraciones de desarrollo del pueblo árabe, la seguridad y la liberación, a pesar de las diversidades entre un país y otro a este respecto. De hecho, hay un consenso casi completo en torno a la existencia de graves carencias en el mundo árabe, y la convicción de que éstas se sitúan específicamente en la esfera política». Corrupción, clientelismo mafioso, parcialidad de la justicia, tribunales de excepción, violencia contra la “sociedad civil”, desigualdad económica, el informe incluía también una denuncia de la ocupación de Palestina e Irak como obstáculos decisivos para la democratización de la zona: «Tras dismantelar el antiguo Estado, las autoridades de EE UU al mando han dado pocos progresos a la hora de construir uno nuevo». Era una forma cortés de aludir al enorme esfuerzo –al contrario– que EE UU y la UE han hecho en esta zona del mundo para impedir la democracia. Tras los atentados del 11 S y la invasión de Irak, la Administración de Bush había comprendido la necesidad de hacer algunas concesiones que maquillaran los regímenes amigos sin cuestionar su poder o –como gustan decir los bombardeadores– su “estabilidad”. Las reformas constitucionales en Túnez y Egipto, las elecciones familiares en Arabia Saudí y los pomposos y perversos comicios en Iraq, junto a las manifestaciones masivas en Beirut, llevaron a algunos propagandistas a hablar en 2005 de una “primavera árabe”. Nada menos cierto. El informe del PNUD venía a corregir esta visión soñadora para hablar con aspereza de «un agujero negro» y «una catástrofe inminente» asociada a una «explosión social» que podía, según sus previsiones, provocar «una guerra civil».

Cuando se produjo finalmente la «explosión social», aún hoy efervescente, lo hizo, sin embargo, bajo un formato desconcertante. La clausura del espacio político, tradicional e históricamente separado del universo social, parecía determinar que el paso poco probable del segundo al primero sólo pudiera ser violento; y, sin embargo, salvo en el caso de Libia, las protestas y manifestaciones que ondularon y ondulan el mundo árabe, de Túnez a Yemen, de Egipto a Bahrein, de Marruecos a Siria, fueron y siguen siendo obstinadamente pacíficas. La instrumentalización de la religión en su vertiente wahabita a partir del pacto estadounidense-saudí de 1945 –ariete reaccionario contra la amenaza de una descolonización progresista que había estado a punto de hacerse realidad– hacía temer, por otra parte, que el “estallido” asumiese reivindicaciones salafitas, se hiciese en nombre de Dios y para imponer la *sharía*, y sin embargo los revolucionarios árabes, no obstante su filiación musulmana, sólo han reclamado «democracia» y «dignidad». Nada de esto estaba en los planes –y en la mayor parte de los casos tampoco en el deseo– de las fuerzas operantes en la zona: la UE, EE UU, Israel, los islamistas y la izquierda árabe, todas las cuales han ido a remolque de la movilización popular.

Ha habido, si puede decirse así, una especie de “alienación” política, y no religiosa, en virtud de la cual el término “democracia” ha condensado y servido de conducto a un aban-

co amplísimo de insatisfacciones y agravios de larga data. El paro, la corrupción, la represión, la humillación, la miseria vital se han medido de algún modo en las promesas incumplidas de Occidente, al que han tomado la palabra con una seriedad en sí misma subversiva. Cuando más retrocede su práctica en Europa y EE UU, cuando menos pueden permitírsela los centros capitalistas desarrollados, un deseo furioso de democracia, un incontenible impulso democratizador ha derrocado tres tiranos y amenaza al menos a otros dos en una zona del mundo –el norte de África y el Próximo Oriente– donde se concentra desde hace 70 años gran parte de la atención interesada, energética y geopolítica, de las grandes potencias que, precisamente por eso, habían impedido hasta ahora por todos los medios el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos más elementales. No importa si estas revoluciones son o no de izquierdas ni si serán más o menos secuestradas o gestionadas desde fuera, como cabe temer; lo cierto es que en ningún otro lugar del mundo la noción misma de democracia resulta más intolerable y peligrosa para todos los actores sobre el terreno. El voto de los tunecinos del pasado 23 de octubre es la expresión de una victoria nacional y regional inaudita y obliga además a cambiar las reglas de juego de la intervención occidental en toda la región.

Lo cierto es que en ningún otro lugar del mundo
la noción misma de democracia resulta más intolerable y
peligrosa para todos los actores sobre el terreno

La potencia de lo políticamente correcto

La potencia revolucionaria de la ingenuidad democrática está demostrando todo su poder deslegitimador también en Europa. El movimiento 15 M, réplica sísmica de la *primavera árabe* que hay que inscribir en la misma falla tectónica de la crisis capitalista, revela la globalización de las respuestas frente a la globalidad de la agresión. Hay algo muy interesante y muy bonito –y potencialmente transformador– en esta movilización de todos los tópicos y todos los clichés, lanzados ahora contra aquellos que durante años los han nombrado sin creer en ellos. El 15 M es, sí, un movimiento *políticamente correcto*. Y esto, que puede ser un límite en las luchas venideras, es de entrada, una vigorosa vacuna contra los autoritarismos neopopulistas que se presentaban como única alternativa a la crisis de credibilidad en Europa. La respuesta es tan sorprendente como la del mundo árabe: cuando la población española parecía definitivamente formateada por el “hedonismo de masas” y abocada a las adhesiones fiduciarias neofascistas (como reacción “natural” frente a la crisis), los “indignados” se lanzan a la calle no para pedir un liderazgo fuerte o medidas “nacionalistas” contra la inmigración, sino en nombre de todas las “convenciones” repetidas por la propa-

ganda y traicionadas por los políticos: solidaridad activa que lleva a impedir desahucios, antirracismo beligerante que obstaculiza el arresto de inmigrantes, tolerancia inclusiva en ejercicio en todas las plazas, democracia participativa en asambleas a veces agotadoras e inútiles, pero cuyo mismo carácter autorreferencial tiene, por contraste, un poderoso efecto revelador: desautoriza y desacredita radicalmente el sistema vigente. «Lo llaman democracia y no lo es» y «no nos representan» son las dos consignas que resumen la conciencia de un *nitham*, como en el mundo árabe, contrario a la autodeterminación individual y colectiva, y que invocan la reclamación de una «verdadera democracia» que aún hay que llenar de contenido.

En el mundo árabe se alimentó la represión y la religión; en Europa el nihilismo del consumo y de los medios de comunicación. Ninguna sociedad histórica ha exaltado tanto la juventud como valor mercantil y ninguna la ha despreciado tanto como fuerza real de cambio: mientras la publicidad ofrecía una y otra vez la imagen inmutable de un deseo siempre reverdecido, eternamente joven, los jóvenes españoles, como los tunecinos, sufrían el paro, el trabajo precario, la descalificación profesional, la exclusión material de la vida adulta y, a poco que se sustrajesen a las normas socialmente aceptadas del consumo pequeñoburgués, la persecución policial. En el mundo árabe, para que no reclamasen una existencia digna, a los jóvenes se les golpeaba y metía en prisión; en Europa, para que no reclamen una existencia digna, se les ofrece comida basura, televisión basura, el tiempo basura de los supermercados y los parques temáticos. En Túnez, los jóvenes excluidos de su propio territorio, eran recluidos en sus cuerpos a porrazos; en España, los jóvenes que no pueden comprar su propia casa ni vender sus competencias laborales, aún pueden adquirir tecnología barata, ropa barata, pizzas baratas. Retenida lejos de los centros de decisión, despreciada o sobreexplotada en el mercado laboral, moldeada por hábitos homogéneos de consumo, la juventud ha acabado por convertirse (en Europa y en el mundo árabe) en una “clase social” transmediterránea que, por sus propias características materiales, no reconoce límites de edad. Como han demostrado las revoluciones árabes, como demuestran los indignados de Europa y EE UU, hay millones de cuarentones y hasta de ancianos a los que se impide el acceso a la mayoría de edad mediante mecanismos al mismo tiempo políticos y económicos.

Pero nos habíamos equivocado: si no se puede reprimir indefinidamente a un ser humano, tampoco se le puede sobornar eternamente; si no sirven los verdaderos golpes, tampoco sirven las falsas caricias. Golpes o golosinas, estos jóvenes de todas las edades no aceptan ser tratados como niños; no se dejan ni amedrentar («sin miedo», gritan aquí y allí) ni comprar («no somos mercancías»). La Puerta del Sol en Madrid demostró también el gran fracaso “cultural” del capitalismo, que ha querido mantener a las poblaciones europeas en una permanente minoría de edad alimentando sólo el hambre: de chucherías, de imágenes, de intensidades puras. Asustados o corrompidos, a los niños se les podía dejar votar sin peli-

gro de que su voto mantuviese ninguna relación real con la democracia. Por eso, en Túnez y en Madrid, en Egipto y en Nueva York, en Yemen y en Atenas, los jóvenes piden precisamente democracia; y por eso, en Túnez y en Madrid, en Egipto y en Nueva York, en Yemen y en Atenas, han comprendido certeramente que la democracia está orgánicamente ligada a esa cosa misteriosa que Kant situaba tajantemente fuera de los mercados: la dignidad.

La dignidad tiene que ver, sí, con el acceso a la mayoría de edad. Sólo los niños no toman decisiones y lo propio de los jóvenes es rebelarse, no contra los adultos sino *contra la niñez*. Cuando se es niño, uno está encerrado en su propio cuerpo, alimentado desde fuera, mantenido –digamos– con vida pero despojado de todo instrumento de apropiación del propio territorio. Por eso, para dejar clara esta nueva comunidad de clase transversal a los países, dos características compartidas han definido, aquí y allí, la lucha por la dignidad y la democracia. Por un lado, las nuevas tecnologías, vectores del imaginario deseante capitalista, integradoras en un mercado desigualmente accesible, habían estructurado un nuevo orden global paralelo al de los prestigios mediáticos; un orden de anonimato por que el que circulaba veloz y dulcemente el flujo impersonal de las peores pulsiones, pero que en todo caso abrigaba también un cambio potencial en la percepción del otro. Ese orden no reclamaba democracia sino excitación; no exigía una sociedad mejor sino intercambio puro, pero desplazado al exterior, inscrito en la plaza, ha restablecido paradójicamente un mundo muy antiguo, antropológica y políticamente casi griego, de respeto y confianza *solo en los desconocidos*.

Pero este concepto de dignidad, entendido como acceso a la mayoría de edad, como reapropiación del propio territorio, exigía precisamente la ocupación física del espacio, *la vuelta al espacio*. Esta es la segunda característica compartida por la juventud transversal de todas las edades en su reivindicación de democracia. Durante años, análisis bien fundados llamaban la atención sobre la descentralización y evaporación del poder, ahora capilar o tentacular, despojado de toda materialización visible. No había ni una Bastilla ni un Palacio de Invierno. Tienen razón. Y sin embargo, el modelo inaugurado en la Qasba de Túnez y en la plaza de Tahrir de El Cairo, prolongado luego en La Perla de Manama o en Taghir de Sana, se extendió por todo el mundo: Sol, Plaza de Catalunya, Syntagma, Bastilla, Wall Street, etc. Sin duda, todos ellos son lugares simbólicamente saturados, pero las acampadas tienen menos que ver con el hecho de apuntar con el dedo un edificio o un ministerio (lo que también ocurre) que con la necesidad de afirmar el propio poder de permanencia en un espacio público. El poder capitalista no tiene un centro, pero ocupa todos los espacios y por eso mismo la presencia física de los cuerpos yuxtapuestos en un recinto común es ya un ejercicio vivo de democracia. *Mantenerse en el espacio* es una respuesta vigorosísimo, subversiva, a esa descentralización del poder: ahora el centro somos nosotros, el lugar que ocupamos todos juntos, la plaza en la que dejamos nuestros rastros y nuestros discursos. La pulsión de la escritura y el dibujo –todos esos grafiti en los muros– es una contestación a la publicidad, que invade las paredes con sus agresivos intereses privados; la asamblea,

por su parte, es una réplica invertida del estudio de televisión, con sus desahogos planificados y sus risas falsas. Como en el caso de las nuevas tecnologías, la paradoja de este poder evaporado es la de que, frente a él, los indignados reintroducen un efecto clásico, también griego: la transformación del espacio en *espacio humano*, ágora para el intercambio de argumentos, academia para el aprendizaje de las leyes de este mundo.

Ninguna sociedad histórica ha exaltado tanto la juventud como valor mercantil y ninguna la ha despreciado tanto como fuerza real de cambio. Los jóvenes españoles, como los tunecinos, sufrían el paro, el trabajo precario, la descalificación profesional, la exclusión material de la vida adulta

Este orden de percepción y de contestación, con sus efectos clásicos, surge en cualquier caso del interior del capitalismo –como si la subjetividad misma, y no la que enfrenta a fuerzas productivas y modo de producción, fuese su contradicción íntima– y no encaja en ninguno de los moldes organizativos que tradicionalmente se habían construido contra él. Tanto la historia concreta de la política real como el formato gnoseológico de la nueva juventud tecnológica deja fuera de juego a los partidos tradicionales sin que, a cambio, la indignación haya sido capaz de forjar nuevos instrumentos y nuevos marcos de intervención transitiva, más allá de la autoafirmación y la negación por contraste. La democracia, por así decirlo, es *paralela al poder*. Eso no basta. *La democracia debe estar en el poder*.

A modo de conclusión

Veinte años después de la derrota de la URSS en la guerra fría, la contrarrevolución capitalista que llamamos “crisis” ha dejado al desnudo la incompatibilidad no sólo entre Mercado y Estado del Bienestar sino, más radicalmente, entre Mercado y Democracia. En este sentido, la ofensiva económica, legislativa y policial destinada, tras el 11S, a asegurar la reproducción ampliada de beneficios, a costa de la mayor parte de la población y de la supervivencia misma del planeta, ha convertido la ingenua reclamación de democracia, en el mundo árabe y en el resto del mundo, en un obstáculo estructural y, por lo tanto, del otro lado, en un motor de transformaciones. El enemigo de los gestores de la economía mundial ya no es el socialismo sino la democracia misma; y por eso es la reivindicación de democracia, al chocar con la base material del capitalismo en crisis, la que debe llevar necesariamente a la concepción de otro modelo (es decir, al “socialismo”). Pero no podremos alcanzarlo sin la articulación de nuevos modelos organizativos que, aupados en los formatos que hacen circular el deseo mercantil, sitúen ese imaginario frente a sus límites razonables: los de la tierra misma y sus recursos.

Boletín ECOS

El Boletín ECOS es una publicación electrónica, trimestral y gratuita que aborda debates candentes relacionados con las líneas de trabajo del Centro.

Ámbitos de referencia

- Sostenibilidad
- Conflictos socioecológicos
- Cohesión social
- Democracia
- Diversidad

Contenidos

- Entrevistas
- Diálogos
- Artículos de análisis
- Información de actividades de CIP-Ecosocial
- Selección de recursos destacados del Centro de Documentación Virtual



Últimos Boletines ECOS publicados

Boletín n° 17: Viviendo en entornos tóxicos (diciembre 2011-febrero 2012)

Tema: Problemas y manifestaciones de las sustancias tóxicas y peligrosas asociadas a nuestro estilo de vida.

Entrevista: Eduard Rodríguez Farré

Análisis: Miguel Jara, Rafael Gadea, Paco Puche y Vicente Boix



Boletín n° 16: Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio (septiembre-noviembre 2011)

Tema: Acaparamiento de tierras, un fenómeno en auge que está expulsando de su entorno a campesinos en todo el mundo.

Entrevista: Saturnino "Jun" Borrás

Análisis: Ben White, Jennifer C. Franco, Javier Sánchez y Nidhi Tandon



Boletín n° 15: La conflictividad que viene (Noviembre-diciembre 2009)

Tema: La confluencia de crisis ecológica, económica, social y cultural augura un aumento de los conflictos socioecológicos.

Entrevista: Harald Walzer

Ciber coloquio: Michael T. Klare, Joan Martínez Alier, Jaime Pastor y Josep Maria Royo
Análisis: Josep Lobera, Pedro Arrojo, Marta Rivera y Ernest García



Suscríbete al Boletín ECOS en la página web del Centro:

<http://www.cip-ecosocial.fuhem.es>

Consulta los números publicados:

<http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/boletin-ecos>

¿Qué está pasando en Chile?: la gran estafa

En el contexto de una economía en crecimiento, como la chilena, con una disminución de los niveles de desempleo y con expectativas de mejora de la calidad de vida, más aún cuando la economía chilena no ha sido afectada tan profundamente como otras por la crisis financiera internacional, para un observador situado en el paradigma hegemónico aparecen como inexplicables los altos y permanentes niveles de movilización social encabezados desde hace ya tantos meses por los estudiantes universitarios. Sin embargo, hay algo profundo que se mueve en la sociedad chilena; Freud habló en el pasado siglo del «malestar en la cultura», Humberto Giannini a su vez nos dice que: «La economía de mercado nos prometía libertad, pero vemos lo que ocurre y es muy distinto: se burla a la gente en su dignidad».

El informe de la OCDE sobre la educación en Chile del año 2003 señalaba que Chile es el país latinoamericano que había realizado más esfuerzos sistemáticos para mejorar el acceso y calidad de la educación. En el mencionado informe, se aludía al crecimiento económico sostenido del país y al compromiso político de aumentar la inversión en educación como responsables de las mejoras no solo del número de matrículas, sobre todo en las enseñanzas medias, sino de las condiciones salariales del profesorado. La educación universitaria, sin embargo, había crecido pero gracias a la inversión privada. El gasto público se mantuvo creciendo hasta 2001. Los esfuerzos por mejorar la educación en Chile han sido conducidos en un contexto relativamente único. En los años setenta y ochenta, el régimen militar aplicó una reforma administrativa que descentralizó el control formal de los servicios públicos incluyendo la educación pública, a más de 300 municipalidades. Hasta 1990, los alcaldes de estas municipalidades eran designados por el régimen militar, por lo tanto el grado de control que ellos tenían era cuestionable. Durante la última década, las municipalidades han tenido al menos poder para asignar recursos y administrar los establecimientos escolares en su jurisdicción. Los

Antonio Elizalde Hevia es sociólogo, director de Investigaciones y Publicaciones de la Universidad Bolivariana y director de *Polis*

militares implementaron en la educación un plan de subvenciones (*vouchers*) que dio a las familias el poder de escoger entre centros privados, particulares subvencionados o municipales para la educación de sus hijos. Aunque los sostenedores de escuelas privadas reclaman que las municipalidades proporcionan financiamiento “extra” a sus escuelas porque numerosos sistemas escolares presentan déficit, las diferencias entre los costes por estudiante en escuelas privadas subvencionadas y municipales no es muy grande. Los mayores costos municipales por estudiante se deben principalmente a sueldos más altos de los profesores en las escuelas públicas, debido en gran parte a la mayor antigüedad de los docentes en sus puestos. Durante los años noventa, el régimen democrático mantuvo el sistema de subvenciones para centros privados pese a la preocupación de que podría contribuir a una mayor inequidad en la composición social de los estudiantes entre las diferentes escuelas. Existían numerosas razones para mantener el sistema de subsidios a privados, entre ellas que, hacia 1990, una alta proporción de familias de ingresos medios enviaba a sus hijos a establecimientos particulares subvencionados. Tratar de reestructurar el sistema de financiamiento escolar en Chile produciría una fractura en el frágil equilibrio entre la izquierda y la derecha que formó parte implícita del acuerdo que restableció el Gobierno democrático. Este equilibrio ha sido un factor importante en los logros de la reforma en la década pasada. Los gobiernos democráticos más que reestructurar el sistema financiero, reconocieron formalmente la inequidad generalizada en el “sistema de mercado” heredado del Gobierno militar y han intentado corregirlo a través del financiamiento compensatorio de escuelas básicas de bajo ingreso, escuelas rurales aisladas, y más recientemente, establecimientos secundarios de bajo ingreso. A nivel universitario, el Gobierno también mantiene programas de crédito estudiantil basados en parte en las necesidades socioeconómicas de los estudiantes.

No obstante, lo antes señalado Chile ha experimentado en los últimos años dos relevantes movimientos de protesta encabezado por estudiantes. El primero, en el año 2006 en lo que fue conocido como “el movimiento de los pingüinos”.¹ Es interesante señalar que ello ocurre en una economía como la chilena que ha tenido, durante casi dos décadas, tasas de crecimiento promedio bastante superiores al resto de las economías latinoamericanas, hecho que ha llamado la atención del *establishment* económico y financiero global. De tal modo que se ha difundido en el ámbito académico y también en los medios los logros del llamado “modelo chileno” y se ha buscado convertir esta experiencia en una suerte de paradigma de las políticas públicas necesarias para países en transición desde el tercer al primer mundo.

¹ Se hace alusión así al uniforme de los estudiantes de enseñanza media: un pantalón gris y una camisa blanca. Véase Fernando de la Cuadra, «Conflicto social, hipergobernabilidad y participación ciudadana. Un análisis de la “revolución de los pingüinos”» *Polis*, vol. 6 n.º 16, Santiago, 2007 [disponible en <http://www.revistapolis.cl/16/dela.htm>] y Cristián Larotonda «Las movilizaciones estudiantiles del 2006. Una respuesta mitos y esperanzas defraudadas» [<http://www.revistapolis.cl/16/indice.htm>].

Sin embargo, la realidad es que Chile ha experimentado desde hace ya casi tres décadas la aplicación *in extremis* de las ideas de los pensadores neoliberales como Hayek y Friedman, que han gobernado las políticas públicas.²

Según un observador externo, como Perry Anderson:

«El régimen dictatorial de Pinochet tiene la honra de haber sido el verdadero pionero del ciclo neoliberal de la historia contemporánea. El Chile de Pinochet comenzó sus programas de manera dura: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de renta en favor de los ricos, privatización de bienes públicos, etc. Todo eso se inició en Chile casi una década antes de que la Thatcher lo hiciera en Inglaterra.»³

Fernando de la Cuadra lo resume afirmando que:

«En pocas palabras, se puede decir que la filosofía central del modelo es dejar el mercado, libre de intervenciones estatales, como el principal mecanismo para la asignación de los recursos, y en definitiva para regir los destinos de la sociedad. Ello supone la reducción de la participación del Estado en el ámbito económico, es decir, dicho ente asume un papel preferentemente pasivo, cuyas acciones se limitan a asegurar los derechos de propiedad y las condiciones de libre competencia de los capitales. Para alcanzar este objetivo se hace necesario desregular los sistemas institucionales y de protección del trabajo, de manera que las fuerzas libres del mercado puedan actuar en toda su plenitud. Los procesos de privatización de empresas públicas son un corolario inevitable de tales supuestos. Por tanto, para quienes propugnan este paradigma, la actividad pública a lo más debe restringirse a corregir los efectos indeseables provocados por el mercado. Sólo como recordatorio, diremos que con base en los postulados anteriores, el gobierno militar dio inicio a una nueva estrategia de desarrollo económico nacional, la cual se sustenta en cuatro ideas centrales: a) El fin de la acción reguladora del Estado; b) La liberalización de los principales mercados; c) La utilización al máximo de las ventajas comparativas; y d) El estímulo a la competencia capitalista.»⁴

² Esperemos que en este caso no sea aplicable la responsabilidad intelectual que Paul Samuelson les achaca en la crisis financiera en la cual el mundo se encuentra sumido «¿Qué es entonces lo que ha causado, desde 2007, el suicidio del capitalismo de Wall Street? En el fondo de este caos financiero, el peor en un siglo, encontramos lo siguiente: el capitalismo libertario del *laissez-faire* que predicaban Milton Friedman y Friedrich Hayek, al que se permitió desbocarse sin reglamentación. Ésta es la fuente primaria de nuestros problemas de hoy. Hoy estos dos hombres están muertos, pero sus envenenados legados perduran. ¿Qué es entonces lo que ha causado, desde 2007, el suicidio del capitalismo de Wall Street? En el fondo de este caos financiero, el peor en un siglo, encontramos lo siguiente: el capitalismo libertario del *laissez-faire* que predicaban Milton Friedman y Friedrich Hayek, al que se permitió desbocarse sin reglamentación. Esta es la fuente primaria de nuestros problemas de hoy. Hoy estos dos hombres están muertos, pero sus envenenados legados perduran. Son palabras duras que deben justificarse. Pero permítaseme advertir a los lectores que mi larga y variada experiencia en historia económica me ha convertido en un centrista incurable. Peor que eso: he aprendido por las malas a ser incurablemente ecléctico.»

³ P. Anderson, «Balanço do neoliberalismo» en E. Sader y P. Gentili (orgs.), *Pós-neoliberalismo. As Políticas Sociais e o Estado Democrático*, Paz e Terra, São Paulo, 1996, p. 19 [citado en F. de la Cuadra, «Reestructuración capitalista, equidad y consolidación democrática en Chile», *Polis*, núm. 4, 2003].

⁴ F. de la Cuadra, «Reestructuración capitalista, equidad y consolidación democrática en Chile», *Polis*, núm. 4, 2003, pp. 323-352 [disponible en: www.revistapolis.cl/4/dela.htm]

Una aplicación de estas ideas fueron las reformas realizadas en el ámbito educativo durante el Gobierno militar, específicamente en el año 1980, en que se introdujo un conjunto de modificaciones en el funcionamiento del sistema educativo, con el objetivo de atraer inversiones privadas hacia el sector. Lo anterior permitió la creación de un sistema *sui generis*, en el cual inversionistas privados crearon empresas educativas que recibían recursos del Estado para realizar las funciones que anteriormente este llevaba a cabo. Para lograr lo anterior en los niveles de la educación primaria y secundaria se transfirió la totalidad de los centros educativos fiscales (estatales) a los municipios creando la educación municipalizada. Paralelamente, se fomentó y facilitó el desarrollo de la educación subvencionada, es decir, centros privados de carácter gratuito que reciben una subvención del Estado por cada alumno/día. Posteriormente, se instauró una modalidad que hace posible que los colegios que opten por ello reciban adicionalmente un aporte monetario por parte de los padres, instaurando un sistema de semigratuidad, denominado el “financiamiento compartido”.

«Con estas medidas, Chile se convirtió en el único país en el mundo que sufraga de la misma manera la educación pública y la particular subvencionada, bajo un sistema que otorga a los establecimientos una subvención básica por estudiante captado, lo que implica que deban competir por la matrícula.»⁵

En el nivel de la educación superior, se eliminaron todas las barreras de entrada al sistema, facilitando la creación de instituciones de educación superior, mediante la inscripción de una simple escritura constitutiva de la sociedad educativa que pretende llevar a cabo estas funciones ante el Ministerio de Educación. Para el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales pueden hacerlo sociedades comerciales: sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, pudiendo los dueños de estas sociedades obtener beneficios de ellas sin ningún tipo de limitaciones.

En el caso de las universidades, estas deben ser corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, las cuales deben reinvertir en la propia institución los beneficios obtenidos en su gestión. Sin embargo, dado el acceso privilegiado que sus dueños tienen a la información respecto a su gestión, ello ha posibilitado la constitución de sociedades inmobiliarias paralelas que llevan a cabo tareas vinculadas al negocio educativo lo cual hace posible, de ese modo, transferir a ellas dichos beneficios.

El sistema universitario chileno, desde entonces, se ha mercantilizado absolutamente ya que desapareció la gratuidad antes existente, en tanto que las universidades estatales dependen al igual que las privadas de la captura de matrícula y de los aranceles pagados

⁵ L. Garrido Vergara, «Inequidades en la educación pública chilena: el aporte municipal en la subvención escolar», *Diversia. Educación y Sociedad*, n.º 3, Centro de Estudios Sociales CIDPA Valparaíso. Programa Equipo de Psicología y Educación, Universidad de Chile, noviembre 2010, pp. 89-111.

por sus alumnos. Esto ha conducido a situaciones tan absurdas como, que para competir por la demanda de ingresantes al sistema de educación superior, del total de ingresos obtenidos por las universidades por venta de aranceles en promedio incluso más de un 10% es destinado a publicidad (!), por lo que el sector universitario se ha transformado en uno de los principales negocios publicitarios.⁶

Este sistema ha tenido como su principal logro un notable crecimiento de la matrícula en la educación superior que ha pasado desde 100.000 alumnos a fines de los años setenta a más de un millón en la actualidad si bien, desapareció la casi absoluta gratuidad que caracterizaba al sistema universitario chileno hasta fines de los setenta. Lo anterior ha llevado a un aumento del total de universidades existentes, de 25 a más de 65. Asimismo, el valor de los aranceles anuales ha alcanzado cifras que se sitúan entre las más altas a nivel mundial.⁷ Este proceso es sin duda aparentemente paradójico e intentaremos explicarlo a continuación.

La nueva idea fuerza del imaginario de movilidad social ascendente: la educación superior

Parece importante señalar aquí que hasta los años cincuenta del siglo XX, la creencia instalada en el imaginario colectivo fue que el principal instrumento de movilidad social ascendente era la migración del campo a la ciudad y desde las provincias a la capital. De modo similar que entonces la creencia que se ha ido instalando en las últimas décadas, es que será el acceso a la educación superior y la obtención de un título profesional el camino mediante el cual se asegurará el futuro propio y el del grupo familiar respectivo:

«En Chile, ha existido desde hace mucho tiempo, una gran demanda social por educación, alimentada por una valoración muy especial de la población hacia ella. Las esperanzas y expectativas puestas en ella, han sido –y aún parecen ser– muy altas. La sociedad continúa considerándola, no sólo como un medio de llevar al país al desarrollo económico (tal como exponen teorías de índole economicistas), sino que se la estima, también, como vehículo de definición de status o, más aún, como un medio de promoción social. Esta idea o imaginario sobre la educación se fue construyendo a partir del proyecto de modernización y desarrollo que sufrió Chile en las últi-

⁶ Según información aparecida en la prensa, las Universidades chilenas gastaron durante el 2006 más de 60 millones de dólares, ubicándose dentro de los grandes avisadores del mercado chileno, luego de las grandes tiendas (US\$ 240 millones) y la telefonía celular (US\$ 92 millones). A modo de comparación, el Fondo FONDECYT que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la investigación básica nacional destina cerca de US\$ 25 millones anuales a fondos de investigación.

⁷ «La educación superior chilena es la más cara del mundo: Según el último ranking de la OCDE, los aranceles universitarios que paga el alumno en nuestro país, son más del doble que en los Estados Unidos, 3 veces México, 5 España, 18 veces Francia, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas, vale decir Argentina y Brasil, en Sudamérica y la mayor parte de los países de Europa.» *Informe Educación 2013* preparado por un grupo de expertos para la Fundación Terram, Septiembre de 2011.

mas décadas del siglo XIX y en la mayor parte del XX. Así, el principio de la educación primaria gratuita (establecido en 1860), la ley de educación primaria obligatoria (1920), la articulación del sistema de educación pública (1927) son fruto de un proyecto nacional al respecto».⁸

Sin embargo, es importante destacar la absoluta asimetría existente entre la capacidad de pago que tienen las personas y sus grupos familiares y el enorme costo que están dispuestos a pagar para obtener un título profesional.⁹

«En la actualidad, este mandato social (sustentado desde una creencia de índole mítica) acerca de la educación se manifiesta de diversas maneras, de las que se destacarán dos. Primero, el alto índice de gasto privado en educación, en el que Chile destaca a nivel internacional: del total de gastos en educación en el país, el 42% corresponde al gasto que los privados realizan de su propio pecunio. Segundo, en el creciente índice de escolarización y de años de escolarización de la población. Hoy se puede constatar que los deseos de educación exceden a la escuela y al liceo, y apuntan a la educación superior, en especial la universitaria. La mayoría de los padres, sin distinción de nivel socio económico alguno aspira a que sus hijos *vayan a la universidad*, y que sean *profesionales*. En los niveles socioeconómicos medios, no pocas familias hacen grandes esfuerzos económicos para solventar los costos de la educación de sus hijos en el sistema privado, esperando, principalmente, que sus hijos puedan obtener, finalmente, buenos resultados en la PSU (Prueba de Selección Universitaria), y así puedan optar a ingresar a una buena universidad (¡ojalá tradicional!).»¹⁰

De acuerdo al Informe «Educación 2013» preparado por un grupo de expertos para la Fundación Terram (septiembre de 2011):

«El pago por educarse en la universidad es expoliador para las familias chilenas. Pagar por la educación superior supone que la elección inicial es prácticamente definitiva, cierra las oportunidades y establece una relación entre educación y mundo laboral que, aunque debe existir, no debe ser mecánica. En este marco, en la condición actual apreciamos que:

- Los jóvenes profesionales se encuentran acosados durante muchos años por una banca que les exige la devolución de los créditos y el pago de altos intereses por esos estudios.
- Las condiciones actuales ni siquiera son realmente útiles en la promoción social. La segregación del sistema termina implicando que los estudios se hacen en el marco de lo posible para cada grupo socioeconómico. La educación pierde la capacidad de movilidad.»

⁸ C. Larotonda, «Las movilizaciones estudiantiles del 2006. Una respuesta, mitos y esperanzas defraudados», *Polis*, vol. 6, núm. 16, Santiago, 2007, p. 324.

⁹ «El 90% de las familias chilenas reciben ingresos que no les permite financiar la educación de sus hijos. Como muestran los datos de la última encuesta CASEN, el primer decil de ingresos recibe mensualmente en promedio \$ 114.000, mientras el noveno decil obtiene \$ 1.150.000 por grupo familiar. Considerando que los aranceles mensuales son alrededor de \$ 300.000, es imposible que el 90% de las familias puedan pagar, en términos reales, la educación superior para sus hijos sin someterse a la lógica del endeudamiento.» *Informe Educación 2013* preparado por un grupo de expertos para la Fundación Terram, septiembre de 2011.

¹⁰ C. Larotonda, *op. cit.*, p. 325.

Otro antecedente importante a considerar a efectos del análisis es que:

«El grado de segregación de la educación chilena es muy elevado y lo ratifica el índice Duncan de la OCDE. Mientras Chile obtiene una cifra de 0,68, la media de la OCDE es 0,46, siendo el índice 1 el de máxima segregación. Este resultado no es sorprendente, pues es muy similar a lo que arroja el Coeficiente de Gini, que revela que nuestro país tiene la peor distribución del ingreso de los países OCDE.

En definitiva, la marcada división de clases de la sociedad chilena no se atenúa con la educación, aún cuando ésta haya ampliado su cobertura. Hijos de ricos en escuelas particulares; hijos de clase media en particulares subvencionadas, y los pobres en las municipalizadas. El sistema ha sido construido con este modelo.

Los estudiantes tienen razón al afirmar que el lucro no garantiza mejor calidad en la educación. No sólo no la garantiza, lo que produce es una reproducción de la capacidad económica en rendimientos educativos.»¹¹

La ampliación de la crisis educativa: crítica al modelo, bases del régimen de acumulación y "democracia protegida"

Fernando de la Cuadra (2007) señalaba preguntándose respecto al futuro del movimiento estudiantil del 2006:

«Es difícil tener certeza sobre esta cuestión, pero sí es posible postular que por la forma como el movimiento se ha organizado, sin una estructura jerárquica rígida y con un sistema de representación equilibrado y participativo, por la coherencia de sus posturas y por la capacidad demostrada para captar la adhesión de diversos sectores sociales, esta rebelión de los pingüinos constituye sin duda una importante llamada de atención sobre los derroteros del modelo económico, político y social imperante en Chile. Y, más aún, esta agitación estudiantil representa una oportuna sacudida del estado letárgico y auto-complaciente en que se encuentra la sociedad chilena. Con banderas de lucha centradas en la calidad de la educación, la agitación estudiantil combinó tomas, paros, marchas, enfrentamientos y una importante adhesión ciudadana a sus demandas.

Pero los jóvenes también se están rebelando contra esa orden social elitista impuesta "desde arriba" y, su movilización no sólo puede ser pensada como una lucha por introducir mejoras en la educación, sino, sobre todo, como una crítica radical al proyecto de país que se viene construyendo. Como acertadamente señalaban los mismos estudiantes, la solución a sus demandas no puede limitarse al ámbito de la educación. Cualquier tipo de solución debe partir necesariamente por establecer un cuestionamiento global de la estructura económica, social y política existente en Chile.

¹¹ Informe Educación 2013, *op.cit.*

Así, las movilizaciones y demandas proclamadas por este grupo de jóvenes que no superan los 18 años pueden representar una forma de lucha contra-hegemónica que no solamente cuestiona el modelo educativo mercantil que impera en el país, sino que también se propone examinar al paradigma neoliberal en su totalidad, que - a pesar de la redemocratización del país -continúa siendo administrado con “éxito” por los sucesivos gobiernos de la Concertación.»¹²

Estas señeras afirmaciones se han visto ratificadas por los sucesos que desde prácticamente el inicio del año académico 2011 han sacudido a la sociedad chilena, incluso aún desde antes que se iniciase el movimiento de los indignados, tanto en España como en otros lugares del mundo. Una alta proporción de los estudiantes de enseñanza media y universitaria han estado realizando distintos tipos de movilizaciones que han tenido una característica compartida, el cuestionamiento radical al modelo educativo existente en Chile. ¿Cuáles son los detonantes del malestar?

Endeudamiento generalizado producto del consumismo universalizado

Como lo señala Gabriel Salazar, desde la década de los ochenta, Chile al igual que el resto del mundo ha experimentado un verdadero cambio de época puesto que el capitalismo industrial, cuyo centro era la fábrica, dio paso al capitalismo mercantil y financiero, con sus centros comerciales, grandes almacenes, *malls*, *shopping centers*, etc., y la universalización del acceso al crédito mediante tarjetas. La economía pasó a ser principalmente de servicios y más notoriamente, de consumo, donde el crédito se ha transformado en un factor determinante. «Modernización compulsiva» la llamó José Bengoa¹³ hace más de una década.

Según Manuel Hidalgo,¹⁴ en los últimos siete años, el endeudamiento de las familias en Chile se aceleró, al mismo tiempo que sectores cada vez más amplios de la población accedieron al crédito de consumo no tan sólo de las casas comerciales, sino que de la banca y otras instituciones, como cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito. Asimismo, la bancarización de las personas avanzó aceleradamente. En 2008, existían 6 millones de cuentas corrientes y para 2010, se había llegado a 8 millones de cuentas corrientes y se proyecta llegar a 10 millones hacia el año 2012. A junio de 2010, el número de tarjetas de crédito bancarias era de 4.524.000. A la misma fecha, las tarjetas de crédito comerciales (*retail*) eran 16.070.000, por lo que el total de tarjetas sumaba cerca de 20.600.000.

¹² F. de la Cuadra, «Reestructuración capitalista, equidad y consolidación democrática en Chile», *Polis*, núm. 4, 2003.

¹³ J. Bengoa, *La comunidad perdida. Ensayos sobre identidad y cultura: los desafíos de la modernización en Chile*, Ediciones Sur, Santiago de Chile, 1996.

¹⁴ «El endeudamiento en Chile como sistema de dominación» [disponible en <http://www.libertadexpresion.cl/2011/08/12/el-endeudamiento-en-chile-como-sistema-de-dominacion/>].

«En los últimos seis años la deuda de las familias chilenas más que se duplicó. Según cifras del Banco Central, los compromisos financieros de los hogares subieron 140% (nominal) desde el primer trimestre de 2005 comparado con igual período de este año. Las obligaciones suben mucho más que el ingreso disponible de las familias, que en igual período se elevó 64%. Estos datos los dio a conocer ayer el Banco Central de Chile, y son parte de la nueva información trimestral de la serie estadística de sus Cuentas Nacionales, que permiten calcular el PIB de la economía. Este diferente ritmo de aumento explica que los ingresos mensuales que se deben destinar a pagar la deuda se hayan incrementado en los últimos seis años. Así, mientras en el primer trimestre de 2005 un hogar necesitaba cinco ingresos mensuales para pagar sus obligaciones en promedio, dicha relación subió a 7,3 veces a inicios de este año.»¹⁵

En términos agregados, la tasa de crecimiento promedio de la deuda total de los hogares fue de 12,8% anual en el período 2000-2009. Este crecimiento es bastante superior al crecimiento de la economía –aproximadamente 3,6% en promedio–, con lo cual el *stock* de la deuda ha aumentado de 22 a 39% del PIB entre el 2000 y el 2009. En un estudio publicado en julio de 2010, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señala que «desde comienzos de esta década, las deudas de consumo e hipotecarias aumentaron en 13% real promedio anual». Así, el consumo privado en Chile pudo crecer a un ritmo superior al 6% real, en tanto en el mismo período (2001-2010), el PIB creció a un ritmo promedio anual de 3,8% y los salarios reales a un 2,1% promedio anual. Sólo en 2009, producto de la crisis, la deuda de consumo prácticamente no registró crecimiento y la deuda hipotecaria moderó su expansión a 7,8%. De tal forma que la deuda de las familias va creciendo en términos absolutos y va además significando un porcentaje creciente de sus ingresos. Entre 2000 a 2010, la razón de deuda-ingreso subió desde 36% a 63,4%.

Tomás Moulián¹⁶ sostiene que el país es una sociedad plenamente penetrada por el espíritu mercantil, que eliminó el subsidio a los productos de primera necesidad y la gratuidad de los servicios públicos, mientras funcionaba de manera plena el mercado laboral. Todo lo cual ha significado el cambio de un Estado de bienestar (que buscaba la gratuidad de los bienes sociales básicos) a un Estado liberal que ha mercantilizado la salud y la educación. De modo tal que, por una parte, la fuerza de trabajo pasó a operar como verdadera mercancía, sometida a los mecanismos de la competencia y de la “supuesta” autorregulación; así, el movimiento obrero queda neutralizado en las sociedades neoliberales ya que se disuaden las formas organizadas para incentivar el esfuerzo individual como forma de llegar al éxito. Mientras que, por otra parte, la otra cara del consumismo es el conformismo. Chile actualmente es una sociedad en la cual el sometimiento a la labor consume la energía de los individuos, dejándolos sin aire para otras formas de la vida activa. El consumo

¹⁵ E. Olivares y A. Sáez, *El Mercurio*, 30 de julio, 2011.

¹⁶ T. Moulián, *Chile actual: anatomía de un mito*, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 1997.

aparece así como compensación de una vida dedicada a laborar, es el merecido descanso. Y una sociedad de ingresos desiguales y donde el consumo le da sentido al existir es una sociedad meritocrática y “trabajólica”, puesto que el endeudamiento implica intensificar el trabajo. A la vez que placer, sobreconsumir es autoexplotarse, de este mecanismo resulta la visión pesimista pero conformista, la idea de un mundo agobiante pero que no puede cambiarse.

En un estudio de Patricia Castañeda¹⁷ se señala que la decisión de consumo, a través del endeudamiento, está dirigida, principalmente, hacia bienes y servicios, que aunque representan preferencias del consumidor, no aparecen claramente vinculadas a necesidades básicas o de subsistencia. Destacan especialmente deudas contraídas con casas comerciales o financieras para la adquisición de equipos informáticos, electrodomésticos, viajes de turismo y vacaciones dentro y fuera del país, mientras que se constata una ausencia de deudas vinculadas a adquisición de viviendas o de vehículos como capital de trabajo:

«Queda en evidencia, entonces, una tendencia a contraer deudas, respecto de artículos que no implican, necesariamente, una mejora significativa en las condiciones de vida personales o familiares en el mediano y/o largo plazo. Más bien, puede suponerse que el acceso a los bienes y servicios que originaron la situación de endeudamiento, están motivados por factores vinculados a las significaciones de prestigio social que estos representan, a la influencia de la publicidad en las decisiones de compra, y a las condiciones de precio y facilidades de pago en que el mercado ofrezca el acceso a dichos bienes y servicios.

La situación de endeudamiento afecta directamente al consumidor, en su capacidad económica, dado las progresivas limitaciones al acceso de los bienes y servicios necesarios para mantener su estándar de vida, y en su capacidad de integración social, frente a relaciones familiares y sociales resentidas fuertemente por la pérdida de la capacidad adquisitiva, y por ende, su capacidad de integrarse socialmente por esta vía.»¹⁸

Imposibilidad de modificar los arreglos institucionales heredados de la dictadura

Uno de los elementos que ha caracterizado el proceso de transición a la democracia en Chile, es la enorme cantidad de escollos antidemocráticos heredados de la dictadura e instalados en la institucionalidad existente que han imposibilitado realizar aquellas modificaciones al régimen de acumulación creado por el Gobierno militar, aunque han sido mayoritariamente demandados por la población chilena. Algunos de ellos pudieron ser modificados

¹⁷ P. Castañeda, «El endeudamiento como problemática social emergente: El caso de los consumidores de Valparaíso Metropolitano», 2000 [disponible en: <http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p4.1.htm>].

¹⁸ P. Castañeda, *op. cit.*

con el acuerdo de las fuerzas políticas herederas del modelo chileno instaurado en los ochenta, tales como: la eliminación de los senadores designados, la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, la recuperación de la atribución del presidente de la República para designar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre muchas otras. Pero ha sido imposible modificar aquellos que son esenciales para la permanencia del modelo, tales como el régimen binominal y los quórum constitucionales requeridos para modificar los componentes sustantivos del arreglo institucional impuesto por la constitución aprobada (irregularmente) a mediados del Gobierno militar. De allí que las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza durante los gobiernos de la Concertación no han sido capaces de dar cuenta de las demandas planteadas por los principales actores de los procesos educativos: profesores y estudiantes.

Chile, como lo sostiene Tironi,¹⁹ se desplazó desde un modelo de cohesión social “europeo” asentado en la noción de derechos garantizados por el Estado, a uno “estadounidense” basado en la noción de oportunidades creadas por el mercado, que se sustenta en las expectativas de movilidad social de la población y que permite soportar altos niveles de desigualdad, como el precio a pagar por las oportunidades que se ofrecen. El problema se presenta si es que estas no son satisfechas. Las frustraciones así producidas eran mitigadas por robustas redes de solidaridad familiares y comunitarias, y un cierto grado de creencia en las instituciones y los liderazgos políticos, dimensiones estas que fueron erosionadas por el descrédito producido por un permanente discurso, desarrollado de manera sistemática, durante todo el período dictatorial de lo político, de lo estatal y de lo público. Cuestión esta que permeó a amplios sectores de la población. Y por otra parte se desarrolló una notable expansión del individualismo consustancial al nuevo modelo. Tironi sostuvo que el naufragio de las expectativas podría llevar al colapso de la cohesión social, y que al parecer, es lo que está comenzando a ocurrir.

En un artículo reciente Tironi sostiene que:

«Los adultos reconocen haber progresado, pero que ya toparon techo. Las esperanzas están depositadas en los hijos. La clase dirigente les ha indicado que el mecanismo es la educación; que ésta les abrirá las puertas a una vida liberada del esfuerzo y de las humillaciones que ellos han tenido que aceptar para ofrecerles lo que ellos no tuvieron: educación y un futuro cuyo único límite es el talento de cada uno. Éste fue el contrato social tácito: «Ustedes aceptan el modelo y postergan otras demandas, y nosotros les garantizamos, vía educación, que vuestros hijos alcanzarán una vida nueva». Los chilenos lo aceptaron. Prueba de ello es que destinan a educación un porcentaje de sus ingresos que está entre los más altos del mundo.

¹⁹ E. Tironi, *Cohesión Social en América Latina. Redes, Estado y Mercado. Soportes de la cohesión social latinoamericana*, Uqbar Editores, Santiago de Chile, 2008.

Por educar a sus hijos se han resignado pasivamente a las condiciones laborales y de endeudamiento que se les han impuesto. Ya no pueden más, y ahora ven que la recompensa no es tal. Confirman diariamente que la educación no es la panacea; y menos ésta y a este costo. Han hipotecado sus vidas –piensan– por una quimera. Se sienten engañados, pero no pueden llevar este reclamo al Sernac²⁰. Sólo les queda la calle: ahí salen a desahogar su frustración y su rabia.

La rebelión, entonces, no es simplemente contra el costo del crédito; es contra un “relato” que nació de la derecha, pero que fue hecho propio por la Concertación: que la educación es la madre de todas las victorias; que da lo mismo si su provisión es pública o privada, con tal de que dé cabida a todos; que no importa que sea cara, porque sus beneficios compensarán ese costo; que la calidad puede ser mala, pero que se irá arreglando automáticamente.

Implícitamente, ese relato sostenía también que las energías individuales había que colocarlas en estudiar, no en promover cambios estructurales, y que las reformas en otros campos, como el laboral, debían resignarse para dar prioridad a la educación: ésta, en efecto, curaría a la sociedad de todos sus males.

Para cientos de miles de familias ese relato es ahora como el de La Polar²¹: una estafa. Y acusan a los grupos dirigentes de haberlos embarcado en un sistema que los devora y que no cumple su promesa básica. De utilizar el relato educacional como antídoto para contener otras demandas y reivindicaciones. En fin, de haber fundado la paz social en un engaño.

Lo que está en tela de juicio no es la educación: es un modelo fundado sobre el mito de que ella colma todas las ilusiones. La salida no está en reparar ese mito, sino en quebrar con él e ir al fondo del asunto. La clase dirigente tiene la palabra.»²²

Así es como lo señala la irrefutable dureza de los datos presentados por Patricio Meller en su libro recientemente publicado, *Universitarios: ¡El problema no es el lucro, es el mercado!*,²³ presenta datos como los siguientes:

- El elevado coste de las universidades chilenas, el más alto del mundo (el arancel promedio representa 41% del PIB per cápita).
- El elevado aumento de los aranceles (60% en 12 años, por sobre inflación).
- El gasto superior al 40% del ingreso de los tres primeros quintiles que deben hacer las familias que tienen un hijo en la universidad.
- El gasto público chileno en educación superior, el más bajo del mundo (0,5% del PIB).
- El registro más alto del mundo de endeudamiento de los universitarios chilenos. La relación deuda total (vinculada al financiamiento del costo de la universidad) respecto del ingreso anual como profesional llega a 174%.

²⁰ Servicio Nacional del Consumidor

²¹ Reciente escándalo producido por una multitienda, una de las más importantes empresas de retail chileno, que pactó unilateralmente las deudas atrasadas de sus deudores morosos con tasas al margen de los límites establecidos legalmente y además alteró sus estados financieros para obtener recursos financieros en la bolsa, defraudando la fe pública.

²² E. Tironi, «La estafa», *El Mercurio*, martes 30 de agosto de 2011.

²³ P. Meller, *Universitarios: ¡El problema no es el lucro, es el mercado!*, Uqbar Editores, Santiago de Chile, 2011.

De ahí que sea posible sostener, a la luz de los acontecimientos vividos durante el año 2011, que el exceso de mercantilización de la sociedad chilena haya conducido justamente a lo contrario de lo que los inspiradores y sostenedores del modelo de acumulación instalado en Chile desde la dictadura esperaban: no se ha producido una adhesión incondicional al modelo instaurado sino que por el contrario se ha producido una reacción de rechazo a esta dinámica por parte de unos de los sectores afectados (los universitarios) y una creciente demanda pública para poner límites a la mercantilización.

Crecimiento de los sectores antisistémicos

Paralelamente, no obstante, este proceso ha ido generando un caldo de cultivo que ha hecho posible un enorme crecimiento de los sectores antisistémicos. Su forma de actuar, la cual se hace manifiesta habitualmente al término de las movilizaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles y universitarias, manifiesta conductas muy violentas que se descargan no sólo sobre las fuerzas policiales sino sobre toda expresión física o simbólica del orden social (semáforos, asientos, locales comerciales, vehículos, etc.) acciones que suscitan la pregunta: ¿cuáles son las razones de tanta rabia acumulada?

Alguna explicación sobre este fenómeno anticipaba Moulián en el trabajo ya mencionado:

«No es extraño que el debilitamiento de las esperanzas políticas y el pesimismo hacia las formas políticas de expresión del malestar social se den junto con crecimientos fuertes de la delincuencia y de la violencia no política. Lo que no puede esperarse de la acción colectiva orientada a fines, se busca en el delito desesperado o rabioso, el último recurso para salir de la marginalidad.»²⁴

Lo cual reiteraba además en un breve texto titulado *El consumo me consume* hacia fines de los noventa, donde señalaba que:

«El aumento de la delincuencia popular o de cuello y corbata, la intensificación de la violencia asociada a ella, la difusión de drogas destructivas, entre ellas la pasta base, la generalización del tráfico de influencias y la conexión cada vez más estrecha entre política y negocios revelan una peligrosa generalización de conductas anómicas y una peligrosa desaparición de los controles morales, reguladores de las conductas públicas y privadas. Algunas de estas conductas representan la exacerbación de la lógica del individualismo, el cual al extremarse deviene en un maquiavelismo social. No importan los medios para realizar la meta de la riqueza. Aunque ellos sean ilícitos, el dinero no cambia de color.»²⁵

²⁴ T. Moulián, *El consumo me consume*, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 1999, p. 47.

²⁵ *Ibidem*, pp. 46-47.

Una explicación más contemporánea y específica, es la que adelanta Gabriel Salazar en una entrevista en *Diario Financiero* realizada por Patricia Arancibia Clavel, respondiendo a la pregunta sobre los actos vandálicos que se han observado en algunas de las movilizaciones:

«Yo no creo en la violencia delictual ni la de los encapuchados, pero hay que comprender el fenómeno antes de correr a juzgar a los violentistas y vandálicos. ¿Por qué son violentos? Para empezar, la mayoría son “huachos”, tienen déficits afectivos brutales, muchos de ellos no estudian y los que lo hacen tienen un pasado tortuoso de vida, injusticias, etc. Otros se desarrollaron en los 80, luchando en las calles con los soldados. Allí se aprendió lo de los encapuchados, porque obviamente no podían mostrar la cara. Esas prácticas de lucha callejera son muy atractivas para los jóvenes frustrados y se transmiten por razones políticas.»²⁶

En una reciente entrevista realizada por Marcelo Mendoza, Humberto Giannini, señala lo siguiente:

«Y también una indignación al decir: esto ya es suficiente. No hay que confundir violencia con ira. Cuando la gente sale a la calle y a veces hace pedazos su propia ciudad no es pura violencia: es la ira por la marginación y por el arrebato diario; por los derechos que ha perdido. Es una rabia por injusticias acumuladas. La gente está atrapada. Esta es una democracia hipócrita. Y el silencio se empieza a romper. Yo quiero que se rompa la hipócrita democracia de los acuerdos.»²⁷

¿En qué se parecen estas movilizaciones vividas en Chile a los movimientos de los indignados?

Es posible encontrar profundas similitudes entre los movimientos de los indignados de España y otros lugares de Europa y el movimiento estudiantil chileno. Hay importantes coincidencias en:

- *Los medios de convocatoria*. Los estudiantes movilizados, como lo ha señalado Pedro Montt Leiva:²⁸

«Son hábitos a las nuevas tecnologías de la información, coordinan acciones a través de esos medios, ganando capacidad de sorpresa y acción, todo en tiempos reales. Valoran la política,

²⁶ Entrevista a Gabriel Salazar, «Los políticos están ajenos a la realidad y están dando un espectáculo penoso», *Diario Financiero*, sábado 27 de agosto de 2011.

²⁷ Entrevista a Humberto Giannini, *Paula*, sábado 20 de agosto de 2011 [disponible en <http://www.paula.cl/blog/entrevista/2011/08/24/humberto-giannini-el-rescate-de-la-calle/#more-28542>]

²⁸ P. Montt Leiva, «En Chile algo se mueve en lo profundo: una posible lectura de la actual movilización estudiantil», *Informe 897. Asuntos Públicos*, 18/08/2011.

pero no a los políticos... Respecto de sus coordinaciones, siguen una tendencia presente en múltiples movimientos a nivel mundial. Las redes sociales son uno de los medios más frecuentemente usados y esos medios traen unas consecuencias aún no suficientemente comprendidas por el mundo adulto y de la política... Otras consecuencias en relación a las redes sociales en las que actúan se refieren a "Los nuevos modos en los que están formateados, porque piensan en términos de red y se comunican por puntos de afinidad y no por empatía de valores"...o como causas ideológicas, al estilo que el mundo adulto lo ha hecho».

- *En la visibilidad pública.* En el caso chileno, los universitarios han tenido una enorme presencia en los medios de comunicación, destacando las vocerías llevadas a cabo por los dirigentes de las principales federaciones universitarias (U. de Chile, U. Católica y U. de Santiago) quienes han demostrado capacidad comunicativa, claridad de exposición y una notable aprovechamiento de los tiempos y momentos mediales. Asimismo han demostrado una notable creatividad, como señala Montt Leiva:

«Han desarrollado acciones de protesta que son verdaderas acciones de arte, son optimistas y alegres, saben ocupar la calle cantando el mítico *Thriller* de Michael Jackson para mostrar al país que la educación está produciendo "zombis", un acto simbólicamente muy poderoso; realizan una maratón de 1.800 horas alrededor de la Moneda, etc.. En realidad son bastante creativos y la gran mayoría opta por los medios pacíficos.»

- *En la expresión de un malestar profundo con la institucionalidad existente.* Coinciden también en términos de demandas que evidencian un profundo malestar con el sistema socioeconómico instalado y con la institucionalidad existente. Las demandas apuntan a algo más que el lucro en la educación o el obligado endeudamiento para estudiar:

«La mayoría son hijos de las nuevas clases medias, grupos emergentes, que surgieron las últimas décadas de progreso sostenido. Como señalamos, son más conscientes de su realidad y observan que junto con haber progresado ellos y sus familias, existe una pequeña minoría de privilegiados que concentra gran parte de la riqueza y las oportunidades. Esa percepción se confirma en la realidad de todos los días, ya que es un fenómeno real, así, por ejemplo, lo ratifican las mediciones de la desigualdad. Una imagen que grafica lo descrito es la que usa el economista Andrés Zahler, quien en un artículo reciente señala: "El 10% de los chilenos tiene ingresos promedio que superan los de Noruega, mientras que los ingresos del 10% más pobre son similares a los de los habitantes Costa de Marfil". El PIB de Chile ha superado los 200.000 millones de dólares y nuestro ingreso per cápita se encuentra por sobre los USD 13.000 (2010), lo que lo asemeja al de países de ingreso medio de Europa (Hungria), sin embargo la distribución de la riqueza deja mucho que desear y como lo recalca el mismo autor "En la práctica, el 60 % del país vive con ingresos promedio peores que Angola. Este es el Chile de la mayoría, nos guste o no." Ello explica por qué los estudiantes ponen como objetivos centrales el fin del lucro en educación que

es financiada con recursos públicos, el fortalecimiento de una educación pública que debiera asegurar la igualdad de oportunidades a todos y, finalmente explica por qué según ellos la educación debiera ser gratuita en todos los niveles, garantizado ello por el Estado. El trasfondo de este petitorio son las desigualdades, que se perciben intolerables.»²⁹

- *En el riesgo de no poder materializar en transformaciones políticas las aspiraciones perseguidas.* Sin embargo, parte importante de ellos, han decidido no participar del sistema político representativo, y con ello consolidan una hegemonía “artificial” de los sectores defensores del modelo, como lo señala Montt Leiva:³⁰

«Una cara oscura de este movimiento para el sistema político representativo es que simplemente deciden no participar en ese sistema, lo desconocen y no reconocen su legitimidad. No se inscriben y no votan. La gran mayoría de ellos no está inscrito en los registros electorales. Se estima que al actual padrón electoral le faltaría un 40% de sus potenciales electores y, por tanto es el sistema democrático y la representación del sistema político los que pueden estar a las puertas de una crisis importante. En parte la desconfianza hacia los políticos de este amplio contingente de jóvenes ciudadanos está socavando las bases de legitimidad del sistema político. Todo ello se ve agravado por las amarras de un sistema electoral que desde su origen restringió el ejercicio de elegir muchas veces a la mera ratificación de candidatos designados por las cúpulas partidarias” y por la otra, porque asegura el empate entre las mayorías y minorías de turno.»

Conclusiones finales

Termino este artículo señalando que comparto plenamente la interpretación que un grupo de historiadores hizo pública, en un documento titulado «Manifiesto de los Historiadores Chilenos. Revolución anti neoliberal social/estudiantil en Chile», de lo que está significando el movimiento de los universitarios, ellos afirman al respecto:

«Consideramos, en primer lugar, que estamos ante un movimiento de carácter *revolucionario anti-neoliberal*. Las demandas del movimiento estudiantil emergen desde la situación específica de la estructura educativa del país, basada en el principio de la *desigualdad social*; una transformación a esta estructura –como bien lo dicen los gritos callejeros– exige un cambio sistémico en el modelo neo-liberal, que hace del *principio de desigualdad* (fundado en la mercantilización de todos los factores y en la consiguiente capacidad de compra de cada cual) la clave ordenadora de las relaciones sociales y del pacto social. Correspondiente con este principio de ordenamiento, la figura política del Estado neo-liberal se perfila como un aparato mediador, neutralizador y garante, a través de sus propias políticas sociales, de dicho principio des-igualitario; estructura

²⁹ P. Montt Leiva, *op. cit.*

³⁰ *Ibidem.*

económico-política sustentada en la escritura de una carta constitucional legitimadora de dicho principio.

No es de extrañar, así, que el movimiento estudiantil actual encuentre un tan amplio respaldo ciudadano: en la categoría dicotómica de “deudores” respecto de un grupo legalmente abusivo y corrupto de “acreedores”, se encuentra la mayoría de los chilenos que grita y cacerolea su apoyo a los estudiantes: porque los estudiantes no son solo “estudiantes” sino que son ellos mismos en tanto *deudores*. Porque no sólo los estudiantes viven en el *principio de la desigualdad*, sino la mayoría social chilena actual lo sufre en carne propia. Lo social particular y lo social general se auto-pertenece y se auto-identifican mutuamente en una unidad que se construye y se concientiza sobre la marcha.

Así, el movimiento estudiantil, aparentemente sectorial, constituye un “movimiento social” que, al tocar el nervio estructurante del sistema, irradia e identifica a la sociedad civil ampliada, reproduciendo socialmente la fuerza de manifestación de su poder, descongelando el miedo y aglutinando los discursos y las prácticas fragmentadas.

Es decir, el movimiento estudiantil actual tiene un carácter *radical* en cuanto busca revertir el principio neoliberal de la *desigualdad* que construye la sociedad actual, por el principio de la *igualdad social* (basado en un sistema de “derechos sociales ciudadanos”), promesa irrenunciable de la modernidad, a pesar de cualquier post/modernidad; principio que, desde la esfera educativa chilena, se propaga como fragancia de nueva primavera a todas las esferas de la sociedad.»

Algo muy profundo se ha estado moviendo en los últimos meses en la sociedad chilena, así como en España y otros lugares del mundo. Quienes iniciaron esto fueron los jóvenes, justamente aquellos, que de acuerdo a los creadores de este experimento social llamado neoliberalismo *in extremis* deberían ser los principales beneficiarios de un modelo que les ofreció cambiar su condición de ciudadanos –entendido como responsables de la cosa pública–, por la condición de consumidores –entendido como agentes racionales en busca de sus propios intereses. Hay una solidaridad latente muy profunda y un hondo sentido de justicia, anclados en nuestra condición humana, que se han hecho aquí manifiestos y que la prédica insistente del individualismo durante décadas no ha logrado acallar, y que nos permite, a pesar de la aparentemente avasalladora hegemonía de los mercados en todos los ámbitos de la vida, mantener vivas las esperanzas de que ¡otro mundo es posible!

I. DESARME Y NO PROLIFERACIÓN

Presentación

Vicente Garrido Rebolledo

Hacia un mundo sin armas nucleares

Juan Antonio Yáñez -Barnuevo

La Hidra armamentista y el desarme

Enrique Gomáriz Moraga

Proliferación de armas de destrucción masiva

Miguel Ángel Ballesteros Martín

El nuevo Tratado Start: piedra angular en las relaciones entre EE UU y Rusia

Vicente Garrido Rebolledo

La guerra se hace con las armas, no con venenos

“Armis bella non venenis geri”

Fernando Villena Sánchez

La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas: de la exclusión del empleo a su completa destrucción

Fernando Borredá Juste

El control de las armas pequeñas y ligeras, un gran reto

Jordi Armadans Gil

Jordi Armadans Gil

Jordi Armadans Gil

II. SOCIEDAD INTERNACIONAL EN MUTACIÓN

Construyendo la paz en Guatemala, el peso de la Memoria

Luis Mario Martínez Turcios

Luis Mario Martínez Turcios

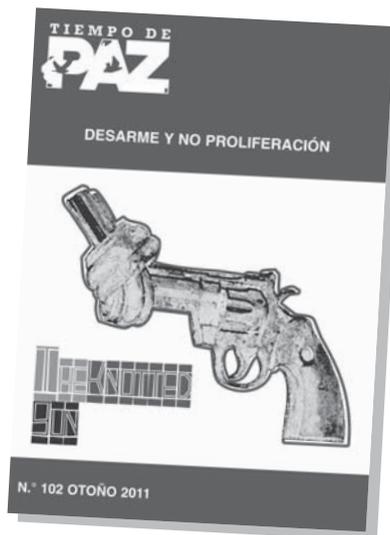
Luis Mario Martínez Turcios

III. CONFLICTOS INTERNACIONALES

Mujer y conflictos armados: la práctica de las Naciones Unidas

Montserrat Abad Castelos

Montserrat Abad Castelos



IV. OTRAS DIMENSIONES DE LA PAZ

Ciudadanía y desarrollo: conceptos, diferencias y tensiones. El caso de la campaña por la reducción de la mortalidad materna en Méjico

Iván Fernández Lefort

VII. DOCUMENTACIÓN

Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP)

Discurso del Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, en Praga



Revista Trimestral • Martos, 15 • Tel.: 00 34 91 429 76 44

Fax: 00 34 91 429 73 73 • E-mail: mpdl@mpdl.org • 28053 MADRID

SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números) - España 40 € • Resto Europa 65 € • Resto mundo 90 \$US

Números sueltos: España 11 € • Resto Europa 21 € • Resto mundo 29 \$US

Socio Movimiento por la Paz -MPDL-: 30 €

Cuota joven Socio-Suscriptor para menores de 30 años: 70 € (oferta válida solo para España)

Nombre y Apellidos _____ NIF/CIF _____

Empresa/Institución _____ Dirección _____

Localidad _____ Provincia _____ C.P. _____

Teléfono _____ E-mail _____

**Nº cuenta bancaria
(20 dígitos)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Muy Señores Míos: Les ruego que a partir del día de la fecha y con cargo a mi cuenta Nº _____ abonen el recibo de suscripción a la revista "TIEMPO DE PAZ", que a mi nombre presentará el MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, por un valor de €.

Atentamente

_____ a ____ de _____ 201 ____

FIRMA:

Le informamos que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados a las bases de datos de MPDL, para la gestión de asociados y suscriptores y envíos informativos sobre actividades propias desarrolladas por MPDL.

Le solicitamos que cualquier modificación/actualización posterior de sus datos se resuelva mediante escrito a la dirección indicada más adelante.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos relevantes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: C/ Martos, 15. 28053 Madrid".

15 M: una revolución de personas¹

Cada acontecimiento político verdadero crea su lenguaje. Para no ser nombrado ni narrado por otros, inventa sus nombres propios. Elabora un léxico de términos que designan las nuevas prácticas y valores que lo fundan. También el 15 M tiene su propio diccionario: horizontalidad, consenso, respeto, inteligencia colectiva, inclusividad, despertar, plaza tomada, #globalrevolution, no violencia... Estas palabras nombran lo que el movimiento 15 M ha inventado (o re-inventado) de más potente, las formas de hacer que le han permitido abrir una distancia decisiva y esperanzadora con respecto a los guetos de impotencia de la vieja política.

Hay otra palabra importante en el 15 M: *personas*. La palabra aparecía constantemente en los inicios del movimiento. Recuerdo a un chico muy joven con el megáfono en la mano proclamando a los cuatro vientos en medio de la Puerta del Sol: «los que hemos tomado la plaza no somos colectivos ni organizaciones, sólo personas». Recuerdo una discusión en la Comisión de Pensamiento de Sol sobre si debíamos llamarnos ciudadanos o personas. Y esa fue también la autodenominación que escogieron quienes redactaron uno de los primeros textos que lanzó públicamente el movimiento: «somos personas que hemos venido libre y voluntariamente».

Amador Fernández-Savater es editor de Acuarela Libros y ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos y de base en Madrid

No se trata de una palabra habitual en un movimiento de transformación social. Más bien todo lo contrario. Políticamente no tiene mucho significado, incluso puede parecer una palabra sospechosa. ¿De dónde viene? ¿Qué realidades pretende nombrar? ¿Qué pretende incluir y qué deja fuera? ¿Qué problemas implica? Pensar qué significa una “revolución de personas” puede ser una buena manera de acercarse al 15 M.

En primer lugar, creo que el concepto de personas tiene que ver con la despolitización generalizada de las sociedades en las que vivimos. La políti-

¹ Este artículo se publica bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5.

ca de los políticos está bajo un enorme descrédito, pero tampoco la izquierda extraparlamentaria o los movimientos sociales gozan de mucha más confianza. Esta despolitización no es un fenómeno puramente negativo. Es el paso previo y la condición necesaria para una nueva politización.

La tendencia profunda a la despolitización se ha visto acentuada en España durante las dos legislaturas del Gobierno socialista de Zapatero (a partir de marzo 2004). El movimiento «no a la guerra» de 2003 o la reacción popular contra las mentiras con las que el Partido Popular trató de instrumentalizar la masacre del 11 de marzo de 2004, se olvidaron pronto. Mucha gente repitió durante años que no había que criticar o manifestarse en ningún sentido que pudiera perjudicar al Gobierno socialista y favorecer de ese modo a la derecha (por ejemplo, cuando los hechos dramáticos en las vallas de Ceuta y Melilla en 2005). De ese modo las calles se vaciaron, pero la desafiliación política siguió su curso implacable.

En los primeros tres años de explosión *explícita* de la crisis, a partir de 2008, las protestas contra su gestión neoliberal por parte del Gobierno brillaron sorprendentemente por su ausencia. Nadie se explicaba por qué, aunque la pregunta estaba en todas las bocas. La huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios en septiembre de 2010 fue un fiasco absoluto, incluyendo también casi todas las convocatorias alternativas. A pesar de que salió bastante gente a la calle, todos sentíamos que ahí no estaba pasando nada. Ninguna energía nueva, sólo más de lo mismo.

Y de pronto el 15 M. Las acampadas en las principales plazas de casi todas las ciudades españolas abren un espacio desde abajo que genera muchísima ilusión y esperanza entre gente muy distinta. El uso de la palabra *personas* se entiende en este contexto. Intuitivamente se escoge como *nombre propio* una palabra en principio vacía de color y peso político, pero que por ese mismo motivo podía cargarse de una potencia inédita. No somos más que personas significa «no hay nadie detrás», ninguna de las instancias de lo político desprestigiado. Indica un deseo de otro comienzo, de empezar por otro lugar completamente distinto, lejos de todos los callejones sin salida a los que ya sabemos que nos aboca la vieja política.

En segundo lugar, me parece que la palabra *persona* remite a una de las pocas dimensiones de la experiencia contemporánea que aún merecen nuestra confianza: lo personal.

El atractivo de la intimidad tiene que ver con el disfrute de los espacios donde el otro se nos muestra sincera y espontáneamente, de forma simple y directa, sin miedo al juicio. También las redes sociales son a su modo un espacio de intimidad (y de ahí seguramente parte de su éxito). La conexión se da uno-a-uno. El otro no se nos presenta como un ente abstracto o desencarnado, sino como una vida que comparte y comunica sus diferentes pla-

nos (aficiones, convicciones, preocupaciones, etc.). Pero aquí la cosa se complica un poco más (y se hace más interesante), porque la intimidad compartida en las redes sociales está a la vista de todos, las fronteras entre lo privado y lo público se desdibujan, la frontera nítida entre amigos y desconocidos se emborrona. La intimidad se hace pública. Por supuesto, tanto la intimidad “física” como las redes sociales están llenas de cálculos y estrategias, pero también perdura en ellas la huella de lo personal: auténtico, desinteresado, gratuito.

No somos más que personas significa «no hay nadie detrás»,
ninguna de las instancias de lo político desprestigiado.
Indica un deseo de otro comienzo, de empezar por
otro lugar completamente distinto

En otras movilizaciones masivas ya hemos visto funcionar la potencia de la conexión uno-a-uno: otorgo confianza al mensaje de móvil que me convoca a concentrarme el 13 de marzo de 2004 frente a las sedes del PP porque conozco personalmente a quien me lo manda; me atraen las manifestaciones del movimiento V de Vivienda (2006) porque las pancartas se las hace cada cual expresando sus problemas personales con la vivienda; me reconozco en su eslogan «no vas a tener casa en la puta vida» porque es exactamente lo yo pienso por dentro, etc.

El 15 M ha hecho suya también esa potencia de lo personal. La intimidad no sólo se hace pública, sino que además se materializa en las calles y los cuerpos. Todavía se me ponen los pelos de punta recordando algunas intervenciones de personas que relataban en asamblea cómo era una vida “dormida” y en qué había consistido su “despertar” el 15 M. Muy pocas veces he escuchado hablar así en un espacio político, el grado de exposición personal era casi desconocido para mí. No se escondía la vida detrás de las palabras. Era como si hubieran caído de pronto la vergüenza y el pudor que impiden poner en común lo más íntimo, las inclinaciones y preocupaciones más profundas de cada cual, es decir, *poli-tizarlas*.

También recuerdo que las intervenciones que más se aplaudían (con un gesto de las manos, en absoluto silencio) eran casi siempre las de la gente que se trababa un poco, que no ocultaba su nerviosismo, que tanteaba para encontrar *sus propias palabras*. Por el contrario, las aspas se levantaban enseguida contra los discursos muy hechos, demasiado automáticos, *muy poco personales*.

Solemos pensar lo personal diferenciado y contrapuesto a lo público y lo común. Pero no es en absoluto así: lo personal es lo más impersonal y lo que mejor circula porque es

creíble. Como en otros muchos momentos revolucionarios en la historia, en el 15M hemos (re)descubierto que lo tuyo es lo mío, lo que te pasa a ti también me pasa a mí y vaya sorpresa me he llevado cuando aquel desconocido ha dicho en la asamblea exactamente lo que pienso yo. Es como si el veneno del individualismo y su antídoto estuvieran localizados en la misma raíz ambivalente.

En tercer lugar, el discurso sobre las *personas* me recuerda la historia del cíclope Polifemo y Ulises. Polifemo le pregunta en determinado momento de la historia a Ulises su nombre y el héroe le responde astutamente: «mi nombre es nadie». Esa argucia permitirá finalmente huir a Ulises y sus compañeros, porque Polifemo ya herido en su único ojo será incapaz de obtener la ayuda de los otros cíclopes en su persecución: «ayudadme, nadie me ha atacado, ha sido nadie». Manifestar que «somos personas» me parece una manera de decirles a nuestros particulares cíclopes mediáticos y políticos: «somos nadie». Nadie, es decir, todos, es decir, cualquiera.

Es como si el veneno del individualismo y su antídoto estuvieran localizados en la misma raíz ambivalente

Me atrevería a afirmar que la alegría irresistible que estalló en Sol el 15 M era en parte la alegría de no ser, de dejar de ser lo que quieren que seamos, de ser uno cualquiera, de compartir lo común más allá de las etiquetas que nos separan, de estar junto a otros que no conozco y que no son como yo, pero confiando en que están aquí por lo mismo que yo. No es la primera vez que esa alegría irrumpe en la escena política-pública. Es cuando nadie nos re-presenta que podemos *hacernos presentes*, estar ahí en primera persona, con la vida al descubierto, haciendo y deshaciendo mundo por nosotros mismos, creando algo nuevo y no sólo repitiendo una identidad.

Las acampadas del 15 M fueron en primer lugar un espacio que se abría y ofrecía a cualquiera, por fuera de toda condición identitaria (clase o ideología). Lo importante era compartir un problema, no una identidad. He aquí un aspecto clave de la política que viene. Un problema puede tocar e interpelar a gente muy distinta, como un desahucio puede afectar a una persona religiosa o a un laico, a una persona de derechas o de izquierdas. Eso no importa. Porque no somos *estos* o los *otros*, sino cualquiera que quiera «democracia real ya» y no ser «mercancía en manos de políticos y banqueros», como dicen los eslóganes del movimiento.

Esta fuerza de anonimato, clave en las politizaciones contemporáneas, no es homogénea, informe o plana, sino que «está llena de colores, estilos, contrastes, movimientos. Es una anonimidad con muchos nombres de hacedores, que es sin embargo anonimidad por-

que ninguno de ellos resalta con un perfil protagonista» [Juan Gutiérrez]. Está hecha de singularidades que hablan en primera persona de «su» vida.

En todo caso, hay que decir que la elaboración común de la diferencia y el disenso fue un problema irresuelto en las acampadas y que desde luego aún está abierto. Por último, quizá no sea demasiado abuso relacionar el discurso de las personas con el concepto de humanidad. No como ideal abstracto, moral y regulador, sino como la mismísima condición que nos impone la actualidad. En la globalización, no hay afuera ni otros mundos posibles, sino que todos compartimos un solo mundo común. Estamos interconectados en una interdependencia global. Fukushima no es sólo un asunto privado de los japoneses. Como explica Marina Garcés, la realidad nos impone una política planetaria y la humanidad es hoy un hecho, no un ideal abstracto.

¿Cómo lo asumimos? Por un lado, los contextos locales y nacionales aún nos parecen espacios donde podemos intervenir, hacernos escuchar, modificarlos mediante la protesta o el voto. Por otro lado, sabemos que el margen de maniobra en esos contextos para la decisión autónoma es cada vez menor y que los políticos se limitan prácticamente a la gestión de las necesidades de la economía global. Y sin embargo, «Europa», «el mundo» aún nos parecen entidades demasiado abstractas, no podemos aferrarlas bien con el cuerpo y el pensamiento. En ese dilema nos debatimos. El lema de la convocatoria global del 15 de octubre es «United for Global Change». ¿Podría ser el comienzo de una revolución global de personas?

DIAGONAL EXISTE



GRACIAS A TI.

Sin directores, sin jefes, sin empresas ni partidos políticos detrás.
15.000 ejemplares de distribución, más de 5.000 suscripciones,
19.000 visitas web diarias.

I BELIEVE
IN DIAGONAL

PAPEL

25€ Suscripción 6 meses 50€ Suscripción anual 100€ Suscripción apoyo

DATOS Nombre Direcc.
Localidad Provincia CP Tfno.
Mail Fecha de nacimiento (opcional) ¿Cómo conociste Diagonal?

FORMA DE PAGO DOMICILIACIÓN BANCARIA. Autorizo al cargo de mi cuenta los recibos que en concepto de suscripción presentará anualmente la Asociación Punto y Coma, editora del periódico DIAGONAL.
Nombre y apellidos del titular
NIF N° de cuenta Firma

INGRESO O TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE. NÚMERO DE CUENTA: 2100 - 4065 - 10 - 2200111082 de La Caixa. (Cuenta a nombre de la Asociación Punto y Coma, Comunicación y Prensa). No olvides indicar claramente tu nombre en el ingreso. CHEQUE nominativo a favor de: Asociación Punto y Coma, Comunicación y Prensa.

Mastercard Fecha de caducidad GIRO POSTAL n°
 Visa Firma

RENUOVA TU SUSCRIPCIÓN ...

... Y SIGUE DISFRUTANDO DE UN PERIÓDICO MILAGROSO

¿Tiene sentido una educación de excelencia en los niveles previos a la universidad? 133

Rafael Feito

Rompiendo muros, abriendo ventanas 145

María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez



¿Tiene sentido una educación de excelencia en los niveles previos a la universidad?

Lo que en estas páginas se intentará demostrar es que las aulas que escolarizan a alumnos con muy diferentes niveles educativos, y de distintos grupos sociales y étnicos, pueden ser mucho más fructíferas –en términos de aprendizajes, de formación de personas y de potenciación del esfuerzo personal– que las que son resultado de la agrupación de los alumnos y alumnas que son académica y solo académicamente excelentes. La enseñanza cooperativa es sin lugar a dudas la mejor opción posible y esto es algo que los avances recientes en neurociencia confirman una y otra vez.

Son muchas las ocasiones en las que los datos científicos contradicen las impresiones sensoriales directas o el sentido común. El ejemplo más rotundo quizás sea el de las vicisitudes por las que pasó el heliocentrismo. En el caso de la escuela ocurre algo similar con la idea de que es mucho mejor agrupar al alumnado en función de su desempeño académico. Así, recientemente, la viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid loaba el bachillerato de excelencia de esta región aduciendo que «va a permitir que nuestros mejores alumnos aprovechen al máximo su talento, un talento que no se puede desperdiciar y del que la sociedad madrileña está muy necesitada». ¹ Todo esto recuerda a la famosa frase de Mark Twain cuando afirmaba que «lo importante no es lo que no sabemos, sino lo equivocados que estamos en lo que creemos saber».

Rafael Feito es profesor de Sociología de la Educación

Lo que en estas páginas se intentará demostrar es que las aulas que escolarizan a alumnos con muy diferentes niveles educativos, de distintos grupos sociales y étnicos, pueden ser mucho más fructíferas –en términos de aprendizajes, de formación de personas y de potenciación del esfuerzo personal– que las que son resultado de la agrupación de los alumnos que son

¹ *Escuela*, 3915, 22 de septiembre de 2011, p. 7.

académica y solo académicamente excelentes. Es más, los primeros beneficiados serían justamente estos alumnos, quienes aprenderían más y mejor. Estamos claramente ante una situación de suma múltiple o de *win-win*.

Lo que sabemos sobre la agrupación por niveles

Señalaba Jeannie Oakes, en un brillante estudio –que, pese al tiempo transcurrido, sigue siendo lo mejor que se ha escrito en relación a los itinerarios en la escuela– sobre los serios perjuicios de la separación por niveles de rendimiento educativo.² Es habitual pensar que los alumnos aprenden mejor en grupos homogéneos, que se retrasará el aprendizaje de los alumnos brillantes si se mezclan con los menos académicos. Se supone que los estudiantes más lentos desarrollan actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela si no están en aulas con los alumnos brillantes. A ello se añade la creencia de que la agrupación refleja los logros conseguidos y por conseguir. Finalmente, los profesores –especialmente los que consideran que la docencia se limita a la mera transmisión unidireccional de información– consideran más fácil bregar con grupos homogéneos.

Sin embargo, la mayor parte de los estudios no demuestran que se aprenda más en estas condiciones. En lo que se refiere al pretendido beneficio de la segregación para los alumnos menos académicos, lo que en realidad sucede es que una vez que determinados estudiantes son situados en los grupos lentos son contemplados por sus compañeros como tontos, lo que provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Además, participan menos en actividades extracurriculares, se comportan peor y reciben más sanciones. Muchas de estas actitudes son atribuibles a la agrupación por niveles.

Oakes señala que el agrupamiento no iguala, no incrementa la eficacia de las escuelas. Muy al contrario, retrasa el aprendizaje de los menos académicos, promueve una baja autoestima y separa a los estudiantes a lo largo de líneas socioeconómicas. Oakes sustenta estas afirmaciones en un estudio dirigido por ella y realizado en veinticinco escuelas. Son muy llamativas las diferencias en las respuestas dadas tanto por los alumnos como por los profesores en función del nivel al que perteneciera su grupo. Así, en el caso de los estudiantes, una de las preguntas era: ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta clase? Entre los estudiantes de los grupos avanzados se obtenían respuestas del siguiente tenor: «He aprendido a analizar historias que he leído», «estoy desarrollando una mentalidad abierta», «he aprendido a hacer experimentos». Entre los alumnos de los grupos menos académicos las respuestas eran de este tipo: «Me he dedicado a inflar globos luminosos»; «no he aprendido nada, solo los números romanos»; «he aprendido que el inglés es aburrido».

² J. Oakes, *Keeping Track. How Schools Structure Inequality*, New Haven, Yale University Press, 1985.

En una investigación más reciente Marka Watanabe³ explicaba, al igual que hiciera Oakes, que no se aprende lo mismo en los distintos itinerarios. En su investigación analiza las clases de una profesora de lengua en los grupos de los itinerarios avanzado e intermedio. Se observa que, pese a leer en ambas clases la misma novela, no se trabaja del mismo modo. En la clase avanzada se hacen preguntas que implican reflexionar sobre los comportamientos de los personajes, mientras que en las de nivel intermedio basta con describir lo que hacen. Es más, los chicos de la clase avanzada son invitados a leer el cuento que van a escribir a los niños de la escuela de primaria situada en las proximidades de su centro, mientras que los del nivel intermedio se limitarán a entregar su trabajo a la profesora.

Por referirnos a un ejemplo más próximo, M.^a Isabel Ponferrada⁴ citaba unas declaraciones del director de un instituto de secundaria del Vallès Oriental publicadas por *El Periódico* el 11 de noviembre de 2008 en que decía lo siguiente: «No segregamos alumnos, les damos lo que necesitan». Sin embargo, un informe de la Fundación Bofill⁵ aparecido en esas fechas aseguraba que dicha separación tiene un efecto negativo sobre los resultados escolares, justo lo contrario a lo buscado por la escuela con este mecanismo. En el mismo artículo de *El Periódico* podíamos leer, como opinión de los directores de los centros escolares, que «gracias a una mayor homogeneización de las aulas, los estudiantes reciben una atención personalizada que mejora sus resultados». El informe detecta un mayor fracaso escolar precisamente en las escuelas donde se realiza la separación por niveles, que ciertas acciones de refuerzo estigmatizan al alumnado de origen inmigrante incrementando el fracaso escolar y que la separación por niveles produce niveles altísimos de fracaso escolar.

Es, en definitiva, la profecía que se cumple a sí misma o efecto Pigmalión.⁶ Las expectativas que el profesorado deposita en sus estudiantes tienen efectos notorios sobre su rendimiento. Se ha hecho alguna experiencia con dos grupos de nadadores absolutamente aleatorios que son presentados de un modo muy distinto al nuevo monitor. El primero es presentado como émulo de Michael Phelps y el segundo como personas que apenas saben flotar. Pocas semanas después se observan diferencias enormes en los aprendizajes de uno y otro grupo netamente favorables para el primero.

³ M. Watanabe, «Tracking In The Era of High Stakes State Accountability Reform: Case Studies Of Classroom Instruction In North Carolina», *Teachers College Record*, 110, 2008, pp. 489-534 [<http://www.tcrecord.org> consultado el 27 de noviembre de 2009].

⁴ M.^a I. Ponferrada Arteaga, «Efectos escolares y sociales de la separación por niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona», *Papeles de la Economía Española*, 119, 2009.

⁵ F. Ferrer (dir.), Òscar Valiente y José Luis Castel, *Equitat, excel·lència i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada* [disponible en <http://www.edu21.cat/files/continguts/Informe provisional complet.pdf> consultado el 8 de mayo de 2009]

⁶ El término procede del mito griego consistente en un escultor llamado Pigmalión que se enamoró de Galatea. A tal punto llegó su pasión por la escultura que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la escultura cobra vida después de un sueño de Pigmalión, por obra de Afrodita al ver el amor que éste sentía por la estatua, que representaba a la mujer de sus sueños. Este suceso fue nombrado como el efecto pigmalión ya que superó lo que esperaba de sí mismo al crear una escultura tan perfecta que llega a enamorarse de ella.

En sentido contrario se puede citar el caso del estadístico americano George Dantzing (1914-2005). Siendo estudiante en una ocasión llegó tarde a la clase de estadística del profesor Neyman. Vio dos enunciados de problemas en la pizarra, los anotó y durante bastantes días hizo unos deberes que consideró especialmente complicados. El siguiente domingo a las ocho de la mañana, Neyman llamaba a la puerta de su casa para felicitarle. Lo que Dantzing copió no eran deberes para casa sino dos problemas hasta entonces irresueltos.⁷

Cuando las aulas son heterogéneas se puede trabajar de otra manera. Se puede aducir el ejemplo de una escuela de Israel en la que un grupo de profesores de secundaria conducido por Shlomo Sharan y Hana Schalar⁸ «demostraron la rápida aceleración que se produce en las etapas de crecimiento una vez que estudiaron y comenzaron a aplicar el modelo de investigación grupal, una forma compleja de aprendizaje cooperativo. Trabajaron con clases donde los hijos de los pobres (denominada “CSE baja”), se mezclaron con los hijos de padres pertenecientes a la clase media. En un curso de estudios sociales de un año de duración, los docentes sometieron a los alumnos a pruebas de conocimientos previas y también a exámenes finales. De esta manera, pudieron medir los logros de los estudiantes en el aprendizaje académico y compararlos con los logros de aquellos a los que se les enseñó siguiendo el esquema, más común en las escuelas israelíes, de la clase total».

En nuestros institutos es muy habitual agrupar en una misma clase al alumnado que llega de la primaria con necesidades de refuerzo en Lengua o Matemáticas y escolarizar al resto en los grupos de segundo idioma extranjero.

«El sistema funciona así, me temo. Se eligen los grupos de acuerdo con la antigüedad, así que los que tienen más experiencia se quedan con los alumnos disciplinados y tranquilos del A y, a veces, hasta del B. Mientras que el C, el D y, cómo no, el terrible E –donde suelen aglutinarse los alumnos conflictivos o con menos rendimiento– se quedan para los nuevos.»⁹

¿Es inteligente agrupar a los que creemos más inteligentes?

La idea que subyace a esta separación es que la inteligencia es una entidad invariable. El psiquiatra italiano Vittorino Andreoli¹⁰ señalaba que hasta hace un par de décadas «dominaba la concepción de que se trataba de un órgano perenne, una de esas estructuras que se realizaban rápidamente (en parte ya en el feto) y que, desde entonces, ya no había nada que

⁷ C. Alsina, *El club de la hipotenusa*, Barcelona, Ariel, 2008, p. 139.

⁸ Citado en Bruce Joyce, Marsha Weil y Emily Calhoun, *Modelos de enseñanza*, Barcelona, Gedisa, 2002 a partir de *Language and learning in the cooperative classroom*, Nueva York, Springer-Verlag, 1988.

⁹ Fernando J. López, *La edad de la ira*, Madrid, Espasa, 2011, p. 58.

¹⁰ *Carta a un profesor*, Integral, Barcelona, 2008 (pp. 126-128).

hacer, como si fuera un cristal. Las únicas modificaciones posibles eran en negativo, en el sentido de la patología y, por tanto, de lesiones que cicatrizaban con daños permanentes».

«En el mapa anatómico del cerebro, en aquellos tiempos, había áreas en las que se podía escribir el *hic sunt leones* –tierra ignota– de los antiguos mapamundi. Áreas en las que experimentalmente no ocurría nada, ni con estímulos ni con lesiones. Se llamaban también zonas mudas del cerebro. Se creía que ahí no pasaba nada.

Pues bien, la revolución a la que me refiero, del todo superponible al cambio de visión del universo producido por el telescopio de Galileo, es haber descubierto que estas áreas están destinadas a las funciones superiores, a todas las que sirven para el aprendizaje. No solo esto: estas zonas no tienen una estructura precisa, fijada, sino que están en condiciones de organizarse tras una experiencia y, por tanto, de un aprendizaje. Están en condiciones de estructurarse *ex novo*, e incluso de cambiar.»¹¹

La concepción de inteligencia que maneja la escuela es excluyente y tiende a perjudicar a los estudiantes que proceden de los medios sociales menos favorecidos. Como contrapunto, el psicólogo de Harvard, Howard Gardner, desarrolló su famosa teoría de las inteligencias múltiples.¹² Básicamente lo que Gardner planteaba era que nuestra escuela entroniza dos tipos de inteligencia: la lógico-matemática y la lingüística. Y esto lo hace al precio de negar otros tipos de inteligencia por lo menos tan importantes como aquellas dos. La teoría de las inteligencias múltiples propone que existen diferentes tipos de inteligencia que la gente posee en distintos grados. Además de las dos citadas Gardner habla de otras seis inteligencias más. El siguiente cuadro sintetiza muy resumidamente las características de cada una de las inteligencias y su aplicación didáctica.

Tabulación de inteligencias múltiples¹³

	DESTACA EN	LE GUSTA	APRENDE MEJOR
AREA LINGÜÍSTICO-VERBAL	Lectura, escritura, narración de historias, memorización de fechas, piensa en palabras	Leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer puzzles	Leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo
LÓGICA – MATEMÁTICA	Matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas, pautas	Resolver problemas, cuestionar, trabajar con números, experimentar	Usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto

¹¹ *Op. cit.*, p. 128.

¹² *Mentes flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la de los demás*, Paidós, Barcelona, 2004.

¹³ Este cuadro aparece en <http://www.monografias.com/trabajos12/intmult/intmult.shtml> [consultado el 7 de marzo de 2008] y se basa en H. Gardner, *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*, Paidós, Barcelona, 1995.

ESPACIAL	Lectura de mapas, gráficos, dibujando, laberintos, puzzles, imaginando cosas, visualizando	Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos	Trabajando con dibujos y colores, visualizando, usando su ojo mental, dibujando
CORPORAL – KINESTÉSICA	Atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas	Moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal	Tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales.
MUSICAL	Cantar, reconocer sonidos, recordar melodías, ritmos	Cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música	Ritmo, melodía, cantar, escuchando música y melodías
INTER PERSONAL	Entendiendo a la gente, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, vendiendo	Tener amigos, hablar con la gente, juntarse con gente	Compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando, cooperando
INTRA PERSONAL	Entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes y sus debilidades, estableciendo objetivos	Trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses	Trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio, reflexionando.
NATURALISTA	Entendiendo la naturaleza, haciendo distinciones, identificando la flora y la fauna	Participar en la naturaleza, hacer distinciones	Trabajar medio natural, explorar seres vivos, aprender de plantas y temas de la naturaleza

Esta concepción de la inteligencia permite apreciar virtudes que la escuela tradicionalmente desprecia. Así, por ejemplo, un estudiante puede ser muy bueno en Física y conseguir bajos resultados en Música. Es tarea de la escuela conseguir un desarrollo armónico y equilibrado de las distintas inteligencias y esto solo se puede alcanzar en aulas heterogéneas.

La importancia del arte y de la creatividad

La escuela tiene una tremenda propensión a excluir. Ken Robinson¹⁴ citaba el caso de la bailarina Gillian Lynn.¹⁵ A los seis años –estamos en la década de los treinta del pasado

¹⁴ K. Robinson, *The element. How Finding Your Passion Changes Everything*, Viking, Londres, 2008.

¹⁵ G. Barbara Lynn, nacida el 20 de febrero de 1926, es una bailarina, actriz, coreógrafa de entre cuya obra destacan los musicales *Cats* y *El fantasma de la ópera*.

siglo— sus profesores no podían hacerse cargo de ella ya que era incapaz de estarse quieta. En aquel entonces, y para su bien, aún no se había descubierto el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sus padres la llevaron a un pediatra. Tras hablar con ellos dejó a la niña sola en la consulta con la radio encendida. Los padres podían ver que la niña movía sus piernas al ritmo de la música. El médico les recomendó que la matricularan en una escuela de danza. A partir de aquí el resto es una historia de éxito incontestable.

De hecho, los datos de que disponemos apuntan a la importancia de las actividades artísticas. En este sentido, Pérez-Díaz y Rodríguez¹⁶ señalaban que en el Eurobarómetro 67.1, de 2007, se preguntó a los encuestados si habían practicado o no actividades del tipo de tocar un instrumento musical, cantar, actuar; bailar, escribir textos literarios o poemas u otras actividades artísticas tales como la escultura, la pintura o el dibujo. Hay una estrecha correlación entre el porcentaje de personas que han realizado estas actividades en distintos países y tasa de patentes.

Todo esto choca con la restrictiva idea que de la educación escolar tienen parte de nuestras autoridades educativas. Así, en la Comunidad de Madrid existen los denominados Diplomas de Aprovechamiento para el alumnado de la ESO (Orden 2316/2009, de 20 de mayo) los cuales se entregarán a los alumnos que, entre otros requisitos, hayan obtenido en las materias Lengua castellana y Literatura, primera Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Matemáticas de cuarto de la ESO, una nota media igual o superior a 6. ¿Dónde quedan las demás asignaturas? ¿No son importantes la música, la educación física o la informática? En este mismo curso se ha puesto en marcha la segregadora experiencia de un centro público de bachillerato para los alumnos con mejor expediente en la ESO.

Pese a todo, se insiste en la segregación

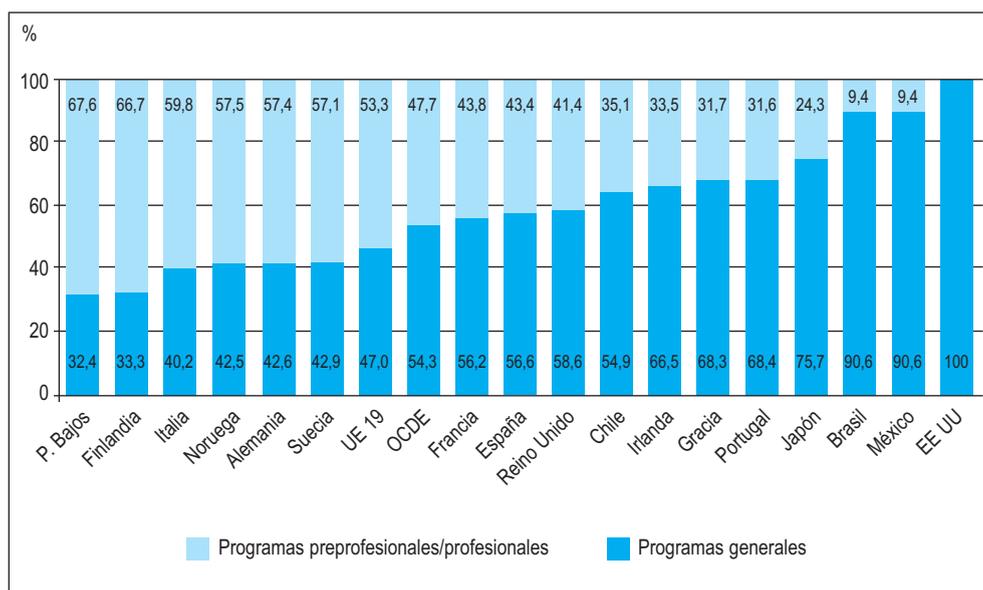
Por desgracia, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no está sola en esta cruzada en favor de la segregación. Como consecuencia de la crisis muchos jóvenes que abandonaron tempranamente el sistema educativo vuelven a él. Según informaba el diario *El País*¹⁷ ha aumentado en un 3% el número de estudiantes en bachillerato y FP aumentó el curso pasado un 3%, después de 15 años de descenso continuado. Además, 138.000 personas —22.500 más que cuatro años antes— se inscribieron para conseguir el graduado en la educación de adultos, cuyas aulas están llenas de jóvenes que habían dejado de estu-

¹⁶ V. Pérez-Díaz y J. C. Rodríguez, *La cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el marco europeo*, COTEC, 2010 [disponible en <http://www.cotec.es/index.php/publicaciones/show/id/1992/titulo/la-cultura-de-la-innovacion-de-los-jovenes-espanoles-en-el-marco-europeo>—2010 consultado el 7 de diciembre de 2010].

¹⁷ J. A. Aunión, «Un 14% de los jóvenes españoles no estudian ni trabajan», *El País*, 3 de septiembre de 2009.

diar unos años antes. Como se considera que este alumnado intelectualmente no va a dar mucho de sí se habla abiertamente de potenciar la formación profesional frente al bachillerato. Se diga lo que se diga, España no es un país que destaque especialmente porque su alumnado sea particularmente propenso a desdeñar la formación profesional. El 56,6% de los estudiantes de secundaria superior van a la rama académica frente a un 53,4 de media en la OCDE –y 46% en nuestro entorno más inmediato de la UE19–; hay países, como EE UU, en los que todo el alumnado está en la rama general. He aquí los datos del informe *Education at a Glance 2009*.¹⁸

Gráfico 1 (extracto de la tabla C1.4)
Modelos de matriculación en la segunda etapa de Educación Secundaria (2007)
Matriculación según tipo de programa



No obstante, como es bien sabido, nuestro principal escollo es el de superar la ESO sin la cual no se puede acceder a la formación profesional de grado medio. Esta es la razón por la que muy previsiblemente se potencie la excepcional vía de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). De acuerdo con la LOE (art. 30) se trata de programas pensados para alumnado mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título de Graduado. «Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad podría reducirse a quince años para aquellos que cumplan lo previsto en el artículo 27.2» –el cual

¹⁸ *Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2009. Informe español*. Disponible en: <http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2009/informe-espanol-panorama-educacion-ocde.pdf?documentId=0901e72b8007cd90> [consultado el 3 de noviembre de 2009].

hace referencia a alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones de pasar a tercero y hayan repetido una vez en secundaria. Además, desde tercero existe la posibilidad de enviar al alumnado a los programas de diversificación curricular (LOE, art. 27). En ambos casos, estas vías excepcionales conducen a la posibilidad de obtener el título de graduado en ESO.

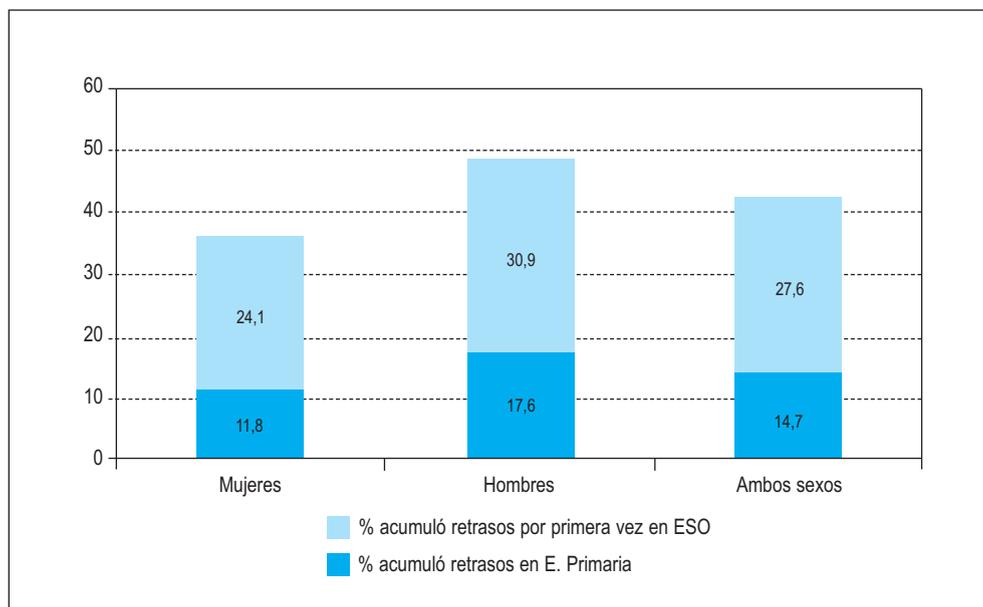
Los datos de los sucesivos informes PISA demuestran que los sistemas comprensivos –los que no separan a los alumnos antes de los quince años de edad– son más igualitarios y su rendimiento no se resiente por ello

El actual Gobierno del PSOE en la ley de economía sostenible incide en la misma propuesta con los itinerarios planteados en cuarto de la ESO. Al alumnado se le ofrecerían tres opciones de entre las cuales habría de elegir tres materias. La primera de aquellas es la que posiblemente elegirían los alumnos que vayan a cursar en Bachillerato las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales o la de Artes. La segunda –dada la presencia de materias como Tecnología, Física y Química y Biología y Geología– está claramente concebida para los alumnos más aplicados: los que elegirían en Bachillerato la modalidad de Ciencias y Tecnología. Finalmente, la tercera –en la que ya no hay segunda lengua extranjera– conformará el itinerario de los alumnos de menor rendimiento a los cuales se orientará hacia una formación profesional crecientemente estigmatizada.

En todas estas propuestas late la idea de que es poco menos que imposible que los alumnos más aplicados den de sí todo lo que pueden si se juntan con los indolentes. Sin embargo, la realidad es tozuda y esto no tiene por qué ser así. Finlandia, por ejemplo, desmontó el rígido sistema de itinerarios y eliminó los exámenes estatales utilizados para este propósito. En su lugar se preocupó por contar con profesores muy preparados y un currículum y una evaluación basados en la resolución de problemas, en la creatividad, en el aprendizaje independiente y en el trabajo colaborativo en el aula. Los datos de los sucesivos informes PISA demuestran que los sistemas comprensivos –los que no separan a los alumnos antes de los quince años de edad– son más igualitarios y su rendimiento no se resiente por ello.

Un mecanismo que permite ahondar la separación de alumnos es la repetición de curso. Pese a que los medios de comunicación y toda una batería de “todólogos” insisten en que desde que se aprobó la LOGSE en 1990 en España se regalan los aprobados, nos encontramos más bien con la situación opuesta. La supuesta promoción automática, la promoción por imperativo legal, según la cual el alumnado pasaría de curso por que la ley así lo dice. Sin embargo, los datos muestran que casi la mitad de los varones ha repetido curso a la altura de cuarto de la ESO.

Alumnos de 15 años que acumulan retrasos antes de 4º de ESO (Curso 2005/06)



Fuente: MEPSYD: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores 2008.

En primaria tan solo se puede repetir una vez (LOE, art. 20.4) y en secundaria obligatoria no más de una vez un curso y no más de dos veces a lo largo de toda la etapa (LOE, art. 28.6).

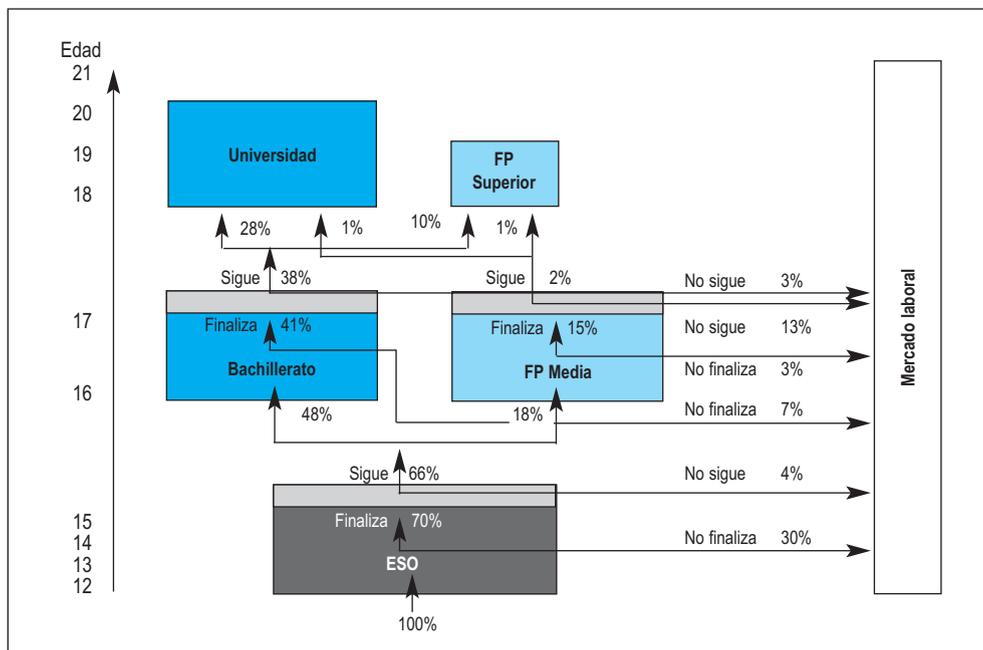
Nuestro sistema educativo parece regirse por el principio de que muchos son los llamados y pocos los elegidos. El siguiente cuadro permite ver la tremenda selección ejercida.

Como se puede observar, el sistema dispone de multitud de mecanismos para librarse del alumnado menos académico. Desde los grupos más conservadores se pone el grito en el cielo ante la posibilidad de que se incremente el porcentaje de jóvenes que cursen el bachillerato lo cual, a su vez, podría elevar la ya de por sí elevada proporción de jóvenes con titulación universitaria.

«La educación de ahora sirve para que la mayoría de nuestros chicos abandone antes de terminar el Bachillerato. Sirve para que tengamos un porcentaje de fracaso escolar simplemente escandaloso. Y sirve para que mis compañeros calienten sus sillas leyendo en voz alta los libros de texto.»¹⁹

¹⁹ F. J. López, *La edad de la ira*, Espasa, Madrid, 2011, p. 34.

Senda educativa en España, 2005



Fuente: Informe Económico del Presidente de Gobierno, 2008 (a partir del MEC)

Finalmente, la opción por la escuela privada y concertada se convierte en otro elemento que permite separar a los alumnos de mayor rendimiento de los que obtienen peores resultados. Los informes PISA han demostrado que, en realidad, la escuela privada y concertada obtiene mejores resultados porque escolariza a un alumnado de un nivel socioeconómico más alto que el que va a la pública. Nadie consideraría mejor a un hospital que atiende a una población joven y, en consecuencia, con baja mortalidad que a un hospital situado en un entorno con un elevado porcentaje de ancianos y subsiguiente alta mortalidad.

La necesaria heterogeneidad

Las aulas heterogéneas precisan un tipo de docencia sustantivamente distinto de las aulas o centros de excelencia. En estos últimos se puede presuponer un elevado interés académico del alumnado, unas familias con altos niveles cultural y económico y con una predisposición a apoyar escolarmente a sus hijos. Por fortuna, contamos con experiencias de diferentes institutos de secundaria²⁰ en los que la organización de las aulas de un modo dis-

²⁰ R. Feito y J. I. López Ruiz (coords.), *La construcción de escuelas democráticas*, Hipatia, Barcelona, 2008.

tinto generaliza el éxito escolar. Se trata de experiencias en las que los alumnos que más saben –lo cual no quiere decir que necesariamente sepan mucho: simplemente saben más que el resto– se convierten en mentores de sus propios compañeros. Ya lo decía Comenio: el alumno que enseña a sus compañeros aprende por partida doble, al aprender por sí mismo y al transmitir lo aprendido a sus iguales. No solo esto: los profesores de apoyo entran al aula de referencia (la dinámica de dos profesores en el aula multiplica exponencialmente las posibilidades de aprendizaje), los alumnos que más saben de informática se convierten en los ciberalumnos –ayudan a sus profesores y compañeros con las nuevas tecnologías– y, quizás lo más importante, el entorno (desde padres y madres a personas significativas pasando por la biblioteca del barrio) se convierte en un elemento educativo de primerísima importancia.

En definitiva, la enseñanza cooperativa es sin lugar a dudas la mejor opción posible y esto es algo que los avances recientes en neurociencia confirman una y otra vez.

«[...] la sensación de cooperar estimula los centros de recompensa del cerebro. La experiencia de la cooperación mutua, incluso en ausencia de contacto directo o de comunicación real, estimula los centros de recompensa. Por lo que sabemos hasta ahora, las redes neuronales de recompensa sirven para estimular la reciprocidad y resistir la tentación de actuar de una forma egoísta. En contraste con la recompensa por la cooperación, los experimentos con escáneres cerebrales han demostrado que el dolor que provoca la exclusión social afecta a las mismas áreas del cerebro que el dolor físico.»²¹

Se podría pensar que por qué hacer este esfuerzo en favor de la inclusividad. La respuesta es que no nos queda más remedio. Tal y como se consignó en el acuerdo de Lisboa de 2000 hay que conseguir que el 85% de nuestros jóvenes alcance como mínimo una titulación –y obviamente unos conocimientos– de educación secundaria superior –léase bachillerato o ciclos formativos de nivel medio. Y esto es así no por una vocación igualitarista, izquierdista o como se quiera denominar. Es una exigencia de la sociedad del conocimiento. El conocimiento se ha convertido en la principal materia prima de la inmensa mayoría de los procesos productivos y por eso un creciente porcentaje de los empleos –de los que existen y de los que existirán pero que no sabemos cuáles vayan a ser– exigen un nivel de conocimiento cada vez más esotérico. Salvo que decidamos que este sea un país de albañiles y de camareros –sin duda una opción– no nos queda más remedio que apostar por una educación de calidad para todos y todas.

²¹ R. Wilkinson y K. Pickett, *Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva*, Turner, Madrid, 2009, p. 237.

Rompiendo muros, abriendo ventanas

La crisis nos afecta a todos, pero toca con más fuerza a los sectores más desfavorecidos, y entre estos se encuentra la población migrante. Aunque cada día paseamos por las mismas calles, compartimos el viaje en autobús o convivimos en los colegios personas migrantes y autóctonas, lo cierto es que estas relaciones están marcadas, en demasiadas ocasiones, por el desconocimiento y la desconfianza basados en los estereotipos y mitos que se crean y sostienen socialmente sobre la población migrante. Los centros educativos juegan un papel fundamental a la hora de tejer redes entre distintos sectores sociales: madres, padres, alumnos, profesoras, movimientos sociales, para lograr cambiar esta situación. En este artículo presentaremos una propuesta educativa cuyo objetivo es tratar de romper algunos muros y aprender a construir ventanas en ellos.

Estamos en crisis, nos dicen los distintos medios de comunicación. La cosa va mal, hay que apretarse el cinturón. Y el cinturón se aprieta y se aprieta cada vez más, pero no sobre las barrigas resultado de la opulencia (que de hecho son las que más precisarían de esta prenda) sino sobre las cinturas de aquellos a los que en el reparto de los recursos les tocó la menor parte. «Para nosotros eso de la crisis no es algo nuevo», cuenta Adama, inmigrante senegalés que vive en España sin papeles desde hace 3 años: «vivimos en crisis desde hace años, cuando la pesca se acabó porque todos los peces se los llevaban los grandes barcos».

Si bien este escenario no es nuevo en el panorama mundial, sí que supone una novedad en el contexto español. En un momento en el que el paro afecta a más del 20% de la población y en el sector juvenil alcanza casi el 40%, los discursos racistas y xenófobos comienzan a replicarse y extenderse a lo largo y ancho del territorio: «Los inmigrantes nos quitan el poco trabajo que hay», «se llevan todas las ayudas y a los españoles no nos queda nada», «yo no soy racista pero lo cierto es que la mayoría son delincuentes», «aquí ya no cabe

María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez son profesoras de centros educativos de FUHEM

más gente». Y, aunque el sentido común dicta que la mejor manera de solucionar el problema sería quitar más a los que más tienen, parece que concentrar la rabia y la ira en el eslabón que tenemos inmediatamente por debajo es la tendencia que socialmente se está poniendo en práctica. Y este sector está formado, en gran parte, por población migrante.

Hablar de crisis económica requiere, necesariamente, hablar de otras dos crisis más globales: la crisis social y la crisis ambiental. Vivimos en un planeta de recursos finitos que explotamos de manera ilimitada, como si no se agotasen nunca y que, además, están repartidos de manera muy desigual a escala mundial. Suponiendo que tuviésemos sólo 100 manzanas para distribuir entre 100 habitantes, resultaría que solamente 20 personas (la mayoría hombres) se quedarían con 80. Esos 20 vivirían en el Norte económico y blindarían sus fronteras a la entrada de personas (que no de recursos) procedentes del Sur.¹

Como cuenta Naomi Klein en su libro *La doctrina del shock*,² las reformas neoliberales más salvajes se han producido siempre en momentos en los que la población estaba en estado de *shock*, ya sea por una dictadura como la chilena o por un desastre natural como el huracán Katrina en EE UU. Y parece que vamos por ese camino. «Que la crisis la paguen los que la crearon», dicen algunas voces que en los últimos meses parecen cobrar más fuerza. Mientras, los de abajo van sufriendo cada día más los drásticos recortes sociales. Y entre los desfavorecidos están los que pierden derechos que ni siquiera les fueron concedidos por ser considerados como ciudadanos de segunda: los migrantes.

Algunos mitos sobre las migraciones: Norte-Sur, ricos-pobres

Una serie de mitos que conducen a un análisis erróneo de los movimientos migratorios empeora la situación de gran vulnerabilidad a la que está sometida la población migrante. Veamos tres de ellos:

El primero se basa en la creencia de que «cada vez hay más migrantes internacionales». Si nos preguntásemos si durante los últimos 50 años ha subido o bajado la proporción de los migrantes que viven en un país distinto al que nacieron, seguramente la mayoría responderíamos que ha aumentado. Sin embargo, durante seis décadas la proporción de migrantes internacionales ha permanecido casi sin cambios: es aproximadamente el 3% de la población mundial.³ En el caso español, como consecuencia de la crisis, durante los primeros meses del 2011 se registraron más emigrantes que inmigrantes.

¹ La denominación de países del Norte se refiere a los países del Norte económico o países centrales. Países del Sur se usa en referencia a los países periféricos.

² N. Klein, *La doctrina del shock*, Paidós, Barcelona, 2007.

³ PNUD. *Informe sobre Desarrollo humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos*, 2009.

El segundo mito consiste en pensar que «las migraciones se dan mayoritariamente de países del Sur hacia países del Norte». Sin embargo, de los 190 millones de migrantes que hay en la actualidad, el 60% son personas que se han movido entre países con niveles de desarrollo similares; el 37% (1% de la población mundial) ha emigrado de un país del Sur a uno del Norte y el 3% restante se ha movido en sentido contrario, del Norte al Sur.⁴

Y el tercer mito se basa en la convicción de que «las personas que emigran lo hacen por necesidad, por lo tanto son las más pobres de los países más pobres». Pero, cuando se analiza la relación entre el nivel de renta de un país y su tasa de emigración, se observa que los países más pobres tienen tasas de emigración muy bajas y que la emigración aumenta con mayores niveles de renta hasta un punto después del cual vuelve a bajar. Este patrón se repite cuando se analiza en relación a las personas: los más pobres y los más ricos emigran menos que los grupos intermedios. Por lo tanto, puede afirmarse que gran parte de la población migrante está formada por personas jóvenes, emprendedoras y preparadas, lo que denota que la experiencia migratoria es muy costosa en la mayoría de las ocasiones.

El patrón que define las migraciones es complejo y en él influyen muchos otros factores además de los económicos. Con el desigual reparto de recursos que existe a nivel mundial y la publicidad que se hace de las bondades del sistema económico capitalista, cabría preguntarse, no tanto por qué hay tanta migración sino por qué no hay muchísima más.

Situación de la migración en España: se cierran las fronteras

A menudo aparece en los medios de comunicación la cuestión de la inmigración en España: cayucos que llegan a la costa con decenas de personas a bordo, inmigrantes que intentan saltar la valla de Ceuta, preadolescentes que viajan colgados de los bajos de los camiones... Pero raras veces aparece un análisis que vaya un poco más allá de todo esto y muy pocas veces se le da la palabra a los migrantes.

Aunque el viaje migratorio es complicado y largo –desde que salen de sus países de origen hasta que consiguen llegar a España pueden pasar hasta años–, no anuncia lo que la mayoría de los migrantes encuentran cuando llegan: dificultades para conseguir los papeles, trabajos sumamente precarizados o imposibilidad para conseguir uno, restricciones de movilidad, miedo a los controles policiales que pueden marcar el camino de regreso o el ingreso en un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros). «La policía nos pide los papeles todo el rato» cuenta Daouda, inmigrante senegalés que forma parte de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, «son controles selectivos, por el color de la piel. No tener papeles no es un delito, es una falta administrativa y no es legal que hagan esto».

⁴ *Ibidem.*

Naciones Unidas estima que hay más de 190 millones de migrantes internacionales, pero con el panorama actual de crisis socioambiental se prevé que esta cifra sea cada vez mayor y que esté marcada por un nuevo tipo de migrantes: los que viajan por causas ambientales.⁵

Aunque, como veíamos, la cifra de migrantes no es muy superior a la de principios del siglo pasado, lo que sí supone una novedad es el cierre de fronteras, que hace que las corrientes migratorias se desvíen por rutas en las que cada vez se pone más en riesgo la vida de los migrantes.

Sin embargo, este cierre no opera de la misma manera para todas las personas, haciendo de la frontera una herramienta de control selectivo de la movilidad. El principal condicionante va ligado a lo estrictamente laboral, seleccionando a las personas según su capacitación profesional. La reforma de la Ley de Extranjería de diciembre de 2009 da la máxima preferencia a «la ordenación de los flujos migratorios laborales» e incluye una «tarjeta azul» destinada a «profesionales altamente cualificados». Las personas que no cumplen estos requisitos se topan con una Europa “fortaleza”, de la que los muros de Ceuta y Melilla son un claro ejemplo. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior en 2010 se repatriaron 30.163 personas.⁶ A pesar de que el PNUD reconoce como un derecho humano universal el derecho a salir de un país, los países de acogida no tienen obligación de dejar entrar a nadie y, por lo tanto, ¿cuál es el valor del derecho a salir de un país si al mismo tiempo no hay derecho a entrar en otro?

Se trata, pues, de una Europa que impide el libre tránsito de personas de los países del Sur, y que a su vez se encarga de exportar un modelo de globalización económica que se basa en el “cuanto más mejor” y que genera una imagen distorsionada en el Sur sobre la realidad del Norte: un modelo homogeneizador y depredador de los recursos naturales, causante de la grave crisis socioambiental en la que estamos inmersos.

Este modelo de globalización capitalista es cada vez menos permeable a la libre circulación de las personas, pero permite, cada vez más, el libre movimiento de los capitales. Las aves migratorias, la madera, el petróleo, los ordenadores y el dinero tienen más derechos de movilidad que los seres humanos. Así, el hecho de conseguir cruzar una frontera tiene más que ver con el dinero que con cualquier otra cosa: en la práctica, los ricos y altamente cualificados se mueven por el mundo con mucha más facilidad que los pobres no cualificados.

En este escenario tiene gran importancia la deslocalización productiva: la cadena de producción, distribución y consumo atraviesa distintos países y continentes, y permite obtener

⁵ Le Monde Diplomatique, *Atlas de las migraciones*. 2010, p. 80.

⁶ Ministerio del Interior, *Lucha contra la inmigración ilegal. Balance 2010* [www.mir.es].

más beneficios a base de contratar mano de obra barata y obviar la regulación ambiental. De este modo, las empresas transnacionales migran hacia los países del Sur, lo que les permite seguir con la lógica de la acumulación propia del modelo económico de los países del Norte. Y todo este modelo de producción y consumo globalizado tiene un efecto determinante en los flujos migratorios.

Es importante poner en práctica proyectos educativos que nos permitan comprender nuestra realidad cotidiana y la de personas que vienen de lejos para compartir con nosotros y nosotras el mismo espacio

Así las cosas, las corrientes migratorias se han convertido en una preocupación importante para la Unión Europea y EE UU. En este sentido, España tiene una situación particular respecto a la inmigración debido a su ubicación geográfica, al desarrollo económico que ha experimentado y a que tuvo muchas colonias en épocas anteriores. Todo ello hace que, en términos relativos, sea uno de los países del mundo en los que más se ha incrementado la población inmigrante.⁷

Y esta llegada de personas de otros países no está exenta de conflictos que, según se analice, pueden verse como una oportunidad o como un riesgo. Como un riesgo, porque ante un panorama de crisis económica como la actual, es mucho más fácil que a los discursos racistas y xenófobos se sumen más adeptos. Y es que los miedos acentúan los prejuicios y mitos que generan rechazo ante lo desconocido, ante el extranjero. Un panorama que viene acompañado de unas políticas gubernamentales que se basan en la expulsión y no en la integración, como muestra la reforma de la Ley de extranjería y la Directiva europea de Retorno, que suponen un retroceso en cuanto a los derechos y libertades de las personas migrantes. Pero, a la vez, se trata también de una oportunidad, porque nos permite crear una sociedad menos homogénea y, por lo tanto, más diversa. La vida es un producto de la diversidad: al igual que ocurre en un monocultivo, en el que una sencilla enfermedad puede acabar en poco tiempo con toda una cosecha, sin diversidad cultural y humana estamos reduciendo el abanico de nuestros aprendizajes, nuestra capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y las posibilidades de reconstruir lo dañado.

⁷ CIP-Ecosocial/FUHEM, «Migraciones. Desafíos y preguntas», *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, n.º 104, 2008-2009.

Ante este panorama... no hay tiempo para el desánimo

Si bien parte del deterioro causado por este modelo económico depredador de recursos y de personas ya es irrecuperable, aún existen muchas cosas que se pueden hacer. No es el momento de la desesperanza, sino el tiempo de buscar maneras de construir los pilares sobre los que se sustente una sociedad distinta. Mirar a esas otras culturas que todavía perviven en el Sur y que han vivido en más armonía con el planeta puede ayudarnos a encontrar algunas claves de cómo crear caminos hacia una sociedad más justa social y ecológicamente. Un buen comienzo sería repensar la supervivencia basándonos en los intercambios con la naturaleza y no en los intercambios monetarios.

La crisis no se va a resolver con más crecimiento económico: precisamente, lo que las sociedades del Norte tenemos que comenzar a plantearnos es un cambio de paradigma, en el cual el decrecimiento sea la línea conductora. Tenemos que recortar drásticamente el consumo de recursos y la producción de residuos hasta acoplarlos a la capacidad de producción y reciclaje de la naturaleza. A la vez, tendríamos que decrecer en el gasto global de energía y materiales, en la producción y el consumo de materiales, en la velocidad de vida en las grandes ciudades, en las distancias que recorreremos y hacemos recorrer a los productos que consumimos, en la complejidad de nuestra tecnología, en las agrupaciones sociales (la democracia requiere sociedades más pequeñas), en las horas de trabajos productivos (que no en las de cuidados).

Decrecer a la fuerza significa poner las bases para que unos pocos acaparen y controlen los recursos (si analizamos la situación internacional, parece que esta vía ya está en marcha) y para que las relaciones de desigualdad entre distintas partes del globo se incrementen. Decrecer con criterios colectivos, por el contrario, implica una reconversión de la economía global en una economía local, lenta, solar y de ciclos cerrados, que satisfaga las necesidades humanas reales, no las creadas: decrecer significa tratar de avanzar hacia la equidad con solidaridad.

Por eso, pensamos que ante este contexto de crisis socioecológica resulta fundamental comenzar a tejer redes entre los movimientos sociales y las instituciones educativas, así como empezar a promover otra mirada de la migración y de los migrantes que viven en España. En esta línea, pensamos que una buena manera de hacerlo es crear espacios de intercambio en los que se encuentren migrantes y autóctonos para charlar y mirarse más allá de los estereotipos construidos socialmente, de modo que se puedan dar las condiciones para crear redes que nos permitan pensar, sentir y experimentar alternativas ante el contexto de crisis actual.

Creemos que ya es hora de comenzar a dar voz a los sin voz, a los y las que llegan, para escuchar todo lo que nos tienen que contar, para construir, a través de la palabra, un

vínculo fuerte que nos dé las claves para trazar un camino firme hacia una sociedad intercultural. Una sociedad que tenga como principio la justicia social.

Aunque en la escuela enseñamos que todos somos iguales –las mujeres y los hombres, los negros y los blancos– nuestra cotidianeidad nos demuestra que la realidad no funciona así. De ahí la importancia de poner en práctica proyectos educativos que nos permitan disponer de más elementos para comprender nuestra realidad cotidiana y la de aquellas personas que vienen de lejos para compartir con nosotros y nosotras el mismo espacio. Para conocer los muros que existen y nos impiden ver y disfrutar de todo lo que hay en el otro lado y, sobre todo, para saber cómo construir ventanas en ellos.

Nuestro sistema educativo ofrece a estos alumnos parámetros culturales que no tienen mucho que ver con sus referentes y asume la integración como un sinónimo de asimilación cultural, lo que genera desinterés e inadaptación

Los centros educativos: una realidad cada vez más diversa

La diversidad no es un concepto nuevo, ya que convivimos en una misma ciudad personas procedentes de diferentes zonas geográficas. Actualmente nos encontramos con un proceso de diversificación de la población, producida por la movilidad tanto de los extranjeros que vienen como inmigrantes, como de la propia población española. En este contexto creemos que la educación tiene un papel muy importante dentro del proceso de socialización y que favorece el pluralismo y la cohesión social al adaptarse a la presencia de alumnos con ideas, concepciones y planteamientos educativos muy distintos.

Aunque la realidad educativa española recoge cada vez más a alumnas y alumnos de distintas nacionalidades, lo cierto es que nuestro sistema educativo, en la inmensa mayoría de los casos, ofrece a estos alumnos parámetros culturales que no tienen mucho que ver con sus referentes y asume la integración como un sinónimo de asimilación cultural, lo que genera, en muchas ocasiones, desinterés e inadaptación.

La política educativa basada en dejar los centros públicos como reducto para la población migrante y la que tiene más posibilidades de exclusión social empeora esta situación. Aunque la ley de admisión de alumnos es la misma para los centros concertados, lo cierto es que depende, en muchos casos, de la voluntad del centro educativo el que los alumnos llegados de otras tierras puedan acceder a estos colegios con los mismos derechos que el

resto del alumnado. Y lejos de integrar lo que se consigue son actuaciones “de cara a la galería” pero que no suponen un esfuerzo colectivo por lograr una verdadera integración.

Hoy en día, la educación debe enfocarse hacia la consecución de una sociedad pluricultural, en la cual toda la población se concienza de la importancia que tiene el conocimiento de los demás, mediante el desarrollo de proyectos cuyo objetivo sea elaborar estrategias y actividades que permitan utilizar las diferencias como un recurso pedagógico.

En las escuelas, además de términos como convivencia, respeto, solidaridad, etc., debemos trabajar la interculturalidad reconociendo que la diversidad cultural puede aportar una gran riqueza social a toda la comunidad educativa. De ahí la importancia de poner en práctica un proyecto que nos permita conocer nuestra realidad cotidiana y la de aquellas personas que vienen de lejos para compartir con nosotros el mismo espacio.

Los profesores como reproductores del modelo

Desde nuestro punto de vista ser profesor en el siglo XXI requiere de algo más que del conocimiento específico de una materia. Y más en los colegios de la Fundación Hogar del Empleado. Nuestros Proyectos educativos, con sus particularidades propias del contexto, tienen en común la formación integral de las alumnas y alumnos, trabajar su capacidad crítica, la autonomía, y la sensibilidad hacia el entorno inmediato y más lejano. En definitiva, la formación de ciudadanos y ciudadanas con una actitud de cooperación y sensibles hacia las diversas miradas que ofrece el mundo de hoy.

Pero no hay que olvidar que muchas veces lo que se manifiesta en las clases es un reflejo de lo que los profesores y profesoras piensan: los adolescentes latinos están en bandas y no les interesa aprender, los chinos no se integran, los marroquíes son conflictivos, los rumanos aprenden muy rápido el idioma pero les cuesta mantener relaciones pacíficas con los demás. Desmontar estereotipos es un trabajo importante.

La escuela tradicional occidental en la que participamos nos lleva, a veces por inercia y, en muchos casos, por presión social, a trabajar desde la escuela de un modo cerrado –con conocimientos formales decididos, parcelados y que excluyen muchas miradas y muchos planteamientos. Esta escuela cerrada –real y metafóricamente hablando– convierte nuestro trabajo en una simulación de la realidad que, pese a la mejor de las voluntades, deja fuera una realidad repleta de conflictos sociales, ecológicos y personales.

El proyecto que presentamos significa una actitud firme de abrir ventanas a realidades significativas y profundas de nuestro mundo. Significa ofrecer a nuestros alumnos y alum-

nas otras voces que escuchar y otras visiones del mundo sobre las que reflexionar. Y todo ello a partir de experiencias de personas que viven realidades diferentes a las nuestras. A través de la experiencia joven de antiguos alumnos que pueden plantear sus visiones. A través de trabajos entre alumnos de diferentes etapas educativas. Y a través, en todos los casos, del análisis riguroso, la reflexión, la cooperación y el deseo de aprender con el otro.

Pensamos que nos faltan espacios de reflexión y de formación sobre muchos de los temas que entroncan directamente con estos principios, no sólo a nosotras, sino al equipo de profesores y padres y madres, de ahí que algunas actividades que proponemos estén abiertas al resto de la comunidad educativa. Creemos que la puesta en práctica de proyectos como este, que permite tener espacios de acción y reflexión, nos encamina a buscar estrategias para aplicar en nuestra actividad docente estos principios. Se trata, en definitiva, de buscar maneras que nos faciliten alcanzar ese objetivo que marca nuestra práctica cotidiana: las ganas de crear una sociedad más justa, solidaria y que viva en paz con el planeta.

Relaciones entre organizaciones sociales y escuela

Por otro lado, esta escuela cerrada al exterior no sólo afecta a la población migrante, nos afecta a todos los que formamos parte del escenario educativo. La soledad del profesor en el aula, un clásico de la literatura educativa, ya hace mucho tiempo que dejó de tener sentido, si es que alguna vez lo tuvo. En este momento es necesario hacer proyectos que engloben a otras entidades sociales que trabajen estos temas, como los colectivos en los que migrantes y autóctonos desarrollan su labor conjuntamente para conseguir derechos para todos y todas y una sociedad intercultural. La acción sinérgica es fundamental en la educación actual ya que todos somos sujetos ciudadanos por encima de todo, también en la escuela, y es necesario unir fuerzas, tejer redes y colaborar para conseguir objetivos destinados a una ciudadanía fuerte, activa, comprometida y bien preparada para tomar decisiones individuales y colectivas.

Nuestra experiencia educativa

Durante el curso pasado, 2009-2010, desarrollamos en dos centros educativos de FUHEM (Santa Cristina y Loyola) un proyecto, «Rompiendo muros, abriendo ventanas», acerca de las migraciones. Dicho proyecto está integrado en nuestro Proyecto Educativo desde el que entendemos que integrar la diversidad es favorecer la convivencia de realidades plurales, de necesidades diferentes, que enriquezcan la dinámica del aula y del Centro, y supone sustituir la cultura del individualismo por la del trabajo compartido, al desarrollar actividades que

generen autoestima, faciliten la inserción socioeducativa y contribuyan a la formación de individuos responsables, críticos y solidarios.

A lo largo de este trabajo, analizamos con los alumnos y alumnas el fenómeno migratorio y la política de fronteras. Comenzamos analizando el pasado de emigración de la población española. Nos pusimos en el lugar de quienes se ven obligados a emigrar, para así reflexionar acerca de las causas de las migraciones y conocer más acerca de los lugares de origen de quienes ahora conviven en nuestra sociedad. Analizamos el tratamiento que se da desde los medios de comunicación al fenómeno migratorio. Trabajamos acerca de los estereotipos y prejuicios construidos socialmente hacia las personas migrantes. Analizamos el concepto de frontera como control selectivo de la movilidad de las personas, y reflexionamos acerca de las fronteras tanto externas como internas que existen en nuestro entorno, para conocer los obstáculos que encuentran las personas migrantes desde que salen de su país hasta que llegan a España, así como los derechos humanos que se vulneran a lo largo de ese viaje y en su vida en nuestro país por su condición de personas en situación irregular. Y por último, buscamos alternativas de lucha para la defensa de los derechos humanos y reflexionamos acerca de la necesidad de una convivencia basada en el mestizaje, la tolerancia y el apoyo mutuo.

Metodología

La simple transferencia de información no produce aprendizaje y este surge (cuando surge) como resultado de un complejo proceso en el que intervienen las capacidades de los alumnos y alumnas condicionadas en su desarrollo por elementos culturales, psicológicos y sociales del entorno. Además, entendemos que el aprendizaje de cualquier ser humano es un proceso permanentemente inacabado, por lo que resulta más eficaz desarrollar actitudes, capacidades y herramientas para que el sujeto sea capaz de mantener él mismo y durante toda su vida ese proceso de crecimiento personal (aprender), y no sólo reproducir información, sin sentido crítico, que le han dado otros.

La importancia del trabajo interdisciplinar

La mayor parte de las actividades educativas que se realizan en la mayoría de los colegios tienden a parcelar la realidad, lo que dificulta el desarrollo de un conocimiento integrado. En muchas ocasiones dejamos a la intuición y a las posibilidades espontáneas de los alumnos la más difícil de las operaciones del aprendizaje: la de articular los conocimientos que reciben por separado, integrarlos, relacionar áreas, poner en juego diferentes disciplinas para la comprensión de diferentes fenómenos...; todo ello requiere unas destrezas y un esfuer-

zo que habrían de ser explícitamente cuidados y apoyados desde los equipos docentes. Una visión rigurosa del medio ambiente y sus conflictos asociados no podrá alcanzarse sin una metodología distinta a la que usamos habitualmente. Por ello, integrar equipos multidisciplinares permite plantear el trabajo más sobre problemas o centros de interés ambientales, que sobre disciplinas aisladas.

Además, la aportación de diferentes perspectivas de análisis adquiere su verdadero sentido cuando todos los enfoques interaccionan, cuando están articulados, cuando la comprensión del tema se produce en el campo en que estas visiones se entrecruzan. Ahí es cuando adquiere su verdadero valor y se convierte en aprendizaje vital.

Principios metodológicos

«Los muros son el límite de nuestros sueños»

(Yonatan, 2º de ESO, Colegio Santa Cristina, FUHEM)

Partiendo del principio de que el medio es el mensaje, la metodología que planteamos tiene como objetivos: ser motivadora, participativa, activa, globalizadora, crítica, lúdica, afectiva, con armonía entre razón y emoción, analítica, intuitiva e imaginativa.

Como ya hemos comentado, pusimos en marcha este proyecto en dos colegios de la Fundación Hogar del Empleado. En el Centro Loyola, el proyecto se realiza con chicos y chicas que están cursando Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Se trata de un alumnado que ha tenido dificultades para cursar de modo ordinario la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que ha salido del circuito escolar ordinario para seguir su formación en este nuevo ámbito semiprofesional. En el Centro Santa Cristina, los alumnos y alumnas participantes son de 2º de ESO, principalmente, aunque varias actividades se plantean para otros cursos de ESO y Bachillerato. También se realiza con un curso de Educación Primaria (3º de EP).

Ya desde el inicio intuimos que desarrollar este proyecto con alumnos tan diferentes y contextos tan diversos sería enormemente enriquecedor, como así fue.

El proyecto se desarrolló durante seis meses y de forma paralela en los dos colegios, aunque no igual. El centro Loyola, al ser un centro más pequeño y con un equipo educativo muy cohesionado e implicado en su actividad educativa, lo incorporó de forma permanente a su actividad cotidiana: en el área de formación básica, en los talleres profesionales, en las tutorías y como actividades especiales en las que participa todo el centro al mismo tiempo. En Santa Cristina el proyecto se realiza utilizando de forma permanente una de las

dos horas de tutoría adscritas a los dos grupos de 2º de ESO, más otros tiempos tomados de horas lectivas ordinarias. Aunque de manera diferente, en ambos se sigue el mismo proceso de trabajo en nuestro objetivo común de abrir ventanas al mundo.

Actividades

Dentro de cada uno de los bloques de contenidos («Recordar para convivir», «La imagen del otro», «Paradojas y consecuencias del régimen de fronteras. Los muros reales y los irreales», y «¿Qué podemos hacer?») se programaron actividades de desarrollo en las aulas

En torno a estos bloques de contenidos desarrollamos más de cuarenta actividades para realizar con los grupos de alumnos y alumnas. Uno de los elementos más constructivos del proyecto ha sido descubrir cómo los propios grupos lideran una dinámica de trabajo, y cómo cada grupo de alumnos lleva el proyecto por caminos diferentes: incidiendo en algún bloque de contenidos más que en otro, manifestando diversos intereses en relación a lo que planteamos las dinamizadoras o proponiendo nuevas vías de trabajo.

Como sería imposible exponer las actividades realizadas en un artículo de estas características, os remitimos a la página web del colegio Santa Cristina (<http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/Default.aspx?v=437>) donde se encuentra el proyecto completo, que incluye el desglose detallado y secuenciado de actividades.

Evaluación y consideraciones finales

La evaluación permite siempre ver si se han producido desviaciones en la consecución de los objetivos, si las actividades están bien diseñadas o si responden a las expectativas y necesidades de los protagonistas. Por tanto, es un aspecto fundamental de todo proyecto, y también de este.

Realizamos evaluaciones después de cada actividad y también al final del proceso. Como dato anecdótico, aunque no por ello menos relevante, algunas de las evaluaciones de los alumnos del Centro Loyola se transformaron en canciones de ritmo *hiphopero* y, en el caso del Centro Santa Cristina, en un colorido muro, pintado en el patio del colegio, con una ventana abierta al exterior y con consignas que los propios alumnos seleccionaron.

La experiencia de desarrollo y puesta en marcha de este proyecto ha sido fascinante tanto por los resultados obtenidos como por el proceso en sí, por la profundidad de análisis

que han desarrollado los alumnos y alumnas acerca de un tema tan complejo como las migraciones y por la capacidad de empatía que han manifestado. Un proceso de aprendizaje y reflexión que se ha desarrollado en el alumnado, pero también, y de forma paralela, en el equipo de docentes y que nos ha permitido ampliar nuestra mirada, aprender a ver en otros ojos y no olvidarnos de que debemos mantenerlos siempre bien abiertos.

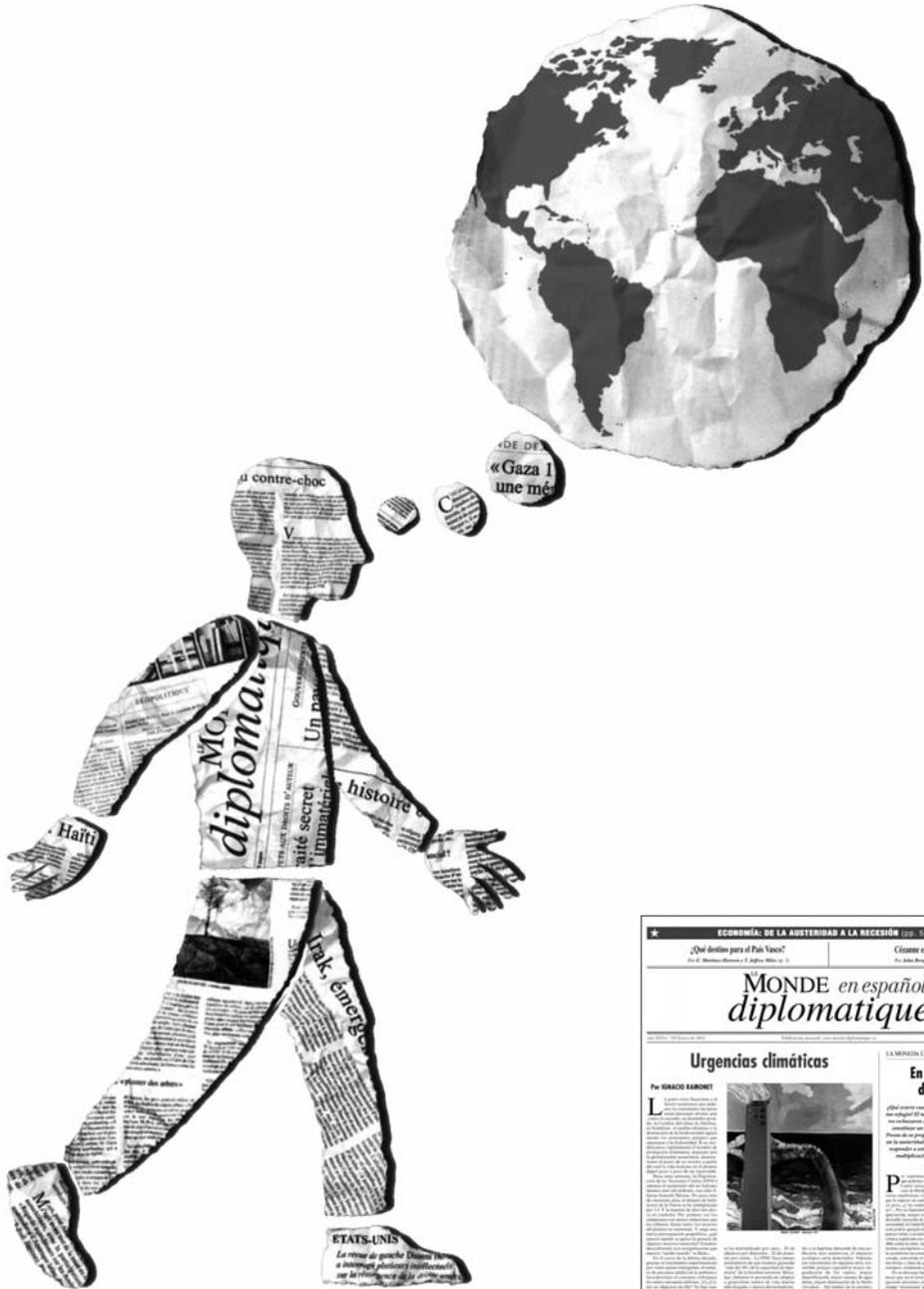
Por último, deseáramos transmitir a través de este artículo que los proyectos como este no finalizan al terminar el curso escolar. Las experiencias vividas, las discusiones, la presencia de personas ajenas al rutinario mundo escolar –como fue la presencia en los colegios de Daouda, un inmigrante senegalés que vino a contar al alumnado su experiencia, su viaje migratorio, y que tuvo una acogida impresionante por parte de los chicos y chicas– constituyen aprendizajes significativos y que se incorporan a las maletas personales de cada una de nosotras y nosotros.

«Un centro sin fronteras sería aquel en el que podría estar cualquier tipo de persona sin importarle la raza, el color o de dónde sea. Tendríamos todas las costumbres. Un centro sin fronteras sería como el Loyola.»

(Violeta, alumna de Restaurante y Bar de PCPI).

LE MONDE *en español* diplomatique

MENSUAL DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL



En kioscos, librerías y en www.monde-diplomatique.es

**La agenda pública en el Reino de España:
desafección política, paro y problemas económicos**

Fermín Bouza

161

Periscopio

FERMÍN BOUZA

La agenda pública en el Reino de España: desafección política, paro y problemas económicos (septiembre 2000/septiembre 2011)

El artículo aborda, desde el estudio de las agendas públicas, cuáles han sido los temas centrales de preocupación ciudadana a lo largo de los últimos años. Ello permite observar la emergencia de la desafección política de la ciudadanía, problema que emerge ahora con gran fuerza y que está estrictamente vinculado al incremento del paro y de los problemas económicos. El paro constituye un problema cuasi-estructural de la agenda y siempre está en los primerísimos rangos. Los estudios reflejan que la crisis, y todo lo que arrastra, descarga toda la incertidumbre y la indefensión ciudadana sobre la política y los políticos, y afecta al mismo núcleo de la democracia: el Parlamento. Movimientos como e 15 M nacen en esta dinámica. Es necesario ver todos los fenómenos emergentes desde estas mismas coordenadas o no podremos explicarlos con rigor.

Fermín Bouza es catedrático de Opinión Pública en la facultad de Ciencias de la Información, UCM

Los conceptos que uso en ese texto son relativamente nuevos para muchos lectores e incluso para muchos científicos sociales no familiarizados con esta temática de las agendas, esencialmente vinculada, en su versión comunicacional, a la teoría de la *agenda setting*, pero no solo. Para algunos de esos conceptos remito al lector o lectora al libro *Las razones del voto en la España democrática. 1977-2008*.¹

¹ J. J. González y F. Bouza, *Las razones del voto en la España democrática. 1977-2008*, Los libros de la Catarata, Madrid, 2009.

Mi intención es que se vea de forma clara y dinámica la evolución de la agenda pública² en los últimos 10 años, y que esto sirva para entender claramente la emergencia, o neoe-emergencia, de la *desafección política* como distancia de la ciudadanía a la misma democracia. En esa evolución está la mejor imagen de lo que ha ocurrido objetivamente, en la misma realidad, y subjetivamente, en la mente de los ciudadanos.

La precisión con la que los ciudadanos repercuten, en su percepción del *paro* en la agenda pública, el paro real (el registrado, en mis cálculos) es extraordinaria y dan fe de ello las muy altas correlaciones que existen entre ambas series de datos.³ Probablemente sea así con todos o casi todos los temas, aunque en la mayoría de los casos existan problemas importantes para establecer la correlación a falta de datos numéricos claros, como sí los hay para el paro. La desafección se expresa especialmente en el tema que el CIS codifica como *Clase política, partidos políticos* (como críticas genéricas a ambas cosas).

A lo largo de estos años, las variaciones en las agendas, la pública en nuestro caso (más adelante veremos algunas cosas de las otras agendas), son muy expresivas. Las medias y las desviaciones típicas están recogidas en la tabla 1:

Tabla 1*
Siete temas principales en la Agenda Pública**

7 temas centrales de la Agenda Pública (sep.2000/sep.2011)	Paro	Terrorismo, ETA	Prob. Económ.	Inmigración	Vivienda	Inseg. Ciud.	Clase polít. Parti.Polí
Media del tramo (%)	60,4	35,3	25,7	20,2	14,8	14,8	10,1
Desv.típ.	13,22	19,44	17,83	9,61	9,68	5,46	4,87

* Fuente: datos del CIS y elaboración propia, de septiembre 2000 a septiembre 2011 (media y desviación típica).

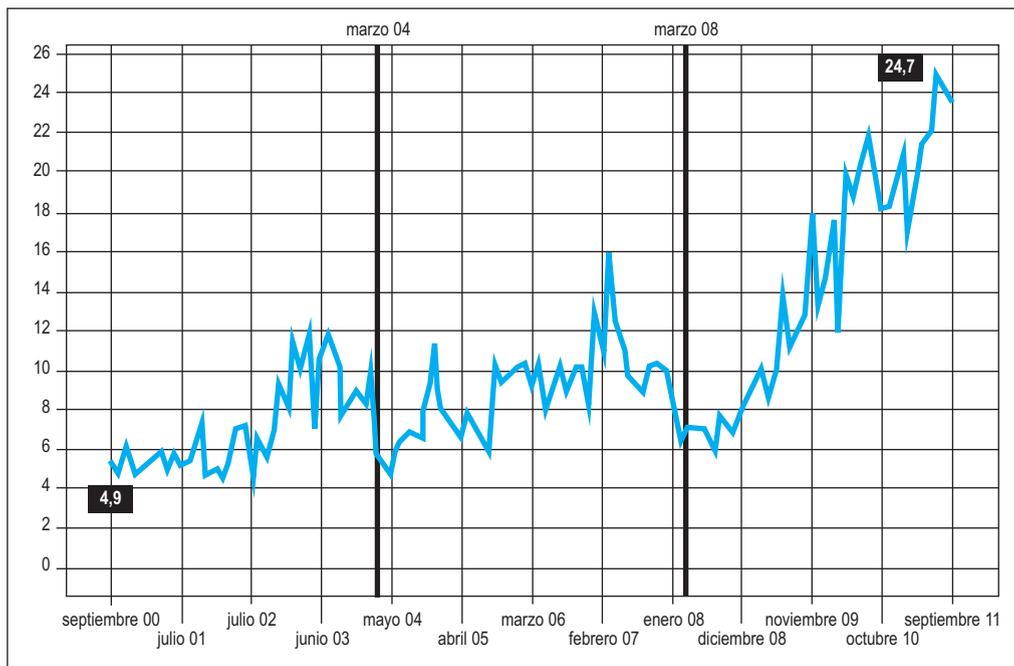
** Sobre fondo gris oscuro aquellos problemas que se han movido en extremos significativos de desviación típica y que nos hacen entender los principales cambios en la agenda. Sobre fondo azul el problema emergente más significativo.

² En los barómetros mensuales del CIS la agenda pública y la agenda personal tienen la forma de dos preguntas encabalgadas. Agenda pública: «¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?». Agenda personal: «¿Y cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?». En la versión norteamericana solo se hace una pregunta. El eurobarómetro hace dos. Yo suelo usar solo una pregunta cuando se comparan las agendas ciudadanas con las mediáticas, para homologar internacionalmente los datos (nunca del todo homologables, por el carácter abierto de la pregunta).

³ F. Bouza, «Las Agendas de la ciudadanía durante la crisis económica», *Mediterráneo Económico. La crisis de 2008. De la economía a la política y más allá*, 18, 2010, pp. 233-247.

Gráfica 1

El tema Clase política, partidos políticos (críticas abstractas o genéricas a ambas cosas) como problema en la Agenda Pública (% de casos/sujetos sobre datos CIS y con elaboración propia) de septiembre 2000 a septiembre 2011



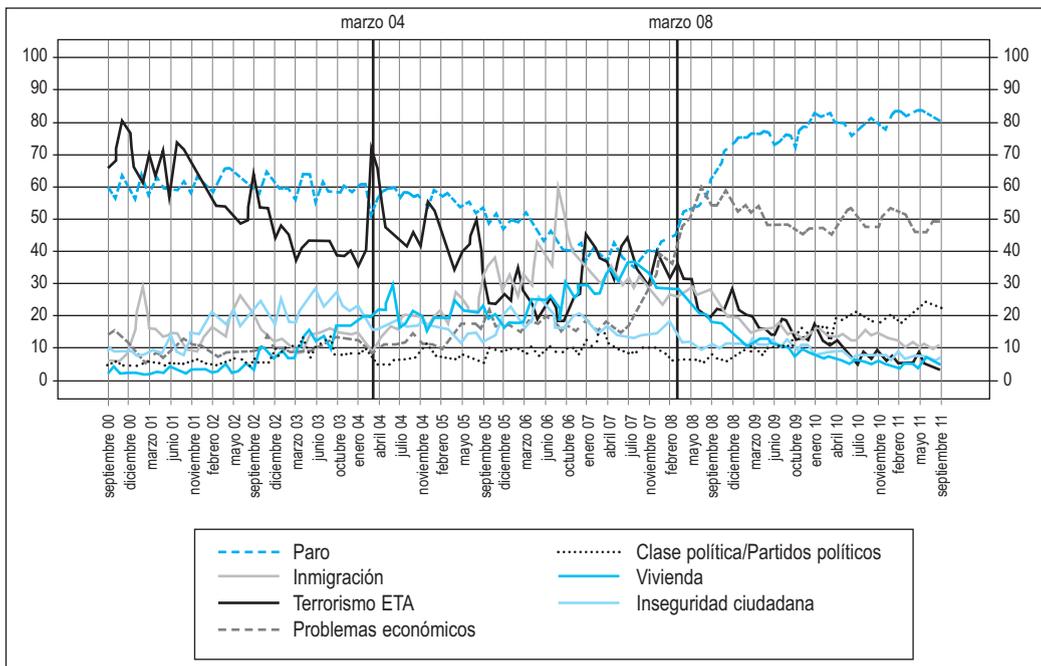
¿Qué significan esas medias y esas desviaciones típicas de la media? Las medias son el valor que nos permite otorgar un rango al tema en el conjunto de la Agenda Pública en ese tiempo en que la estamos estudiando (septiembre 2000-septiembre 2011). En ese sentido, los tres primeros temas son los de la tabla 1 (*paro, problemas económicos y terrorismo, ETA*).

Pero esto ya no es así: a partir de abril de 2010, los tres primeros temas son: *paro, problemas económicos y clase política, partidos políticos*, bajando el *terrorismo, ETA* a niveles reducidos de porcentaje (3,7% y rango 9). Como puede observarse en la gráfica 2 (p. 164), la caída del *terrorismo, ETA* es continua y fuerte a lo largo de los años, con algún repunte explicable desde episodios aislados de esa clase.

Desde el barómetro del mes de mayo de 2011, se produce una igualdad de rangos en los tres primeros temas de ambas agenda ciudadanas, la *pública* y la *personal* (véase nota 2), con un *área de impacto* máxima,⁴ es decir, con plena coincidencia en los tres temas más relevantes entre lo que el ciudadano considera un problema del Estado y lo que considera un problema suyo. Veamos en la tabla 2 esta continuidad del *área de impacto* (excepcional):

⁴ F. Bouza, «The Impact Area of Political Communication: Citizenship Faced with Public Discourse», *International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie*, 2004, vol. 14, núm. 2, pp. 245-259.

Gráfica 2
Evolución (% sujetos/casos que citan tema) de 7 temas principales en la Agenda Pública*



*Fuente: datos del CIS y elaboración propia, de septiembre 2000 a septiembre 2011.

TABLA 2. ÁREA DE IMPACTO ENTRE LA AGENDA PÚBLICA Y LA AGENDA PERSONAL
(de mayo a septiembre de 2011: cuatro meses de área máxima
o coincidencia plena público/privado)

Desde el barómetro de marzo de 2004 (inmediatamente posterior a las elecciones generales) no se había vuelto a producir tal coincidencia, y varios meses seguidos, entre lo público y lo privado. Para estos cálculos se usa el modo CIS de desglosar los temas.

RANGO en cada mes de la Agenda Pública durante los cuatro meses	TEMAS Agenda pública/Agenda personal Abril/mayo/junio/septiembre de 2011 (Datos CIS elaborados)	RANGO en cada mes de la Agenda personal durante los cuatro meses
1	Paro	1
2	Problemas económicos	2
3	Clase política, partidos políticos	3
Área de impacto: 3 Correlación máxima entre los tres primeros rangos		

Pero nos faltaban las desviaciones típicas, esas desviaciones de cada puntuación individual con respecto a la media general, desviaciones de las que extraemos esas medias de la desviación que aparece bajo cada tema en la tabla 2. Se ve claro que los temas que oscilan o varían más en esos años del estudio (suben o bajan o suben y bajan de forma importante) son los temas que solo permanecen estables (*paro y problemas económicos*) en plena crisis, pero cuando la crisis cede (la de los noventa o la de 2007, por ponerle una fecha) estos temas bajan sus porcentajes e incluso, a veces, ceden temporalmente sus altos rangos a temas puntuales (*vivienda, inmigración, inseguridad ciudadana... etc.*).

La desafección política (medida por el tema *clase política, partidos políticos*) es un tema/problema que emerge ahora con gran fuerza, y está estrictamente vinculado al incremento del *paro* y de los *problemas económicos*. Vamos a verlo en el siguiente apartado.

La desafección política (medida por el tema *clase política, partidos políticos*) emerge ahora con gran fuerza, y está estrictamente vinculada al incremento del *paro* y de los *problemas económicos*

Economía y desafección

El *paro* es, como en la vida real externa a nuestras percepciones, un problema cuasi-estructural de la agenda. Está siempre arriba, en los primerísimos rangos, por buena que pueda ser eventualmente la situación del empleo en el Reino de España, aunque baja cuando baja en la vida real, pero baja relativamente, pues la preocupación que genera su posibilidad hace que, aún más bajo, se mantenga con porcentajes notables de sujetos/casos que lo consideran un problema del Estado.

En general, la *agenda pública* le otorga un porcentaje al *paro* como problema bastante superior al de la *agenda mediática*: esto se aprecia en la tabla 3 (p. 166), que nos presenta el establecimiento de la agenda (*agenda setting*) entre enero de 2009 y septiembre de 2011. Esto tiene que ver, probablemente, con la diferente relevancia que otorgan a la cuestión ciudadana y prensa: este factor del porcentaje o cantidad es el factor diferencial por excelencia entre ambas agendas, y el que nos da las pautas de lo que Allport llamaba: «The confusión of public opinion with the public presentation of opinión (the journalistic fallacy)»,⁵ cuestión que fue actualidad en este país cuando Felipe González distinguió entre opinión públi-

⁵ F. H. Allport, «Toward a Science of Public Opinion», *Public Opinion Quarterly*, 1(1): 7- 23, 1937, p.12.

ca y opinión publicada, suponiendo que la primera le era más favorable en pleno acoso mediático, y esto era completamente cierto. Esta es la tabla, sobre la que volveremos:

Tabla 3. El establecimiento de la agenda pública* en el Reino de España (enero 2009/septiembre 2011). Datos CIS (elab.prop.) y del Grupo de Investigación Agenda y Voto**

La agenda pública se halla en este caso según pregunta única o internacional, en la tradición americana del MIP o Most Important Problem. Esta tabla refleja la coyuntura en que el *terrorismo* baja un puesto (por un caso) y sube *corrupción*, modificando la fuerte correlación de rangos anterior: la prensa sigue hablando mucho de *terrorismo*, pero en la agenda pública lleva muchos meses bajando. La correlación se debilita y se hace no significativa (bilateral), y esto ocurre normalmente cuando la ciudadanía se emancipa de un tema mediático sobrerrepresentado en esos medios.

N	%	RANGO Agenda mediática	TEMAS		RANGO Agenda pública	%	N
			Agenda mediática/ Agenda pública enero 2009/septiembre 2011 (Datos CIS recodificados)				
5.064	38,5	1	Los problemas económicos		1	80,8	60.034
2.981	22,7	2	Partidos, Políticos, Política, Gobiernos		2	8,20	6.078
1.503	11,4	3	Terrorismo		5	1,00	714
1.169	8,9	4	Corrupción		4	1,0	715
720	5,5	5	Los Problemas sociales		3	6,2	4.600
361	2,7	6	Justicia		6	0,3	192
			Correlación de rangos Rho- Spearman/Tau_b_Kendall:				
Hasta 13.156	Hasta 100		0,771 / 0,600 (bilateral)			Hasta 100	Hasta 74.334
			0,771*/0,600* (unilateral)				

Observaciones para todas las tablas que acojan estos mismos conceptos:

*La agenda pública se halla en este caso según pregunta única, como el MIP original y más frecuente internacionalmente, sobre todo en EEUU. La agenda mediática se halla según los datos de los archivos mediáticos del grupo *agenda y voto*** y de su metodología de temas principales (los temas secundarios y exclusivamente locales no son tratados como temas principales en el cómputo). En el caso de Galicia, esta Agenda es exclusivamente de *La Voz de Galicia*, uno de los ocho diarios de la muestra de los archivos estadísticos que usamos.

**El grupo Agenda y voto está compuesto por Juan Jesús González (UNED), Palmira Chavero (UCM), Raquel Rodríguez (URJC), Antón R. Castromil (UCM) y Fermín Bouza (UCM).

Esta proporción debe ser generalizada para diversos países. Véase esta tabla que ilustra un reciente artículo de Adam Sehata relativo a las elecciones suecas de 2006 y la *Agenda Setting*:⁶

Tabla 4. Agenda mediática y agenda pública en las elecciones generales de 2006 (%)

Agenda mediática	Agenda pública (primera ola)	Agenda pública (tercera ola)
Paro/empleo (17)	Paro/empleo (30,4)	Paro/empleo (46,9)
Impuestos (12)	Sanidad/atención dependencia (18,8)	Sanidad/atención dependencia (13,1)
Cuidado infantil/familia (10)	Impuestos (11,1)	Impuestos (5,6)
Sanidad/atención dependencia (7)	Enseñanza (6,5)	Enseñanza (4)
Medioambiente (7)	Cuidado infantil/familia (3,8)	La economía sueca (3,6)

Fuente: Los datos de la agenda mediática son de Asp, 2006, p. 31, los de las agendas públicas son de la encuesta panel «Methodology and data» de la que sólo se han extraído los 5 temas principales.

Puede observarse también, en esta tabla, cómo el problema principal crece como problema en la agenda pública tras las elecciones (tercera ola), lo cual tiene un interés muy especial y lo tendré en cuenta para mis propias observaciones sobre la cuestión. Los *problemas económicos* suben y bajan con el *paro* (véase gráfica 2), y todos esos problemas forman una unidad correlacional con la *desafección* (clase política, partidos políticos) así operativizada (no entraré ahora en el tema técnico de la colinealidad, que a estos efectos descriptivos no es muy relevante ni anula el hecho de la covariación) que da, a lo largo de tantos años, porcentajes relevantes de alta significación bilateral, cuya exposición detallada y estudio queda para otro trabajo.

Conclusiones tras el barómetro de octubre de 2011

En el momento de elaborar este texto, aparecen los datos provisionales del barómetro de octubre 2011 del CIS, y entre ellos, los relativos a la valoración de las instituciones. Esta es la tabla provisional de frecuencias tal como aparece:

⁶ A. Sehata, «Unemployment on the Agenda: A Panel Study of Agenda-Setting Effects During the 2006 Swedish National Election Campaign», *Journal of Communication*, 60, 2010, pp.182–203.

Tabla 5
CIS. Estudio n° 2.914. Barómetro de octubre

Pregunta 13

A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene Ud. en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que no tiene Ud. “ninguna confianza” en ella y 10 que tiene “mucho confianza”.

	Media	Desviación típica	(N)
La Monarquía	4.89	3.21	(2388)
El Gobierno	3.24	2.75	(2419)
El Parlamento	3.52	2.67	(2266)
El Gobierno de su Comunidad Autónoma	3.93	2.83	(2354)
El Parlamento de su Comunidad Autónoma	3.88	2.80	(2230)
El Tribunal Constitucional	4.07	2.75	(2057)
El Defensor del Pueblo	4.55	2.77	(2069)
Las Fuerzas Armadas	5.65	2.95	(2349)
Los partidos políticos	2.76	2.51	(2392)
Los medios de comunicación	4.97	2.47	(2385)
La Iglesia Católica	3.66	3.18	(2386)
El Consejero General del Poder Judicial	3.94	2.71	(2024)

Las instituciones políticas (partidos, Parlamento, Gobierno) son las peor valoradas. Las Fuerzas Armadas ocupan el primer rango. Es evidente que la crisis y todo lo que arrastra descarga toda la incertidumbre y la indefensión ciudadana sobre la política y los políticos, afectando al mismo núcleo de la democracia, el Parlamento, cuyo cuestionamiento es un dato muy grave.

Movimientos como el 15 M nacen en esta dinámica, y combinan todos los problemas económicos con todas las desafecciones políticas. Es necesario ver todos los fenómenos emergentes desde estas mismas coordenadas o no podremos explicarlos con rigor. No se trata de impugnar utopía alguna, pero sí de ver las cosas en su contexto y analizarlas sociológicamente, que en eso consiste nuestro oficio de sociólogos. Más allá de todo ello, el deseo de que de esta crisis angustiosa, larga y destructiva, surjan nuevos modos de gestión y una democracia más próxima a la ciudadanía.

La transición en Cuadernos de Ruedo Ibérico
Xavier Díez (ed.) 171
Jaime Pastor Verdú

Comer animales de Jonathan Safran Foer 173
Barbara Scandroglio

Crisis y revolución en Europa: people of Europe rise up!
de Observatorio Metropolitano 175
José Luis F. Casadevante

La mentira del amianto. Fortunas y delitos
de Maria Roselli 177
Paco Puche

LA TRANSICIÓN EN CUADERNOS DE RUEDO IBÉRICO

Xavier Díez (ed.)

BackList, 2011

458 págs.

La reedición con esta obra de un buen número de artículos que fueron publicados en la revista *Cuadernos de Ruedo Ibérico* durante el tardo-franquismo de los años setenta del pasado siglo constituye sin duda un gran acierto. Esta iniciativa contribuye a cubrir un vacío que impedía que la mirada crítica que se expresaba en esas páginas en el transcurso de ese período fuera conocida por las sucesivas generaciones que han ido apareciendo desde entonces. Con mayor razón cuando vemos que está resurgiendo un interés creciente por conocer versiones distintas de la proporcionada por la “historia oficial” sobre la mitificada Transición entre un sector de la juventud que se reconoce en movimientos como el 15 M. El hecho de que su salida de nuevo a la luz coincida con el cincuenta aniversario de la fundación de la editorial Ruedo Ibérico, cerrada en 1981, le da todavía más valor.

La selección de artículos (muchos de ellos firmados con seudónimos para evitar la represión) ha correspondido a un joven historiador, Xavier Díez, quien ha escrito la introducción y una adecuada contextualización de esos trabajos. En ellos recuerda, entre otras cosas, lo que ha sido la “leyenda rosa” de la Transición (con el documental de Victoria Prego para TVE en 1995 como la más divulgada versión) y opone a la misma el “contrarrelato” lampedusiano de la Transición como una “transacción”, generadora de la consiguiente desmovilización y usurpación de la soberanía popular, la exclusión de la disidencia y una ley de punto final entre otros rasgos.

La selección comienza con un artículo introductorio de Joan Martínez Alier, en el que expone su crítica a la política de “reconciliación

nacional” defendida por la dirección del Partido Comunista de España (PCE) desde 1956. Le siguen otros sobre la coyuntura y los condicionantes políticos y sociales, están escritos por Santiago Roldán, Santiago Udina y Regina Tayá, Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo. En uno de ellos se analizan los cambios económicos y sociales que se están produciendo en “la nueva España” de finales de los años sesenta, junto con la emergencia de una nueva izquierda revolucionaria, para acabar propugnando la necesidad de unir la lucha contra la dictadura con el anticapitalismo. En otro se resaltan las tensiones entre organismos unitarios como la Asamblea de Catalunya y la Junta Democrática en relación tanto con sus distintas propuestas de resolución de la cuestión nacional como con el papel a otorgar a la movilización popular. Finalmente, tras una crítica libertaria de la democracia parlamentaria, se nos ofrece una valoración de los resultados del referéndum sobre la Constitución de 1978 en la que se destaca la importancia de la abstención, sobre todo en el País Vasco.

En otro bloque “redescubrimos” un artículo de especial interés, escrito por José Martínez, editor de Ruedo Ibérico, y Alfonso Colodrón, en el que se somete a una rigurosa crítica un libro que conocidos miembros de la denominada “generación de la Zarzuela” (Jorge de Esteban y otros constitucionalistas) publican en 1973 bajo el título de *Desarrollo político y Constitución española*. La originalidad de esta obra, encargada por un sector de la banca española a personas “demócratas”, estaría en que fue la primera experiencia relevante de “colaboracionismo” desde el mundo académico para tratar de justificar la apuesta por una reforma del franquismo desde dentro sin cuestionar la legalidad vigente: o sea, la “transición de la ley a la ley”, como finalmente ocurriría.

Forma parte de ese mismo apartado un editorial dedicado a «las rebajas de la “oposición política”», escrito en 1976, que entra en polémica con argumentaciones empleadas por la mayoría de esa oposición para justificar su dere-

chización. Tal es el caso de su refutación de la “correlación de fuerzas” como coartada, justamente después de las huelgas de Vitoria, la represión posterior y el papel mayor de freno que juega a partir de entonces la “Platajunta”. Valga como muestra el siguiente párrafo:

«Debería analizarse, además, si es verdad que la “correlación de fuerzas” es desfavorable a la izquierda. Para calibrar la verdadera fuerza de la clase obrera no es buen método el disuadirla de ejercerla en muchas ocasiones. Debería analizarse qué razones hay para esperar que esa correlación mejore una vez instaurado el proyecto político del régimen (sin o con partido comunista tolerado). Se olvida sistemáticamente el ejemplo de las grandes huelgas políticas de Euskadi desde diciembre de 1974 hasta septiembre de 1976. ¿Cuál es el grado de movilización potencial de la clase obrera en el resto del Estado? El desmovilizar continuamente al pueblo trabajador, al rebajar objetivos, no es ciertamente un buen método de aumentar las propias fuerzas. Si la izquierda se va corriendo más y más a la derecha, la balanza no puede menos que desequilibrarse más hacia la derecha. La tercera posibilidad no es para hoy, ni tal vez para mañana, pero es una posibilidad que debería mantenerse abierta negándose al pacto con el Estado capitalista» (p. 285).

Una respuesta que coincide en lo fundamental con la que hacíamos desde corrientes de la izquierda marxista radical y que se extendería después a los Pactos de la Moncloa, justamente analizados en otro artículo como inicio de un nuevo corporativismo. Cierran esta parte una referencia a las luchas autónomas “olvidadas” de esos años, así como un artículo sobre la reestructuración de las Cajas de Ahorros que, pese a ser escrito en 1979 y teniendo como autor al luego ministro socialista Julián García Vargas, sirve para recordarnos que el problema viene de lejos.

Otros trabajos aquí reeditados abordan una cuestión que sigue siendo controvertida: la de la caracterización del franquismo, tanto frente a su

simplista asimilación con el fascismo como respecto a las tesis de Juan J. Linz sobre el carácter «autoritario» y de «pluralismo limitado» que según él tenía ese régimen a partir de los años sesenta. Joan Martínez Alier, Eduardo Sevilla y Salvador Giner rebaten con fundamento esas posiciones para concluir sobre su naturaleza dictatorial y de clase, destacando asimismo los pilares que han ido sosteniendo lo que definen como un “absolutismo despótico”.

La parte final recoge también análisis sobre la crisis económica y de dominación que se da en la segunda mitad de los años setenta, así como las características del nuevo régimen conformado por la Constitución de 1978. Vemos aquí también cómo se alerta –frente al “consenso” generalizado– ante el comienzo de una etapa que va sentando las bases de un sistema de partidos que no cuestionará la dominación de clase preexistente y, sin embargo, provocará, en palabras oportunamente citadas de un artículo escrito entonces por el sociólogo del PSOE Julián Santamaría, «la frustración de una parte muy importante de la población ante la inexistencia de un proyecto bien definido, la insuficiencia del cambio, la ambigüedad frente al pasado y la incertidumbre del futuro [...], causas de una situación de “desencanto” de un pueblo con el que sólo se ha contado a la hora del voto» (p. 430).

Una mirada más completa sobre lo que se escribió durante esos años desde esta revista debería tener en cuenta también otros trabajos no incluidos que también reúnen la calidad y el rigor crítico que refleja esta antología. En realidad, esos requisitos caracterizaron toda la trayectoria de esta publicación, hoy accesible en edición facsímil completa en <http://www.ruedoiberico.org/cr/faximil.php>. También conviene recordar que el largo artículo que José Manuel Naredo (Aulo Casamayor) publicó a finales de 1976 en esa misma revista fue reeditado en 2001 por Anagrama (junto con otros artículos posteriores del mismo autor) con el mismo título, suficientemente expresivo: «Por una oposición que se oponga. Crítica a las interpretacio-

nes del capitalismo español y a las alternativas que ofrece la “oposición política”». Una (re)lectura del mismo ayudará sin duda a comprender mejor el sentido de todos estos trabajos, ya que, como se decía de éste último en la Advertencia de la redacción de la revista, todos ellos «forma(n) parte de la búsqueda de las bases teóricas para una oposición que rechace el ser mera gestora de los intereses de las clases dominantes y que, al constituirse en portadora de un modelo de sociedad radicalmente distinto, ponga en tela de juicio la organización social imperante».

Como se puede desprender de lo comentado hasta aquí, nos encontramos con una serie de artículos en los que predomina un punto de vista anticapitalista y libertario sobre la “Transición”. Un enfoque que somete a una firme y permanente denuncia a la dictadura franquista, pero a la vez rechaza los análisis del capitalismo español y de ese mismo régimen que se hacen desde la mayoría de corrientes de la oposición antifranquista, ya que les lleva, en opinión de los autores, a una estrategia “etapista” y a una política de alianzas incompatibles con el objetivo de la ruptura. Su apuesta por una articulación de demandas democráticas y sociales que apunte contra el bloque de poder dominante, así como por el protagonismo de la movilización popular frente a la táctica de negociación con los “reformistas” del régimen, explica sus profundos desacuerdos con lo que hace esa oposición a medida que va “consensuando” los Pactos de la Moncloa, la Ley de Amnistía, la Constitución o el papel de la monarquía como garante del “orden político y social”.

En resumen, un libro necesario frente a la mitología oficial, pero también oportuno en unos tiempos en los que se vuelve a hablar de una “segunda transición” (¿hacia delante o hacia más atrás?) e incluso de la apuesta por un nuevo proceso constituyente desde abajo.

Jaime Pastor Verdú
Profesor de Ciencia Política de la UNED

COMER ANIMALES

Jonathan Safran Foer

Seix y Barral, Barcelona 2011

384 págs.

Comer animales no es un libro solamente sobre nuestras costumbres y decisiones alimentarias. Lo que comemos –por sus efectos económicos, sociales y ambientales– es una de las muchas cuestiones que introducen inmediatamente temas tan globales y trascendentes como la sostenibilidad de nuestro sistema de producción y consumo, el cambio climático o la masiva externalización de costes. Y, sobre todo, las condiciones, dinámicas y procesos que permiten o impiden que, como individuos informados, responsables y con capacidad de control sobre las consecuencias de nuestras acciones, tomemos decisiones conscientes e intencionadas.

Por ello, y por otros motivos que señalaremos más adelante, el libro no es una lectura específica ni para quienes hayan decidido o hayan pensado alguna vez en optar por una dieta vegana o vegetariana; ni para quienes, por el contrario, nunca se lo hayan planteado. Es un libro necesario para todas las personas que habitamos el planeta Tierra y queremos que siga siendo habitable en el futuro. Nos afecta de la misma manera.

Safran Foer es ciertamente un “animal” literario y sabe mantenernos pegados a las páginas del libro mientras se maneja, con absoluta maestría y creatividad, en todos los estilos literarios, desde el *thriller* al documental, desde el ensayo biográfico a la novela de ficción. Nos destapa las escalofriantes condiciones de “producción” de las granjas industriales y para ello aporta clara, amplia y documentada información recabada a lo largo de tres años de investigación pero, también, “nos introduce” de forma ilegal en una de ellas. Nos coloca frente a cuestiones tan fundamentales como que el comer es un acto cultural y que el lenguaje construye la realidad “hasta de la sopa”, comparte con nosotros

situaciones y experiencias importantes de su vida, como decidir qué le dará de comer al hijo que espera o qué relación tiene la comida en la historia que une a los miembros de su familia y estos a la Historia, con mayúsculas.

En una sociedad volcada en el consumo de carne como es la estadounidense –donde la industria cárnica «factura más de 140 mil millones de dólares al año y ocupa un tercio de la tierra del planeta, da forma a los ecosistemas de los océanos y podría definir el futuro del calentamiento global»–, blindar detrás de sistemas de alta seguridad las fábricas en las que se produce dicho alimento supone dejar a la propia sociedad incapaz de saber y decidir sobre su futuro. Supone, en definitiva, crear un cortocircuito en el nivel de la responsabilidad individual entre conocer, decidir, actuar y valorar las consecuencias de las propias acciones.

Y este es el gran desafío para quienes se preocupan de que todos conozcamos las dimensiones de las consecuencias ambientales y la sostenibilidad de nuestro sistema de producción y consumo. Hasta ahora hemos conseguido coleccionar una larga lista de “sesgos cognitivos”, “atajos heurísticos” y “efectos perversos” que nos permiten explicar por qué muchas veces no conseguimos explicar la conducta humana. Safran Foer aborda, con una eficacia sin par, los intersticios y vericuetos por los que dicha conducta se va cimentando.

Y el camino que lleva de la “carne” al “animal” es el camino que debemos desandar para poder reconstruir una cadena entre nuestras acciones y sus consecuencias, no solamente por lo que respecta a lo que comemos. No es un camino “ideológico”, dado que, al respecto, cada uno deberemos tomar nuestras decisiones y podrán o no coincidir con las del autor, así como con las posturas asumidas por otros interlocutores del ensayo. Lo que no podemos permitirnos ya es «elegir ser ignorante con la excusa de no querer saber»: debemos tomar conciencia de en qué clase de personas nos convertimos a partir de qué clase de alimento comemos. Por eso la experiencia que nos propone el

autor –y que él ha sido el primero en experimentar–, es la que queda sintetizada en la frase: «no me puedo creer que...». Por ejemplo, «no me puedo creer que la industria alimentaria sea la que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, muchos más que la industria aeronáutica; que para capturar medio kilo de gambas en Indonesia, se maten y luego se devuelvan al mar once kilos de otros animales marinos; o que hay una bacteria (MRSA) relacionada con las granjas de cerdos intensivas que mata a más gente en Estados Unidos que el sida» o, sobre todo, que «esto no sucede por accidente» (de una entrevista al autor publicada en *El País*, 16/04/2011).

He leído *Comer animales* en Madrid, pero escribo esta reseña desde Nueva York. El viaje ha hecho más “dramática”, si es posible, su lectura. Estoy viviendo el “sueño americano”; el objetivo que nos propone el libro me parece ahora más inalcanzable que nunca. ¿Cómo convencer a cuarenta millones de familias norteamericanas que no compren un pavo el día de Acción de Gracias? ¿Cómo convencernos de que el “sueño”, cuyos valores y consecuencias compartimos, es una pesadilla? Safran Foer propone, con una admirable honestidad y sentido ético, un principio –por el que aunque sea podemos comenzar– que cada familia norteamericana sepa cuál es el coste real del pavo que comprarán para ese día. O, lo que es lo mismo, que quienes sigan viviendo en ese sueño lo hagan al menos conscientes de que alimentan un sistema basado en una indecible crueldad hacia los animales no humanos, y cuyas consecuencias son ecológicamente insostenibles.

Barbara Scandroglio,
Universidad Autónoma de Madrid

CRISIS Y REVOLUCIÓN EN EUROPA: PEOPLE OF EUROPE RISE UP!

Observatorio Metropolitano

Traficantes de Sueños, 2012

148 págs.

Hace cerca de un año y medio el Observatorio Metropolitano, un colectivo madrileño de investigación militante, publicaba en marzo de 2011 un pequeño libro llamado *La crisis que viene: algunas notas para afrontar esta década*. En este texto, realizaban una lectura de cómo se había gestado la crisis económica, social y de representación política en el Estado español, los desequilibrios que estaba generando y terminaba apuntando que asistiríamos a revueltas sociales.

Este texto que vendió 15.000 ejemplares y tuvo 50.000 descargas en Internet, junto al *Indignaos!* de Stephane Hessel, recuperaba la dinámica de los manifiestos y panfletos políticos de coyuntura, que históricamente se editaban en periodos de agitación social. Ahora, todas las grandes editoriales han sacado líneas de textos políticos, breves y sobre temas de actualidad, que se han hecho un hueco holgado en el mercado del libro.

La crisis se fue agudizando y, como se anunciaba, llegó acompañada de unas revueltas sociales desconocidas en la última década, tanto por su extensión como por su intensidad. Así que desde el Observatorio Metropolitano decidieron realizar un nuevo texto que trazara una suerte de genealogía del movimiento 15 M y que describiera el nuevo ecosistema socioeconómico en el que se sitúan los movimientos sociales emergentes en Europa. Un libro que deviene la lógica continuación del que escribieron dos meses antes del 15 de mayo.

El libro se encuentra estructurado en tres grandes segmentos, un primer bloque se titula explícitamente: «No es una crisis, es una estafa». En estas páginas se realiza un meritorio ejercicio de didáctica básica de economía financiera y de descripción de las usuarias dinámicas

de los mercados a la hora de desconectarse de una economía productiva, que anteriormente se había desconectado de las necesidades reales de la sociedad.

El texto ilustra la relación existente entre la economía financiera y nuestra vida cotidiana, ejemplificada en la dificultad de acceso a la vivienda y el funcionamiento de las hipotecas, de la captura de seguros médicos, préstamos de estudios o fondos privados de pensiones, para hacerse con activos. Unos activos que serán invertidos buscando los máximos beneficios a corto plazo sin ningún criterio ético, implicándose por igual en conflictos bélicos, burbujas inmobiliarias o procesos especulativos con los alimentos, que derivan en crisis alimentarias como la de 2010. El libro es un pedagógico recorrido que de forma sencilla muestra el opaco funcionamiento de los mercados financieros, evidenciando el proceso que conlleva de concentración de riqueza y poder en pocas manos.

También se aborda una crónica del inicio de la crisis de la deuda soberana, empezando por el caso griego y cómo de forma coordinada se ha procedido a inflar artificialmente los intereses que deben pagar por su deuda, con el controvertido papel que juegan en todo esto las agencias de calificación. Un ataque coordinado que arranca contra Grecia y posteriormente se va extendiendo a otros países del continente, Irlanda, Portugal y recientemente a Italia, mostrando brevemente las singularidades de cada caso. Con ello evidencian que, en la práctica, esta crisis supone la transferencia de beneficios a los bancos, al permitirles financiarse con préstamos al 1% y reinvertir esos dineros en la compra de deuda soberana a porcentajes de interés mucho mayores.

Y así se llega a la cortoplacista e ideológica salida que se ha planteado para superar esta crisis: la estrategia de control del déficit, trasladada en nuestro caso a mandato constitucional. Una fórmula que de manera simultánea procede a la progresiva y episódica liquidación del Estado del Bienestar y a un proceso de precarización y disciplinamiento social, que especialmente se concentra en la población juvenil.

La profundización de dinámicas neoliberales de dualización social, está provocando que las desigualdades sociales tomen proporciones abismales. Las fronteras de renta que a veces existen entre un barrio y otro, por ejemplo, entre el centro financiero de la City de Londres y el viejo East London convertido en la mayor concentración de población India de Europa, son mayores que las que hay entre el Primer y el Tercer Mundo. La diferencia entre el 10% más rico de esta misma ciudad y el 10% más pobre, se acerca a las 300 veces.

La crisis socioeconómica ha evidenciado la fragilidad de la arquitectura de la Unión Europea y la estrechez de miras de una clase política sometida a los dictados de los mercados, lo que ha ido minando la solvencia simbólica del proyecto europeo y poniendo en riesgo la propia continuidad del mercado común.

El segundo bloque del libro acertadamente titulado «Un fantasma recorre Europa», reconstruye la conformación del movimiento social europeo, siguiendo las resonancias que llegan desde las luchas realizadas en distintas realidades como si se tratará de un eco que llega hasta el 15 M.

La primera parada es, como dicen en el texto, en el círculo Polar Ártico donde exploran las anomalías de la revolución islandesa, que se ha impuesto como un referente simbólico en toda Europa. Un impago de la deuda dirigido por un masivo movimiento social «capaz de desafiar el poder de los acreedores, llevar ante la justicia a los principales banqueros, desacreditar y expulsar del Parlamento a su clase política y promover una nueva Constitución que pretende incluir novedosos derechos ciudadanos».

El siguiente episodio desgrana el ciclo de huelgas más intenso en Europa de las últimas décadas, tras la aplicación de la primera oleada de políticas de ajuste. Durante el segundo semestre de 2010 se declararon más huelgas generales que en toda la década previa, donde destacan el caso de Francia con sus 10 huelgas generales y el episodio de la ocupación de refinerías, o las movilizaciones estudiantiles contra los recortes sociales en Inglaterra.

Otro elemento que se añade es el papel de la *primavera árabe*, como estímulo del imaginario colectivo, al mostrar el tránsito de una aparente desafección política a una revuelta democrática de nuevo cuño capaz de derribar férreas dictaduras.

Hasta llegar al denominado movimiento de las plazas europeas, que arranca con las movilizaciones juveniles portuguesas y que tienen su catapulta mediática con el 15 M, para contagiarse a muchas de las capitales europeas, con especial relevancia en Atenas o Tel Aviv. El texto también realiza una caracterización de los principales rasgos que definen al movimiento: ausencia de líderes, siglas y partidos, uso activo de las redes sociales como espacios de debate y agitación, dinámicas asamblearias, discursos y mensajes altamente inclusivos, desobediencia civil no violenta, ocupación activa del espacio público, elevada participación de jóvenes...

Y el libro se cierra con unos apuntes de los principales retos que debería afrontar el movimiento en los próximos meses: abrir el debate social en torno a la posibilidad de poner en marcha una auditoría sobre la legitimidad de la deuda que apunte hacia la cancelación de las deudas en Europa; forzar una redistribución de la riqueza social mediante el control de la economía financiera; buscar fórmulas de participación y rendición de cuentas que permitan la reinvencción de la democracia; la redefinición de lo común y sus formas de gestión (incluyendo aquí los servicios públicos o el territorio) y el mantenimiento de la escala europea del movimiento, previniendo de los repliegues en clave nacional a la hora de buscar soluciones.

Uno de los principales riesgos que corre el texto, imposible de corregir, es el de quedarse anticuado ante la velocidad a la que se suceden los acontecimientos (por ejemplo, la imposición de Gobiernos *tecnocráticos* en Grecia e Italia, en lo que es una suerte de golpe de Estado financiero). Y una de las cosas que cabe echar en falta, quizás porque excede la materia de este volumen, sería el desarrollo de las prácticas afirmativas, de construcción de propuestas concretas a escalas locales.

En este escenario propuestas como el mercado social, la banca ética, el fomento del cooperativismo, los grupos de consumo agroecológicos, las redes de trueque, huertos comunitarios, la reapropiación de edificios..., van ganando visibilidad y podrían desarrollarse de forma exponencial. ¿Cuál es la relación del ecosistema político del 15 M con las iniciativas alternativas a escala local?, ¿cómo se ensamblan con las variables estratégicas del movimiento a escalas más amplias?, ¿cuál es el aporte o valor añadido de la territorialización de las asambleas locales?

Por último, quisiera destacar el hecho de que este libro se ha escrito de forma cooperativa y su autoría es colectiva, iniciativa que parece perseguir no tanto el anonimato, como la puesta en valor de los conocimientos por lo que aportan más que por quien los aporta.

*Jose Luis F. Casadevante
es miembro de Garúa S. Coop. Mad.*

LA MENTIRA DEL AMIANTO. FORTUNAS Y DELITOS

Maria Roselli

Traducción del francés de Luis Puche y
Rubén Soler

Ediciones del Genal, 2010

260 págs.

El genocidio del amianto en el mundo, quizás la mayor tragedia industrial de la historia de la humanidad, ha logrado pasar casi desapercibido para la mayoría de los ciudadanos. Es lo que llamamos la “conspiración del silencio” en torno a este mineral.

Nunca será suficiente la divulgación de esta masacre habida cuenta de que se dan muchas circunstancias que la hacen tristemente actual. Para romper la conspiración del silencio, el libro de Maria Roselli resulta imprescindible.

La autora es una periodista de origen italiano radicada en Suiza. Esta circunstancia resulta

providencial porque es en este país donde ha residido la cabeza de la gran multinacional del amianto denominada Eternit, dominada por la familia suiza Schmidheiny.

Por eso este libro es, sobretodo, un alegato contra la familia Schmidheiny y una oportunidad de escuchar a sus víctimas. Como su nombre indica: se habla de “fortunas y delitos” o lo que es lo mismo de víctimas y verdugos

La acumulación originaria de la fortuna de la familia Schmidheiny

Encontramos a los Schmidheiny por primera vez en 1920, cuando compran la primera fábrica suiza de amianto. En 1929, con otras empresas de amianto europeas, constituyen el cártel SAIAC desde el que se repartían los mercados y ponían los precios, un auténtico oligopolio; así, hasta 1985 que cambien su nombre por Amiantus, pero su dirección sigue en manos de esta familia suiza. En esa época de máximo esplendor del amianto, junto a otra familia belga, dominan una cuarta parte de todo el negocio del amianto en el mundo. Ya son unos magnates.

¿Cómo han progresado tanto?

Con el oligopolio, con los enormes rendimientos que les ha proporcionado la industria del amianto y del cemento (hoy llamada Holcim) y sin haber tenido el menor rubor de colaborar con lo peor de la historia del siglo XX: con los nazis, con el *apartheid* sudafricano y con las dictaduras de Brasil, Nicaragua, Chile y España, que sepamos.

Siguiendo el relato de Maria Roselli, en 1980 encontramos a Max Schmidheiny (1908-1991) condecorado por el Senado berlinés por sus valientes inversiones en la Alemania de posguerra. Su presencia en el consejo de supervisión de la fábrica de amianto en Berlín durante la segunda guerra mundial no pareció molestar a nadie. El que tuviese “contratados” a trabajadoras forzadas, no se ha tenido en cuenta y el

que fuese filonazi y colaborador de ese régimen, se ha olvidado. Pero Roselli ha dado cuenta de la aparición de una mujer lituana, Nadja Ofsjannikova, que a los 19 años fue forzada por la Gestapo a viajar en pésimas condiciones, junto a otras deportadas, a Berlín, a realizar trabajos forzados en la fábrica de amianto de los Schmidheiny. Cuenta el frío, el hambre y las vejaciones que soportaban y cómo la jornada se prolongaba desde la seis de la mañana hasta bien entrada la tarde y que con una neumonía no se podía guardar cama. Un 20 de noviembre la persona que la trajo a Berlín abogó por ella a Eternit; la empresa de los Schmidheiny contestó que no sabía nada de trabajadores forzados. Pero existen los testigos y los documentos que María Roselli muestra en su libro. Más tarde, ante la insistencia de la periodista, en 2007, el director de la Eternit alemana se rendía y confirmaban que «sí que existen pruebas indirectas que dejan fuera de toda duda el empleo de trabajadores forzados». Pasaron más de 267 personas extranjeras por la fábrica. Durante la guerra la empresa no cesó de dar beneficios a sus accionistas, el 6% en concreto. El actual heredero, Stephan Schmidheiny, fue director de la fábrica alemana en sus últimos años hasta que la vendió en 1990.

En toda la época del apartheid, la familia tuvo fábricas y minas de amianto en Sudáfrica, desde 1948 a 1992, año en que las vende. Stephan Schmidheiny se va porque «no podían seguir explotando a los negros», como relata el sindicalista negro Fred Gonna que trabajó en las fábricas de amianto de los suizos. Cuenta, en la entrevista que le hace Roselli, que «era completamente terrible: había polvo por todas partes y nadie nos decía que dicho polvo fuese mortal» y que «nos metían en aquellas terribles casas obreras, en las que tuvimos que vivir durante décadas sin nuestras familias». Eran las famosas *homelands*, una especie de estados independientes para negros. Las casas tenían los techos y muros de amianto, en la actualidad muy deteriorados, por lo que en Soweto se han detectado actualmente unos índices de amianto

10 veces por encima de lo que exige la ley, de ellas dos tercios fueron instalados por los Schmidheiny. El juicio de Gonna es lapidario. «Stephan Schmidheiny abandonó su negocio y lo vendió. Puso pies en polvorosa». Cuando posteriormente le escribieron exigiéndole responsabilidades no contestó, pero recibieron una carta de la administración de sus negocios en la que les decían «que habían actuado en todo momento según las leyes sudafricanas vigentes». Sin comentarios.

Con Pinochet, Stephan se benefició de una venta de cientos de miles de hectáreas de bosques a precio de saldo, muchas de las cuales pertenecían ancestralmente a los mapuches. Aún las conserva sembradas de plantaciones de pino radiata y de eucaliptos. Con el dictador Somoza simplemente le concedieron la mitad de las acciones de Nicalit, la empresa de amianto de Nicaragua. En España fueron socios de la familia March, en Uralita, la empresa que Franco facilitó a esta familia que le ayudó en el golpe de Estado.

Han inventado —los afines— que cuando el último de los Schmidheiny, Stephan, al poco de tomar las riendas del amianto de la familia, en 1975, trató de reconvertir el negocio porque se dio cuenta de que el mineral era peligroso y que no iba a ser rentable. Lo cierto es que lo encontramos en 1978 en la asociación suiza de industriales del Asbesto que llamaron Arbeitskreis Asbest, que era un *lobby* de productores para impedir que el amianto entrara en la categoría de toxicidad “1”, que significaba que era cancerígeno y que los productos deberían ir etiquetados con la calavera y los huesos cruzados.

Si se hubiese clasificado las ventas hubiesen caído en picado, por eso se oponían. De esta manera lograron retrasar esta clasificación nueve años, después del reconocimiento de su toxicidad, hasta 1987, lo que significó más negocio y más crímenes.

En 1986, Stephen Schmidheiny, abandona la empresa italiana en Casale (Italia), por quien dice, y deja todo el tinglado sin desamiantar y a muchos trabajadores sin indemnización. El

río Po, basurero de la fábrica, lo deja lleno de amianto y al pueblo de 33.000 habitantes contaminado porque existe amianto en calles, colegios y casas. Les regalaban parte de los desechos que usaban para rellenos, como en el caso de Uralita en Cerdanyola. Veinticinco años después del cese de la actividad, muere aún una persona en el pueblo a la semana por culpa del amianto omnipresente. Por esta masacre de Casale (cerca de dos mil muertos) se le está juzgando en Turín y el fiscal le pide 20 años de prisión y 5.000 euros de indemnizaciones. Mantiene el resto del negocio del amianto, al menos, hasta 1992, vendiendo así sus empresas quince años después de sus promesas de abandono. Entre 1989 y 1992 vende casi todas sus fábricas en Brasil, Suiza, Sudáfrica, etc. Todo un mecenas en ciernes.

Es responsable de muchos más crímenes. Los intentos de hacerle pasar por un filántropo, a la vista de lo anterior, resultan fallidos. Más bien es potencial reo de un Tribunal Penal Internacional por genocidio. Y no hay que olvidar que a él pertenece la fundación AVINA, que junto a su hermana de propósitos y estrategias, la fundación Ashoka, desgraciadamente han logrado engatusar a muchos líderes de movimientos sociales alternativos de España y Latinoamérica, sembrando confusión y venalidad. Con los responsables de los crímenes con amianto no cabe componenda alguna.

Hablan las víctimas

Roselli entrevista o retrata varios casos de enfermos o familiares en relación con el amianto. Estos casos son muy representativos, expresan muchas de las situaciones que produce el mineral, sean sus males adquiridos durante el trabajo o ajenos a él. Veamos algunos:

Rita Felmann, por ejemplo, habla de su familia. Su padre trabajó en Eternit suiza desde 1944, murió en 1989 por un mesotelioma, un cáncer específico del amianto. Desde la primera exposición al amianto a su muerte han pasado

45 años, es lo que se llama periodo de latencia de este mineral, tiempo que anda agazapado antes de emerger de forma letal. Pero también murió su madre de lo mismo, aunque solo era asistente de las oficinas. Un hermano está enfermo a sus 49 años, por haber trabajado de niño en la fábrica. «Somos siete hermanos, varios hemos ido a trabajar en vacaciones a Eternit», dice, «estamos aterrados». Concluye: «me pregunto cómo puede vivir la familia Schmidheiny sabiendo cuantas personas han muerto por culpa del amianto. Algunas de ellas ni siquiera habían trabajado allí».

Es el caso de Marcel Jann, que murió a los 53 años y nunca tuvo contacto laboral con el mineral. Pero se crió cerca de una de las fábricas de Eternit en Suiza. Durante su enfermedad escribió a Stephan Schmidheiny pidiéndole que se disculpara y que lo indemnizara. Le contestaron que con la venta de la empresa toda la responsabilidad había sido transferida a los compradores...

El caso de Gian Rechsteiner es tremendo. Trabajó apenas unas semanas, entre 1961 y 1963, en la fábrica suiza de amianto de Payerne, cuando era estudiante de ingeniería. Murió en 2005 de un mesotelioma, con un periodo de latencia de 44 años. Cuando se detectó la enfermedad empezó una quimioterapia, a continuación se sometió a una operación en la que le extirparon el pulmón izquierdo y una parte de la pleura, después tuvo que someterse a una radioterapia. Finalmente tuvo que ser intervenido de nuevo, operación de la que no se recuperó. La familia solo recibió una pequeña indemnización porque según la ley suiza debería haber renunciado en vida a tratar de curarse y haber recibido solo cuidados paliativos. Un dilema abominable.

Phil Portmann murió de mesotelioma. Aunque no se encontró ningún resto de amianto en la biopsia, se sabe que este tipo especial de tumor es debido en el 85% de los casos a la exposición al amianto, pero en su caso no es posible saber con precisión donde contrajo la enfermedad, solo se sabe que sí estuvo expues-

to en su etapa de aprendiz. Murió 44 años después de esta primera exposición. Su hijo Viktor recomienda «que es importante hablar del sufrimiento físico y de los dolores de los enfermos de amianto... de los inmensos dolores que sufren las personas afectadas. Se silencia el hecho de que este cáncer es particularmente atroz y cruel, nadie cuenta cómo los enfermos gritan a causa del dolor».

Por último, vamos a traer a colación el caso de Domingo Ferreira Dos Santos, un emigrante portugués que en 1986 marchó a Suiza, seducido por que decían que era el país «que mana leche y miel». Trabajó en diversos oficios: albañil, saneamiento, y demolición, aparentemente ninguno relacionado directamente con el amianto. Murió en 2007, con 48 años, de un mesotelioma. Era un hombre fornido, pesaba 90 kilos y de los estragos de la enfermedad quedó en tal estado que cuando los niños fueron al hospital a despedirse de su padre, el más pequeño no quiso acercarse a la cama, echó solo un vistazo y dijo: «No, el hombre que está en esa cama no es mi padre, es un desconocido. Papá está escondido en el hospital».

Coda

Al final de su trabajo Maria Roselli está abrumada y por eso termina su obra con un mal presagio. Nos dice: «la mentira del amianto es resistente: indestructible, incorruptible, para toda la Eternidad». Por eso si nos lo proponemos, si no cejamos en el empeño, habrá que predicar la verdad del amianto: es imborrable, es inaplazable, es de justicia. Defenderla nos hará libres.

Como dijo Émile Zola en su famoso *Yo acuso*:

«La verdad avanza y nadie podrá contenerla»

Paco Puche

Colección de Atlas de **Le Monde diplomatique** en español

El mapa es una composición visual y el cartógrafo la interfaz intuitiva entre la realidad y su transposición.

¿Qué sucede cuando las antiguas representaciones ya no funcionan, y las nuevas aún no se han consolidado?

¿Cuando el mundo bipolar de la Guerra Fría es reemplazado por una geopolítica cambiante, multipolar, compleja?

El papel del cartógrafo, en el cruce entre la ciencia, la tecnología, la ética, la política e incluso el arte, cae entonces en la tentación de capturar, gracias a la riqueza del lenguaje de los lápices, lo nuevo, lo inesperado, lo inédito...



Atlas de las mundializaciones



Atlas Historia crítica del siglo XX



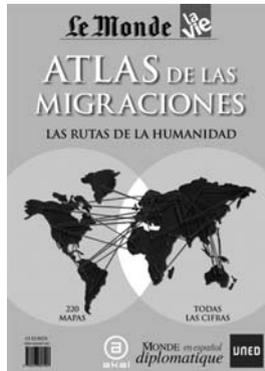
Atlas geopolítico



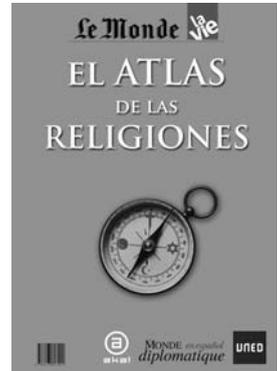
Atlas medioambiental



Atlas de las civilizaciones



Atlas de las migraciones



Atlas de las religiones

ECOLOGÍA POLÍTICA Cuadernos de debate internacional: **Deudas y respuestas a la crisis desde la Ecología Política**



Ecología Política está coordinada por:
Miquel Ortega Cerdà,
Ignasi Puig Ventosa,
Anna Monjo Omedes
y Joan Martínez Alier
Secretaría técnica: **Maria Mestre Montserrat**

www.ecologiapolitica.info
secretariado@ecologiapolitica.info

**LAS DEUDAS ECOLÓGICAS
DE LA DEMOCRACIA MODERNA**
Florent Marcellesi

**LAS RESPUESTAS A LA CRISIS ECONÓMICA
EN LA ZONA EURO Y LA DEUDA PÚBLICA**
Jordi Roca Jusmet

**METABOLISMO SOCIAL Y DEUDAS
FINANCIERAS IMPAGABLES**
Joan Martínez Alier

**PRÓLOGO DEL LIBRO "PROSPERIDAD
SIN CRECIMIENTO. ECONOMÍA PARA UN
PLANETA FINITO"**
Tim Jackson

**DEUDA FINANCIERA
Y DETERIORO ECOLÓGICO**
Óscar Carpintero

**LA ILEGITIMIDAD DE ENDEUDARSE A COSTA
DE LA NATURALEZA**
Inés Marco y Iolanda Fresnillo

**CRECIMIENTO, DEUDA
Y EL BANCO MUNDIAL**
Herman Daly

ENTREVISTA A HERMAN DALY
Entrevista realizada por *The European*

**LA CRECIENTE DEPENDENCIA
DE LA UE DE PESCADO NO EUROPEO**
J. Aniol Esteban y Rupert Crilly

**ECUADOR: DE LA INCOMPLETA AUDITORÍA
DE LA DEUDA FINANCIERA A LA OLVIDADA
DEUDA ECOLÓGICA**
Alberto Acosta

**EL ENDEUDAMIENTO DE
LOS AGRICULTORES EN LA INDIA**
Devinder Sharma

**LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
Y LA CARESTÍA DE LOS ALIMENTOS EN
LA BASE DE LAS REVUELTAS DEL MAGREB**
Hassan Ouabouch y Pascual Moreno

**MODELO INMOBILIARIO, ESPECULACIÓN
Y ENDEUDAMIENTO**
Antonio Montiel Márquez

**DEUDA ENERGÉTICA VASCA 2011:
LA ENERGÍA QUE CONSUMIMOS Y
LO QUE LE DEBEMOS AL MUNDO**
Leire Urkidi, Iñaki Bárcena, Rosa Lago
y Martín Mantxo

**LA CRISIS PORTUGUESA DE LA DEUDA:
LOS ENREDOS INSTITUCIONALES Y
LA TRAMPA METABÓLICA DE LA UE**
Gualter Barbas Baptista

**ENTRE HUELLAS Y DEUDAS ECOLÓGICAS,
¿QUÉ OCURRE CON LA HUELLA
ALIMENTARIA?**
Beatriz L. Giobellina

**RÍO+20: RESCATAR LOS OBJETIVOS
DE LA DEUDA ECOLÓGICA**
Aurora Donoso Game

**DEUDOCRACIA: UN SISTEMA QUE "CRECE"
ES UN SISTEMA QUE SE ENDEUDA**
Mariola Olcina Alvarado y Berta Iglesias Varela

**POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
EN EUROPA ¡YAI NYELENI EUROPA 2011,
PRIMER FORO EUROPEO PARA
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA**

**MOVILIZACIÓN VICTORIOSA CONTRA
EL GAS DE ESQUISTO EN FRANCIA.**
Julien Brun

**SICCO MANSHOLT, EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN EUROPEA QUE PLANTEÓ
EL DECRECIMIENTO**
Joan Martínez Alier

**RICHARD DOUTHWAITE (1942-2011)
ECONOMISTA BRITÁNICO, IMPULSOR
DE NUEVOS MODELOS MONETARIOS**
Jordi Pigem

**CRÍTICA DEL LIBRO, "LA QUIEBRA DEL
CAPITALISMO GLOBAL 2000-2030"**
Luis González Reyes

**CRÍTICA DEL LIBRO, "GPS (GLOBAL
PERSONAL SOCIAL) VALORES PARA
UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN"**
María Mestre Montserrat

PAUTAS PARA LOS AUTORES

Pautas generales

- Los textos publicados en la revista deberán ser originales, sin que hayan sido publicados con anterioridad en otra fuente.
- Agradecemos que a la entrega del texto el autor incluya su nombre y dos apellidos completos y el cargo que ocupa o título universitario con el que desea aparecer en la firma del texto.
- Los artículos de la revista tienen una **extensión** en torno a las 4.000 palabras.
- El **tono** del texto debe ser divulgativo, no excesivamente especializado, sin que ello suponga restarle rigor y profundidad de análisis.
- Al principio del texto se incluirá un breve párrafo, resumen del texto, de unas 9 líneas de extensión.
- Los párrafos irán separados por una línea de blanco.
- Los **epígrafes** se marcarán en negrita, y los subepígrafes en cursiva (ambos sin numerar). Las subdivisiones del texto deberían limitarse a estas dos exclusivamente.
- Los artículos **no** precisan de ir acompañados de **bibliografía** puesto que las referencias bibliográficas irán a pie de página en forma de nota.

Pautas específicas

- Las **siglas** y acrónimos deben ser mencionados en su versión completa solo la primera vez que aparecen en el texto. Ejemplo: Organización de Naciones Unidas (ONU). No deben llevar puntos entre las iniciales.
- Se usan las comillas **latinas** «»:
 - Para encerrar una cita textual.
 - Para encerrar los títulos de artículos de revista, capítulos de una obra u otros textos.
- Se usan las comillas **inglesas** "":
 - Para dar a una palabra un sentido diferente del que tiene normalmente.
 - Para referirse a una palabra atribuida a otra persona o cuya connotación no se comparte (*se considera "muy buen escritor"*).
 - Con sentido irónico o peyorativo (*su laboriosidad es "envidiable": se levanta a mediodía*).
- Se usan comillas **simples** (o semicomillas) "": para entrecomillar una o más palabras dentro de una frase que ya está entre comillas latinas e inglesas («.....'.....'.....»).
- Se empleará *cursivas*: para indicar énfasis y para palabras extranjeras. No se utilizarán en ningún caso las negritas y subrayados.
- **Citas**
 - Si tienen una extensión superior a los dos renglones, irán en párrafo aparte, en cuerpo menor, y con una línea de blanco por arriba y por abajo. Entrecomilladas y correctamente identificadas en nota a pie de página.
 - Si tienen una extensión de dos renglones irán dentro del texto, entre **comillas** «» y correctamente identificadas en nota a pie de página.
- **Notas**
 - Las notas irán a pie de página y numeradas correlativamente. La llamada dentro del texto irá siempre después del signo de puntuación:
Ej.: [...] la transformación del capitalismo.¹
 - **Libros**
M. Kranzberg y W. H. Davenport, *Tecnología y cultura*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pp. 196.
 - **Capítulos de libros**
J. Riechmann, «Para una teoría de la racionalidad ecológica» en S. Álvarez Cantalpieira y Ó. Carpintero (eds.), *Economía ecológica: reflexiones y perspectivas*, CBA, Madrid, 2009.
 - **Artículos en prensa o revistas**
M. Vázquez Montalbán, «De cómo Mariano Rajoy se convirtió en un ovni», *El País*, 3 de octubre de 2003, p. 14.
 - **Páginas web**
T. J. Pritzker, «An early fragment from Central Nepal», Ingress Communications [disponible en: <http://www.ingress.com/>. Acceso el 8 de junio de 1998].
 - **Para una referencia utilizada con anterioridad, usar la fórmula:**
M. Vázquez Montalbán, *op. cit.*, 2003.
 - Si la referencia es citada en la nota inmediatamente anterior, usar *Ibidem*.

- Todos los textos serán editados una vez recibidos para adecuarlos a los criterios y formato de la revista. En caso de que tengamos dudas nos pondremos en contacto con el autor para aclararlas.

PAPELES

DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

PARA SUSCRIBIRSE

- ✓ A TRAVÉS DE LA LIBRERÍA ELECTRÓNICA www.libreria.fuhem.es
- ✓ ENVÍE ESTE CUPÓN AL FAX O LA DIRECCIÓN INDICADA A PIE DE PÁGINA
- ✓ ESCRIBA A NUESTRA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO publicaciones@fuhem.es
- ✓ LLAME AL TELÉFONO **91 431 03 46**

Nombre:
Dirección:
Población: C.P. Provincia:
País: Teléfono:
Correo electrónico:

PRECIO DE UN EJEMPLAR

- España** (envío gratuito) **9 €**
- Europa** **19 €**
- Resto del mundo** **20 €**

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN (4 números)

- España** (envío gratuito) **28 €**
- Europa** **48 €**
- Resto del mundo** **52 €**

FORMA DE PAGO

- Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)

Titular de la cuenta:

ENTIDAD	OFICINA	CONTROL	NÚMERO CUENTA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:

Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.

Nº Cuenta: 0216 0251 51 0600005047

